Gaceta Parlamentaria

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Poder Legislativo del Estado de México

Órgano de Difusión Interna | Año 3 | No. 147 | Septiembre 24, 2026



Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional

2026

"Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA	
Presidente Dip. José Francisco Vázquez Rodríguez **Vicepresidentes** Dip. José Alberto Couttolenc Buentello Dip. Elías Rescala Jiménez **Secretario** Dip. Óscar González Yáñez **Vocales** Dip. Pablo Fernández de Cevallos González Dip. Juan Manuel Zepeda Hernández Dip. Omar Ortega Álvarez	**Presidente** Dip. Vladimir Hernández Villegas **Vicepresidentas** Dip. Gloria Vanessa Linares Zetina Dip. Sara Alicia Ramírez de la O **Secretarias y Secretario** Dip. Yesica Yanet Rojas Hernández Dip. Arleth Stephanie Grimaldo Osorio Dip. Mariano Camacho San Martín Dip. Rocío Alexia Dávila Sánchez Dip. Maricela Beltrán Sánchez

INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

- Alvarez Villavicencio Emma Laura
- Arellano Ocampo Honoria
- Argueta Bello Graciela
- Azar Figueroa Anuar Roberto
- Ballesteros Lule Itzel Daniela
- Beltrán Sánchez Maricela
- Camacho Reynoso Martha Azucena
- Camacho San Martin Mariano
- Carvallo Delfín Héctor Karim
- Casasola Salazar Araceli
- Castro Hernández Alejandro
- Cedillo Silva Zaira
- Colín Guadarrama María Mercedes
- Cortés Contreras Osvaldo
- Cortés Lugo Román Francisco
- Couttolenc Buentello José Alberto
- Cruz Jaramillo Javier
- Dávila Sánchez Rocío Alexia
- De la Rosa Mendoza María del Carmen
- Esparza Acevedo Yareli Anai
- Espíndola López Israel
- Estrada Plata María del Consuelo
- Estrada Rojas Susana
- Felipe Torres Joanna Alejandra
- Fernández de Cevallos González Pablo
- Figueroa Adame Alejandra
- García González Héctor Raúl
- García Martínez Elena
- González López Jennifer Nathalie
- González Yáñez Óscar
- Grimaldo Osorio Arleth Stephanie
- Gutiérrez Morales José Miguel
- Hernández Cruz Samuel
- Hernández González Maurilio
- Hernández Méndez Isaac Josué
- Hernández Villegas Vladimir
- Jiménez Hernández Paola
- Juárez Hernández Esteban
- Leyva Piñón Ana Yurixi
- Linares Zetina Gloria Vanessa
- López Imm Carlos Alberto
- Martínez Castillo Valentín
- Martínez Molina Sofía
- Martínez Vargas Octavio
- Martínez Zurita Trejo Carlos Antonio
- Mejía García Leticia
- Miranda Vargas Brenda Colette
- Mohamed Báez Gabriel Kalid
- Navarrete López Armando
- Navarro Hernández Luisa Esmeralda
- Negrete Avonce Ángel Adriel
- Ortega Álvarez Omar
- Peláez Soria Isaías
- Pérez Cerón Angélica
- Pérez Correa Itzel Guadalupe
- Pérez Domínguez María José
- Pliego Santana Gerardo
- Ramírez de la O Sara Alicia
- Rescala Jiménez Elías
- Ríos Moreno Edgar Samuel
- Rivera Sánchez Nelly Brígida
- Rojas Hernández Yesica Yanet
- Romero Velázquez Krishna Karina
- Salinas Reyes Ruth
- Santillán Ramírez Ernesto
- Santos Rodríguez Sandra Patricia
- Silva Mata Miriam
- Trujillo Arizmendi Selina
- Urbina Salazar Lilia
- Valdeña Bastida Edmundo Luis
- Vargas Cervantes Rigoberto
- Vázquez Rodríguez José Francisco
- Zarzosa Sánchez Eduardo
- Zepeda Hernández Juan Manuel
- Zepeda Hernández Martín

Gaceta Parlamentaria
CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
Poder Legislativo del Estado de México
Órgano de Difusión Interna
Septiembre 24, 2026
Año 3 No. 147

Í N D I C E

PÁGINA

ASUNTOS TRATADOS EN LA SESIÓN DE LA H. "LXII" LEGISLATURA, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PENDIENTES DE PUBLICACIÓN

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DELIBERANTE DE LA "LXII" LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. **6**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 9, EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 228, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 229 Y EL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2.130 RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE; SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2.134; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2.135 BIS AL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO; SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 5.6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 5.57 AL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE SANCIONES EN DELITOS DE INCENDIOS FORESTALES Y PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. **11**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESO A AGUA POTABLE EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. **27**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA: "2027. BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN, EN TEXCOCO, DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO", PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA JOSÉ PÉREZ DOMÍNGUEZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. **45**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA E INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA MENDOZA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. **50**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4.71 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A AL ARTÍCULO 4.70 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE NULIDAD MATRIMONIAL POR VIOLENCIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ITZEL DANIELA BALLESTEROS LULE, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. **128**

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CON LAS QUE SE COADYUVA A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL ACCESO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA PARA SU USO Y APROVECHAMIENTO EN LA VIVIENDA O EDIFICACIÓN DE LAS PERSONAS MEXIQUENSES Y A TRAVÉS DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL E INCENTIVOS FISCALES DE CARÁCTER MUNICIPAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SUSANA ESTRADA ROJAS, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. **135**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 3.66, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3.67 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS VULNERABLES A DESLAVES, EROSIÓN DEL SUELO E INUNDACIONES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ALBERTO LÓPEZ IMM, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. **169**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 75 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 159, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A FIN DE GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA EL SUMINISTRO DIARIO DE 100 LITROS DE AGUA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIRIAM SILVA MATA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. **182**

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL SEÑOR DEL HUERTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA FIGUEROA ADAME, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. **200**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TEXTO A LAS FRACCIONES X Y XXIII DEL ARTÍCULO 48, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV BIS AL ARTÍCULO 96 QUATERDECIES, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 121 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUBLIQUE EN LA GACETA MUNICIPAL DE LOS ONCE MUNICIPIOS ALERTADOS POR FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN, LOS MONTOS QUE LES FUERON ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE ALERTAS DE GÉNERO, ASÍ COMO LOS PLANES OPERATIVOS CORRESPONDIENTES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. **213**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y EL LUPUS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ISAAC JOSUÉ HERNÁNDEZ MÉNDEZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. **221**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR QUE EL PRESUPUESTO DEL CAMPO MEXIQUENSE CREZCA AL MENOS 10% CADA AÑO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA MEJÍA GARCÍA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. **263**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE ROBO DE COMBUSTIBLE QUE OFRECEN LAS UNIDADES ECONÓMICAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA EMMA LAURA ÁLVAREZ VILLAVICENCIO Y EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. **272**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÁMARAS CORPORALES PARA LA ACTUACIÓN POLICIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA KRISHNA KARINA ROMERO VELÁZQUEZ Y EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. **278**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MÉXICO; SE DEROGA EL TÍTULO DÉCIMO DENOMINADO “DEL TESTIGO SOCIAL” DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 3 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. **297**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO “LEY ANTI GRIETAS” QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EN MATERIA DE ESTABLECER, VIGILAR Y MITIGAR EL RIESGO POR HUNDIMIENTO DEL TERRENO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. **395**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11, SE CREA EL CAPÍTULO III BIS. DE LA ATENCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS Y POTENCIALMENTE DISCAPACITANTES DENTRO DEL TÍTULO SEXTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 111 BIS, 111 TER, 111 QUATER, 111 QUINQUIES Y 111 SEXTIES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y POTENCIALMENTE DISCAPACITANTES, COMO LO ES LA FIBROMIALGIA, SÍNDROMES DE DOLOR CRÓNICO Y CONDICIONES NEUROBIOLÓGICAS FLUCTUANTES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. **405**

AVISO A LA LEGISLATURA DE LA PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. **413**

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. "LXII" LEGISLATURA

"LXII" LEGISLATURA.

MIÉRCOLES/23-SEPTIEMBRE-2026.

ORDEN DEL DÍA

1.- Acta de la Sesión Anterior.

2.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 9, el párrafo tercero del artículo 228, el párrafo segundo del artículo 229 y el artículo 234 del **Código Penal del Estado de México**; se adiciona la fracción VII al artículo 2.130 recorriéndose la subsecuente; se adiciona un párrafo al artículo 2.134; y se adiciona el artículo 2.135 Bis al **Código para la Biodiversidad del Estado de México**; se adicionan dos párrafos al artículo 5.6; se adiciona la fracción V al artículo 5.57 al **Código Administrativo del Estado de México**, en materia de sanciones en delitos de incendios forestales y protección de áreas naturales protegidas, presentada por la Diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.

3.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la **Ley de Educación del Estado de México** y del **Código Administrativo del Estado de México**, en materia de acceso a agua potable en planteles de educación básica, presentada por la Diputada Jennifer Nathalie González López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.

4.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto, por el que se declara: **"2027. Bicentenario de la promulgación, en Texcoco, de la primera Constitución del Estado de México"**, presentada por la Diputada María José Pérez Domínguez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.

5.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del **Código Civil del Estado de México** y de la **Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México**, en materia de guarda y custodia e interés superior de la niñez, presentada por la Diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.

6.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4.71 y se adiciona un segundo párrafo a al artículo 4.70 del **Código Civil del Estado de México**, en materia de nulidad matrimonial por violencia, presentada por la Diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.

7.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la **Ley del Agua para el Estado de México y Municipios**, con las que se coadyuva a garantizar el derecho humano al acceso y disposición del agua para su uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación de las personas mexiquenses y a través de sistemas de captación de agua pluvial e incentivos fiscales de carácter municipal, presentada por la Diputada Susana Estrada Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.

8.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 3.66, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 3.67 del **Código para la Biodiversidad del Estado de México**, en materia de reforestación y restauración ecológica en zonas vulnerables a deslaves, erosión del suelo e inundaciones, presentada por el Diputado Carlos Alberto López Imm, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

9.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 75 y un tercer párrafo al artículo 159, de la **Ley del Agua para el Estado de**

México y Municipios, a fin de garantizar a la ciudadanía el suministro diario de 100 litros de agua, presentada por la Diputada Miriam Silva Mata, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

10.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** de Decreto por el que se declara la Celebración Tradicional del Señor del Huerto del Municipio de Atlacomulco, Estado de México, como **Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México**, presentada por la Diputada Alejandra Figueroa Adame, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

11.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto que adiciona un texto a las fracciones X y XXIII del artículo 48, se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 96 Quaterdecies, y se adiciona el artículo 121 Bis de la **Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México**, con la finalidad de que se publique en la Gaceta Municipal de los once municipios alertados por feminicidio y desaparición, los montos que les fueron asignados para la atención de Alertas de Género, así como los planes operativos correspondientes, presentada por la Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

12.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la **Ley de Salud del Estado de México** y se reforma el artículo 5 de la **Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México**, en materia de prevención, diagnóstico, atención y seguimiento de las enfermedades autoinmunes y el lupus, presentada por el Diputado Isaac Josué Hernández Méndez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

13.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforma la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**, para garantizar que el presupuesto del campo mexiquense crezca al menos 10% cada año, presentada

por la Diputada Leticia Mejía García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

14.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 290 del **Código Penal del Estado de México**, en materia de robo de combustible que ofrecen las unidades económicas, presentada por la Diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio y el Diputado Pablo Fernández de Cevallos González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

15.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la **Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México** y de la **Ley de Seguridad del Estado de México**, en materia de Cámaras Corporales para la Actuación Policial, presentada por la Diputada Krishna Karina Romero Velázquez y el Diputado Pablo Fernández de Cevallos González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

16.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se expide la **Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México**; se deroga el Título Décimo denominado "Del Testigo Social" del Libro Primero del **Código Administrativo del Estado de México**; se reforma la fracción XII del artículo 3 y se adiciona el artículo 28 Bis de la **Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios**; se adiciona un último párrafo al artículo 3 de la **Ley Orgánica Municipal del Estado de México**, y se adiciona un último párrafo al artículo 2 del **Código Electoral del Estado de México**, en materia de armonización legislativa en materia de participación ciudadana y armonización legislativa, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

17.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto "Ley Anti Grietas" que reforma y adiciona diversas disposiciones de la **Ley del Agua para el Estado de México y**

Municipios, en materia de establecer, vigilar y mitigar el riesgo por hundimiento del terreno, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

18.- Lectura y acuerdo conducente de la **Iniciativa** con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIX recorriéndose las subsecuentes del artículo 3, se reforma la fracción IV del artículo 11, se crea el Capítulo III Bis. De la Atención a las Enfermedades Crónicas y Potencialmente Discapacitantes dentro del Título Sexto De La Promoción, Prevención y Control De Enfermedades, se adicionan los artículos 111 Bis, 111 Ter, 111 Quater, 111 Quinquies y 111 Sexties de la **Ley de Salud del Estado de México**, en materia de reconocimiento de Enfermedades Crónicas y Potencialmente Discapacitantes, como lo es la fibromialgia, síndromes de dolor crónico y condiciones neurobiológicas fluctuantes, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

19.- Aviso a la Legislatura de la Presentación del Tercer Informe de Gobierno.

20.- Clausura de la Sesión.

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE DE LA H. "LXII" LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS.

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México".

Toluca de Lerdo, Estado de México, a _ de abril de 2026

DIPUTADO VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. LXII
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

P R E S E N T E

Diputada **Arleth Stephanie Grimaldo Osorio** , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXII Legislatura del Congreso Local, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, fracción II; 57 y 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28, fracción I; 38, fracción II; 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo, la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto Por el que se reforman el artículo 9, el párrafo tercero del artículo 228, el párrafo segundo del artículo 229 y el artículo 234 del Código Penal Del Estado De México; Se adiciona la fracción VII al artículo 2.130 recorriéndose la subsecuente; Se adiciona un párrafo al artículo 2.134; y se adiciona el artículo 2.135 BIS al Código Para La Biodiversidad Del Estado De México; Se adicionan dos párrafos al artículo 5.6; Se adiciona la fracción V al artículo 5.57 al Código Administrativo Del Estado De México.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

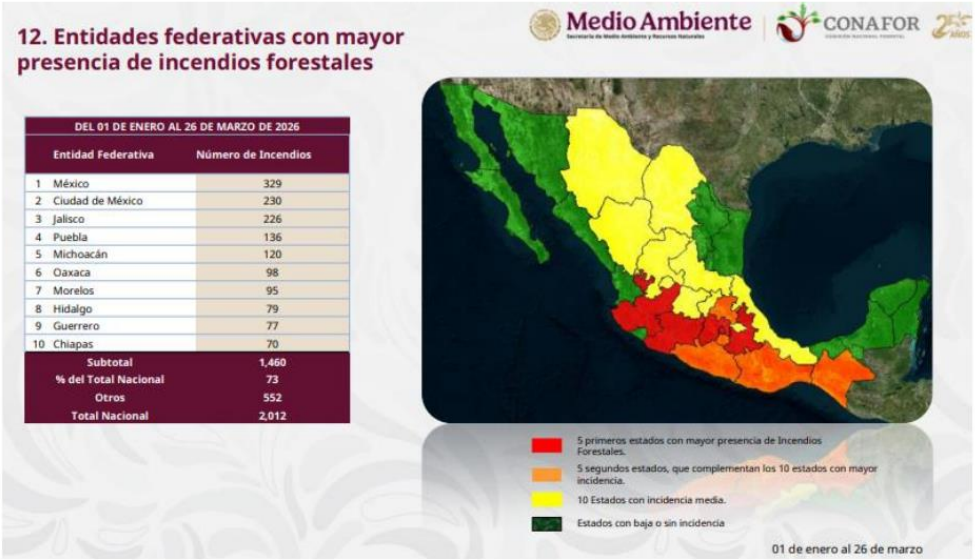
En los últimos años, el Estado de México ha experimentado un incremento alarmante en la incidencia de incendios forestales, muchos de ellos provocados de manera intencional. Esta

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

problemática no solo representa un grave daño al medio ambiente, sino que constituye una amenaza directa a la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.

Los incendios forestales representan una problemática ambiental de gran magnitud debido a los efectos negativos que generan sobre los recursos naturales, la calidad del aire, los suelos y los ecosistemas forestales. Asimismo, estos eventos no sólo afectan a la flora y fauna silvestre, sino que también representan un riesgo directo para las personas, especialmente cuando los incendios se propagan hacia zonas habitacionales o áreas urbanas cercanas a regiones forestales.

De acuerdo con datos del Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Estado de México se ha ubicado de manera recurrente entre las entidades con mayor número de incendios forestales a nivel nacional. Tan solo en el año 2026, la entidad ocupa los primeros lugares en número de siniestros, con 329 incendios registrados y miles de hectáreas afectadas, lo que evidencia una tendencia creciente y preocupante.



Por otra parte, según información publicada en el portal del gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informa que en México más de la mitad de los incendios forestales son provocados de manera intencional. Asimismo, señala que aproximadamente el 99% de estos eventos tienen su origen en actividades humanas, mientras que solo una pequeña proporción se debe a causas naturales, lo que permite advertir que una parte significativa de estos eventos no son accidentales, sino producto de conductas humanas dolosas.

Estos datos reflejan que los incendios forestales no constituyen hechos aislados, sino fenómenos recurrentes que requieren la adopción de medidas más estrictas para prevenir su ocurrencia y sancionar adecuadamente a quienes los provocan.

Uno de los aspectos más preocupantes relacionados con los incendios forestales es el riesgo que representan para la vida humana. Cuando un incendio forestal se propaga hacia zonas habitacionales, puede provocar daños irreversibles, incluyendo la pérdida de viviendas, infraestructura pública y, en casos extremos, la pérdida de vidas humanas.

En el Estado de México, la expansión urbana hacia zonas forestales ha incrementado la vulnerabilidad de numerosas comunidades que se encuentran asentadas en áreas cercanas a bosques o terrenos naturales. Esta situación aumenta significativamente el riesgo de que un incendio forestal se convierta en una emergencia de gran escala, afectando no sólo a los ecosistemas, sino también a la población.

Uno de los fenómenos más preocupantes asociados a los incendios forestales es su relación con el cambio de uso de suelo. En diversos casos, los incendios han sido provocados de manera intencional con el propósito de eliminar la cobertura vegetal y facilitar el desarrollo urbano o la modificación del uso del suelo para fines comerciales o habitacionales.

El cambio de uso de suelo posterior a un incendio representa una amenaza significativa para la conservación ambiental, ya que incentiva prácticas ilegales que buscan transformar terrenos forestales en zonas urbanizables.

El Estado de México cuenta con diversas áreas naturales que requieren protección permanente, por lo que resulta indispensable establecer mecanismos jurídicos que impidan el cambio de uso de suelo en terrenos afectados por incendios forestales.

La presente iniciativa encuentra sustento jurídico, en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este derecho implica la obligación del Estado de adoptar medidas preventivas y correctivas para evitar daños ambientales que puedan afectar la salud y la calidad de vida de la población.

En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta evidente la necesidad de fortalecer el marco jurídico del Estado de México para prevenir incendios forestales, proteger las Áreas Naturales Protegidas y garantizar el uso sustentable del suelo.

La presente iniciativa propone reformas integrales que permitirán elevar el delito de incendio forestal a la categoría de delito grave, prohibir el cambio de uso de suelo en terrenos afectados por incendios y garantizar la protección permanente de las Áreas Naturales Protegidas.

Por lo anterior propongo :

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO	
TEXTO ACTUAL	PROPUESTA
Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales ….	**Artículo 9.-** Se califican como delitos graves para todos los efectos legales… **el de incendio forestal, señalado en el artículo 228 , párrafo tercero , fracción III .**
Artículo 228 …	**Artículo 228 ...**
Cuando la conducta prevista en la fracción III se realice dentro de un Área Natural Protegida, la pena será de cinco a doce años de prisión y de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y Actualización.	Cuando la conducta prevista en la fracción III se realice dentro de un Área Natural Protegida**, exista riesgo a la vida humana o se presuma que el incendio tuvo como finalidad el cambio de uso de suelo, la pena será de diez a quince años de prisión y de tres mil a seis mil Unidades de Medida y Actualización.**
Artículo 229…	**Artículo 229…**
Se aplicará la misma pena a la persona servidora pública que autorice, facilite o consienta el cambio de uso de suelo en un Área Natural Protegida, reserva ecológica o zona de valor ambiental, sin que exista causa de excepción debidamente justificada conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable o legislación aplicable.	A la persona servidora pública que autorice, facilite o consienta el cambio de uso de suelo en un Área Natural Protegida, reserva ecológica ,zona de valor ambiental,**o en cualquier terreno que haya sido objeto de un incendio forestal dentro de los treinta años anteriores ,** sin que exista causa de excepción debidamente justificada conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable o legislación aplicable,**se le impondrán de quince a veinte años de prisión y de cuatro mil a cinco mil quinientas Unidades de Medida y Actualización; además de la pena señalada, será destituido del cargo y se le inhabilitará para desempeñar empleos, cargos**

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000 Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

	o comisiones en el servicio público hasta por la duración de la pena de prisión impuesta
Artículo 234.- …	**Artículo 234.-**
Se perseguirán de oficio las conductas establecidas en el artículo 228, fracciones IX y X del presente Código.	Se perseguirán de oficio las conductas establecidas en el artículo 228, fracciones **III**, IX y X del presente Código.

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México".

CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO	
TEXTO ACTUAL	PROPUESTA
Artículo 2.130. … **I.** A **VI…** **SIN CORRELATIVO**	**Artículo 2.130. …** **I.** A **VI…** **VII. En los suelos afectados por incendios forestales deberán implementarse obligatoriamente medidas de restauración, recuperación y conservación, quedando prohibido cualquier cambio de uso de suelo que contravenga su vocación ecológica.**
Artículo 2.134. … **SIN CORRELATIVO**	**Artículo 2.134. …** **Para dar cumplimiento a lo anterior, las autoridades deberán abstenerse de autorizar cambios de uso de suelo en terrenos afectados por incendios forestales, así como en Áreas Naturales Protegidas, reservas ecológicas o zonas de valor ambiental, cuando ello contravenga su vocación ecológica .**
Artículo 2.135 ... **SIN CORRELATIVO**	**Artículo 2.135…** **Artículo 2.135 BIS.** **En los casos en que se solicite autorización de cambio de uso de suelo en terrenos ubicados en zonas forestales, Áreas Naturales Protegidas, reservas ecológicas, zonas de valor ambiental o en**

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000 Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

	predios que hayan sido afectados por incendios forestales, la autoridad competente deberá observar lo siguiente: **I. Se dará preferencia para el otorgamiento de autorizaciones a los propietarios, poseedores, núcleos agrarios, pueblos autóctonos y demás personas interesadas que acrediten la titularidad o posesión legítima, continua y anterior al evento de incendio, así como el manejo, conservación o aprovechamiento sustentable del predio conforme a su vocación ecológica;** **II. No se autorizarán cambios de uso de suelo cuando se advierta que la adquisición del predio fue realizada con posterioridad al incendio o en un periodo inmediato anterior al mismo, y existan indicios de que el cambio de uso de suelo tenga fines especulativos, urbanos o de desarrollo inmobiliario;** **III. En ningún caso se permitirá el cambio de uso de suelo para fines habitacionales, comerciales, industriales o de servicios en terrenos afectados por incendios forestales o ubicados en áreas naturales protegidas;** **IV. Las autorizaciones excepcionales únicamente podrán otorgarse para proyectos de restauración ecológica, conservación ambiental o aprovechamiento sustentable, siempre que la infraestructura sea de bajo impacto y acorde con criterios ecológicos;**

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000
Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

	V. La autoridad deberá realizar un análisis integral que considere la temporalidad de la posesión, el historial del predio, la vocación natural del suelo y la inexistencia de prácticas que hayan propiciado su deterioro o incendio.

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México".

CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO	
TEXTO ACTUAL	PROPUESTA
Artículo 5.6 ... **…** **…** **SIN CORRELATIVO** **SIN CORRELATIVO** **…** **Artículo 5.57. …** **I** A **IV.**	**Artículo 5.6 ...** **…** **…** **En ningún caso podrá autorizarse el cambio de uso de suelo en terrenos afectados por incendios forestales cuando ello implique urbanización, construcción habitacional, comercial, industrial, educativa o cualquier aprovechamiento incompatible con su vocación ecológica.** **Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente podrá autorizarse infraestructura destinada a proyectos ecológicos de impacto mínimo, sin cimentaciones permanentes de concreto, a favor de propietarios o poseedores que acrediten un arraigo y titularidad legal ininterrumpida mayor a veinte años previos al incendio, siempre que dichas actividades no impliquen procesos de urbanización, no contravengan la vocación natural del suelo y cuenten con la autorización ambiental correspondiente** **…** **Artículo 5.57. …** **I** A **IV.**

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000 Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

SIN CORRELATIVO ...	**V. No se trate de terrenos afectados por incendios forestales, Áreas Naturales Protegidas, reservas ecológicas o zonas de valor ambiental respecto de los cuales se pretenda cambio de uso de suelo para fines urbanos, habitacionales, comerciales, industriales o educativos.** ...

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO NÚMERO _____
LA H. "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el artículo **9, el párrafo tercero del artículo 228, el párrafo segundo del artículo 229** y el artículo **234** del Código Penal Del Estado De México, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales… **el de incendio forestal, señalado en el artículo 228, párrafo tercero, fracción III.**

Artículo 228 ...

Cuando la conducta prevista en la fracción III se realice dentro de un Área Natural Protegida, **exista riesgo a la vida humana o se presuma que el incendio tuvo como finalidad el cambio de uso de suelo, la pena será de diez a quince años de prisión y de tres mil a seis mil Unidades de Medida y Actualización.**

Artículo 229…

A la persona servidora pública que autorice, facilite o consienta el cambio de uso de suelo en un Área Natural Protegida, reserva ecológica ,zona de valor ambiental,**o en cualquier terreno que haya sido objeto de un incendio forestal dentro de los treinta años anteriores ,** sin que exista causa de excepción debidamente justificada conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable o legislación aplicable,**se le impondrán de quince a veinte años de prisión y de**

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000 Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
morena
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
www.legislativoedomex.gob.mx

cuatro mil a cinco mil quinientas Unidades de Medida y Actualización; además de la pena señalada, será destituido del cargo y se le inhabilitará para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta por la duración de la pena de prisión impuesta

Artículo 234. …

Se perseguirán de oficio las conductas establecidas en el artículo 228, fracciones **III**, IX y X del presente Código

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona la **fracción VII** al artículo **2.130** recorriéndose la subsecuente; Se adiciona un párrafo al artículo **2.134**; y se adiciona el artículo **2.135 BIS** al Código Para La Biodiversidad Del Estado De México, para quedar como sigue:

Artículo 2.130. …

I. A **VI…**

VII. En los suelos afectados por incendios forestales deberán implementarse obligatoriamente medidas de restauración, recuperación y conservación, quedando prohibido cualquier cambio de uso de suelo que contravenga su vocación ecológica.

Artículo 2.134. …

Para dar cumplimiento a lo anterior, las autoridades deberán abstenerse de autorizar cambios de uso de suelo en terrenos afectados por incendios forestales, así como en Áreas Naturales Protegidas, reservas ecológicas o zonas de valor ambiental, cuando ello contravenga su vocación ecológica .

Artículo 2.135…

Artículo 2.135 BIS.

En los casos en que se solicite autorización de cambio de uso de suelo en terrenos ubicados en zonas forestales, Áreas Naturales Protegidas, reservas ecológicas, zonas de valor ambiental o en predios que hayan sido afectados por incendios forestales, la autoridad competente deberá observar lo siguiente:

I. Se dará preferencia para el otorgamiento de autorizaciones a los propietarios, poseedores, núcleos agrarios, pueblos autóctonos y demás personas interesadas que acrediten la titularidad o posesión legítima, continua y anterior al evento de incendio, así como el manejo, conservación o aprovechamiento sustentable del predio conforme a su vocación ecológica;

II. No se autorizarán cambios de uso de suelo cuando se advierta que la adquisición del predio fue realizada con posterioridad al incendio o en un periodo inmediato anterior al mismo, y existan indicios de que el cambio de uso de suelo tenga fines especulativos, urbanos o de desarrollo inmobiliario;

III. En ningún caso se permitirá el cambio de uso de suelo para fines habitacionales, comerciales, industriales o de servicios en terrenos afectados por incendios forestales o ubicados en áreas naturales protegidas;

IV. Las autorizaciones excepcionales únicamente podrán otorgarse para proyectos de restauración ecológica, conservación ambiental o aprovechamiento sustentable, siempre que la infraestructura sea de bajo impacto y acorde con criterios ecológicos;

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
DIP. ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO
DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXVII

V. La autoridad deberá realizar un análisis integral que considere la temporalidad de la posesión, el historial del predio, la vocación natural del suelo y la inexistencia de prácticas que hayan propiciado su deterioro o incendio.

ARTÍCULO TERCERO. - Se adicionan dos párrafos al artículo **5.6**; Se adiciona la **fracción V** al artículo **5.57** al Código Administrativo Del Estado De México, para quedar como sigue:

Artículo 5.6 ...

…

…

En ningún caso podrá autorizarse el cambio de uso de suelo en terrenos afectados por incendios forestales cuando ello implique urbanización, construcción habitacional, comercial, industrial, educativa o cualquier aprovechamiento incompatible con su vocación ecológica.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente podrá autorizarse infraestructura destinada a proyectos ecológicos de impacto mínimo, sin cimentaciones permanentes de concreto, a favor de propietarios o poseedores que acrediten un arraigo y titularidad legal ininterrumpida mayor a veinte años previos al incendio, siempre que dichas actividades no impliquen procesos de urbanización, no contravengan la vocación natural del suelo y cuenten con la autorización ambiental correspondiente

…

Plaza Hidalgo s/n,Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 65 00 Ext. 6435
(722) 2 79 64 35 directo
Correo Electronico:distrito37.ag@gmail.com
morena
www.legislativoedomex.gob.mx

Artículo 5.57. …

I A **IV.**

V. No se trate de terrenos afectados por incendios forestales, Áreas **Naturales Protegidas, reservas ecológicas o zonas de valor ambiental respecto de los cuales se pretenda cambio de uso de suelo para fines urbanos, habitacionales, comerciales, industriales o educativos.**

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, a los _____ días del mes de _____ del año dos mil veintiséis.

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

"2026 Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 6 de mayo de 2026

DIPUTADO VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE LA H. LXII LEGISLATURA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
P R E S E N T E

La que suscribe, **Diputada Doctora Jennifer Nathalie González López,** integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la H. LXII Legislatura del Estado de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción IV, y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESO A AGUA POTABLE EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA**

Lo anterior, en observancia del principio del interés superior de la niñez, así como de los derechos humanos a la salud, a la educación y al acceso al agua, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, con el objeto de fortalecer el marco jurídico estatal para garantizar el acceso efectivo, continuo, suficiente y salubre al agua potable en los planteles de educación básica del Estado de México, mediante la coordinación de las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso al agua potable constituye un derecho humano reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, correspondiendo al Estado garantizar dicho derecho[1].

En el ámbito educativo, este derecho adquiere una dimensión reforzada, al vincularse directamente con el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, como la educación, la salud, la igualdad sustantiva y el interés superior de la niñez. En este sentido, las condiciones materiales en las que se presta el servicio educativo deben garantizar entornos dignos, seguros y saludables para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La magnitud del sistema educativo en el Estado de México dimensiona la relevancia de la presente iniciativa. De acuerdo con el Atlas de los Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2021–2022 la entidad registró 4,251,599 estudiantes, de los cuales aproximadamente el 73.8% corresponde a educación básica, lo que implica que millones de niñas, niños y adolescentes desarrollan diariamente sus actividades escolares en planteles que deben cumplir condiciones mínimas de infraestructura y servicios[2].

En este contexto, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 reconoce, en su Eje 2 "Bienestar ambiental y acceso universal al agua", la necesidad de fortalecer la gestión del recurso hídrico y ampliar su cobertura, destacando los retos asociados a la creciente demanda y a la optimización de su aprovechamiento[3].

Asimismo, el Gobierno del Estado ha impulsado acciones orientadas a mejorar la disponibilidad de agua en espacios públicos, incluyendo el ámbito escolar. Entre estas, destaca la implementación de programas como los sistemas de captación pluvial en planteles educativos, lo que refleja un esfuerzo institucional relevante para atender esta problemática[4]. No obstante, diversos diagnósticos técnicos nacionales e internacionales

---

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafo sexto, que reconoce el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, estableciendo la obligación del Estado de garantizar dicho derecho. Diario Oficial de la Federación

[2] Secretaría de Educación Pública, Atlas de los Servicios Educativos de la República Mexicana y Atlas de los Servicios Educativos del Estado de México, ciclo escolar 2021–2022, en el que se reporta una matrícula total de 4,251,599 estudiantes en la entidad, de los cuales aproximadamente el 73.8% corresponde a educación básica, integrando niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria

[3] Gobierno del Estado de México, Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, Eje 2 "Bienestar ambiental y acceso universal al agua", en el que se reconoce la creciente demanda del recurso hídrico y la necesidad de fortalecer su gestión, disponibilidad y cobertura en beneficio de la población.

[4] Gobierno del Estado de México, Segundo Informe de Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, apartado relativo a infraestructura hídrica y programas escolares, en el que se reporta la implementación del programa "Escuelas de Lluvia" en 28 de los 125 municipios, así como la instalación de sistemas de captación pluvial en planteles educativos como parte de las estrategias para el aprovechamiento del agua.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

coinciden en señalar que persisten áreas de oportunidad en la disponibilidad efectiva, continua y suficiente de agua potable en centros educativos, particularmente en zonas rurales, comunidades indígenas y contextos urbanos con alta marginación.

A nivel internacional, el Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF (JMP) reporta que, si bien se han logrado avances, 447 millones de niñas y niños en el mundo aún carecen de acceso a servicios básicos de agua en sus escuelas, lo que impacta directamente en su salud, asistencia y rendimiento académico[5]. De igual forma, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha señalado que el acceso adecuado al agua en las escuelas contribuye a mejorar la hidratación del alumnado, favorece la función cognitiva y constituye una alternativa saludable frente al consumo de bebidas azucaradas, además de incidir en la prevención de enfermedades como la caries dental[6].

Desde la perspectiva de salud pública, la disponibilidad de agua potable guarda una relación directa con la prevención de enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos asociados a condiciones deficientes de higiene. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron más de 1.2 millones de casos de infecciones intestinales en población de 1 a 14 años en México, grupo etario que coincide con la población en educación básica[7].

La evidencia disponible, tanto en el ámbito nacional como internacional, permite advertir que las condiciones de acceso al agua potable en entornos escolares inciden de manera directa en la salud, el bienestar y el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta indispensable fortalecer las condiciones de acceso a agua segura en los planteles de educación básica.

Desde una perspectiva de equidad, resulta fundamental reconocer que las diferencias en las condiciones de infraestructura entre escuelas urbanas, suburbanas y rurales, así como en

---

[5] Organización Mundial de la Salud (WHO) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools 2015–2023: Special Focus on Menstrual Health, Joint Monitoring Programme (JMP), 2024, en el que se reporta que aproximadamente 447 millones de niñas y niños en el mundo carecen de acceso a servicios básicos de agua potable en sus escuelas, destacando el impacto en salud, asistencia escolar, dignidad e inclusión.
[6] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Water Access in Schools, en el que se señala que el acceso adecuado al agua potable en centros educativos favorece la hidratación, mejora la función cognitiva, promueve hábitos saludables y contribuye a la prevención de enfermedades, incluyendo caries dentales asociadas al consumo de bebidas azucaradas.
[7] Secretaría de Salud, Gobierno de México, Anuario de Morbilidad 2024, Dirección General de Epidemiología, en el que se reportan 1,209,206 casos de infecciones intestinales en población de 1 a 14 años en México, grupo etario que corresponde mayoritariamente a niñas, niños y adolescentes en educación básica.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

comunidades indígenas, hacen necesario establecer estándares mínimos que orienten la actuación de las autoridades competentes, con el propósito de reducir desigualdades y garantizar condiciones equitativas para el aprendizaje.

Asimismo, el acceso al agua potable en los planteles escolares tiene implicaciones relevantes en materia de inclusión y perspectiva de género. Organismos internacionales han señalado que los servicios de agua, saneamiento e higiene en escuelas son determinantes para garantizar la asistencia regular de niñas y adolescentes, particularmente en lo relativo a la gestión de la higiene menstrual, así como para asegurar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

En el ámbito jurídico local, si bien existen disposiciones en materia de servicios de agua potable y condiciones de infraestructura educativa, no se cuenta con una regulación específica que desarrolle de manera expresa y operativa la vinculación entre el derecho al agua y su garantía en los planteles de educación básica. En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico estatal, mediante la incorporación de disposiciones que permitan consolidar dicha garantía como una obligación explícita dentro del sistema educativo, articulando las competencias de las autoridades educativas, sanitarias y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

La propuesta normativa promueve que los planteles de educación básica cuenten con acceso real a agua potable en condiciones de continuidad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad, considerando tanto la disponibilidad del servicio como el mantenimiento de la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento, así como la implementación de medidas de apoyo cuando el suministro ordinario se vea interrumpido.

Cabe destacar que la presente iniciativa se construye bajo un enfoque de coordinación institucional, sin implicar la creación de nuevas estructuras administrativas, sino aprovechando las capacidades existentes para dar cumplimiento a una obligación que deriva directamente del reconocimiento constitucional del derecho al agua.

Con ello, se busca avanzar en la materialización de un derecho humano ya reconocido en el orden jurídico mexicano, transformándolo en una obligación concreta, verificable y progresiva dentro del sistema educativo estatal, en beneficio de millones de niñas, niños y adolescentes que diariamente ejercen su derecho a la educación en el Estado de México.

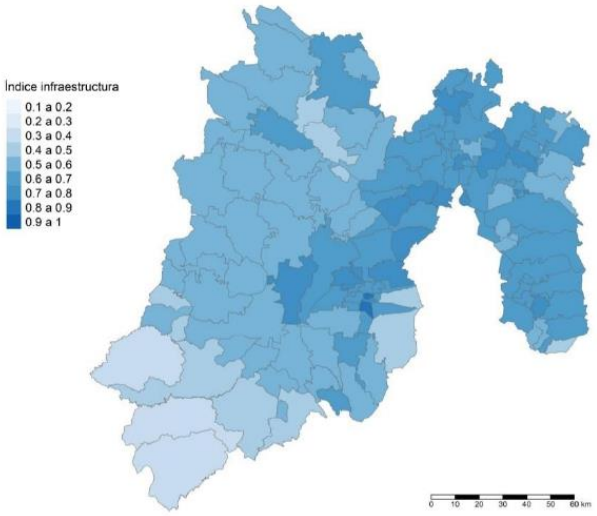
CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

La información disponible en materia de infraestructura educativa evidencia condiciones diferenciadas en la disponibilidad de servicios básicos, particularmente al agua potable, presenta diferencias significativas entre las distintas regiones del Estado de México, lo que incide directamente en las condiciones de salud, higiene y aprendizaje de la población estudiantil.

A efecto de ilustrar dicha problemática, se presenta el siguiente mapa:

Índice municipal de infraestructura educativa, escuelas primarias y secundarias, ciclo escolar 2021-2022. Estado de México



Nota: La información corresponde al apartado de infraestructura de la Estadística Educativa 911 y se refiere a escuelas de primaria y secundaria. El índice de infraestructura se construyó a partir de las siguientes variables: agua potable, electricidad, computadoras, internet, lavabo de manos, infraestructura adaptada y materiales adaptados. A cada variable se le asigna el mismo peso (cada coeficiente corresponde a 1/7). Se representa a través de un mapa coroplético, donde cada municipio se señala con un color determinado por un rango de valores. Por ejemplo, el color más oscuro corresponde a municipios donde las escuelas cuentan con mayor acceso a infraestructura.

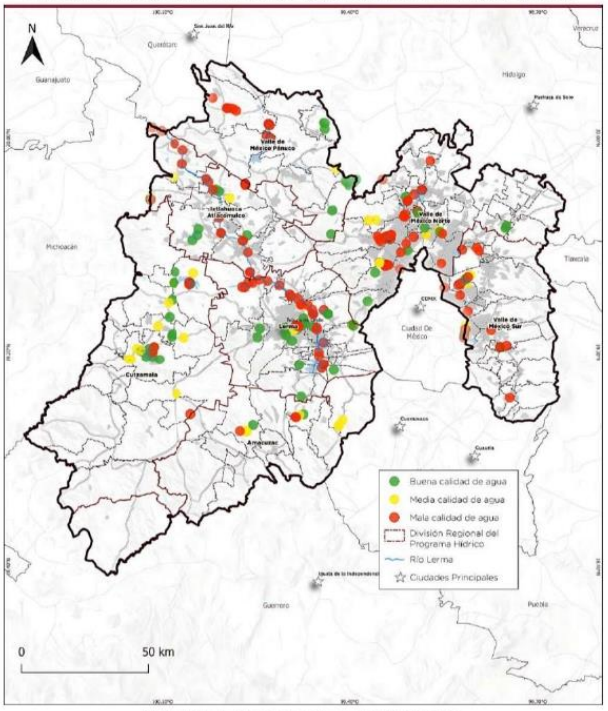
Fuente: Sistema de Estadísticas Continuas - Formato 911, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE). Marco Geoestadístico 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

De manera complementaria, el análisis de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado de México permite dimensionar las condiciones estructurales que inciden en el acceso al agua potable en distintos territorios, tal como se observa en el siguiente mapa:

Mapa 11. Semáforo de calidad del agua en cuerpos superficiales en el Estado de México



Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2023.

8

En este contexto, la evidencia territorial presentada permite identificar áreas de oportunidad en el acceso a servicios básicos en los planteles educativos, para fortalecer la toma de decisiones públicas, particularmente en lo relativo a la disponibilidad y calidad del agua potable. Si bien el Gobierno del Estado de México ha impulsado acciones relevantes para fortalecer la infraestructura hídrica y ampliar la cobertura del servicio, los retos asociados a

[8] Gobierno del Estado de México, Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Programa Hídrico Integral del Estado de México 2024–2029, con base en información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2023.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

la heterogeneidad territorial hacen necesario consolidar mecanismos normativos que permitan articular de manera más efectiva estos esfuerzos, bajo un enfoque de coordinación institucional y progresividad de los derechos humanos.

En este sentido, la presente iniciativa no parte de un vacío institucional, sino que busca fortalecer y dar operatividad a las acciones ya emprendidas, mediante la incorporación de disposiciones que permitan garantizar de manera más consistente, verificable y sostenible el acceso al agua potable en los planteles de educación básica, en beneficio de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio estatal.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico del Estado de México en materia de garantía del derecho humano al agua en el ámbito educativo, mediante la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de México y del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de asegurar que los planteles de educación básica cuenten con acceso efectivo, continuo, suficiente y salubre al agua potable como condición mínima para el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de equidad, inclusión y dignidad.

En este sentido, la iniciativa tiene como finalidades específicas:
I. Consolidar en la legislación estatal el reconocimiento del acceso al agua potable en los centros escolares como un elemento indispensable para la prestación del servicio educativo, en congruencia con el interés superior de la niñez y el principio de progresividad de los derechos humanos.
II. Establecer parámetros normativos que orienten la actuación de las autoridades competentes para garantizar la disponibilidad, continuidad, calidad, accesibilidad y funcionalidad del agua potable en los planteles de educación básica, conforme a los estándares constitucionales, legales y sanitarios aplicables.
III. Fortalecer la articulación institucional entre las autoridades educativas, sanitarias y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a fin de asegurar el suministro de agua potable en los centros escolares mediante esquemas de coordinación y concurrencia administrativa.
IV. Vincular el acceso al agua potable con las condiciones de infraestructura y servicios básicos de los planteles educativos, como parte de los elementos que garantizan entornos adecuados para el aprendizaje, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

V. Contribuir a la reducción de brechas de desigualdad en el acceso a servicios básicos en el sistema educativo estatal, particularmente en contextos rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas con mayores niveles de marginación.

MARCO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN

A) CONTEXTO INTERNACIONAL

El acceso al agua potable, al saneamiento en condiciones adecuadas de higiene ha sido reconocido progresivamente como un derecho humano fundamental en el sistema internacional de derechos humanos, estrechamente vinculado con el derecho a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a través de su Observación General No. 15, ha establecido que el derecho al agua comprende el acceso a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico[9]. Este estándar ha sido retomado por organismos internacionales especializados como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), particularmente en el ámbito de agua, saneamiento e higiene en escuelas (WASH).

En este sentido, el Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF ha señalado que la disponibilidad de agua potable en entornos escolares constituye un factor determinante para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje, asistencia escolar, salud pública e inclusión, destacando que la ausencia de estos servicios impacta de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, particularmente niñas, niños y adolescentes[10].

Estos estándares internacionales constituyen parámetros interpretativos relevantes para los Estados en la implementación progresiva del derecho humano al agua, especialmente en espacios públicos como los centros educativos, donde convergen derechos fundamentales interdependientes.

---

[9] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación General No. 15 (2002), El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
[10] Organización Mundial de la Salud (WHO) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools 2015–2023, Joint Monitoring Programme (JMP), 2024.

B) CONTEXTO NACIONAL

En el orden jurídico mexicano, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, estableciendo la obligación del Estado de garantizar este derecho[11].

Asimismo, el propio texto constitucional incorpora el principio del interés superior de la niñez como criterio rector en la toma de decisiones del Estado, lo que implica que todas las políticas públicas y disposiciones normativas deben priorizar el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el ámbito educativo, la Ley General de Educación establece que el Estado debe garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad, inclusión y excelencia, asegurando que los servicios educativos cuenten con las condiciones necesarias para su adecuada prestación, incluyendo infraestructura y servicios básicos[12].

Por su parte, la Ley General de Salud y la normativa sanitaria aplicable, incluyendo la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, establecen los parámetros de calidad del agua para uso y consumo humano, así como los criterios de control sanitario que garantizan su salubridad[13].

De esta manera, el marco jurídico nacional reconoce el derecho al agua y establece estándares técnicos para su calidad, así como principios rectores para la prestación del servicio educativo; sin embargo, no desarrolla de manera específica su exigibilidad dentro del entorno escolar.

C) CONTEXTO ESTATAL: ESTADO DE MÉXICO

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México reconoce el derecho de toda persona al acceso y disposición de agua en condiciones suficientes, salubres y asequibles, en concordancia con el marco constitucional federal[14].

---

[11] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafo sexto, Diario Oficial de la Federación.
[12] Ley General de Educación, artículos relativos al interés superior de la niñez, condiciones de prestación del servicio educativo y criterios de equidad, inclusión y excelencia, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
[13] Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua, Secretaría de Salud.
[14] Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, disposiciones relativas al derecho al agua

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

En materia educativa, la Ley de Educación del Estado de México dispone que la educación debe impartirse bajo criterios de excelencia, equidad e inclusión, y que los planteles educativos deben cumplir condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad, accesibilidad e higiene, como elementos indispensables para el desarrollo integral del alumnado[15].

Por su parte, el Código Administrativo del Estado de México regula los servicios públicos relacionados con el suministro de agua potable, estableciendo las bases para su prestación, operación y mantenimiento, así como la participación de los municipios y organismos operadores en la gestión del recurso hídrico[16].

Asimismo, la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece el marco jurídico para la explotación, uso, aprovechamiento, control y suministro del agua, definiendo competencias concurrentes entre autoridades estatales y municipales, así como los mecanismos de coordinación para su gestión[17].

En este contexto, el orden jurídico estatal reconoce el derecho al agua y regula su prestación desde una perspectiva de servicio público; sin embargo, no existe una disposición específica que vincule de manera expresa dicho derecho con la prestación del servicio educativo en los planteles de educación básica.

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa se sustenta en la necesidad de fortalecer el marco jurídico estatal mediante la articulación normativa entre el derecho humano al agua y el sistema educativo, a fin de garantizar su cumplimiento efectivo en los planteles de educación básica. Si bien el derecho al agua se encuentra plenamente reconocido en el orden constitucional y existe regulación sectorial en materia hídrica y sanitaria, la ausencia de una previsión normativa específica representa un área de mejora en el ámbito diseño normativo vigente.

---

[15] Ley de Educación del Estado de México, disposiciones relativas a condiciones de infraestructura, higiene, accesibilidad y calidad de los planteles educativos.
[16] Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto (agua, obra pública e infraestructura), disposiciones relativas al servicio de agua potable.
[17] Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, disposiciones sobre uso, aprovechamiento y suministro del recurso hídrico.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

En este sentido, la reforma propuesta no implica la creación de un derecho nuevo, sino que tiene por objeto impulsar en la practica un derecho ya reconocido, mediante la incorporación de disposiciones que establezcan obligaciones claras para las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones.

Asimismo, la iniciativa se sustenta en un enfoque de coordinación interinstitucional, que permite articular las competencias de las autoridades educativas, sanitarias y municipales, sin implicar la creación de nuevas estructuras administrativas. De igual forma, la reforma responde al principio de progresividad de los derechos humanos, al fortalecer los mecanismos normativos que permiten su cumplimiento efectivo, en concordancia con el interés superior de la niñez y los objetivos de desarrollo social del Estado de México.

La incorporación de una obligación expresa en la legislación estatal permitirá que el acceso al agua potable en los planteles de educación básica deje de depender exclusivamente de acciones programáticas o administrativas y se consolide como un mandato jurídico verificable dentro del sistema educativo estatal, susceptible de seguimiento a través de los instrumentos de planeación y evaluación institucional.

Finalmente, la iniciativa contribuye a establecer condiciones mínimas homogéneas en los centros educativos, orientadas a reducir brechas territoriales, fortalecer la equidad en el acceso a servicios básicos y garantizar entornos adecuados para el aprendizaje, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior pone de manifiesto que la ausencia de una previsión normativa específica no es un aspecto menor, sino un área de oportunidad relevante, para fortalecer la garantía de un derecho humano fundamental en el entorno escolar.

PROPUESTA NORMATIVA Y BENEFICIOS ESPERADOS

La presente iniciativa propone una armonización normativa entre la Ley de Educación del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México, con el objeto de vincular de manera expresa el derecho humano al agua con la prestación del servicio educativo en los planteles de educación básica, en congruencia con el marco constitucional, legal y programático vigente.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Dicha armonización se sustenta en la necesidad de articular disposiciones ya existentes en materia de educación, salud e infraestructura, a efecto de consolidar una obligación jurídica clara que permita garantizar el acceso efectivo al agua potable en el entorno escolar, sin modificar la estructura general de los ordenamientos ni generar nuevas cargas fuera del ámbito de las atribuciones vigentes. En este sentido, la reforma plantea:

I. Incorporar en la legislación educativa estatal una disposición expresa que reconozca el acceso al agua potable como parte de las condiciones mínimas para la prestación del servicio educativo, en congruencia con los criterios de equidad, inclusión, salud e interés superior de la niñez[18].
II. Precisar que las condiciones de infraestructura y servicios básicos de los planteles educativos comprenden la disponibilidad efectiva de agua potable en condiciones de continuidad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad, conforme a los estándares constitucionales y sanitarios aplicables[19].
III. Establecer la vinculación normativa con el régimen de prestación de los servicios públicos de agua potable regulados en el Código Administrativo del Estado de México, a efecto de que las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven en el suministro del recurso hídrico a los planteles educativos, mediante esquemas de coordinación institucional[20].
IV. Prever que la implementación de las disposiciones propuestas se realizará mediante mecanismos de coordinación interinstitucional entre autoridades educativas, sanitarias y municipales, en congruencia con los instrumentos de planeación estatal en materia de agua y desarrollo social[21].
V. Impulsar el aprovechamiento de las capacidades institucionales existentes para garantizar el suministro de agua potable en los planteles escolares, priorizando aquellos ubicados en zonas

---

[18] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafo sexto (derecho humano al agua), en relación con el principio del interés superior de la niñez; así como Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación General No. 15 (2002), El derecho al agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que define los elementos de disponibilidad, calidad, accesibilidad física y asequibilidad como componentes esenciales del derecho.

[19] Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad, Secretaría de Salud, Diario Oficial de la Federación, que establece los parámetros microbiológicos, físicos y químicos para garantizar la salubridad del agua; en relación con el marco de vigilancia sanitaria a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

[20] Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto, relativo a la infraestructura y servicios públicos, particularmente las disposiciones en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que regulan la prestación del servicio público por parte de los municipios y organismos operadores, en términos de las atribuciones concurrentes previstas en el orden jurídico estatal.

[21] Gobierno del Estado de México, Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, Eje 2 "Bienestar ambiental y acceso universal al agua", instrumento rector de la planeación democrática estatal, que establece como objetivo el fortalecimiento de la gestión hídrica, el acceso universal al agua y la reducción de brechas territoriales en la prestación de servicios básicos.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

con mayores condiciones de rezago, en atención a la evidencia diagnóstica disponible sobre desigualdad en infraestructura educativa[22].

La armonización normativa propuesta permite transitar de un esquema en el que el acceso al agua en las escuelas depende de acciones programáticas, a un modelo en el que dicho acceso se configura como una obligación jurídica explícita, articulada y verificable, dentro del sistema educativo estatal.

BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación de la presente iniciativa generará beneficios directos en distintos ámbitos, en congruencia con la evidencia técnica y sanitaria ya expuesta en el cuerpo de la iniciativa.

a) Salud pública. - La disponibilidad de agua potable en los planteles escolares contribuirá a la reducción de riesgos sanitarios asociados a enfermedades de origen hídrico, en atención a la evidencia epidemiológica existente en población infantil y adolescente en México[23]. Asimismo, favorecerá la hidratación adecuada del alumnado, lo cual se asocia con mejores condiciones de salud general y prevención de padecimientos vinculados a la deshidratación y a prácticas de consumo no saludables[24].

b) Educación. - El acceso efectivo al agua potable incide positivamente en la capacidad de atención, concentración y permanencia escolar, conforme a estudios técnicos de organismos internacionales que vinculan la hidratación con el rendimiento cognitivo y la asistencia escolar[25].

---

[22] Secretaría de Educación Pública, Atlas de los Servicios Educativos de la República Mexicana y Atlas de los Servicios Educativos del Estado de México, ciclo escolar 2021–2022, en los que se incluyen indicadores de infraestructura escolar, tales como disponibilidad de agua potable y servicios de saneamiento, utilizados para medir condiciones de equidad en el acceso a servicios básicos en planteles educativos.

[23] Secretaría de Salud, Gobierno de México, Dirección General de Epidemiología, Anuario de Morbilidad 2024, en el que se reportan 1,209,206 casos de infecciones intestinales en población de 1 a 14 años en México, grupo etario que corresponde mayoritariamente a niñas, niños y adolescentes en educación básica.

[24] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Water Access in Schools, evidencia técnica que vincula el acceso al agua potable en entornos escolares con la hidratación, la función cognitiva, la prevención de enfermedades y la reducción del consumo de bebidas azucaradas.

[25] Organización Mundial de la Salud (WHO) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools 2015–2023: Special Focus on Menstrual Health, Joint Monitoring Programme

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

c) Equidad e inclusión. - La iniciativa contribuirá a reducir brechas territoriales en el acceso a servicios básicos, particularmente en escuelas ubicadas en zonas rurales, indígenas y urbanas con alta marginación, en concordancia con los diagnósticos de infraestructura educativa señalados en el Atlas de Servicios Educativos.
Asimismo, fortalece condiciones de inclusión al considerar necesidades diferenciadas en materia de accesibilidad e higiene, particularmente en niñas y adolescentes.

d) Eficiencia institucional. - La reforma permitirá consolidar una obligación jurídica clara dentro del sistema educativo, facilitando la planeación, coordinación y seguimiento de acciones relacionadas con el suministro de agua potable.

Cabe destacar que su implementación se plantea bajo un enfoque de aprovechamiento de capacidades institucionales existentes, sin implicar la creación de nuevas estructuras administrativas, lo que fortalece su viabilidad operativa.

e) Derechos humanos. - La iniciativa contribuye a hacer efectivo el derecho humano al agua en el ámbito educativo, fortaleciendo su cumplimiento en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad, en congruencia con los estándares internacionales y el principio de progresividad de los derechos humanos.

CUADRO NORMATIVO PROPUESTO

Ley de Educación del Estado de México
Capítulo Único
"De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes"

DICE	DEBE DECIR	ARMONIZACIÓN NORMATIVA / JUSTIFICACIÓN
Artículo 111. Se deja texto vigente.	*.. Se adiciona el artículo 111 Bis.* *Artículo 111 Bis. Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas*	Actualmente el artículo 111 prevé condiciones físicas, equipamiento y servicios básicos para garantizar seguridad, salud, bienestar y desarrollo integral de los

(JMP), 2024, que establece la relación entre servicios WASH en escuelas, asistencia escolar, dignidad, inclusión y salud, con énfasis en niñas y adolescentes.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Las autoridades educativas estatal y municipales atenderán de manera prioritaria las escuelas públicas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo las condiciones físicas, de equipamiento y de servicios básicos óptimos que garanticen la seguridad, la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los educandos, para que proporcionen educación con equidad e inclusión en dichas localidades... A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la autoridad educativa federal, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física	***atribuciones, deberán promover e implementar las acciones necesarias para que los planteles de educación básica cuenten con acceso a agua potable para consumo humano, en condiciones de disponibilidad, continuidad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad, como parte de los servicios básicos indispensables para la prestación del servicio educativo.*** ***Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades competentes deberán coordinarse con las instancias sanitarias y municipales que correspondan, a efecto de coadyuvar en el suministro, mantenimiento y condiciones de calidad del agua en los centros escolares, de conformidad con la normatividad aplicable, en congruencia con los instrumentos de planeación estatal***	educandos; asimismo, establece que, a partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público La adición del artículo 111 Bis permite desarrollar de manera específica el mandato ya contenido en el artículo 111, evitando modificar su texto vigente y fortaleciendo su operatividad. La propuesta armoniza el derecho humano al agua con las condiciones materiales de prestación del servicio educativo, bajo un enfoque de interés superior de la niñez, salud escolar, equidad e inclusión. Además, se evita crear un nuevo organismo, programa o carga presupuestal directa, al utilizar fórmulas de coordinación institucional y actuación "en el ámbito de sus atribuciones.

Código Administrativo del Estado de México.
Libro Segundo "De la Salud";
Título Primero
"Disposiciones generales"; Capítulo Quinto "Del Consejo de Salud del Estado de México".

DICE	DEBE DECIR	ARMONIZACION NORMATIVA / JUSTIFICACION
Artículo 2.10. Se deja texto vigente.	***Se adiciona el artículo 2.10 Bis, después del artículo 2.10.***	El Consejo de Salud del Estado de México tiene funciones de coordinación, apoyo, evaluación,

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

El Consejo, a fin de garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos del Estado, tendrá las funciones siguientes: I. Contribuir a consolidar el sistema estatal de salud, apoyar a los comités municipales de salud y coordinar éstos con los sistemas nacional y estatal de salud; (se mantienen las fracciones de las II hasta la XII.) XII Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.)	***Artículo 2.10 Bis. El Consejo de Salud del Estado de México, en el ámbito de sus atribuciones y sin perjuicio de las competencias que correspondan a las autoridades educativas, sanitarias, municipales y organismos operadores, podrá emitir recomendaciones, lineamientos y criterios de coordinación interinstitucional para coadyuvar en la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes mediante acciones relacionadas con la disponibilidad y salubridad del agua potable en planteles de educación básica, de conformidad con la normatividad aplicable.***	cooperación técnica, lineamientos y unificación de criterios en materia de salud pública. Actualmente no existe una disposición específica que vincule sus funciones de coordinación sanitaria con el acceso, vigilancia preventiva y criterios de salubridad del agua potable en planteles de educación básica. Esta ubicación es estrategica, porque el Consejo de Salud ya es una instancia permanente de coordinación, consulta y apoyo para la planeación, programación y evaluación de servicios de salud. La adición propuesta no le asigna funciones operativas de suministro, certificación o verificación directa, sino una función de coordinación sanitaria, lo que evita invasión de competencias municipales o de organismos operadores y reduce el riesgo presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades conferidas por el marco constitucional y legal aplicable, y con el propósito de fortalecer la garantía del derecho humano al agua en el ámbito educativo, así como de consolidar condiciones dignas, seguras y saludables para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

LA H. LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.
Se adiciona el artículo 111 Bis a la Ley de Educación del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 111 Bis.
Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán promover las acciones necesarias para que los planteles de educación básica cuenten con acceso a agua potable para consumo humano, en condiciones de disponibilidad, continuidad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad, como parte de los servicios básicos indispensables para la prestación del servicio educativo.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades competentes promoverán la coordinación con las instancias sanitarias y municipales que correspondan, a efecto de coadyuvar en el suministro, mantenimiento y condiciones de calidad del agua en los centros escolares, de conformidad con la normatividad aplicable.
ARTÍCULO SEGUNDO.
Se adiciona el artículo 2.10 Bis al Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 2.10 Bis.
El Consejo de Salud del Estado de México, en el ámbito de sus atribuciones y sin perjuicio de las competencias que correspondan a las autoridades educativas, sanitarias, municipales y organismos operadores, podrá proponer criterios de coordinación interinstitucional para coadyuvar en la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes mediante acciones relacionadas con la disponibilidad y salubridad del agua potable en planteles de educación básica, de conformidad con la normatividad aplicable.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
SEGUNDO: Las autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento del presente Decreto, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y los programas vigentes.
Asimismo, promoverán la incorporación de mecanismos de seguimiento, evaluación e indicadores dentro de los instrumentos de planeación y gestión institucional, a efecto de dar cumplimiento progresivo a las disposiciones previstas en el presente Decreto.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

DIP. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia, y Bienestar Social
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

TERCERO: La implementación de las disposiciones previstas en el presente Decreto se realizará de manera progresiva, priorizando los planteles de educación básica ubicados en zonas con mayor grado de marginación o rezago social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en ejercicio de las facultades que confiere el marco constitucional y legal aplicable, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con el propósito de fortalecer el orden jurídico del Estado de México mediante la incorporación de disposiciones que permitan hacer efectivo el derecho humano al agua en el ámbito educativo, consolidando condiciones mínimas de equidad, inclusión, salud y dignidad en los planteles de educación básica, en congruencia con el interés superior de la niñez y el principio de progresividad de los derechos humanos.

P R E S E N T A N T E

DIP. DRA. JENNIFER NATHALIE GONZÁLEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD, ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL
DE LA H. LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. María José
Pérez Domínguez
Distrito XXIII-Texcoco de Mora

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Toluca de Lerdo, a ** de septiembre de 2026

DIPUTADO VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Diputada María José Pérez Domínguez, en representación del Grupo Parlamentario de morena, en la LXII Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 71 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, fracción II, 57 y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28, fracción I, 38, fracción II, 79 y 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y; 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Legislatura, para estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se declara: "**2027. Bicentenario de la promulgación, en Texcoco, de la primera constitución del Estado de México**"; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una constitución, carta magna o ley fundamental, es la norma suprema que da origen, regula la administración y el gobierno, crea instituciones y establece o reconoce, derechos y libertades de las y los habitantes de una nación, de un Estado.

Las primeras constituciones, para anular los efectos negativos del absolutismo, establecieron límites al ejercicio del poder, entre ellos, como un sistema de pesos y contrapesos y con la finalidad de evitar la concentración de funciones en una sola persona o corporación, el principio de la división de poderes. Principio que sobrevive hasta nuestros días.

Como un contrato social, la constitución es producto del consenso de personas que comparten un pasado, costumbres y tradiciones comunes y que aspiran a compartir, de igual manera, un presente y un futuro gloriosos.

La constitución mexiquense de 1827, promulgada en Texcoco, designado en ese entonces como capital de nuestro Estado, deriva de la Constitución Federal de 1824, con la cual se dio inició a la vida independiente del país.

Como toda constitución moderna tuvo su base y antecedente en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789; cumpliendo, de manera primordial, con los postulados establecidos en su artículo 16[1]. En este sentido, la constitución de 1827 definió y estableció, por primera vez, las características de nuestro Estado de México, los principios de gobierno, las limitaciones, facultades e interrelaciones de los poderes, así como las libertades y derechos de la población.

Entre los derechos se reconocieron los de libertad, igualdad, trabajo, de audiencia ciudadana, el de no realizar trabajos sin recibir remuneración, el derecho de los inculpados a ser escuchados antes de recibir sentencia y el derecho de libertad de expresión; se condenó la existencia de la esclavitud y se estableció la supresión de títulos nobiliarios y privilegios hereditarios; entre los derechos de la ciudadanía, se estableció el de elegir y ser electos para cargos públicos. Todos derechos y garantías de avanzada en el ámbito nacional.

En el contexto histórico y como un elemento de cohesión social, se privilegió la práctica exclusiva de la religión católica, prohibiendo cualquier otra.

En la esfera jurisdiccional, por seguridad y certeza jurídica, se destacó la importancia de que existiera uniformidad de leyes en todos los tribunales; así como el hecho de que su cumplimiento y ejecución no fueran dispensados, privilegiando con ello la justicia de legalidad y el estado de derecho.

De igual manera se dio prevalencia e impulso a la educación, ordenando que en todos los municipios se estableciera, por lo menos, una escuela de primeras letras, y se creó el Instituto Literario, antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México.

[1] **Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), artículo 16**. Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

Como lo menciona María del Pilar Iracheta Cenecorta, en su obra, las constituciones del Estado de México de 1827, 1861, 1870 y 1917. Una aproximación histórica: "*El Estado de México ha promulgado cuatro constituciones: … De la lectura de estas se desprende que, a lo largo del proceso constitucional de la entidad, el impulso transformador de los cuatro textos y su vocación reformadora y revolucionaria ha tenido diferentes estadios y diversos niveles de eficacia de acuerdo con el contexto histórico en el cual se formularon. En este sentido, la Constitución de 1827 es el código fundador del Estado de México que representó, esencialmente, la expresión contractual de nuevas libertades y de estatus políticos de los ciudadanos ante el nuevo escenario de la naciente república mexicana*".

Así, en un periodo de inestabilidad, desorden y falta de cohesión colectiva, la constitución de 1827, representó, además de dar vida a nuestra identidad, el documento, el contrato social que daría forma, unidad y estabilidad y que detonaría la grandeza y desarrollo político, económico y social de nuestro estado.

Con la constitución de 1827, se dio inicio a la etapa constitucional del Estado de México y con ella, al reconocimiento de derechos y libertades y al establecimiento de límites al poder político, lo cual expresó el primer gobernador mexiquense Melchor Múzquiz, al jurar la constitución: "*…nada más justo ni conveniente que los derechos de los ciudadanos se encuentren establecidos de un modo fijo y duradero; y nada más conforme a los deseos del gobierno que ver sus atribuciones señaladas con precisión y claridad: firme en sus principios de dar a cada uno lo que la ley le concede, …*".

Así, la importancia de la Constitución promulgada el 14 de febrero de 1827, en la Ciudad de Texcoco, es que representa la expresión de la fundación del Estado de México; definiendo, por primera vez, sus características, los principios de gobierno, límites al ejercicio del poder, la división de poderes y estableciendo derechos y libertades para las y los mexiquenses; de conformidad con los estándares constitucionales de la época.

De igual manera, es el contrato social, que representa la expresión de la voluntad del pueblo, externada a través del primer constituyente mexiquense, integrado por los diputados: Mariano Casela, Manuel Cotero, Manuel de Cortázar, José Alonso Fernández, José Figueroa, Manuel Gómez Marín, Benito José Guerra, Francisco José Guerra, José María de Jáuregui, José Domingo Lazo de la Vega, Pedro Martínez de Castro, Francisco Moctezuma, Ignacio Mendoza, José María Luis Mora, José Ignacio de Nájera, Baltasar Pérez, Francisco de las Piedras, Pedro Valdovinos, Antonio Velasco de la Torre, Joaquín Villa y Manuel Villaverde y; por los diputados suplentes: Antonio de

Castro, José María Magos, José Nicolás de Oláez, José Pérez Valdovinos, Mariano Velázquez de León Tamariz, Manuel y José Calixto Vidal.

En este contexto, el 14 de febrero de 2027, se cumplirán doscientos años del nacimiento del Estado de México, como un estado constitucional, sustentado en un contrato social, con principios, instituciones, libertades y derechos que sobreviven y que han evolucionado, adaptándose a las nuevas realidades sociales; por mencionar algunos, reconociendo, por igual, los derechos políticos electorales de mujeres y hombres y al reconocer, como parte fundamental de la población mexiquense, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Por lo anterior, para honrar y exaltar los principios e ideales que se plasmaron por primera vez en la Constitución de 1827, promulgada en Texcoco y para recordar que gobierno y ciudadanía, debemos actuar en conjunto y coordinación para procurar su cumplimiento; en nombre y representación del grupo parlamentario de morena, me permito proponer que la leyenda oficial para el próximo año, que deberá incluirse en la correspondencia de los poderes, dependencias y organismos estatales y municipales, se dedique a conmemorar el Bicentenario de la promulgación, en Texcoco, de la primera constitución del Estado de México.

Por lo expuesto y una vez justificada la procedencia de la iniciativa, someto a la consideración de esta H. Legislatura el presente Proyecto de Decreto, solicitando, se tenga a bien, aprobarlo en sus términos.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA JOSÉ PÉREZ DOMÍNGUEZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. María José
Pérez Domínguez
Distrito XXIII-Texcoco de Mora

PROPUESTA DE PROYECTO DE DECRETO:
LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara: **"2027. Bicentenario de la promulgación, en Texcoco, de la primera constitución del Estado de México".**

ARTÍCULO SEGUNDO. En toda correspondencia oficial de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos de los Municipios, de los Organismos Constitucionales Autónomos y de los Organismos Auxiliares de carácter estatal o municipal, deberá insertarse la leyenda: **"2027. Bicentenario de la promulgación, en Texcoco, de la primera constitución del Estado de México".**

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los _____ días del mes de _____ de dos mil veintiséis.

Toluca de Lerdo, México, a 09 de septiembre de 2026

DIPUTADO VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN LA H. *"LXII"*
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Diputada **María del Carmen De la Rosa Mendoza** integrante del Grupo Parlamentario del Partido de morena y en su nombre, con fundamento en los artículos 6, 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 61 fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 38 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; y artículo 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, en materia de guarda y custodia e interés superior de la niñez,** lo anterior de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las tareas principales de los Estados a nivel internacional y nacional **es reconocer la existencia de grupos de personas que por su edad**, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural, política o social **se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean vulnerados**, motivo por el cual requieren de atención y protección especial a través de acciones concretas que permitan garantizar respeto pleno y salvaguarda de sus derechos humanos, **dentro de estos grupos se encuentran las niñas, niños y adolescentes quienes lamentablemente se han considerado en los últimos años como personas necesitadas de protección, tanto en el orden social como familiar, por ello la existencia de distintas disposiciones e instituciones jurídicas cuyo objetivo es el amparo y cuidado de menores**.

El planteamiento del por qué niñas, los niños y adolescentes (NNA) forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, parte de la premisa que de que suelen ser vistos

como seres inferiores que carecen de capacidad para ejercer sus derechos y expresar sus opiniones, dicha perspectiva sobre la infancia ha generado importantes consecuencias en la medida en que **se piensa que las personas adultas son quienes mejor saben y conocen lo que niñas, niños y adolescentes necesitan y lo que es mejor para ellas y ellos**, sin embargo, este enfoque puede colocarles en una **situación de riesgo, toda vez que las personas adultas no siempre conocen a ciencia cierta lo que niñas y niños sienten, piensan o necesitan, por lo que su bienestar y protección suelen quedar al arbitrio de las personas adultas**, lo anterior quiere decir que, si se asume las niñas y niños no pueden ejercer sus derechos, sino que sólo pueden hacerlo a través de las personas adultas, **se corre el riesgo de supeditar su protección a la voluntad del Estado y de las personas adultas**[1].

Aunado a ello, **niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo que no siempre cuentan con todas las herramientas y habilidades necesarias para comprender** (como lo hacen las personas adultas) **la significación y consecuencias de ciertos actos y acontecimientos**, lo que hace complicado que puedan expresar y comunicar lo que sienten, así como denunciar aquellas conductas y omisiones que les hayan afectado. De hecho, **las personas adultas y NNA significamos el mundo de manera distinta por lo que, mientras que un evento puede no parecer grave desde la perspectiva adulta, para un niño, una niña o adolescente puede representarle mucho dolor, miedo, tristeza o enojo**, motivo por el cual supeditar la experiencia infantil a la experiencia adulta representa un acto de violencia y discriminación que coloca a NNA en una situación de vulnerabilidad, tampoco podemos perder de vista que las niñas, niños y adolescentes forman parte de un grupo en especial situación de vulnerabilidad **en la medida en que cualquier afectación a sus derechos humanos suele tener impactos de mayor significación y alcance que para las personas adultas**, debido a que en la etapa de desarrollo en la que se encuentran, las niñas, los niños y adolescentes no siempre poseen todas las herramientas y los medios de defensa psicológicos para hacer frente a episodios o experiencias dolorosas, lo que puede generar como consecuencia que, en ausencia de mecanismos y soportes de acompañamiento efectivos, esos impactos se sigan reproduciendo a lo largo de la vida[2].

[1] Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2024-02/Folleto-Infancia.pdf *¿Por qué las niñas, los niños y adolescentes forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad?*
[2] Disponible en: *ídem*

No obstante, a lo anterior, no podemos perder de vista que **las NNA son sujetos de derechos más no objetos de protección**, por lo que deben de contar con igualdad de condiciones que las personas adultas ante la Ley, naturalmente con determinadas particularidades, en efecto, las niñas, los niños y adolescentes pueden ser vistos, al menos, a partir de dos grandes perspectivas, el primero corresponde a la **perspectiva proteccionista** o de la situación irregular y, por el otro, la **perspectiva integral o garantista**, las cuales se refieren a continuación:

Perspectiva proteccionista o de la situación irregular	Perspectiva integral o garantista
son objetos de protección	son sujetos de derechos
Desde esta perspectiva, las niñas, los niños y adolescentes no son capaces de ejercer por sí mismos sus derechos, ni de tomar decisiones sobre todas aquellas cuestiones que les atañan. En tanto sujetos que carecen de esta capacidad, entonces, requieren de una mayor protección por parte de las personas adultas y el Estado que termina por sustituirlos y reemplazarlos. A partir de este modelo, son las personas adultas quienes saben, conocen y deciden qué es lo mejor para las niñas, los niños y adolescentes sin tomar en consideración su opinión, preferencias y experiencias.	Desde este enfoque, las niñas, los niños y adolescentes son personas en un constante desarrollo que tienen habilidades y posibilidades diferenciadas, de acuerdo con su edad y contextos particulares, para opinar, participar y tomar decisiones sobre todas aquellas cuestiones que puedan afectarles. Así, para esta perspectiva la función del Estado y de las personas adultas no es la de sustituirles, sino la de generar mecanismos adaptados que les permiten ejercer de manera independiente sus derechos y expresar sus opiniones de manera libre. Además, la perspectiva integral o garantista si bien plantea que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, también reconoce que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad que requiere del despliegue de acciones y medidas de protección reforzadas por parte del Estado para garantizar sus derechos humanos.

Fuente: *Folleto para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia*

Lo anteriormente expuesto, nos señala que **la perspectiva integral o garantista contiene mayores mecanismos para que las NNA puedan ejercer de manera más plena sus derechos**, efectivamente dicha perspectiva se ha venido desarrollando en los últimos años en diversos instrumentos internacionales entre ellos, la *"Convención sobre los Derechos del Niño"* de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) **caracteriza por un cambio en la forma en que se concibe a las niñas y a los niños y a sus derechos**[3].

[3] Disponible en:

Una de las figuras jurídicas más destacables relacionadas de manera directa con las niñas, niños y adolescentes son **la patria potestad y la guarda y custodia que, al encontrarse encaminadas a brindar cuidados, protección, asistencia, formación y educación a las personas menores de edad, conforman figuras importantes del derecho familiar**, los cuales se encuentran establecidos en instrumentos jurídicos internacionales como lo son la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, la *Convención sobre los Derechos del Niño* y el *Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. La guarda y custodia deriva de la patria potestad, **consiste en los derechos y obligaciones que tienen los padres en relación con los hijos menores niños, niñas o adolescentes**, para el caso de conyugues separados o divorciados, la decisión respecto a cuál de los padres tendrá la guarda y custodia o bien si ésta será compartida la toman la madre y el padre de común acuerdo, es decir, los padres podrán mediante convenio determinar con quién de ellos vivirán los hijos menores o bien si vivirán por períodos determinados con uno y con otro, dicho **convenio puede determinar los regímenes de convivencia y de alimentos de la madre y el padre, por lo que la persona juzgadora competente en ese caso sólo aprobará y ratificará lo que hayan acordado los padres**, salvo que advierta algún riesgo claro para los menores.

Derivado de lo anterior, es imperante mencionar que **en el territorio mexiquense el divorcio se clasifica en incausado, voluntario, administrativo y notarial**[4] cada uno con sus requisitos, particularidades y debido proceso señalados en el Código Civil (derecho sustantivo) y el Código de Procedimientos Civiles (derecho adjetivo)[5] de la esfera jurídica estatal, de igual forma es destacable mencionar que acorde con la *Estadística de Divorcios (ED)* del **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el Estado de México se encuentra entre las entidades federativas con las mayores tasas de divorcios por cada mil habitantes de 18 años,** cifras las cuales pueden apreciarse en la siguiente gráfica:

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSIDH_DerNinasNinos-3aReimpr.pdf
[4] Disponible en:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf
art. 4.89, art. 4.91, art. 4.102, art. 4.105, art. 4.106 del Código Civil del Estado de México
[5] Disponible en:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig003.pdf
art. 2.275, art. 2.276, art. 2.277, art. 2.278, art. 2.284, art. 2.373, art. 2.374, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México

Gráfica 1
Divorcios
2015 a 2024
(número de divorcios y tasa por cada mil habitantes de 18 años y más)[1/]



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador para los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.
Fuente: INEGI. Estadística de Divorcios (ED), 2015 a 2024.

Por otra parte, **la madre y el padre pueden acordar de manera enunciativa más no limitativa, la guarda y custodia, los regímenes de convivencia y de alimentos de los hijos menores, puede suceder en dichos casos que no lleguen a un acuerdo y es entonces que la autoridad jurisdiccional competente tendrá que decidir sobre estos temas a través de los procedimientos previstos por las legislaciones estatales en la materia.**

Actualmente, existe un consenso en el sentido de que **la resolución de casos que involucren niñas, niños y adolescentes exige el reconocimiento, respeto y conciencia de que son titulares de derechos, con autonomía propia y con capacidad para tomar sus propias decisiones**, esto incluye la prerrogativa de **emitir sus opiniones en cualquier decisión que les involucre y de hacer valer todos los derechos que tienen ante el Estado, las familias** y la sociedad, **para garantizar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las niñas, niños y adolescentes es fundamental comprender que son seres diferentes de las personas adultas**, ello se debe a que cuentan con habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales distintas, dichas diferencias serán fundamentales para generar las condiciones requeridas para lograr una justicia adaptada. Asimismo, **juzgar con perspectiva de género implica que en la labor jurisdiccional se tomen en cuentan los estereotipos y roles de género que conllevan a circunstancias de inequidad entre hombres y mujeres, para así percibir el impacto diferenciado que una norma jurídica o una sentencia puede generar, y entonces la autoridad jurisdiccional tomará las medidas y determinaciones jurídicas**

conducentes a fin de lograr un trato uniforme en el caso concreto; que además influirá en la sociedad para combatir tales prejuicios sociales. Lo anterior, en virtud de la constante evolución y perspectiva transversal que debe de tener las personas juzgadoras al momento de emitir sus Acuerdos, Sentencias o Resoluciones, efectivamente, **para resolver qué es lo mejor para los hijos, el juzgador debe evitar cualquier estereotipo que nuble el análisis de las necesidades de atención, de equilibrio en el desarrollo, del ambiente familiar, del rechazo o identificación entre los padres y sus hijos, entre otros elementos, que son los que deberán tomarse en cuenta para, en cada caso, encontrar la mejor solución a la luz del interés superior del menor**, particularmente **ante las normas que establecen una preferencia a favor de la madre en la guarda y custodia de los hijos, para salvaguardar el interés superior del menor, así como el principio de igualdad, resulta indispensable que el juzgador realice un análisis de razonabilidad libre de estereotipos de género de las circunstancias particulares del caso.**

Apercibimos, que **en años recientes la *Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)*, también conocido como el *máximo Tribunal Constitucional*, ha emitido una serie de resoluciones y tesis respecto a la materia en comento, a efecto de salvaguardar el interés superior del menor, apegarse al principio de igualdad y juzgar libre de estereotipos**, además de la emisión de importantes y trascendentales instrumentos legales como lo son el *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género*[6] (emitido originalmente en el mes de agosto del año 2013 y actualizado en noviembre de 2020), así como también el *Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia*[7] (publicado originalmente en el año 2012 y actualizado en el año 2021), las cuales son herramientas de guía obligatoria para las autoridades jurisdiccionales a efectos de que estas garanticen derechos humanos imprescindibles y transformen la Ley abstracta en una justicia real y adaptada a grupos históricamente vulnerables.

[6] Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf
[7] Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/tusderechos-tufortaleza/pdf/personas_adultas/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-infancia.pdf

De hecho, como aspecto relevante, **en el año 2019 la Primera Sala de la *SCJN* resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero del Código Civil del Distrito Federal**, que a su letra establecía:

> ***Artículo 282.- ...***
>
> ***A. ...***
>
> ***B. ...***
>
> ***II. -*** *Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.*
>
> *En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad.*
>
> ***Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre****, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos.* ***No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia****, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.*
>
> ***III.- ...***
>
> ***IV.- ...***
>
> ***V.- ...***
>
> ***El énfasis es propio***

Lo anterior, debido a que **la Primera Sala del máximo Tribunal Constitucional determina que el artículo del Código Civil previamente referido violenta el principio del interés superior del menor** ya que desplaza la función del juzgador consistente en evaluar las circunstancias

particulares de cada caso en concreto para determinar quién es la persona que mejor puede atender las necesidades afectivas y de cuidado del infante. También consideró que **la presunción en favor de la madre que establecía la norma controvertida no solo reafirmaba estereotipos de género tradicionales, sino que profundiza el rol de mujer-madre e impide erradicar la concepción de la feminidad tradicional**[8].

Advertimos que **en la elaboración de la presente Iniciativa se realizó un análisis legislativo,** primeramente, en lo correspondiente al ámbito de competencia que tiene la federación y las entidades federativas de la materia en comento, encontrando que **la guarda y custodia de menores se encuentra prevista tanto en ordenamientos jurídicos del ámbito federal como estatal, puesto que existe un Código Civil Federal, así como un Código Civil por cada entidad federativa**, no obstante, a lo anterior, no podemos perder de vista que los Juzgados Locales (Estatales) son lo que tienen la atribución de resolver en su mayoría los asuntos relativo a asuntos civiles y familiares, por ende, **existe un criterio de oportunidad para que este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de México realice la labor de legislar para robustecer el contenido normativo en materia de guarda y custodia acorde con la realidad social y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Asimismo, se encontraron aspectos relevantes **por cuanto hace al apartado de procedimientos familiares y civiles, ya que estamos próximos a la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento jurídico que tiene como finalidad, de manera enunciativa más no limitativa, el unificar y homologar la legislación procesal civil y familiar en todo el país**.

Efectivamente, el *DECRETO*[9] por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) determina en su apartado transitorio que:

- ***En el caso de las Entidades Federativas, el presente Código Nacional, entrará en vigor en cada una de éstas de conformidad con la Declaratoria que al efecto emita el Congreso Local,*** *previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente,* ***sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027***

[8] Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6015
[9] Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5691385&fecha=07/06/2023#gsc.tab=0
Artículo Transitorio Segundo, Tercero, Cuarto y **Décimo Tercero**

- ***Se abrogan*** *el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como* ***la legislación procesal civil y familiar de las Entidades Federativas***

- *Los procedimientos civiles y familiares que a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del Código Nacional*

- ***Toda referencia a la legislación procesal civil y familiar Federal y de las Entidades Federativas, en ordenamientos diversos, se entenderá a partir de la vigencia en las mismas, al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares***

También, **este mismo ordenamiento jurídico[10] que entrará en vigor a más tardar el día primero de abril del año dos mil veintisiete**, ordena que:

- ***Las disposiciones de este Código Nacional son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional****, tienen por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar, con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte*

- *Se entiende por* ***Autoridad jurisdiccional. Jueza, juez, magistrada, magistrado u órganos del Poder Judicial****, con facultades para emitir resoluciones en el ejercicio de impartición de justicia dentro del ámbito de sus respectivas competencias*

- ***En la impartición de justicia, las autoridades jurisdiccionales deberán velar en todo momento por garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, actuando con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos***

[10] Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPCF.pdf
art. 1, art. 2 fr. VI, art. 3 segundo párrafo, art. 5primer y segundo párrafo, art. 569, fr. II, art. 581, fr. III y art. 656 fr. III inciso a)

- ***En los asuntos de orden familiar*** *y civil, y* ***sin alterar el principio de igualdad procesal****, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad, a fin de que* ***la autoridad jurisdiccional provea ajustes de procedimiento en su caso y supla oportunamente de oficio****,* ***las deficiencias de sus planteamientos sobre la base de proteger los intereses de la familia****, personas mayores,* ***niñas, niños, adolescentes****, personas con discapacidad o cualquier otra persona que se encuentre en alguna condición de vulnerabilidad*

- ***En los casos que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos de las mujeres, la autoridad jurisdiccional deberá actuar y resolver con base en el interés superior de las niñas, niños, o adolescentes, con perspectiva de género*** *de conformidad con las leyes aplicables y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte*

- *Perspectiva de género.* ***Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género****. Promueve la igualdad sustantiva entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones*

- ***La autoridad jurisdiccional deberá intervenir de oficio en las cuestiones inherentes al orden familiar y deberá decretar las medidas provisionales necesarias sin audiencia de la contraparte y cerciorarse de su cumplimiento****, en los casos que a continuación se mencionan, de manera enunciativa y no limitativa* ***Guarda y custodia***

- *Presentada la solicitud de separación, si la autoridad jurisdiccional considera que procede, conjuntamente a la admisión del trámite deberá decretar* ***la determinación en cuanto a la guarda y custodia provisional de las niñas, niños o adolescentes relacionados con el caso***

- ***Ante la autoridad jurisdiccional, a la solicitud deberá acompañarse u**na **propuesta** de **Convenio**, de existir hijos o hijas menores de edad, **quien ejercerá su guarda y custodia**, la fijación de la pensión alimenticia que les corresponderá y el establecimiento de un régimen de convivencias, así como la pensión alimenticia que, en su caso pudiera corresponder al o la divorciante*

Ilustramos que, **en la realización de esta Iniciativa se realizó un estudio comparado de manera general de diversos ordenamientos jurídicos de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos de la materia civil y familiar, precisamente en la figura de la guarda y custodia**, lo anterior, a efecto de **referir de manera enunciativa más no limitativa, las particularidades, características (entre ellos la edad de las niñas, niños y adolescentes) y demás aspectos que toman en consideración las personas juzgadoras del ámbito local para la asignación de guarda y custodia en casos de divorcio o separación de los conyugues (algunos todavía con lamentables estereotipos de género)**, las cuales pueden apreciarse a continuación:

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
1	**Artículo 292, apartado B, fracción II** del Código Civil del Estado de Aguascalientes[11]	En todos los casos **la persona juzgadora determinará la custodia de los niños, niñas y adolescentes**, **atendiendo a las circunstancias concretas del caso específico**, ***garantizando las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes*, si estos quedan al cuidado de la madre, del padre o incluso de persona ajena a sus progenitores**
2	**Artículo 279, fracción VI** del Código Civil para	Poner a las hijas e hijos en cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo **ser uno de éstos**. En defecto de ese acuerdo, **el cónyuge que pida el divorcio**

[11] Disponible en: https://congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/leyes/descargarPdf/474

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
	el Estado de Baja California[12]	**propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos** **La Jueza o Juez, tratándose de determinaciones provisionales sobre guarda, cuidado y custodia**, **ponderará el derecho de convivencia de la niña, niño y adolescente con ambos progenitores**, atendiendo al principio de **interés superior**, tomando en consideración lo establecido en el artículo 420 Bis de este Código
3	**Artículo 262 y artículo 305 F** del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur[13]	**Casos de nulidad de matrimonio** Salvo casos excepcionales de enfermedades transmisibles, corrupción o maltrato de los hijos, **la madre conservará su custodia hasta los siete años** **Divorcio unilateral sin casusa** En caso de oposición, **el Juez, oyendo al Ministerio Público, resolverá provisionalmente lo que más convenga a los hijos**, quienes tendrán derecho a ser oídos según su capacidad de comprensión. En todo caso, **los hijos menores a siete años quedarán en custodia de la madre**, a menos que se pruebe que esta medida es inconveniente para su salud física y mental El derecho preferente de **la madre a la custodia de sus hijos menores de siete años**, no está condicionada a la capacidad económica de ésta

[12] Disponible en: https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_III/20260130_CODCIVIL.PDF
[13] Disponible en: https://www.cbcs.gob.mx/index.php/cmply/1485-codigo-civil-bcs

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
4	**Artículo 298 fracción V** Código Civil del Estado de Campeche[14]	Al admitirse la solicitud de divorcio sin expresión de causa, o antes, si hubiere urgencia, se dictarán las medidas siguientes: **Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos**. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio, propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. **El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente, tomando en cuenta la opinión de las y los menores de edad**. **No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos**
5	**Artículo 439, fracción II inciso b)** de la Ley para la familia de Coahuila de Zaragoza[15]	La **autoridad judicial decidirá quién deba hacerse cargo de la guarda de las niñas o niños mayores de siete años, pero menores de doce**
6	**Artículo 268, fracción VI del** Código Civil para el Estado de Colima[16]	Las **niñas y niños menores de siete años deberán quedar preferentemente al cuidado de quien garantice su interés superior**
7	**Artículo 255 y artículo 256** del Código Civil	Luego que la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, **el padre y la madre propondrán la forma y términos del cuidado y la**

[14] Disponible en: https://www.consejeria.campeche.gob.mx/pagina/LEXIUSCAMPECHE/docs/codigos/900001.pdf
[15] Disponible en: https://www.congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa233.pdf
[16] Disponible en: https://congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
	para el Estado de Chiapas[17]	**custodia de los hijos mayores de siete años de edad** y, en caso de desavenencia, el juez resolverá a su criterio de acuerdo con las circunstancias del caso Tratándose de **hijos cuya edad sea inferior a siete años**, aun en los casos de divorcio o de otras acciones, **se mantendrán al cuidado de la madre**, salvo pacto en contrario o **peligro para el normal desarrollo de los hijos; deberá tomar en cuenta la opinión de la niña o niño que estén en condiciones de formarse un juicio propio**, prevaleciendo en todo momento el **interés superior del niño**
8	**Artículo 247** del Código Civil del Estado de Chihuahua[18]	Al causar ejecutoria la sentencia sobre nulidad, **la autoridad competente resolverá la situación de los menores de edad, preferentemente atendiendo al interés superior del menor**, con el siguiente orden: **los hijos e hijas menores de siete años, quedarán bajo la guarda y custodia de la madre. Pasada esta edad y hasta la mayoría de edad, podrán quedarse con el padre o la madre, si de parte de ambos cónyuges hubiera habido buena fe** **Cuando los hijos tengan una edad de 14 años o más, cualquiera que sea su sexo, decidirán su situación por su propia voluntad ante la autoridad judicial**

[17] Disponible en: https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0003.pdf?v=MjM=
[18] Disponible en: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
9	**Artículo 282 apartado B, fracción II** del Código Civil para el Distrito Federal[19]	En el caso de que existan **menores de doce años, la Jueza o Juez de lo Familiar determinará, atendiendo a las circunstancias concretas del caso específico, garantizando las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de las y los menores, si éstos quedan al cuidado de la madre, del padre o incluso de persona ajena a sus progenitores**. No será obstáculo para la preferencia en la custodia, el hecho de que la madre o padre por dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar carezca de recursos económicos
10	**Artículo 277 fracción VI** del Código Civil del Estado de Durango[20]	Poner a las hijas e hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, **el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos e hijas. El juez previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conducente** **Salvo peligro para el normal desarrollo de las hijas e hijos, y bajo las consideraciones del juez**, **los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre**, **escuchando si fuera conveniente la opinión del menor.** Así mismo el juez de lo familiar, resolverá lo conducente

[19] Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/2025/CODIGOS_2025/CODIGO_CIVIL_PARA_EL_DF_15.3.pdf
[20] Disponible en: https://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CODIGO%20CIVIL.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
11	**Artículo 336 fracción VI** del Código Civil para el Estado de Guanajuato[21]	Al admitirse la demanda de divorcio o antes si hubiere urgencia, **el juez bajo su responsabilidad, decretará provisionalmente y sólo mientras dure el juicio**, lo siguiente **poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos o ambos** Salvo riesgo para el normal desarrollo de los hijos, **los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre**
12	**Artículo 31 fracción II** de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero[22]	Contestada la solicitud, el Juez dictará las siguientes medidas provisionales **poner a los hijos menores de siete años al cuidado de la madre y escuchar a los mayores de siete años para resolver con que cónyuge se quedarán**, salvo declinación expresa de éstos, o por impedimento legal derivado de una resolución judicial o bien cuando estuviese plenamente demostrado la existencia de violencia familiar en la que ella sea la agresora
13	**Artículo 472 fracción V** del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo[23]	Desde que se presenta la solicitud de divorcio, se dictarán de oficio las medidas provisionales pertinentes, mismas que subsistirán durante el tiempo que sea necesario, pudiendo ser ratificadas o modificadas en la audiencia, conforme a las disposiciones siguientes **los menores de doce años quedarán al cuidado de la madre**, salvo que se afecte el **interés superior del menor**

[21] Disponible en: https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3689/CCG_REF_18Diciembre2025_DL113.pdf
[22] Disponible en: https://www.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/LDEG-2.pdf
[23] Disponible en: https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Codigo%20de%20Procedimientos%20Familiares%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
14	**Artículo 572 fracción II** del Código Civil del Estado de Jalisco[24]	Cuando no convivan ambos padres, **cualquiera de los dos ejercerá sobre él la guarda y custodia, siempre y cuando tengan la disposición y la posibilidad efectiva de su guarda y custodia**, además de no tener una conducta nociva a la salud física o psíquica de la niña, niño o adolescente
15	**Artículo 4.95 fracción III y V, artículo 4.205 y artículo 4.228 fracción II inciso a)** del Código Civil del Estado de México[25]	A falta de acuerdo entre los cónyuges, **la guarda y custodia provisional de las y los hijos se decretará por el Juez quedando preferentemente al cuidado de la madre**, debiendo escuchar a ambos progenitores, a las hijas o hijos y a cualquier otro interesado, en función del **interés superior de las niñas, niños y adolescentes** y de los sujetos a tutela. El Juez actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia
16	**Artículo 432** del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo[26]	Los progenitores podrán convenir acerca de cuál de ellos ejercerá la custodia del menor; **en caso de discrepancia, el juez establecerá a quién corresponde ejercer tal prerrogativa, para lo cual debe atender como aspecto primordial el interés superior del menor, así como la adecuada capacidad de los padres para su cuidado y con cuál de ellos puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral, valorando las especiales circunstancias** que concurran en cada progenitor

[24] Disponible en: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/C%C3%B3digos/Documentos_PDF-C%C3%B3digos/C%C3%B3digo%20Civil%20del%20Estado%20de%20Jalisco-280526.pdf
[25] Disponible en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf
[26] Disponible en: http://congresomich.gob.mx/file/CODIGO-FAMILIAR-REF-5-DE-ABRIL-DE-2021.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
17	**Artículo 222** del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos[27]	Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, **los mayores de doce años decidirán cuál de sus progenitores ejercerá su custodia** Para el caso de **los menores de doce años, el juez de lo familiar, una vez que preferentemente los haya escuchado y, procurando en todo momento salvaguardar el interés superior del niño, determinará cuál de los progenitores ejercerá la custodia** No será obstáculo para la preferencia en la custodia, el hecho de que la madre o el padre carezcan de recursos económicos
18	**Artículo 275 fracción V** del Código Civil para el Estado de Nayarit[28]	Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictará provisionalmente, y solo mientras dure el juicio, poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, **pudiendo ser uno de éstos**. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. **El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente tomando en consideración en todo momento el interés superior del menor**

[27] Disponible en: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CFAMILIAREM.pdf
[28] Disponible en: https://congresonayarit.gob.mx/wp-content/uploads/QUE_HACEMOS/LEGISLACION_ESTATAL/codigos/codigo_civil_estado_de_nayarit.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
		Salvo peligro para el normal desarrollo de los hijos, **los menores que se encuentren en periodo de lactancia, quedarán preferentemente al cuidado de la madre.** No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la misma carezca de recursos económicos
19	**Artículo 414 Bis** del Código Civil para el Estado de Nuevo León[29]	**La madre tendrá en todos los casos en que no viva con el padre de sus hijas o hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que fueren menores de doce años**, a menos que hubiese sido sentenciada por incurrir en conductas de violencia familiar, sea de las contempladas en el Código Civil o en el Código Penal como delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, exista orden de restricción dictada por autoridad competente, que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere alguna enfermedad contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijas e hijos. **Debiendo en todo caso el Juez, escuchar la opinión de los menores conforme a su edad y madurez, resolviendo siempre conforme al interés superior de éstos**

[29] Disponible en: https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?2026-01-16

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
20	**Artículo 125 fracción II y artículo 126** del Código Familiar para el Estado de Oaxaca[30]	Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges pudiendo ser uno de éstos o bien, el régimen de custodia compartida **El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, niños o adolescentes no estará sustentado en prejuicios de género, por lo cual deberá atenderse al interés superior de la niñez** Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, **el juzgador podrá acordar, de manera provisional, a petición de los ascendientes, parientes colaterales o de los propios niños, niñas o adolescentes, cualquier medida que se considere benéfica para éstos últimos**
21	**Artículo 450 apartado B fracción III** del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla[31]	Los **menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre**, excepto en los casos en los que exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia de la madre, el hecho de que ésta carezca de recursos económicos
22	**Artículo 239** del Código Civil del Estado de Querétaro[32]	En caso de no ponerse de acuerdo ambos padres o no se garantice el interés de los hijos en dicho convenio, **el Juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso, garantizará el cuidado de**

[30] Disponible en: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatal/Codigo_Familiar_para_el_Estado_de_Oaxaca_(ref_dto_874_aprob_LXVI_Legis_2_dic_2025_PO_50_XVI_seccion_13_diciembre_2025).pdf

[31] Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/Codigo_Civil_para_el_Estado_Libre_y_Soberano_de_Puebla_T4_17102025.pdf

[32] Disponible en:

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
		los menores dejándolos bajo la custodia del progenitor que conforme al interés superior de los hijos sea más conveniente para éstos y resolverá todo lo relativo en cuanto a los puntos enumerados en este artículo, con la obligación del que tiene la custodia, de permitir la convivencia con el otro progenitor o progenitores, si es el caso.
23	**Artículo 814 fracción VII y X** del Código Civil para el Estado de Quintana Roo[33]	Poner a las niñas, niños y adolescentes, al cuidado de la persona que de común acuerdo designen las personas cónyuges, **debiendo ser una de éstas y pudiéndose compartir la custodia, respetando en todo momento las disposiciones de este Código al respecto** En caso de que las **personas menores de doce años sean sujetas de violencia familiar, éstas deberán quedar al cuidado de la madre**, excepto cuando sea ésta quien la origine. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos
24	**Artículo 300 Bis** del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí[34]	**Cualquiera de los progenitores podrá solicitar al juez la custodia compartida**, para lo cual, **los juzgadores deberán considerar las circunstancias particulares del caso, tomando en cuenta los factores propios y las pruebas desahogadas,**

https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/InvEst/Codigos/COD-ID-02.pdf
[33] Disponible en:
https://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C2-XVIII-09102024-20260212T114232-Codigo-civil,-Ultimo-archivo-version-final.pdf
[34] Disponible en:
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/codigos/2026/05/Codigo%20Familiar%20del%20Estado%20%28al%2020%20de%20mayo%202026%29.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
		para pronunciarse respecto a la posibilidad de que los hijos permanezcan bajo esa figura, siempre velando por el interés superior de la niñez
25	**Artículo 161 y artículo 187 apartado B fracción II** del Código Familiar del Estado de Sinaloa[35]	El juez en todo tiempo podrá modificar la determinación a que se refiere el artículo anterior, atento a las nuevas circunstancias y a lo dispuesto en los artículos 358, 359 y la fracción III del artículo 380 de este Código, pero siempre y aun tratándose de divorcio, **los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre** **Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre**, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos
26	**Artículo 130** del Código de Familia para el Estado de Sonora[36]	En los casos de nulidad de matrimonio, y aun tratándose de divorcio, **los hijos e hijas menores de siete años se mantendrán al cuidado de la madre hasta que cumplan esta edad**, salvo que se ponga en peligro su salud física, emocional o mental, supuestos en los cuales **se podrá otorgar la custodia al otro cónyuge o al ascendiente que mejor asegure el desarrollo integral de aquellos**

[35] Disponible en: https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_4.pdf
[36] Disponible en: https://stjsonora.gob.mx/acceso_informacion/marco_normativo/CodigoDeFamilia.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
27	**Artículo 453 fracción II** del Código Civil del Estado de Tabasco[37]	Cuando conforme a este Código deba hacerse **cargo provisional o definitivamente de la guarda de un menor solamente uno de sus padres**, se aplicarán las siguientes disposiciones **Los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre** El juez decidirá quién se hará cargo de los mayores de siete años, pero menores de catorce
28	**Artículo 259 fracción IV** del Código Civil para el Estado de Tamaulipas[38]	Salvo peligro para el normal desarrollo de los hijos, **los menores que se encuentren en período de lactancia, quedarán preferentemente al cuidado de la madre**
29	**Artículo 113 y artículo 130 fracción V** del Código Civil Para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala[39]	Mientras se decreta el divorcio, **el Juez citará a una junta familiar en la que dispondrá la separación de los cónyuges si no estuvieren ya separados, de una manera provisional, se definirá a quien corresponda la custodia provisional de los hijos menores de edad** y dictará las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de los hijos, a quienes haya obligación de dar alimentos

[37] Disponible en: https://tsj-tabasco.gob.mx/biblioteca/3414/Codigos/
[38] Disponible en: https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Codigos/Codigo%20Civil%20para%20el%20Estado%20de%20Tamaulipas%2030-03-2026.pdf
[39] Disponible en: https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/leyes2020/pdf/1_codigo_civil_par.pdf

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
		Los **hijos menores de seis años quedarán en poder de la madre**, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos
30	**Artículo 144 fracción VI** del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave[40]	Desde que se solicita la nulidad del matrimonio o el divorcio incausado, y mientras dure el **procedimiento se dictarán las medidas provisionales pertinentes**, según corresponda y de acuerdo con las disposiciones siguientes las **niñas y niños menores de siete años deberán quedar preferentemente al cuidado de quien garantice su interés superior**
31	**Artículo 333** del Código de Familia para el Estado de Yucatán[41]	El juez tiene la facultad de decretar la custodia provisional de las niñas, niños y adolescentes, en los casos en que así se requiera. **La custodia provisional puede ser otorgada sólo a uno de los progenitores**; a las personas que les corresponda el ejercicio de la patria potestad; **a los parientes colaterales hasta el tercer grado o, en caso de que haya imposibilidad de designar a alguno de los familiares**, o habiéndolo considera que no se protegería adecuadamente el **interés superior de la niña, del niño o adolescente**, puede determinar su entrega a algún centro de asistencia social o a una familia de acogida

[40] Disponible en: https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CCIVIL08102025SCJN.pdf
[41] Disponible en: https://www.congresoyucatan.gob.mx/legislacion/codigos

Cuadro comparativo de las 32 Entidades Federativas, en materia de asignación de guarda y custodia en caso de divorcio o separación de conyugues		
N°	**Disposición legal en donde se prevé**	**Síntesis de la disposición legal**
32	**Artículo 234 fracción V** del Código Familiar del Estado de Zacatecas[42]	Mientras que se decreta el divorcio, al admitir la demanda el Juez, y en los casos que lo considere pertinente, con el auxilio de la instancia de mediación del Poder Judicial del Estado, de oficio dictará provisionalmente las siguientes medidas **poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos**. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pide el divorcio propondrá la persona a cuyo cuidado deben quedar provisionalmente los hijos. El Juez, con audiencia del otro cónyuge, resolverá inmediatamente designando la persona que crea conveniente en caso de no ser aceptada la propuesta

De lo anterior, se desprende que **en 18 Entidades Federativas (el 58.25 %) las disposiciones legales del Código Civil o familiar aún siguen instruyendo que la designación (de manera preferente) de la guarda y custodia se asigne a la madre**, en el siguiente rango de edad:

- menores en **periodo de lactancia (cero a dos años)**: Nayarit y Tamaulipas
- menores de **seis años**: Tlaxcala
- menores de **siete años**: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Sonora y Tabasco
- menores de **doce años** Guanajuato, Hidalgo, México, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa

En contraste, **14 Estados (el 43.75 por ciento) prevén una legislación en donde la guarda y custodia de los menores puede otorgarse tanto a la madre como al padre (libre de**

[42] Disponible en: https://www.congresozac.gob.mx/65/ley&cual=104&tipo=pdf

estereotipos), cada uno con sus particularidades y supuestos, siendo estos **Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Colima, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz de Ignacio De la Llave, Yucatán y Zacatecas**.

Bajo ese tenor y una vez realizado el análisis legislativo correspondiente, es necesario revisar las disposiciones legales de la materia, a efecto de generar una atinada propuesta de texto normativo.

La *Convención Americana sobre Derechos Humanos*[43], decreta que:

- *La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado*

- ***Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia**, de la sociedad y **del Estado***

La *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*[44] (CEDAW) determina que ***los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con** el matrimonio y **las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres**:*

- *Los **mismos derechos y responsabilidades** durante el matrimonio **y con ocasión de su disolución***

- *Los **mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil**, en materias relacionadas con sus hijos; **en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial***

[43] Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf **art. 17, párrafo primero y art.19**
[44] Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women **art. 16 párrafo primero, inciso c), d) y f)**

- *Los **mismos derechos y responsabilidades respecto de la** tutela, curatela, **custodia** y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; **en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial***

La *Convención sobre los Derechos de los Niños*[45] establece que:

- ***Los Estados Partes adoptarán todas las medidas** administrativas, **legislativas** y de otra índole **para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención***

- ***En todas las medidas concernientes a los niños que tomen** las instituciones públicas o privadas de bienestar social, **los tribunales, las autoridades administrativas** o los órganos legislativos, **una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño***

- *Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, **de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables**, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño*

- *Los Estados Partes **garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño**, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño*

- ***Se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial** o administrativo **que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional***

[45] Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf **art. 3 primer párrafo, 9 párrafo primero, 12 primer y segundo párrafo y 18 primer párrafo**

- *Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en* ***garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño***

El Protocolo Adicional a la *Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*[46] *"Protocolo de San Salvador"*, instituye que ***todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia****, de la sociedad y del Estado.* ***Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente****, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre*

La *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*[47] ordena que:

- ***La mujer y el hombre son iguales ante la ley****. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias.* ***El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres***

- ***En todas las decisiones*** *y actuaciones* ***del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez****,* ***garantizando de manera plena sus derechos****.* ***Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral****. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez*

- ***El Congreso General tiene facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar***

La *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*[48] prevé que:

[46] Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html **art. 16**
[47] Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf **art. 4, párrafo primero y decimo primero y art. 73 fr. XXX**
[48] Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf **art. 18, art. 22 párrafo primero, segundo y cuarto y 23 párrafo primero**

- ***En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales****, autoridades administrativas y órganos legislativos,* ***se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez.*** *Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio*

- ***Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia***

- ***Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables****, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia,* ***salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación****, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez****, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas****. En todos los casos,* ***se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez***

- *Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias,* ***establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno***

- *Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular,* ***excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez****, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes*

La *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias*[49], decreta que *los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de*

[49] Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf **art. 4 fr. I y VI**

violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son La ***igualdad jurídica, sustantiva****, de resultados y estructural;* ***la perspectiva de género***

La *Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres*[50] instituye que:

- *Se entiende por igualdad sustantiva el* ***acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales***

- ***Los Congresos de las Entidades Federativas****, con base en sus respectivas Constituciones,* ***expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres*** *prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley*

La *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México*[51]*, determina que:*

- ***En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte****, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece*

- ***El hombre y la mujer son iguales ante la ley, ésta garantizará el desarrollo pleno y la protección de la familia y sus miembros por ser base fundamental de la sociedad****. Bajo el principio de igualdad consagrado en este precepto,* ***debe considerarse la equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos de desarrollo humano primordiales*** *como lo son el educativo, laboral, político, económico, social y en general, todos aquellos que*

[50] Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGISMH.pdf **art. 5 fr. V y art. 14**

[51] Disponible en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf **art. 5 primer y décimo noveno párrafo**

dignifiquen a la persona, por consiguiente ***las autoridades deben velar porque en los ordenamientos secundarios se prevean disposiciones que la garanticen***

- ***En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez****, garantizando de manera plena sus derechos. La lactancia materna forma parte del derecho a la alimentación y la nutrición desde la primera infancia.* ***Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral****. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.* ***Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios***

La *Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México*[52], ordena que:

- *Son atribuciones y obligaciones de las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia* ***dirigir su actuar bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género****; y*

- *Son obligaciones y atribuciones de los jueces las siguientes* ***juzgar bajo el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género***

- *El Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial incorporarán la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velarán por que los órganos a su cargo así lo hagan.*

La *Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México*[53], estable que:

[52] Disponible en:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig020.pdf
art. 12 fr. XVII, art. 57 fr. XIV y 132
[53] Disponible en:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig098.pdf
art. 5 fr. V y XXV, 16 primer párrafo, art. 18 y art. 58 fr. I

- *Se entiende por adolescente* ***a toda persona cuya edad esté comprendida entre los doce años y menor a los dieciocho años****, cuando exista duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente*

- *Se entiende por Niña o Niño a* ***toda persona cuya edad sea menor a doce años****, cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años de edad, se presumirá que es niña o niño*

- ***Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de sus padres o de quienes que ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus tutores****, y en términos de las disposiciones aplicables de quienes ejercen la custodia,* ***sino mediante orden de autoridad competente que así lo declare*** *velando en todo momento por su integridad física y escuchando la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la preservación del interés superior de la niñez*

- ***En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales****, autoridades administrativas y órganos legislativos* ***se tomará en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez***

- ***Las autoridades estatales que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional*** *o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños y adolescentes* ***estarán obligadas a garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez***

Criterios jurisprudenciales (citados de manera enunciativa más no limitativa)

- ***AMPARO[54] DIRECTO EN REVISIÓN 553/2014***

- ***AMPARO[55] DIRECTO EN REVISIÓN 1958/2017***

[54] Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2014/10/2_162077_2207_firmado.pdf
[55] Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2017/10/2_213507_3690_firmado.pdf

- ***AMPARO[56] EN REVISIÓN 331/2019***

  - ***GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO][57].***

Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el ***inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México****, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que* ***la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor****, sino, por el contrario,* ***deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste (el menor)****. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que*

[56] Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-10/AR-331-2019-191004.pdf
[57] Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006791
Tesis, Registro digital: **2006791;** Instancia: **Primera Sala, Décima Época;** Materia(s): **Constitucional, Civil;** Tesis: **1a./J. 53/2014 (10a.);** Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 217; Tipo: **Jurisprudencia**

la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de ***valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor****, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión,* ***la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más benéfica para el menor.***

El énfasis es propio

- ***GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL[58].***

El ***artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México****, establece que: "Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia del menor. II. Si no llegan a ningún acuerdo: a) Los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor.". A juicio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia*

[58] Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006790
Tesis, Registro digital: **2006790**; Instancia: **Primera Sala**; **Décima Época**; Materia(s): **Constitucional, Civil;** Tesis: **1a./J. 52/2014 (10a.);** Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 215**;** Tipo: **Jurisprudencia**

de la Nación, esta porción normativa resulta constitucional, siempre y cuando se interprete a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad**. En primer término, es necesario señalar que al momento de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, **hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos**, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales y, cabría agregar, este criterio proteccionista debe reflejarse también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En esta lógica, el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un menor; sin embargo, **este tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta, per se, la persona más preparada para tal tarea**. Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre. Y no sólo nos referimos a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor, el cual, como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir. Esta idea, además, responde a un compromiso internacional del Estado mexicano contenido en el artículo **16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**. Ahora bien, **como también señalan los expertos, pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de

la edad; ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos.

El énfasis es propio

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE[59].

El artículo **2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes** prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que **el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento**. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, **las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a** la educación, **el**

[59] Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401
Tesis; Registro digital: **2020401**; Instancia: Segunda Sala; **Décima Época**; Materia(s): **Constitucional**; **Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.)**; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, agosto de 2019, Tomo III, página 2328; Tipo: **Jurisprudencia**

cuidado, la salud, el medio ambiente, **las condiciones de vida, la protección**, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– **deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación**, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.

El énfasis es propio

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.

*En términos de los artículos **4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño**, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y **3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**, **los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño**; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".*

El énfasis es propio

DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. DEBE EJERCERSE DE MANERA DIRECTA ANTE EL JUZGADOR, POR LO QUE NO PUEDE CONSIDERARSE SATISFECHO CUANDO OCURRA DE FORMA INDIRECTA[60].

Hechos: Un señor demandó por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad, entre otras prestaciones, su guarda y custodia; por su parte, la madre reconvino la misma prestación. El Juez de primera instancia declaró que el actor principal no probó los elementos constitutivos de su acción, y la demandada principal y actora reconvencional sí probó sus excepciones, así como los elementos constitutivos de su acción reconvencional; por tanto, concedió a ésta la guarda y custodia definitiva de la menor de edad; inconforme el actor principal interpuso recurso de apelación y el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia recurrida; determinación que fue señalada como acto reclamado en el amparo directo promovido por el padre de la menor de edad, por derecho propio y en representación de la misma; juicio en el cual le fue negada la protección constitucional. Resolución que fue impugnada en revisión, aduciendo esencialmente ***que no fue respetado el derecho de la menor de edad a ser escuchada y que indebidamente el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que ello había ocurrido de manera indirecta, y quedaba satisfecho a través del reporte que de las convivencias celebradas entre la menor de edad y su madre, presentó la psicóloga encargada de supervisarlas.***

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que ***el derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos judiciales que afecten su esfera jurídica, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los***

[60] Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024783
Registro digital: **2024783**; Instancia: **Primera Sala**; **Undécima Época;** Materia(s): **Civil, Constitucional;** Tesis: **1a./J. 68/2022 (11a.)**; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4331; Tipo: **Jurisprudencia**

***Derechos del Niño**, no puede estimarse satisfecho de manera indirecta, específicamente a través de un informe rendido por el profesional en psicología que supervisó las convivencias con alguno de los progenitores, sino que debe ejercerse en forma directa ante el juzgador, pero adoptando los ajustes necesarios y acordes a la edad y madurez del menor de edad.*

*Justificación: El derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos que afecten su esfera jurídica, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no es irrestricto, pues el juzgador de manera fundada y motivada puede determinar una excepción a su ejercicio. Sin embargo**, para satisfacer esa prerrogativa deben atenderse los parámetros y lineamientos que en aras del respeto de su interés superior ha establecido esta Suprema Corte en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia**, conforme al cual los menores de edad deben ser informados sobre su participación, externar su voluntad de hacerlo, encontrarse asistidos por un especialista en temas de infancia, así como por un representante que no constituya un conflicto de intereses, e incluso por una persona de su confianza. Además, **su opinión debe expresarse en una diligencia desarrollada a manera de entrevista, en la que se utilice material de apoyo que facilite su expresión, tomando en cuenta la existencia de formas verbales y no verbales de comunicación**; debiendo registrarse la entrevista por algún medio, a fin de que puedan acceder a ella los tribunales de apelación y de amparo, con el objeto de evitar la revictimización de los infantes. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador además de ordenar el respeto a ese derecho de la forma indicada, se encuentra en aptitud de desahogar, de oficio, los medios de convicción que estime pertinentes a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan emitir una determinación que procure el menor riesgo para el menor de edad.*

El énfasis es propio

También, **dicha Iniciativa se correlaciona con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029**, Eje 4. Bienestar social; Objetivo 4.3 Reducir las desigualdades enfrentadas por las personas pertenecientes a grupos vulnerables y abatir la incidencia en ellos en su ***Estrategia 4.3.2 Promover el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes*** y el Eje Transversal 1. Igualdad de género; Objetivo T1.1 Promover la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, en su ***Estrategia T1.1.1 Fortalecer el marco normativo institucional en materia de perspectiva de género*** [61].

Bajo ese tenor, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene como finalidad:

PRIMERO: Reformar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, a efecto de establecer que ***el otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces deberá de realizarse libre de estereotipos, con perspectiva de género, igualdad sustantiva y perspectiva de infancia, expresado la capacidad real de cuidado, un entorno libre de violencia, la protección especial, contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental o emocional, así como también las redes de apoyo***, a menos que exista una causa justificada a criterio de **autoridad jurisdiccional**. Así como también establecer que no **podrá considerarse como** obstáculo **para el otorgamiento de la guarda y custodia**, el hecho de que la madre**, padre, familiar o persona cuidadora por dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar, entre otros aspectos relevantes.**

Lo anterior, **en el sentido de realizar las adecuaciones legislativas correspondientes que señala el *máximo Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos* en materia de igualdad sustantiva en la guarda y custodia, así como el interés superior de las niñas, niños, adolescente.**

SEGUNDO: Reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, a efecto de establecer que las niñas, niños y adolescentes tengan el derecho a recibir una crianza positiva, libre de

[61] Disponible en: https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/23-29/PDEM_2023-2029_DIGITAL.pdf

estereotipos por razón de género, así como también en un ambiente de respeto, igualdad y corresponsabilidad familiar.

Advertimos, que esta propuesta legislativa **bajo ninguna circunstancia implica un retroceso a los derechos humanos como lo son el interés superior del menor, el derecho a la familia o en materia de género, si no que atienden las resoluciones de la *Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)*, en el tenor de no otorgar custodias de manera automática, así como también la eliminación de estereotipos de género,** así como también **garantizar que cada niña, niño o adolescente acceda a sus derechos humanos más imprescindibles** como lo son el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, derecho a vivir en familia, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso y derecho a no ser discriminado.

Por lo que bajo ninguna circunstancia **esta Iniciativa debe de tomarse como un elemento de confrontación entre progenitores, ni tampoco de revictimizar a las niñas, niños o adolescentes**, sino que busca que se garantice en lo mayor posible el interés superior de la niñez, **que en juicios familiares se realicen decisiones judiciales que mejor protejan su vida, seguridad estabilidad emocional y desarrollo**, que las niñas, niños y adolescentes **reciban una crianza positiva, libre de estereotipos por razón de género, así como también vivir en un ambiente de respeto, igualdad y fortalecer la corresponsabilidad familiar**[62]**, hablamos pues de una reforma para las infancias, con la adecuación de ordenamientos legislativos del ámbito estatal a efecto de establecer que las niñas, niños y adolescentes tengan el derecho**, puesto que **en procedimientos judiciales o administrativos las niñas, niños y adolescentes no ven un debate de ideologías, intereses particulares de las personas o de egos entre quienes se disputan la guarda y custodia, sino más bien de que se garantice su derecho a tener una familia, una la cual garantice su derecho a un hogar libre de todo tipo de violencia, a que le proporcione amor y un correcto desarrollo integral, el cual le permita alcanzar sus metas, sueños y anhelos.**

[62] Disponible en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2026/marzo/mar272/mar272c.pdf

Para una mejor ilustración del alcance de esta propuesta legislativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Código Civil del Estado de México Última reforma POGG: 28 de abril de 2026	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
Medidas precautorias en el divorcio Artículo 4.95.- Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, podrán dictarse sólo mientras dure el procedimiento, las disposiciones siguientes:	**Medidas precautorias en el divorcio Artículo 4.95.- …**
I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos menores y de los sujetos a tutela;	**I.** Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de **la niñez** y de los sujetos a tutela;
II. Fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos;	**II. …**
III. A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia provisional de las y los hijos se decretará por el Juez quedando preferentemente al cuidado de la madre, debiendo escuchar a ambos progenitores, a las hijas o hijos y a	**III.** A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia provisional de las y los hijos se decretará por **autoridad jurisdiccional, la cual deberá de cumplir de manera enunciativa más**

[63] Disponible en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf

Código Civil del Estado de México Última reforma POGG: 28 de abril de 2026	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
cualquier otro interesado, en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela. El Juez actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia.	**no limitativa con las siguientes disposiciones:**
SIN CORRELATIVO	**a) Atender las circunstancias concretas del caso específico, las particularidades de la decisión en relación con los tipos de derechos que están en juego, los riesgos que asumirán las niñas, niños y adolescentes, las consecuencias de las decisiones a corto y largo plazo;**
SIN CORRELATIVO	**b) Valorar la disponibilidad y capacidad real de cuidado, estabilidad emocional, el derecho a la protección especial contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental y emocional, un entorno libre de violencia, el vínculo afectivo, el cumplimiento de obligaciones alimentarias, las condiciones del hogar, las redes de apoyo, los antecedentes de violencia familiar o violencia de género y**

Código Civil del Estado de México Última reforma POGG: 28 de abril de 2026	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
	demás elementos que conlleven al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos para resolver de la mejor manera los asuntos que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes;
SIN CORRELATIVO	c) Garantizar las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección para las niñas, niños o adolescentes, si éstos quedan al cuidado de la madre, del padre, familiares o persona cuidadoras;
SIN CORRELATIVO	d) Realizar la ponderación para la valoración de las características individuales de las niñas, niños o adolescentes, como la edad, nivel de madurez, habilidades cognitivas, medio social y cultural, estado emocional, experiencia de vida y entorno;
SIN CORRELATIVO	e) Escuchar la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la preservación del

Código Civil del Estado de México Última reforma POGG: 28 de abril de 2026	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
	interés superior de la niñez y valorará la opinión o testimonio con perspectiva de infancia. De igual forma, se deberá de escuchar a ambos progenitores, familiares o persona cuidadoras, en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela. La autoridad jurisdiccional actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia;
SIN CORRELATIVO	**f) Actuar más allá de la demanda que se le presenta cuando esto sea en aras del interés superior de la infancia;**
SIN CORRELATIVO	**g) Ordenar las disposiciones que determine oportunas para salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.**
IV. Dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada;	**IV. …**
V. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su	**V.** Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su

Código Civil del Estado de México Última reforma POGG: 28 de abril de 2026	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos.	persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos**, así como también aquellas que resulten más beneficias para las niñas, niños y adolescentes.**
El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista una causa justificada a criterio del Juez. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.	El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces **se realizará libre de estereotipos, con perspectiva de género, igualdad sustantiva, con enfoque de derechos humanos como lo es la perspectiva de infancia y adolescencia,** atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista una causa justificada a criterio **de la autoridad jurisdiccional.**
SIN CORRELATIVO	No **podrá considerarse como** obstáculo **para el otorgamiento de la guarda y custodia**, el hecho de que la madre**, padre, familiar o persona cuidadora por dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar** carezca de recursos económicos.
Convenio en el divorcio voluntario Artículo 4.102.- Los cónyuges pueden	**Convenio en el divorcio voluntario Artículo 4.102.- …**

Código Civil del Estado de México **Última reforma POGG: 28 de abril de 2026**	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
divorciarse voluntariamente ocurriendo al Juez competente, presentando un convenio en que se fijen los siguientes puntos:	
I. a la **II.** …	**I.** a la **II.** …
III. Si hubiere hijos, la mención de quien deba tener su guardia y custodia durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia; Siempre velarán por lograr un ambiente sano acorde a las necesidades del menor evitando en todo momento generar sentimientos negativos, como odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores, de lo contrario serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guarda y custodia;	**III.** Si hubiere hijos, la mención de quien deba tener su guardia y custodia durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia, **el cual deberá de realizarse libre de estereotipos, con perspectiva de género, igualdad sustantiva y perspectiva de infancia, expresado la capacidad real de cuidado, un entorno libre de violencia, la protección especial, contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental o emocional, así como también las redes de apoyo.** Siempre velarán por lograr un ambiente sano acorde a las necesidades de **las niñas, niños y adolescentes** evitando en todo momento generar sentimientos negativos, como odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los

Código Civil del Estado de México **Última reforma POGG: 28 de abril de 2026**	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
	progenitores, de lo contrario serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guarda y custodia;
IV. a la **V. …**	**IV**. a la **V. …**
La patria potestad en caso de separación de la pareja que la ejerce **Artículo 4.205.** En caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad y no exista acuerdo sobre la custodia, la o el Juez resolverá, quedando preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.	**La patria potestad en caso de separación de la pareja que la ejerce** **Artículo 4.205.** En caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad y no exista acuerdo sobre la custodia, la **autoridad jurisdiccional** resolverá, **garantizando las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de niñas, niños o adolescentes, si estas o estos quedan al cuidado de la madre, padre, o bien de manera excepcional a familiares o persona cuidadora,** atendiendo **y priorizando el** interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
Guarda y custodia en la patria potestad **Artículo 4.228.** Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia	**Guarda y custodia en la patria potestad** **Artículo 4.228. ….**

Código Civil del Estado de México Última reforma POGG: 28 de abril de 2026	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones:	
I. Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia del menor;	**I. Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia de las hijas o hijos debiendo expresar con elementos probatorios la capacidad real de cuidado, un entorno libre de violencia, la protección especial, contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental o emocional, así como también las redes de apoyo;**
II. Si no llegan a algún acuerdo, el Juez atendiendo a los elementos de prueba que obren en el sumario, con base en el resultado de las pruebas periciales en materia de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles y habiendo escuchado a la niña, niño o adolescente determinará:	**II. …**
a) El otorgamiento de la guarda y custodia de menores de doce años quedará preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés	**a)** El otorgamiento de la guarda y custodia **se realizará libre de estereotipos, con perspectiva de género, perspectiva de infancia e igualdad sustantiva,** atendiendo al

Código Civil del Estado de México **Última reforma POGG: 28 de abril de 2026**	
Texto vigente[63]	**Texto que se propone**
superior de las niñas, niños y adolescentes.	interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
SIN CORRELATIVO	**Para el otorgamiento de la guarda y custodia de persona lactante la autoridad jurisdiccional que conozca el caso, atenderá las circunstancias concretas del caso específico, las particularidades de la decisión en relación con los tipos de derechos que están en juego, los riesgos, así como las consecuencias de las decisiones a corto y largo plazo.**
b) a la **c)**. …	**b)** a la **c)**. …

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia. Siempre que sea posible deberán crecer bajo la responsabilidad y el cuidado de sus padres, y recibir una crianza positiva en un ambiente de afecto y de seguridad física, moral, intelectual y material.	**Artículo 15.** Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia. Siempre que sea posible deberán crecer bajo la responsabilidad y el cuidado **mutuo** de sus padres, **a** recibir una crianza positiva**, libre de estereotipos por razón de género,** en un ambiente de afecto y de seguridad física, moral, intelectual y material**, así como también en un entorno de respeto, igualdad y corresponsabilidad familiar.**
La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan ni causa para la pérdida de la patria potestad. Estas condiciones imputables directas exclusivamente a la pobreza económica y material no constituirán la única justificación para separar a niñas, niños o adolescentes del cuidado de sus padres, sino que deberán considerarse como un indicio de la necesidad de proporcionar a la familia el apoyo apropiado.	…

[64] Disponible en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig098.pdf

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
No serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, siempre y cuando los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia.	…
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a instaurar políticas de fortalecimiento familiar con la finalidad de evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad y en su caso, la tutela; de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil del Estado de México respecto de las relaciones jurídicas familiares y los deberes derivados de éstas.	…
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados	**Artículo 16.** Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
de sus padres o de quienes que ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus tutores, y en términos de las disposiciones aplicables de quienes ejercen la custodia, sino mediante orden de autoridad competente que así lo declare velando en todo momento por su integridad física y escuchando la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la preservación del interés superior de la niñez.	de sus padres o de quienes que ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus tutores, y en términos de las disposiciones aplicables de quienes ejercen la custodia, sino mediante orden de autoridad competente que así lo declare velando en todo momento por su integridad física**, psicológica, mental y emocional, así como también garantizar dentro del ámbito de sus atribuciones espacios y eternos libres de violencia, sufrimiento, abuso o descuidos. Las autoridades jurisdiccionales o administrativas deberán hacer efectiva la participación y** opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez**, valorando** y atendiendo a la preservación del interés superior de la niñez **conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.**
Niñas, niños y adolescentes, cuyos padres o familiares que estén a su cargo se encuentren separados tendrán derecho a convivir o a mantener contacto directo de modo regular con ellos, salvo en los casos en que el	…

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez.	
Así mismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus padres o familiares cuando estos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice de forma adecuada, conforme con las disposiciones jurídicas aplicables. Este derecho solo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.	…
Cuando nazca una niña o un niño de una madre que se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad, las autoridades penitenciarias correspondientes deberán informar a la Procuraduría de Protección de este hecho, a fin de que esta última garantice que la niña o niño tenga acceso a las medidas de protección	…

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
especial correspondientes, asegurando que la niña o el niño mantenga relaciones personales y un contacto directo con su madre, cuando ello responda a su interés superior.	
En todo momento se privilegiará el derecho de los lactantes a acceder a una alimentación nutricionalmente adecuada con base en una lactancia materna óptima, por lo cual las autoridades en materia penitenciaria favorecerán el establecimiento de salas de lactancia y la operación de programas que favorezcan la lactancia materna y la alimentación complementaria que resulten apropiadas.	...
Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos se tomará en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez.	**Artículo 18.** En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos **se tendrá en cuenta su participación y opinión conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, valorando y atendiendo a la**

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
	preservación del interés superior de la niñez.
Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.	…
En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes originarios del Estado de México y que se encuentren fuera del territorio nacional, la persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores correspondiente, para que ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones aplicables.	…
Cuando las autoridades estatales tengan conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes originarios del Estado de México trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se coordinarán con las autoridades federales competentes,	…

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
conforme a las demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución.	
Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en territorio estatal, o haya sido trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir que sufran mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia necesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma resulte procedente conforme a los tratados internacionales en materia de sustracción de menores.	…
Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho, de manera individual y colectiva, a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte,	**Artículo 49.** Niñas, niños y adolescentes tienen derecho, de manera individual y colectiva, **a participar y ser escuchadas o** escuchados en todo procedimiento

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
ya sea directamente o por medio de representante u órgano apropiado de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.	judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de representante u órgano apropiado de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.
La Procuraduría de Protección estatal o municipal, en su respectivo ámbito de competencia podrá promover la imposición de sanciones a los medios de comunicación locales, según lo establece la Ley General.	…
Se garantiza el ejercicio de este derecho, especialmente en todo procedimiento que conduzca a una decisión que afecte sus derechos, garantías e intereses, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, atendiendo el interés superior de la niñez.	Se garantiza el ejercicio de este derecho, especialmente en todo procedimiento que conduzca a una decisión que afecte sus derechos, garantías e intereses, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo**, madurez, estado emocional, experiencia de vida y entorno,** atendiendo el interés superior de la niñez.
Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar libre y activamente en la vida familiar, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa,	**Artículo 52.** Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar libre y activamente en la vida familiar, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa,

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.	conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo, **madurez, estado emocional, experiencia de vida y entorno.**
Este derecho implica la posibilidad de expresar su opinión, ser escuchados y tomados en cuenta respecto de los asuntos de su familia, su comunidad y su país, así como todos aquellos temas que les afecten, por lo que la familia, la sociedad y el Estado deberán propiciar y fomentar oportunidades de participación de niñas, niños y adolescentes.	…
Las autoridades estatales y municipales fomentarán la participación de niñas, niños y adolescentes en foros municipales y estatales y la creación de espacios de participación a fin de que puedan opinar, analizar, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva, en aquellos ámbitos que no vulneren su integridad física o moral.	Las autoridades estatales y municipales fomentarán la participación de niñas, niños y adolescentes en foros municipales y estatales y la creación de espacios de participación a fin de que puedan opinar, analizar, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva, en aquellos ámbitos que no vulneren su integridad física, **psicológica, mental o emocional.**

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
Es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas, diseñar los mecanismos que den un peso específico a la opinión de niñas, niños y adolescentes, en todos los aspectos que determinen su vida y su desarrollo, sin menoscabo del deber de cuidado y orientación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia.	Es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas, diseñar los mecanismos que den un peso específico a la **participación y** opinión de niñas, niños y adolescentes, en todos los aspectos que determinen su vida y su desarrollo, sin menoscabo del deber de cuidado y orientación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia.
Artículo 58. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso, establecidos en la Constitución Federal y Estatal, los tratados internacionales, la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que las autoridades estatales están obligadas a garantizar el goce de estos derechos y la protección y prevalencia del interés superior de la niñez.	**Artículo 58. …**
Las autoridades estatales que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en	…

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
los que estén relacionados niñas, niños y adolescentes estarán obligadas a:	
I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez.	**I.** Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez **de manera trasversal y con enfoque de interseccionalidad.**
SIN CORRELATIVO	**I. Bis. Allegarse de los elementos necesarios para poder deliberar respecto a un determinado asunto, evaluando las consecuencias de sus decisiones en razón de sus atribuciones.**
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	**II.** Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes **en las diferentes etapas del procedimiento de su competencia, protegiendo sus derechos en posible riesgo en tanto se dicta una resolución o sentencia.**
II Bis. Establecer las acciones necesarias para que, en el marco de las disposiciones Constitucionales y legales en la materia, niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la justicia en el marco de la justicia	**II Bis. …**

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
adaptada a las infancias y adolescencias.	
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo formatos accesibles, apoyos ordinarios o extraordinarios, atendiendo a su edad, nivel de madurez y discapacidad según sea el caso.	**III. …**
IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial, proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete o de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera.	**IV. …**
V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados de manera coadyuvante o en suplencia por las procuradurías de protección estatal o municipales, en los términos establecidos en la Ley General, esta Ley y en las demás disposiciones	**V. …**

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
aplicables, así como recibir información sobre las medidas de protección disponibles.	
VI. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario.	**VI. …**
VII. Garantizar el derecho de audiencia de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos a los que sean sometidos, cuidando que las decisiones que se emitan sobre sus derechos estén construidas garantizando el pleno acceso a la impartición de justicia sin dañar o poner en riesgo su integridad y desarrollo; basando en los principios de participación, interés superior, dignidad y protección frente a la discriminación, debiendo tener en cuenta el nivel de madurez y entendimiento de la niña, el niño y adolescente, así como las circunstancias del caso.	**VII.** Garantizar el derecho de audiencia de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos a los que sean sometidos, cuidando que las decisiones que se emitan sobre sus derechos estén construidas garantizando el pleno acceso a la impartición de justicia sin dañar o poner en riesgo su integridad**, privacidad, intimidad o** desarrollo; basando en los principios de participación, interés superior, dignidad y protección frente a la discriminación, debiendo tener en cuenta el nivel de madurez y entendimiento de la niña, el niño y adolescente, así como las circunstancias del caso.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de esta, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica que les revictimice y atente contra su dignidad; por lo que se deberá considerar hacer uso de la testimonial única y la prueba anticipada; así como, la adecuación del lenguaje al contexto de las infancias y el empleo de materiales de apoyo sustentado en métodos psicológicos y didácticos acordes con sus características cognitivas y emocionales.	**VIII.** Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de esta, considerando su edad, madurez, estado psicológico, **experiencia de vida y entorno**, así como cualquier otra condición específica que les revictimice y atente contra su dignidad; por lo que se deberá considerar hacer uso de la testimonial única y la prueba anticipada; así como, la adecuación del lenguaje al contexto de las infancias y el empleo de materiales de apoyo sustentado en métodos psicológicos y didácticos acordes con sus características cognitivas y emocionales.
En todo momento, se deberá mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir negativamente en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva; así como recibir acompañamiento de especialistas en psicología, pedagogía y trabajo social.	…

morena

64

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
VIII Bis. Deberán habilitar salas de espera que propicien un ambiente tranquilo; así como adecuar salas de enjuiciamiento o de escucha; contar con material didáctico para que puedan expresarse o narrar lo ocurrido a través de otras herramientas diversas al lenguaje verbal; establecer mecanismos de videograbación o circuitos cerrados de televisión que permitan mantener sus testimonios u opiniones para evitar repeticiones de pruebas innecesarias.	**VIII Bis. …**
IX. Destinar espacios lúdicos, de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir.	**IX. …**
X. Atendiendo al principio de celeridad procesal ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos.	**X. …**

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
XI. Implementar medidas para garantizar el resguardo de la intimidad y datos personales de niñas, niños y adolescentes.	**XI. …**
XII. Dictar medidas de protección a favor de niñas, niños o adolescentes, cuando esté en riesgo su integridad física o emocional, procurando su interés superior.	**XII.** Dictar medidas de protección a favor de niñas, niños o adolescentes, cuando esté en riesgo su integridad física integridad física, **psicológica, mental** o emocional, procurando su interés superior.
XIII. Realizar de forma oficiosa y gratuita las pruebas psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.	**XIII. …**
Artículo 73. Atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán:	**Artículo 73. …**
I. a la **XVII. ….**	**I.** a la **XVII. ….**
XVIII. Protegerlas y protegerlos de toda forma y tipo de violencia, castigo	**XVIII.** Protegerlas y protegerlos de toda forma y tipo de violencia, castigo

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Última reforma POGG: 20 de mayo de 2026	
Texto vigente[64]	**Texto que se propone**
corporal o castigo humillante, maltrato, agresión, perjuicio, daño, abuso, venta, trata de personas, explotación o cualquier acto que atente contra su integridad física, psíquica y moral que menoscabe su desarrollo integral.	corporal o castigo humillante, maltrato, agresión, perjuicio, daño, abuso, venta, trata de personas, explotación o cualquier acto que atente contra su integridad física, psíquica y moral que menoscabe su desarrollo integral**; y**
SIN CORRELATIVO	**XIX. Garantizar a niñas, niños y adolescentes ambientes de respeto, igualdad y corresponsabilidad familiar en el hogar.**
Las autoridades del Estado de México y sus municipios tienen el compromiso y el deber de respetar y garantizar a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, el goce y ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en Constitución Federal y Estatal, esta Ley, los tratados internacionales y demás legislación aplicable.	…

Es de advertirse que, **si bien en la actualidad el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México aún tiene vigencia**, lo cierto es que acorde con la *Acción*[65] *de Inconstitucionalidad 144/2017* en correlación con la *Acción*[66] *de Inconstitucionalidad 118/2021* **las entidades federativas están impedidas para legislar en materia procesal civil y familiar y que sólo podrán ejercer las facultades concurrentes que se les reconozcan en la legislación única que se expida**, lo cual nos acota a evitar realizar reformas de derecho adjetivo (procesal) en la materia civil y familiar. Tampoco podemos soslayar que **a partir del 1 de abril de 2027 entrara en vigor para todas las entidades federativas el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares**, de hecho el régimen transitorio por el que se expide el ordenamiento jurídico nacional ya referido determina que ***los procedimientos civiles y familiares que a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del Código Nacional***. Por lo que **la disposición jurídica del inciso a) de la fracción III del artículo 2.373 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México**[67] (última reforma POGG 14 de mayo de 2021) relativo a que "*la designación sobre la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre y el domicilio donde vivirán*", **será subsanada con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual prevé una legislación más imparcial y libre de estereotipos tradicionales en materia de guarda y custodia, así como también, en su caso, con las reformas que propone la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto,** sin olvidar mencionar que por cuanto hace a determinados **procedimientos relacionados con niñas, niños y adolescentes ya se encuentran determinados de cierta manera en los artículos 5.1, 5.2 fracción I, 5.3 bis, 5.4 5.16, 5.35 y 5.44** todos del ya referido Código de Procedimientos Civiles de la esfera estatal.

En el Grupo Parlamentario de morena, tenemos la convicción de que la salvaguarda de los derechos humanos de grupos vulnerables como lo son las infancias deben de ser valorados antes que cualquier interés personal o de nocivos estereotipos de género, en el tenor de que ninguna niña, niño o adolescente se encuentre atrapada o atrapado en

[65] Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2017/19/3_225499_4580_firmado.pdf
[66] Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2021/19/3_286421_6398_firmado.pdf
[67] Disponible en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig003.pdf

arquetipos que afecten sus derechos humanos o su desarrollo integral, por lo que expresamos de manera contundente y responsable, debemos de ajustar aquella legislación que no está acorde a la realidad social, de manera responsable, sensible y sobre todo con atención prioritaria a grupos vulnerables.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la más elevada consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, **a efecto de que sea estudiada en los órganos técnicos correspondientes de esta Legislatura, se nutra de los aportes o adecuaciones correspondientes y en su momento sea aprobada en los mejores términos para el beneficio de las personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentren en situación de vulnerabilidad.**

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA MENDOZA
PRESENTANTE

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO NÚMERO_____
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
***"LXII"* LEGISLATURA**
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Se **reforma** la fracción I, III y el último párrafo del artículo 4.95, la fracción III del artículo 4.102, el artículo 4.205, la fracción I y el inciso a) de la fracción II del artículo 4.228, todos del Código Civil del Estado de México, para quedar de la siguiente manera:

Medidas precautorias en el divorcio
Artículo 4.95.- …

I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de **la niñez** y de los sujetos a tutela;

II. …

III. A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia provisional de las y los hijos se decretará por **autoridad jurisdiccional, la cual deberá de cumplir de manera enunciativa más no limitativa con las siguientes disposiciones:**

a) Atender las circunstancias concretas del caso específico, las particularidades de la decisión en relación con los tipos de derechos que están en juego, los riesgos que asumirán las niñas, niños y adolescentes, las consecuencias de las decisiones a corto y largo plazo;

b) Valorar la disponibilidad y capacidad real de cuidado, estabilidad emocional, el derecho a la protección especial contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental y emocional, un entorno libre de violencia, el vínculo afectivo, el cumplimiento de obligaciones alimentarias, las condiciones del hogar, las redes de apoyo, los antecedentes de violencia familiar o violencia de género y demás elementos

que conlleven al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos para resolver de la mejor manera los asuntos que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes;

c) Garantizar las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección para las niñas, niños o adolescentes, si éstos quedan al cuidado de la madre, del padre, familiares o persona cuidadoras;

d) Realizar la ponderación para la valoración de las características individuales de las niñas, niños o adolescentes, como la edad, nivel de madurez, habilidades cognitivas, medio social y cultural, estado emocional, experiencia de vida y entorno;

e) Escuchar la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la preservación del interés superior de la niñez y valorará la opinión o testimonio con perspectiva de infancia. De igual forma, se deberá de escuchar a ambos progenitores, familiares o persona cuidadoras, en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela. La autoridad jurisdiccional actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia;

f) Actuar más allá de la demanda que se le presenta cuando esto sea en aras del interés superior de la infancia;

g) Ordenar las disposiciones que determine oportunas para salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

IV. …

V. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos, **así como también aquellas que resulten más beneficias para las niñas, niños y adolescentes.**

El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces **se realizará libre de estereotipos, con perspectiva de género, igualdad sustantiva, con**

enfoque de derechos humanos como lo es la perspectiva de infancia y adolescencia, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista una causa justificada a criterio **de la autoridad jurisdiccional.**

No **podrá considerarse como** obstáculo **para el otorgamiento de la guarda y custodia**, el hecho de que la madre**, padre, familiar o persona cuidadora por dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar** carezca de recursos económicos.

Convenio en el divorcio voluntario
Artículo 4.102.- …

I. a la **II. …**

III. Si hubiere hijos, la mención de quien deba tener su guardia y custodia durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia, **el cual deberá de realizarse libre de estereotipos, con perspectiva de género, igualdad sustantiva y perspectiva de infancia, expresado la capacidad real de cuidado, un entorno libre de violencia, la protección especial, contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental o emocional, así como también las redes de apoyo.** Siempre velarán por lograr un ambiente sano acorde a las necesidades de **las niñas, niños y adolescentes** evitando en todo momento generar sentimientos negativos, como odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores, de lo contrario serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guarda y custodia;

IV. a la **V. …**

La patria potestad en caso de separación de la pareja que la ejerce
Artículo 4.205. En caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad y no exista acuerdo sobre la custodia, la **autoridad jurisdiccional** resolverá, **garantizando las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de niñas, niños o adolescentes, si estas o estos quedan al cuidado de la madre, padre, o bien de manera excepcional a familiares o persona cuidadora,** atendiendo **y priorizando el** interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Guarda y custodia en la patria potestad
Artículo 4.228. ….

I. Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia de las hijas o hijos debiendo expresar con elementos probatorios la capacidad real de cuidado, un entorno libre de violencia, la protección especial, contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental o emocional, así como también las redes de apoyo;

II. …

a) El otorgamiento de la guarda y custodia **se realizará libre de estereotipos, con perspectiva de género, perspectiva de infancia e igualdad sustantiva,** atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Para el otorgamiento de la guarda y custodia de persona lactante la autoridad jurisdiccional que conozca el caso, atenderá las circunstancias concretas del caso específico, las particularidades de la decisión en relación con los tipos de derechos que están en juego, los riesgos, así como las consecuencias de las decisiones a corto y largo plazo.

b) a la **c). …**

ARTÍCULO SEGUNDO: Se **reforma** el primer párrafo del artículo 15, el primer párrafo del artículo 16, el primer párrafo del artículo 18, el primer y tercer párrafo del artículo 49, el primer, tercer y cuarto párrafo del artículo 52, la fracción I, III, VII, VIII y XII del artículo 58 y la fracción XVIII del artículo 73 y **se adiciona** la fracción I. Bis al artículo 58 y la fracción XIX al artículo 73, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia. Siempre que sea posible deberán crecer bajo la responsabilidad y el cuidado **mutuo** de sus padres, **a** recibir una crianza positiva**, libre de estereotipos por razón de género,** en un ambiente de afecto y de

seguridad física, moral, intelectual y material**, así como también en un entorno de respeto, igualdad y corresponsabilidad familiar.**

...

...

...

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de sus padres o de quienes que ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus tutores, y en términos de las disposiciones aplicables de quienes ejercen la custodia, sino mediante orden de autoridad competente que así lo declare velando en todo momento por su integridad física**, psicológica, mental y emocional, así como también garantizar dentro del ámbito de sus atribuciones espacios y eternos libres de violencia, sufrimiento, abuso o descuidos. Las autoridades jurisdiccionales o administrativas deberán hacer efectiva la participación y** opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez**, valorando** y atendiendo a la preservación del interés superior de la niñez **conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.**

...

...

...

...

Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos **se tendrá en cuenta su participación y opinión conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, valorando y atendiendo a la preservación del interés superior de la niñez.**

...

...

...

...

Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho, de manera individual y colectiva, **a participar y ser escuchadas o** escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de representante u órgano apropiado de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

...

Se garantiza el ejercicio de este derecho, especialmente en todo procedimiento que conduzca a una decisión que afecte sus derechos, garantías e intereses, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo**, madurez, estado emocional, experiencia de vida y entorno,** atendiendo el interés superior de la niñez.

Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar libre y activamente en la vida familiar, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo**, madurez, estado emocional, experiencia de vida y entorno.**

...

Las autoridades estatales y municipales fomentarán la participación de niñas, niños y adolescentes en foros municipales y estatales y la creación de espacios de participación a fin de que puedan opinar, analizar, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva, en aquellos ámbitos que no vulneren su integridad física**, psicológica, mental o emocional.**

Es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas, diseñar los mecanismos que den un peso específico a la **participación y** opinión de niñas, niños

y adolescentes, en todos los aspectos que determinen su vida y su desarrollo, sin menoscabo del deber de cuidado y orientación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia.

Artículo 58. …

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez **de manera trasversal y con enfoque de interseccionalidad.**

I. Bis. Allegarse de los elementos necesarios para poder deliberar respecto a un determinado asunto, evaluando las consecuencias de sus decisiones en razón de sus atribuciones.

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes **en las diferentes etapas del procedimiento de su competencia, protegiendo sus derechos en posible riesgo en tanto se dicta una resolución o sentencia.**

II Bis. a la **VI. …**

VII. Garantizar el derecho de audiencia de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos a los que sean sometidos, cuidando que las decisiones que se emitan sobre sus derechos estén construidas garantizando el pleno acceso a la impartición de justicia sin dañar o poner en riesgo su integridad**, privacidad, intimidad o** desarrollo; basando en los principios de participación, interés superior, dignidad y protección frente a la discriminación, debiendo tener en cuenta el nivel de madurez y entendimiento de la niña, el niño y adolescente, así como las circunstancias del caso.

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de esta, considerando su edad, madurez, estado psicológico**, experiencia de vida y entorno,** así como cualquier otra condición específica que les revictimice y atente contra su dignidad; por lo que se deberá considerar hacer uso de la testimonial única y la prueba anticipada; así como, la adecuación del lenguaje al contexto de las infancias y el empleo de materiales de apoyo sustentado en métodos psicológicos y didácticos acordes con sus características cognitivas y emocionales.

…

VIII Bis. a la **XI.** …

XII. Dictar medidas de protección a favor de niñas, niños o adolescentes, cuando esté en riesgo su integridad física integridad física**, psicológica, mental** o emocional, procurando su interés superior.

XIII. …

Artículo 73. …

I. a la **XVII.** ….

XVIII. Protegerlas y protegerlos de toda forma y tipo de violencia, castigo corporal o castigo humillante, maltrato, agresión, perjuicio, daño, abuso, venta, trata de personas, explotación o cualquier acto que atente contra su integridad física, psíquica y moral que menoscabe su desarrollo integral**; y**

XIX. Garantizar a niñas, niños y adolescentes ambientes de respeto, igualdad y corresponsabilidad familiar en el hogar.

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese este Decreto en el Periódico Oficial *"Gaceta del Gobierno"*

SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial *"Gaceta del Gobierno"*

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo dispuesto al presente Decreto.

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, a los _____ días del mes de _____ del año dos mil veintiséis.

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
Dip. Daniela Ballesteros Lule
Distrito XIX, Tultepec - Grupo Parlamentario morena

Toluca de Lerdo, Estado de México a ___ de diciembre de 2025

DIP. VLADIMIR HERNANDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. "LXII LEGISLATURA" DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la que suscribe, Diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, someto a la consideración de esta H. Legislatura **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4.71 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 4.70 del Código Civil del Estado de México, en materia de nulidad matrimonial por violencia** de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo uno de los problemas públicos más graves en México y en el Estado de México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2024), la entidad mantiene cifras altas en carpetas de investigación relacionadas con violencia familiar, lesiones dolosas y feminicidio. Estos datos reflejan que la violencia en el espacio doméstico y conyugal sigue siendo un fenómeno estructural. El Informe del Gobierno del Estado de México sobre las Alertas de Violencia de Género (2024) destaca que la violencia dentro del ámbito familiar persiste, siendo uno de los factores que más limita la autonomía y el ejercicio de derechos por parte de las mujeres.

daniela.ballesteros@congresoedomex.gob.mx

En el ámbito federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversos precedentes, que la violencia es un fenómeno con características de continuidad, asimetría y sometimiento. En casos de matrimonio celebrado bajo miedo o violencia, la Corte ha determinado que dicho vicio del consentimiento es **no convalidable**, reconociendo que la víctima, al permanecer en un entorno hostil y controlado, carece de libertad real para denunciar o separarse (SCJN, ADR 413/2012; ADR 3356/2012). La doctrina, por su parte, ha señalado que el miedo reverencial, la coerción psicológica y la dependencia económica o emocional pueden perpetuar relaciones matrimoniales forzadas sin necesidad de violencia física (De los Monteros, 2019).

El marco actual del Código Civil del Estado de México reconoce la violencia como causa de nulidad matrimonial; sin embargo, establece un **plazo perentorio de un año** para ejercer dicha acción, computado desde que "cesó la violencia". Esta fórmula legal es incompatible con la realidad social documentada por estudios nacionales y estatales. Diversos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México y organizaciones como ONU Mujeres coinciden en que las víctimas de violencia familiar rara vez pueden identificar un punto exacto en el que la violencia "cesa", pues habitualmente se trata de un fenómeno que se normaliza, se interioriza o se prolonga por años debido al control del agresor, la dependencia económica o el temor a represalias.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el plazo de un año limita indebidamente el acceso a la justicia y restringe el derecho humano a vivir libre de violencia, reconocido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará. Esto genera un conflicto de

daniela.ballesteros@congresoedomex.gob.mx

constitucionalidad: al exigir que la acción se ejercite dentro de un plazo fijo, sin atender la continuidad del sometimiento o el riesgo que enfrenta la víctima, el Código Civil impone una carga desproporcionada e imposible de cumplir para muchas personas, especialmente mujeres.

Asimismo, la Corte ha sostenido que los tribunales deben interpretar las normas de derecho familiar bajo un enfoque de **perspectiva de género**, privilegiando la protección de las víctimas y la eliminación de obstáculos que impiden el acceso a la justicia. La determinación de plazos "fijos" para denunciar la violencia como causal de nulidad matrimonial se contrapone a este mandato interpretativo. Una legislación moderna y protectora no puede exigir a una persona sometida a violencia que denuncie dentro de un periodo rígido, especialmente si el agresor conserva poder material, económico o psicológico sobre la víctima.

En el derecho comparado —por ejemplo, en España, Argentina y Chile— diversos autores han señalado la necesidad de flexibilizar o eliminar plazos en casos de violencia que vician el consentimiento matrimonial, puesto que el sometimiento genera un fenómeno de inhibición y silencio prolongado (Rivaya, 2020; Iglesias, 2021). El propio Estado mexicano ha asumido compromisos mediante la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (2023), que enfatiza la necesidad de remover las barreras estructurales en el acceso a mecanismos de protección.

Por estas razones, resulta necesario reformar los artículos 4.70 y 4.71 del Código Civil del Estado de México, a fin de:

- Establecer que la violencia en el consentimiento es un **vicio no convalidable**, cuyo análisis debe hacerse siempre con perspectiva de género y seguridad de la víctima.

daniela.ballesteros@congresoedomex.gob.mx

- Suprimir el plazo rígido de un año o, en su caso, establecer que dicho plazo solo empezará a correr cuando la persona agraviada se encuentre en condiciones reales, físicas, psicológicas y materiales para denunciar.
- Armonizar el texto con los criterios obligatorios de la Suprema Corte, la legislación federal y los estándares internacionales.

La presente iniciativa no solo actualiza el marco jurídico estatal a la luz de los derechos humanos, sino que garantiza que ninguna mujer o persona víctima de violencia quede excluida del acceso a la justicia por requisitos imposibles de cumplir. Esta reforma fortalece la protección integral y coloca al Estado de México a la vanguardia en materia de derecho familiar con enfoque de género.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Legislatura **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4.71 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 4.70 del Código Civil del Estado de México,** para que de considerarlo pertinente se apruebe en sus términos.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ITZEL DANIELA BALLESTEROS LULE
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA

daniela.ballesteros@congresoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
Dip. Daniela Ballesteros Lule
Distrito XIX, Tultepec - Grupo Parlamentario morena

DECRETO NÚMERO: _____

LA H. "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el artículo 4.71 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 4.70 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 4.70. ...

...

...

...

...

Para efectos de este artículo, la valoración de la violencia deberá realizarse con perspectiva de género, atendiendo al contexto de riesgo, la continuidad o repetición de los actos y la situación particular de la víctima. La violencia podrá ser física, psicológica, económica, sexual, emocional o de cualquier otra naturaleza que afecte el libre consentimiento.

Artículo 4.71. La acción de nulidad del matrimonio por violencia podrá deducirse sólo por parte del cónyuge agraviado **y no estará sujeta a prescripción cuando la violencia subsista o cuando persistan condiciones que limiten o imposibiliten a la víctima para denunciar. El plazo para ejercer la acción comenzará a correr únicamente cuando la persona agraviada se encuentre en condiciones físicas, psicológicas o materiales que le permitan actuar de manera libre y segura.**

daniela.ballesteros@congresoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
Dip. Daniela Ballesteros Lule
Distrito XIX, Tultepec - Grupo Parlamentario morena

Cuando la violencia subsista al momento de demandar la nulidad, el juez dictará de forma oficiosa las medidas de protección contra la violencia familiar **y cualquier otra que resulte necesaria para salvaguardar la integridad y seguridad de la víctima.**

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO. El Ejecutivo Estatal realizará las modificaciones reglamentarias necesarias, para dar cumplimiento al presente Decreto, en un plazo no mayor a 120 días hábiles posteriores a su entrada en vigor.

CUARTO. El Poder Judicial del Estado de México deberá realizar las adecuaciones administrativas, operativas y de capacitación necesarias para la correcta aplicación del presente Decreto, en un plazo no mayor a **120 días hábiles** posteriores a su entrada en vigor.

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado, haciendo que se publique y cumpla.

daniela.ballesteros@congresoedomex.gob.mx

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
Dip. Daniela Ballesteros Lule
Distrito XIX, Tultepec - Grupo Parlamentario morena

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los _____ del mes de _____ de 2026.

daniela.ballesteros@congresoedomex.gob.mx

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Susana
Estrada Rojas
Distrito XXIV Cd. Nezahualcóyotl

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 28 de agosto de 2026

DIPUTADO VLADIMIR HERNANDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H LXII
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
P R E S E N T E

DIPUTADA SUSANA ESTRADA ROJAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena de la LXII Legislatura y con las facultades conferidas por lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57, 61 fracción I y demás relativos aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 30 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México así como así como los artículo 68 y 70 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México por el que, someto a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ***LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS***, con las que se coadyuva a garantizar el derecho humano al acceso y disposición del agua para su uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación de las personas mexiquenses y a través de Sistemas de captación de agua pluvial e incentivos fiscales de carácter municipal y que tiene sustento en el desarrollo de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción II, 56 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; quien suscribe Diputada Susana Estrada Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, me permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas a la ***LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS***, con las que se coadyuva a garantizar el derecho humano al acceso y disposición del agua para su uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación de las personas mexiquenses y a

través de Sistemas de Captación de Agua Pluvial e incentivos fiscales de carácter municipal.

I.- ENCABEZADO DE LA PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN A LA *LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS*

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones legales a la ***LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS***, con las que se coadyuva a garantizar el derecho humano al acceso y disposición del agua para su uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación de las personas mexiquenses y a través de Sistemas de captación de agua pluvial e incentivos fiscales de carácter municipal.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON LA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN SE RESUELVE

En la vigente ***LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS***, si bien existen avances por garantizar el derecho humano al agua potable para los mexiquenses, también es cierto que, no existe una armonización en la legislación citada con la nueva ***LEY GENERAL DE AGUAS*** misma que fue publicada el pasado 11 de diciembre del año 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

Lo que conlleva a una anemia legislativa para afrontar la crisis hídrica en el Estado de México ya que, no existe -- por ministerio de ley – la obligación de incentivar Sistemas de Captación de Agua Fluvial por parte de los Gobiernos Municipales para que sean adoptados por los particulares y empresas en el proceso de construcción de edificaciones e inmuebles de reciente creación y en su caso, en las adecuaciones de las existentes para su implementación dentro del territorio mexiquense.

Esto es así ya que, en nuestra legislación local, existe una ausencia legislativa que garantice el derecho humano al agua potable por medio de sistemas asertivos de captación de aguas de lluvia y en el que, por el solo hecho de implementarse, puedan tener acceso a un beneficio de carácter fiscal para los particulares que las implementen.

Lo anterior fortalecerá la materialización del ***PROGRAMA HÍDRICO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO 2024-2029*** en beneficio de la población mexiquense.

Esto es así ya que, incluso se encuentra ausente el concepto legal de dichos sistemas que propicien la optimización, reciclaje y aprovechamiento del agua de lluvia, adoptados en edificaciones o inmuebles de nueva construcción o en su caso de aquellos inmuebles que sean modificados o adecuados para la implementación de dichos Sistemas de Captación de Agua Fluvial.

De seguir así la crisis hídrica mexiquense, se seguirá propiciando una serie desencadenada de problemas que impactan en el tejido social de nuestra población al no dar hospicio a acciones que se deben implementar para mitigar el desabasto de agua potable en el Estado.

La presente iniciativa podrá corregir las lagunas legales señaladas, al armonizarla con la Ley General de Aguas e incorporando la obligación de los gobiernos Municipales para incentivar el uso e implementación de Sistemas de Captación de Agua Fluvial por parte de los particulares en la edificación de inmuebles y construcciones nuevas y en su caso, en la modificación y adecuación de edificios, casa y departamentos de personas a través de mecanismos de incentivos fiscales que le corresponde – por ministerio de ley – a los Gobiernos municipales y Ayuntamientos del Estado de México.

Por lo que se justifica plenamente la medida legislativa al intervenir la norma citada e introducir dichas figuras legales que se anidan en la Ley General de Aguas como lo son los Sistemas de Captación de Agua Fluvial en la edificación de construcciones nuevas y en la adecuación o modificación de las existentes por parte de particulares.

III. DESARROLLO DEL ARGUMENTO QUE SOSTIENE LA INICIATIVA

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.

El derecho humano al agua reconocido en el párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, parte del reconocimiento de que el acceso al agua salubre, segura, suficiente y asequible para usos personales y domésticos es un requisito indispensable para la realización de otros derechos humanos. En cualquier circunstancia deben observarse los requisitos de disponibilidad, calidad y accesibilidad (física, económica, de no discriminación y de

acceso a la información) delimitados en la [1] ***Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*** del cual México es parte y por el que, el Estado Mexicano a través de las instituciones con competencia para dicho fin, tienen, la obligación de mantener un suministro de agua necesaria para que las personas puedan satisfacer sus usos personales y domésticos.

Esto es así ya que, el citado artículo constitucional dispone lo siguiente en lo que interesa;

> *"…*
>
> ***Artículo 4o.-*** *La mujer y el hombre son iguales ante la ley.*
>
> *Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.*
>
> *…*
>
> *Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.*
>
> *…"*

[1] ***OBSERVACIÓN GENERAL Nº 15: EL DERECHO AL AGUA (ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES).-*** **consultable en el siguiente enlace electrónico;**
https://aguaysaneamiento.cndh.org.mx/Content/doc/Normatividad/Observacion15_DESC.pdf

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Susana
Estrada Rojas
Distrito XXIV Cd. Nezahualcóyotl

De lo trasunto se traduce en que, el derecho al agua implica una garantía en la que el Estado Mexicano a través de los Poderes Públicos debe cumplir con calidad; accesibilidad (física y económica), sin discriminación y con igualdad sin que, se pudiera alegar motivos no justificados para dejar de cumplir con dicha obligación.

Incluso es la ***Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)***[2] y del citado artículo 4 constitucional, por el que se obliga a los Poderes Públicos del Estado Mexicano a garantizar el derecho al agua a todas las personas bajo los siguientes requisitos que deben aplicarse en cualquier circunstancia;

"…

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las

[2] ***OBSERVACIÓN GENERAL Nº 15: EL DERECHO AL AGUA (ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES).-*** **consultable en el siguiente enlace electrónico;**
https://aguaysaneamiento.cndh.org.mx/Content/doc/Normatividad/Observacion15_DESC.pdf

personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población.

Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad.

La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. No discriminación.

El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

…”

Por lo que, no solo se hace necesario, sino resulta imperativo el poner al alcance de las personas, los medios y mecanismos para garantizar el derecho fundamental y humano del agua en los términos previstos en la normatividad analizada.

De ahí que, sea un mandato legal de carácter constitucional y al amparo de los tratados internacionales**, el diseñar e implementar mecanismos para el acceso y ejercicio del derecho fundamental del agua para todas las personas.**

III.1.- DIAGNÓSTICO

El problema del desabasto de agua potable en nuestro país, debe atenderse desde distintos puntos y considerar el polinomio de conflictos tales como;

- La escasez, que es uno de los problemas más graves en México, especialmente en regiones del norte y centro del país. La falta de agua potable y la escasez de agua para la agricultura y la industria son problemas muy comunes.
- La contaminación que se encuentra especialmente en las zonas urbanas, debido a la falta de tratamiento de aguas residuales y a la descarga de residuos industriales y químicos en ríos y lagos.
- El uso ineficiente del agua en la agricultura ha llevado a una sobreexplotación de los acuíferos y una disminución en la disponibilidad de agua para otros usos.
- El cambio climático que provoca sequías e inundaciones que agravan la disminución en la disponibilidad de agua para las comunidades y la agricultura.

El agua es un recurso prioritario para la vida en la tierra, este elemento es indispensable para nuestro desarrollo y bienestar. Por ello, en el 2012 se incorporó en nuestra Constitución Política, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y se facultó al estado a garantizar este recurso.

Sin embargo, falta mucho por hacer, con base en datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil

en 2012. Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año[3].

Ahora bien, según el ***PROGRAMA HÍDRICO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO 2024-2029,*** en su apartado 5 de ***"DIAGNÓSTICO"*** refiere – en lo que interesa --- lo siguiente;

> *"El agua es un recurso vital cuya disponibilidad y gestión es fundamental para el bienestar humano y la sostenibilidad del entorno. En el Estado de México, la importancia del agua y la necesidad de extremar su cuidado y preservación se ha visto acentuada por una serie de desafíos derivados del crecimiento urbano y demográfico, así como por el comportamiento de las actividades económicas que a su vez han aumentado el requerimiento de volúmenes de agua, generando además importantes fuentes de contaminación.*
>
> *Asimismo, factores como el cambio clima tico asociado al aumento de las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia, así como la explotación de los bosques y otros componentes favorables del ciclo hidrológico, han limitado la recarga de los acuíferos, mientras que el deficiente manejo en el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el aprovecha miento ineficiente del agua, especialmente en actividades agrícolas, ha exacerbado la situación de desequilibrio entre disponibilidad y demanda en la entidad.*
>
> *La disponibilidad de agua renovable por habitante en el Estado de México es de apenas 268 m³/hab/año, muy por debajo de la media nacional de 549 m³/ hab/año, posicionando a la entidad en el penúltimo lugar a nivel nacional (INEGI, 2019 cit. en PDEM 2023-2029: 54).*

[3] Consultable en el siguiente enlace electrónico; https://imco.org.mx/situacion-del-agua-en-mexico/

…

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el caso del Estado de México que presenta una densidad de 760 habitantes por kilómetro cuadrado, doce veces mayor que el valor nacional de 64 habitantes por kilómetro cuadrado.

La densidad poblacional y el agua se relacionan estrechamente en aspectos como la disponibilidad, calidad y contaminación, ya que una ciudad densamente poblada tiende a ofertar un mayor número de actividades eco nómicas, bienes, servicios y viviendas que a su vez demandan un mayor volumen de agua para su funcionamiento que, de no ser correctamente gestionado, presentarían problemáticas ambientales como el estrés hídrico, definido como el resultado de una extracción de agua superior a la disponible en las fuentes de abastecimiento.

Esta situación afecta cada vez más a centros urbanos densamente poblados, lo que pone en vulnerabilidad el derecho humano al agua potable y al saneamiento, puesto que el extraer mayores volúmenes de agua no garantiza que este recurso llegue en suficiencia, calidad y cantidad a cada uno de los habitantes.

Otra de las problemáticas que enfrentan las grandes ciudades son el envejecimiento de la infraestructura que provoca fugas en la conducción del agua, ocasionando que se ex traigan volúmenes superiores a los necesarios para compensar las pérdidas y en consecuencia un aumento en el gasto eléctrico de maquinaria y equipos para extracción, tratamiento y distribución del agua. Esto sin menguar el aumento en los gastos de potabilización por requerir agua de zonas cada vez más profundas y de menor calidad.

En el Estado de México solo dos municipios presentan menos del 80% de viviendas con agua entubada, siendo estos

Tezoyuca y San Felipe del Progreso; seis municipios tienen una cobertura del 80 al 90%, ubicados principalmente en las regiones de México-Pánuco, Ixtlahuaca-Atlacomulco y Cutzamala; mientras que el resto 88 de los municipios de las viviendas rurales y urbanas censadas, más del 90% cuentan con infraestructura de agua potable (INEGI, 2020).

9

En números globales, se ***registraron para el Estado de México 5 millones 403 mil 492 viviendas, de las cuales 82.2% disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda (4 millones 439 mil 141 viviendas); de éstas, 86% se abastece del servicio público de agua (3 millones 815 mil 549 viviendas) (INEGI, 2020). Es decir que, aunque se cuente con la infraestructura para el suministro del servicio, la dotación puede provenir de otras fuentes como pipas de agua o pozos propios.***

Asimismo, la frecuencia del suministro puede no ser recurrente, pues ***para el Estado de México se registra una dotación promedio de cinco días durante 14.5 horas (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones, 2023).***

La infraestructura para abastecimiento de agua potable puede ser de propiedad municipal, estatal o federal, dependiendo del origen del recurso hídrico o de la entidad que construye y administra la infraestructura.

Los principales elementos que conforman los sistemas de suministro de agua potable son las fuentes de extracción, potabilización, almacenamiento y distribución.

…

Respecto a la infraestructura de distribución, de acuerdo con la información proporcionada por Organismos Operadores, el material predominante de la red de distribución es de asbestocemento.

A su vez, se identificó que la mayoría de los Organismos Operadores no cuentan con mapas actualizados de la cobertura de la red hidráulica y sanitaria, algunos de ellos solo tienen planos en papel de ciertas secciones municipales, del resto se desconoce la dirección o funcionalidad de la misma,

por lo que se estima que las pérdidas de agua por fuga pueden ser mayores a 40% debido a la falta de medidores y de monitoreo de la infraestructura existente.

…

La población percibe la escasez de agua como el principal problema social, aún después de la pobreza o inseguridad.

Específicamente para los municipios con mayor población en la zona del Valle de México, externan que a raíz del desabasto han surgido diversos piperos particulares en la zona que les proveen el servicio agua, ya que los tandeos son cada vez más prolongados, situación que los orilla a contactar servicios privados de agua pues, aunque el servicio es gratuito por parte del Municipio y el Estado, ellos tardan varios días en brindar el servicio y la necesidad es apremiante.

Esta situación los cuestiona sobre la disponibilidad real de agua al observar que en sus viviendas no cuentan con el recurso, pero los piperos particulares a diario brindan el servicio con carros tanque de 10 mil litros.

…"

Además de que en el mismo ***"Programa Hídrico Integral para el Estado de México 2024-2029[4]"*** el Gobierno del Estado de México reconoce la crisis hídrica la entidad estatal ya que, se advierte lo siguiente;

[4] **Consultable en el siguiente enlace electrónico;** https://caem.edomex.gob.mx/sites/caem.edomex.gob.mx/files/files/Documentacion/PH/PHIEM20242029.pdf

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Susana Estrada Rojas
Distrito XXIV Cd. Nezahualcóyotl

"...

El Estado de México enfrenta actualmente severas presiones sobre sus recursos hídricos, derivadas del crecimiento poblacional, la expansión urbana, el incremento de actividades productivas, el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro ambiental de las zonas de recarga.

Estos factores han generado un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua, comprometiendo la seguridad hídrica de la entidad."

Por lo que, la crisis hídrica en el Estado de México se debe a múltiples factores y de los que, se identifican los siguientes;

- Sobreexplotación de acuíferos
- Pérdida de casi el 40% del agua en fugas por infraestructura obsoleta
- Alta dependencia del Sistema Cutzamala
- Sobrepoblación o densidad demográfica

Consecuentemente y según los datos del ***Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México***[5] (CIEPS), la crisis hídrica que atraviesa el Estado de México, se traduce en una afectación directa para;

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL MEXIQUENSES.

Dichos datos se ven reflejados en el sentir de las personas ya que, según el ***Instituto Nacional de Estadística y Geografía*** (INEGI), en el año 2024, 37 de cada 100 personas manifestaron temor por la falta del recurso hídrico, situando que después de la inseguridad, la **escasez de agua potable** es la segunda preocupación más grande entre los mexiquenses.

[5] **Consultable en el siguiente enlace electrónico;** https://cieps.edomex.gob.mx/

Por lo anterior es que, es indubitable la escasez del agua potable para las familias mexiquenses y que se ha convertido en una crisis hídrica en el Estado de México. crisis que implica el funcionamiento de diversos detonantes que sirven para mitigarla.

Derivado de lo anterior, se justifica, motiva y se fundamenta la presente iniciativa ya que, se encuentra ajustada a las garantías constitucionales y de conformidad con la legislación federal en materia de aprovechamiento de aguas fluviales para para uso humano y doméstico a través de la implementación de Sistemas de Captación y aprovechamiento de agua de lluvia.

Aunado a lo anterior, se debe señalar que la presente iniciativa se soporta en la ***LEY GENERAL DE AGUAS ,*** misma que establece --- en lo que interesa -- lo siguiente;

> *"...*
>
> ***Artículo 4.*** *Para efectos de la presente Ley se entenderá por:*
>
> ***...***
>
> ***XV.*** *Sistemas de captación de agua pluvial: Mecanismos que permiten la recolección, filtración, tratamiento y almacenaje del agua de lluvia que cae en el techo o cubierta para su posterior uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación.*
>
> ***...***
>
> ***Artículo 5.*** *Toda persona gozará del derecho humano al agua conforme a lo establecido en la Constitución y a los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua.*
>
> ...

Artículo 7. *Para garantizar el derecho humano al agua se deberán asegurar los siguientes elementos:*

I. *Accesibilidad: Toda persona, sin discriminación, debe tener alcance físico al agua y a las instalaciones y servicios en su hogar, institución educativa, lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua;*

II. ***Acceso a la Información:*** *Derecho a solicitar, recibir y difundir información relacionada con el derecho humano al agua, de acuerdo con principios de transparencia y rendición de cuentas, en términos de la legislación aplicable;*

III. ***Aceptabilidad:*** *El acceso al agua, su color, olor y sabor deben ser satisfactorios, considerando su potabilidad y calidad, también cultural y socialmente adecuados, las necesidades relativas al género, así como las prácticas habituales de higiene e intimidad de cada cultura;*

IV. ***Asequibilidad:*** *El agua debe estar al alcance económico de*

todas las personas, sin que los costos y cargos directos e indirectos pongan en riesgo el ejercicio de otros derechos, ni impliquen una carga desproporcionada para los hogares;

V. ***Calidad:*** *El agua debe estar libre de sustancias que puedan causar daño a la salud por consumirla, debiendo constatarse su inocuidad y el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y*

VI. ***Disponibilidad:*** *El abastecimiento de agua debe ser suficiente en cantidad, continuo y equitativo, para sostener la vida humana*

…

Artículo 20. *Las instancias de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para proteger frente a terceros el disfrute de los derechos humanos asociados al acceso, disposición y saneamiento de agua en el territorio nacional.*

Artículo 21. *Tratándose del derecho humano al agua, las acciones de las autoridades deberán promover la participación social en el ámbito de su competencia.*

Artículo 22. *La Comisión, los Consejos de Cuenca, los organismos de las entidades federativas y de los municipios que prestan el servicio de agua y alcantarillado son sujetos obligados a garantizar el derecho humano al agua en los términos de la presente Ley.*

Artículo 23. *La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, promoverán el uso de soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a la conservación y restauración ecológica de las cuencas y ajuste a los diversos efectos del cambio climático, en cuyas acciones se debe considerar las características y particularidades específicas de las regiones en las cuales serán implementadas.*

Artículo 24. *La Federación, las entidades federativas y los municipios son responsables de la planeación, buen manejo y administración de los recursos hídricos propiedad de la Nación, por medio de las instituciones y sistemas comunitarios de agua y saneamiento, acorde con lo establecido en la presente Ley.*

…

Artículo 28. *Corresponde a los municipios en los términos de la presente Ley y de las disposiciones locales aplicables, las siguientes facultades:*

I. *Garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales considerándolos como un derecho humano de atención prioritaria;*

II. *Dar prioridad a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en la programación y presupuestación municipal, por tratarse de derechos humanos de atención prioritaria;*

III. *Introducir la perspectiva de derechos humanos, de género, principio de equidad y visión de infancia en la programación y presupuestación para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;*

IV. *Coordinarse y, en su caso, asociarse con otros municipios y con las autoridades estatales competentes para el establecimiento de sistemas intermunicipales de agua y saneamiento, con el objeto de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en los términos previstos por la normatividad que les sea aplicable;*

V. *Expedir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;*

VI. *Promover la participación ciudadana para sensibilizar, acercar, concientizar y propiciar la acción comunitaria en la conservación, utilización y preservación de los recursos y bienes públicos relacionados con la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales;*

VII. *Formular el programa para la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento correspondiente a su demarcación, y*

VIII. *Las que le encomienden las leyes federales y locales en la materia.*

…

Artículo 32. *La regulación de la captación de agua pluvial en el territorio nacional, así como las obligaciones de las entidades federativas y municipios, y las directrices para la implementación de sistemas de captación en obras públicas y privadas, serán determinadas por la Comisión.*

Artículo 33. *Los sistemas de captación de agua pluvial deben permitir la recolección, filtración, tratamiento y almacenaje del agua de lluvia que cae en el techo o cubierta para su posterior uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación. Las obras necesarias son aquellas edificaciones públicas y privadas que, debido a su naturaleza o ubicación, son adecuadas para la implementación de sistemas de captación de agua pluvial.*

Artículo 34. *Las entidades federativas promoverán en todo momento la instalación de sistemas de captación pluvial para uso doméstico, acordes a las necesidades regionales, sin que afecten el ciclo natural hidrológico. Cada entidad federativa deberá determinar la implementación de los sistemas de captación pluvial con base en las características físicas de los inmuebles y en el valor del predial del suelo o construcción.*

En todo caso, el estándar que se utilice para determinar esa necesidad no podrá ser desproporcional al valor catastral del inmueble.

Las entidades federativas fomentarán la inclusión en los códigos de construcción y en las legislaciones sobre propiedad en condominio de la obligación de las edificaciones que se

clasifiquen como tales, de establecer un sistema de captación de agua pluvial que cuente con la capacidad suficiente de almacenamiento de agua para atender las necesidades mínimas indispensables de agua para consumo personal y doméstico de cada unidad de propiedad privativa del condominio.

…"

Por otra parte en nuestra legislación local se reconoce el derecho humano al agua potable y señala acciones a realizar por parte de todos los ámbitos del gobierno y de la sociedad misma. Sin embargo de no presentar una ausencia en la norma de los planteamientos vertidos, no tendría asidero racional la presente iniciativa.

En la norma la local la ***LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS***, en lo que interesa, se prevé normativamente lo siguiente;

"…

Artículo 53.- *Las autoridades del agua impulsarán la construcción de la infraestructura hidráulica que permita el aprovechamiento del agua pluvial para la conservación de reservas hídricas y la recarga de acuíferos, y fomentarán la construcción y conservación de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje cuando éste no pueda construirse*

Artículo 53 Bis.- *Las Dependencias y Organismos Auxiliares estatales y municipales, de acuerdo con su naturaleza jurídica y según corresponda, introducirán sistemas de naturación y/o sistemas necesarios para la captación y aprovechamiento de agua pluvial en los inmuebles destinados a un servicio público que tengan a su cargo, siempre y cuando, las características físicas de los mismos sean aptas para ello y permitan su instalación, operación y mantenimiento.*

…

Artículo 73.- *Es obligación de los desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de conjuntos habitacionales, industriales o de servicios, la construcción de sus redes de distribución y sistemas de drenaje y alcantarillado de conformidad con la normatividad en la materia, así como la conexión de las mismas a la infraestructura hidráulica municipal. Asimismo correrá a su cargo el costo de los aparatos medidores de consumo de agua potable y su instalación en cada una de las tomas; es obligatorio el tratamiento de aguas residuales y, en su caso, pozos de absorción para el agua pluvial que cumplan con lo previsto en los ordenamientos federales y estatales. Dichas plantas y pozos de absorción deberán estar disponibles antes de la ocupación de los conjuntos. La Comisión podrá determinar mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta obligación. El Reglamento establecerá los procedimientos aplicables.*

…

Artículo 91.- *Las* ***autoridades del agua impulsarán las acciones que sean necesarias para mantener y, en su caso, restablecer el equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos, tales como la instalación de sistemas captadores y de naturación del agua,*** *para favorecer el manejo sustentable en el proceso de la gestión integral del agua, así como los diversos usos y usuarios.*

Artículo 92.- *Los* ***desarrolladores de nuevos conjuntos habitacionales, industriales y de servicios están obligados a construir instalaciones para la recolección de agua pluvial y, al tratamiento de aguas residuales para su conducción en los términos de la legislación aplicable, para ser aprovechada en el riego de áreas verdes o aquellas actividades que no requieran la utilización de agua potable.***

Artículo 92 Bis.- *La Comisión creará un Fideicomiso cuyos recursos serán destinados a los sistemas de captación de agua pluvial de conformidad con la presente Ley, el cual tendrá por objeto destinar recursos a los organismos operadores o, en su caso, a los municipios, según corresponda, a efecto de*

implementar acciones para el aprovechamiento de agua pluvial,

la recarga de mantos acuíferos y la infiltración de agua pluvial al subsuelo.

…"

De lo trasunto de la norma citada, se desprende que;

- Existe una omisión del concepto legal y la figura legislativas de los SISTEMAS **DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL**.
- Existe la obligación de realizar obra por parte de ***desarrolladores de nuevos conjuntos habitacionales, industriales y de servicios a construir instalaciones para la recolección de agua pluvial,*** sin embargo no existe un catálogo de sanciones por dicha omisión que de forma taxativa se cumpla y menos aún se indica la competencia y facultades de alguna autoridad para el inicio de algún procedimiento administrativo por dicha omisión de los desarrolladores de dicha infraestructura o edificación.
- Si bien existe la obligación antes mencionada, ésta se considera coercitiva, a pesar de que NO tenga apareja alguna sanción y al mismo tiempo, NO se incentiva la construcción de sistemas de captación de Sistemas de captación de agua pluvial a través de un estímulo fiscal o de cualquier índole que pudiera brindar los Gobiernos Municipales o los Ayuntamientos para el fomento del reciclaje y aprovechamiento del vital líquido derivado de las aguas fluviales.
- Se encuentra omisa el uso de Sistemas de captación de agua pluvial en inmuebles y edificaciones nuevas de particulares o en casas y departamentos existentes para que sean modificados o en su caso, se adecuen a la necesidad de la implementación de dichos sistemas, a través de incentivos fiscales del orden municipal.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Susana
Estrada Rojas
Distrito XXIV Cd. Nezahualcóyotl

De ahí la importancia de la adquisición normativa e implementación de la figura legal de los Sistemas de Captación de Agua Pluvial --- mismos que se encuentran en la legislación federal --- ya que, son diseños que permiten recolectar y almacenar el agua de lluvia e implementarlos en cualquier tipo de edificación o construcción, sea nueva o con tiempo de vida construido y no únicamente condominal, empresarial y de servicios, sino también a nivel domiciliario ya que, estos mecanismos se componen de una superficie de captura, un sistema de distribución, un desviador de primeras lluvias y un área de almacenamiento de agua.

Por lo tanto es menester intervenir la norma y modificársele a través de la libre autoconfiguración normativa que como legisladores locales tenemos y atender la problemática social en la que se ha convertido el desabasto del agua potable y la crisis hídrica que padecemos.

De tal suerte que, lo que propongo es modificar y adicionar las siguientes porciones normativas de la *LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS;*

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
TEXTO NORMATIVO VIGENTE	**TEXTO NORMATIVO PROPUESTO**

Artículo 6.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:	**Artículo 6.-** Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a LXV. ...	I. a LXV. ...
Sin correlativo	**LXV Bis.- Sistemas de Captación de Agua Pluvial: Mecanismos que permiten la recolección, filtración, tratamiento y almacenaje del agua de lluvia que cae en el techo o cubierta para su posterior uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación.**
LXVI. a LXXX. ...	LXVI. a LXXX. ...
Artículo 53.- *Las autoridades del agua impulsarán la construcción de la infraestructura hidráulica que permita el aprovechamiento del agua pluvial para la conservación de reservas hídricas y la recarga de acuíferos, y*	**Artículo 53.- Las autoridades del agua fomentarán e impulsarán, mediante mecanismos de incentivos fiscales aprobados por los Ayuntamientos de cada Municipio Mexiquense y operados por los sus respectivos**

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
TEXTO NORMATIVO VIGENTE	**TEXTO NORMATIVO PROPUESTO**
fomentarán la construcción y conservación de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje cuando éste no pueda construirse	**Gobiernos Municipales, la construcción de la infraestructura hidráulica que permita el aprovechamiento del agua pluvial a través de Sistemas de Captación de agua Pluvial con el objeto de conservar reservas hídricas y la recarga de acuíferos, y fomentarán la construcción y conservación de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje cuando éste no pueda construirse**
Artículo 53 Bis.- *Las Dependencias y Organismos Auxiliares estatales y municipales, de acuerdo con su naturaleza jurídica y según corresponda, introducirán sistemas de naturación y/o sistemas necesarios para la captación y aprovechamiento de agua pluvial en los inmuebles destinados a un servicio público que tengan a su cargo, siempre y cuando, las características físicas de los mismos sean aptas para ello y permitan su instalación, operación y mantenimiento.*	***Artículo 53 Bis.-*** *Las Dependencias y Organismos Auxiliares estatales y municipales, de acuerdo con su naturaleza jurídica y según corresponda, introducirán* **Sistemas de Captación de Agua Pluvial** *para la captación y aprovechamiento de agua pluvial en los inmuebles destinados a un servicio público que tengan a su cargo, siempre y cuando, las características físicas de los mismos sean aptas para ello y permitan su instalación, operación y mantenimiento.*
…	***…***
Artículo 73.- *Es obligación de los desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de conjuntos habitacionales, industriales*	**Artículo 73.-** Es obligación de los desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de conjuntos habitacionales, industriales o de servicios, la construcción

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
TEXTO NORMATIVO VIGENTE	**TEXTO NORMATIVO PROPUESTO**
o de servicios, la construcción de sus redes de distribución y sistemas de drenaje y alcantarillado de conformidad con la normatividad en la materia, así como la conexión de las mismas a la infraestructura hidráulica municipal. *Asimismo correrá a su cargo el costo de los aparatos medidores de consumo de agua potable y su instalación en cada una de las tomas; es obligatorio el tratamiento de aguas residuales y, en su caso, pozos de absorción para el agua pluvial que cumplan con lo previsto en los ordenamientos federales y estatales. Dichas plantas y pozos de absorción deberán estar disponibles antes de la ocupación de los conjuntos. La Comisión podrá determinar mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta obligación. El Reglamento establecerá los procedimientos aplicables.*	de sus redes de distribución y sistemas de drenaje y alcantarillado de conformidad con la normatividad en la materia, así como la conexión de las mismas a la infraestructura hidráulica municipal. Asimismo correrá a su cargo el costo de los aparatos medidores de consumo de agua potable y su instalación en cada una de las tomas; es obligatorio el tratamiento de aguas residuales **y de la misma manera, deberá de cumplir con la construcción y adecuación correspondiente para la implementación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial con el objeto de dar cumplimiento a la presente ley y a la Ley General de Aguas y lo previsto en los ordenamientos federales y estatales.** **Dichos Sistemas de Captación de Agua Pluvial, plantas y pozos de absorción deberán estar disponibles antes de la ocupación de los conjuntos.** **Los particulares propietarios o poseedores de inmuebles que tengan cualquier tipo de uso de suelo que corresponda, podrá implementar y construir mecanismos y Sistemas de Captación de Agua Pluvial y de la misma manera podrás ser acreedora de beneficios fiscales por parte de la autoridad municipal.**

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
TEXTO NORMATIVO VIGENTE	**TEXTO NORMATIVO PROPUESTO**
... ***Artículo 91.-*** *Las autoridades del agua impulsarán las acciones que sean necesarias para mantener y, en su caso, restablecer el equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos, tales como la instalación de sistemas captadores y de naturación del agua, para favorecer el manejo sustentable en el proceso de la gestión integral del agua, así como los diversos usos y usuarios.*	**La Comisión deberá determinar mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta obligación.** **El Reglamento establecerá los procedimientos aplicables.** **Los Gobiernos Municipales deberán de otorgar beneficios fiscales acordes a la proporcionalidad del cumplimiento de esta obligación en favor de dichos particulares y que no pongan en riesgo el cálculo de su presupuesto de ingresos del municipio del que se trate.** ... **Artículo 91.-** Las autoridades del agua impulsarán las acciones que sean necesarias para mantener y, en su caso, restablecer el equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos, tales como la instalación de **Sistemas de captación de Agua Pluvial** y de naturación del agua, para favorecer el manejo sustentable en el proceso de la gestión integral del agua, así como los diversos usos y usuarios. El fomento e impulso de la instalación de mecanismos y **Sistemas de captación de Agua Pluvial deberá de realizarse por parte de los Gobiernos Municipales del Estado de México y deberá de ser contemplado tanto a los desarrolladores de conjuntos condominales, edificaciones y e**

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
TEXTO NORMATIVO VIGENTE	**TEXTO NORMATIVO PROPUESTO**
	servicios, así como para particulares propietarios o poseedores de inmuebles para cualquier uso de suelo que presente dicho inmueble. **Los Gobiernos Municipales deberán de otorgar beneficios fiscales acordes a la proporcionalidad del cumplimiento de esta obligación en favor de dichos particulares y que no pongan en riesgo el cálculo de su presupuesto de ingresos del municipio del que se trate.**
Artículo 92.- *Los desarrolladores de nuevos conjuntos habitacionales, industriales y de servicios están obligados a construir instalaciones para la recolección de agua pluvial y, al tratamiento de aguas residuales para su conducción en los términos de la legislación aplicable, para ser aprovechada en el riego de áreas verdes o aquellas actividades que no requieran la utilización de agua potable.*	**Artículo 92.-** Los desarrolladores de nuevos conjuntos habitacionales, industriales y de servicios están obligados a construir **Sistemas de captación de Agua Pluvial** para la recolección de agua pluvial y, al tratamiento de aguas residuales para su conducción en los términos de la legislación aplicable, para ser aprovechada en el riego de áreas verdes o aquellas actividades que no requieran la utilización de agua potable.
…	**Los Gobiernos Municipales deberán de otorgar beneficios fiscales acordes a la proporcionalidad del cumplimiento de esta obligación en favor de dichos particulares y que no pongan en riesgo el cálculo de su presupuesto de ingresos del municipio del que se trate.** **…**

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
TEXTO NORMATIVO VIGENTE	**TEXTO NORMATIVO PROPUESTO**
Artículo 152.- *Las visitas que ordene la autoridad del agua competente tendrán como objetivo:* I. a VIII. … IX. Verificar la existencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales de los sujetos obligados; el cumplimiento de condiciones particulares de descarga, así como la adecuada operación y funcionamiento de éstos; y X. … ***Artículo 155.-*** *Constituyen infracciones a la presente Ley y serán sancionadas por las autoridades del agua, en el ámbito de su competencia, las siguientes:* I. a VIII. … **IX.** Incumplir con las disposiciones relativas al uso eficiente del agua previstas en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables que emitan las autoridades del agua;	***Artículo 152.-*** *Las visitas que ordene la autoridad del agua competente tendrán como objetivo:* I. a VIII. … **IX. Verificar la existencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales y de Sistemas de Captación de Agua Pluvial que deben cumplir los sujetos obligados señalados en la presente ley.** **Así como el cumplimiento de condiciones particulares de descarga, así como la adecuada operación y funcionamiento de éstos; y** **X.** … **Artículo 155.-** Constituyen infracciones a la presente Ley y serán sancionadas por las autoridades del agua, en el ámbito de su competencia, las siguientes: I. a VIII. … **IX.** Incumplir con las disposiciones relativas al uso eficiente del agua previstas en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables que emitan las autoridades del agua. **De la misma manera, se actualiza infracción para aquellos desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de**

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
TEXTO NORMATIVO VIGENTE	**TEXTO NORMATIVO PROPUESTO**
	conjuntos habitacionales, industriales o de servicios que no cumplan con la construcción de mecanismos y de Sistemas de Captación de Agua Pluvial en los términos descritos de la presente ley.
X. a XVIII. …	X. a XVIII. …
Artículo 156. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, serán sancionadas por la autoridad del agua competente, con multas equivalentes a veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa la infracción, de acuerdo a lo siguiente:	**Artículo 156.** Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, serán sancionadas por la autoridad del agua competente, con multas equivalentes a veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa la infracción, de acuerdo a lo siguiente:
I. De diez a quinientas en el caso de violación a cualquiera de las fracciones V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII y XVIII.	**I. De diez a quinientas en el caso de violación a cualquiera de las fracciones V, VII, primer párrafo de la fracción IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII y XVIII.**
II. …	**II.** …
III. De tres mil una a diez mil en el caso de violación a cualquiera de las fracciones III, IV y VI.	**III. De tres mil una a diez mil en el caso de violación a cualquiera de las fracciones III, IV, VI y segundo párrafo de la fracción IX .**
IV. …	**IV.** …

En mérito de las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este Congreso del Estado de México, **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE**

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Susana Estrada Rojas
Distrito XXIV Cd. Nezahualcóyotl

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS; para que en caso de así considerarlo, sea aprobada en sus términos.

26

_____ **LIC.**
SUSANA ESTRADA ROJAS
DIPUTADA LOCAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETO NÚMERO:

morena
Plaza Hidalgo s/n. Col. Centro.
Toluca, Estado de México, C.P. 50000
Tels. 722 279 6400 y 722 279 6500

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Susana
Estrada Rojas
Distrito XXIV Cd. Nezahualcóyotl

LA H. LXII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO DECRETA:

UNICO. - Se propone **adicionar la fracción LXV Bis, al artículo 6, y reformar el artículo 53 y 53 Bis, 73, 91, 92, 152 fracción IX, 155 fracción IX y 156 fracción I y III de la *LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS,*** para quedar como sigue:

LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 6.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a LXV. ...

LXV Bis.- Sistemas de Captación de Agua Pluvial: Mecanismos que permiten la recolección, filtración, tratamiento y almacenaje del agua de lluvia que cae en el techo o cubierta para su posterior uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación.

...

LXVI. a LXXX. ...

Artículo 53.- Las autoridades del agua fomentarán e impulsarán, mediante mecanismos de incentivos fiscales aprobados por los Ayuntamientos de cada Municipio Mexiquense y operados por los sus respectivos Gobiernos Municipales, la construcción de la infraestructura hidráulica que permita el aprovechamiento del agua pluvial a través de Sistemas de Captación de agua Pluvial con el objeto de conservar reservas hídricas y la recarga de acuíferos, y fomentarán la construcción y conservación de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje cuando éste no pueda construirse

Artículo 53 Bis.- *Las Dependencias y Organismos Auxiliares estatales y municipales, de acuerdo con su naturaleza jurídica y según corresponda, introducirán* **Sistemas de Captación de Agua Pluvial** *para la captación y aprovechamiento de agua pluvial en los inmuebles destinados a un servicio público*

que tengan a su cargo, siempre y cuando, las características físicas de los mismos sean aptas para ello y permitan su instalación, operación y mantenimiento.

...

Artículo 73.- Es obligación de los desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de conjuntos habitacionales, industriales o de servicios, la construcción de sus redes de distribución y sistemas de drenaje y alcantarillado de conformidad con la normatividad en la materia, así como la conexión de las mismas a la infraestructura hidráulica municipal.

Asimismo correrá a su cargo el costo de los aparatos medidores de consumo de agua potable y su instalación en cada una de las tomas; es obligatorio el tratamiento de aguas residuales **y de la misma manera, deberá de cumplir con la construcción y adecuación correspondiente para la implementación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial con el objeto de dar cumplimiento a la presente ley y a la Ley General de Aguas y lo previsto en los ordenamientos federales y estatales.**

Dichos Sistemas de Captación de Agua Pluvial, plantas y pozos de absorción deberán estar disponibles antes de la ocupación de los conjuntos.

Los particulares propietarios o poseedores de inmuebles que tengan cualquier tipo de uso de suelo que corresponda, podrá implementar y construir mecanismos y Sistemas de Captación de Agua Pluvial y de la misma manera podrás ser acreedora de beneficios fiscales por parte de la autoridad municipal.

La Comisión deberá determinar mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta obligación.

El Reglamento establecerá los procedimientos aplicables.

Los Gobiernos Municipales deberán de otorgar beneficios fiscales acordes a la proporcionalidad del cumplimiento de esta obligación en favor de dichos particulares y que no pongan en riesgo el cálculo de su presupuesto de ingresos del municipio del que se trate.

...

Artículo 91.- Las autoridades del agua impulsarán las acciones que sean necesarias para mantener y, en su caso, restablecer el equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos, tales como la instalación de **Sistemas de captación de Agua Pluvial** y de naturación del agua, para favorecer el manejo sustentable en el proceso de la gestión integral del agua, así como los diversos usos y usuarios.

El fomento e impulso de la instalación de mecanismos y **Sistemas de captación de Agua Pluvial deberá de realizarse por parte de los Gobiernos Municipales del Estado de México y deberá de ser contemplado tanto a los desarrolladores de conjuntos condominales, edificaciones y de servicios, así como para particulares propietarios o poseedores de inmuebles para cualquier uso de suelo que presente dicho inmueble.**

Los Gobiernos Municipales deberán de otorgar beneficios fiscales acordes a la proporcionalidad del cumplimiento de esta obligación en favor de dichos particulares y que no pongan en riesgo el cálculo de su presupuesto de ingresos del municipio del que se trate.

Artículo 92.- Los desarrolladores de nuevos conjuntos habitacionales, industriales y de servicios están obligados a construir **Sistemas de captación de Agua Pluvial** para la recolección de agua pluvial y, al tratamiento de aguas residuales para su conducción en los términos de la legislación aplicable, para ser aprovechada en el riego de áreas verdes o aquellas actividades que no requieran la utilización de agua potable.

Los Gobiernos Municipales deberán de otorgar beneficios fiscales acordes a la proporcionalidad del cumplimiento de esta obligación en favor de dichos particulares y que no pongan en riesgo el cálculo de su presupuesto de ingresos del municipio del que se trate.

…

Artículo 152.- *Las visitas que ordene la autoridad del agua competente tendrán como objetivo:*

I. a VIII. …

IX. Verificar la existencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales y de Sistemas de Captación de Agua Pluvial que deben cumplir los sujetos obligados señalados en la presente ley.

Así como el cumplimiento de condiciones particulares de descarga, así como la adecuada operación y funcionamiento de éstos; y

X…

Artículo 155.- Constituyen infracciones a la presente Ley y serán sancionadas por las autoridades del agua, en el ámbito de su competencia, las siguientes:

I. a VIII. …

IX. Incumplir con las disposiciones relativas al uso eficiente del agua previstas en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables que emitan las autoridades del agua.

De la misma manera, se actualiza infracción para aquellos desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de conjuntos habitacionales, industriales o de servicios que no cumplan con la construcción de mecanismos y de Sistemas de Captación de Agua Pluvial en los términos descritos de la presente ley.

X. a XVIII. **…**

Artículo 156. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, serán sancionadas por la autoridad del agua competente, con multas equivalentes a veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa la infracción, de acuerdo a lo siguiente:

I. De diez a quinientas en el caso de violación a cualquiera de las fracciones V, VII, primer párrafo de la fracción IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII y XVIII.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Susana
Estrada Rojas
Distrito XXIV Cd. Nezahualcóyotl

II…

III. De tres mil una a diez mil en el caso de violación a cualquiera de las fracciones III, IV, VI y segundo párrafo de la fracción IX .

IV….

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los __ días del mes de _____ del 2026.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a __ de __de 2026.

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

P R E S E N T E
Honorable Asamblea:

Quienes suscriben, **JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO, HÉCTOR RAÚL GARCÍA GONZÁLEZ, HONORIA ARELLANO OCAMPO, ALEJANDRA FIGUEROA ADAME, GLORIA VANESSA LINARES ZETINA, CARLOS ALBERTO LÓPEZ IMM, ISAÍAS PELÁEZ SORIA, ITZEL GUADALUPE PÉREZ CORREA** y **MIRIAM SILVA MATA,** diputadas y diputados integrantes del **GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO** en la LXII Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción II, 28, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a la consideración de este Órgano legislativo la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 3.66, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3.67 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS VULNERABLES A DESLAVES, EROSIÓN DE SUELO E INUNDACIONES,** con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los ecosistemas forestales cumplen funciones ambientales que trascienden la conservación de la biodiversidad. La cobertura vegetal contribuye a la estabilización de los suelos, favorece la infiltración y regulación del agua, disminuye los procesos erosivos y ayuda a reducir la velocidad y el volumen de los escurrimientos superficiales. Por ello, los bosques y las áreas verdes representan una barrera natural de protección para las comunidades asentadas en zonas próximas a barrancas, laderas, cauces y otros sitios susceptibles a fenómenos hidrometeorológicos.

En los últimos años, la pérdida y degradación de la cobertura vegetal han incrementado la vulnerabilidad de diversas regiones frente a fenómenos como la erosión del suelo, los deslaves y las inundaciones. Cuando se pierde la vegetación, particularmente en terrenos con pendientes pronunciadas o con características que favorecen el escurrimiento superficial, se disminuye la capacidad natural del territorio para absorber y regular el agua, al tiempo que aumenta la susceptibilidad del suelo a procesos de degradación y desplazamiento.

La degradación de los ecosistemas forestales se ha convertido, por tanto, en uno de los principales desafíos ambientales de nuestro tiempo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 2015 y 2025 la actividad humana ha provocado la pérdida de aproximadamente 10.9 millones de hectáreas de bosque cada año.[1] Asimismo, se estima que desde 1990 se han perdido alrededor de 489 millones de hectáreas de superficie forestal en nuestro planeta, siendo esta superficie más extensa que la Unión Europea, lo que evidencia la magnitud del deterioro que enfrentan los ecosistemas forestales a escala mundial.[2]

[1] UN News. (2025, 21 octubre). La deforestación mundial se ralentiza, pero los bosques siguen bajo presión. *Noticias ONU*. https://news.un.org/es/story/2025/10/1540606
[2] *Evaluación de Recursos Forestales Mundiales 2025*. (s. f.). https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/2dee6e93-1988-4659-aa89-30dd20b43b15/content/FRA-2025/key-findings.html

A esta situación se suma un elemento particularmente relevante: la capacidad de recuperación de los bosques no ha sido suficiente para compensar las pérdidas acumuladas. La propia FAO señala que la superficie forestal que se recupera, disminuyó anualmente de 9.88 millones de hectáreas durante el periodo de 2000 y 2015 a 6.78 millones de hectáreas por año en la década que finaliza en 2025.[3] Esto significa que, mientras la presión de los ecosistemas forestales persiste, los procesos de recuperación avanzan a un ritmo insuficiente para revertir las pérdidas registradas.

Las consecuencias de esta degradación no son exclusivamente ambientales. También tienen una dimensión social y humana. Durante la última década se registró un promedio de 24 millones de desplazamientos humanos anuales ocasionados por desastres, de los cuales el 92% estuvo relacionado con fenómenos climáticos. Tan solo en 2023, las inundaciones provocaron 9.8 millones de desplazamientos. En países como Brasil, estos fenómenos ocasionaron la muerte de 161 personas y afectaron a más de 2.34 millones de habitantes; mientras que, en África, las lluvias asociadas con el fenómeno El Niño afectaron a más de 637 mil personas y provocaron la muerte de al menos 210 personas en Kenia.[4]

De igual manera, países como Indonesia han experimentado significativas pérdidas forestales. En 2024 desaparecieron más de 240 mil hectáreas de bosque primario, mientras que durante 2025 las inundaciones provocaron la muerte de más de 700 personas. Estos hechos permiten advertir la relación existente entre la degradación de los ecosistemas y la disminución de la capacidad natural del territorio para contener escurrimientos y reducir el impacto de fenómenos hidrometeorológicos.[5]

México no es ajeno a esta problemática. Entre 2019 y 2024 se ha registrado la pérdida de 177 mil 997 hectáreas de cobertura arbórea por año. Asimismo, durante las últimas dos décadas se han perdido aproximadamente 736 mil hectáreas de bosques primarios,

[3] Ibídem
[4] *Inundaciones causadas por la crisis climática provocan nuevos desplazamientos.* (s. f.). https://www.acnur.org/mx/noticias/historias/inundaciones-causadas-por-la-crisis-climatica-provocan-nuevos-desplazamientos
[5] Afp_Tickers. (2025, 2 diciembre). Cómo la deforestación empeoró las inundaciones en Indonesia. *SWI swissinfo.ch*. https://www.swissinfo.ch/spa/c%C3%B3mo-la-deforestaci%C3%B3n-empeor%C3%B3-las-inundaciones-en-indonesia/90569367

situando al país cerca de los diez países con mayores pérdidas de este tipo de bosques a nivel mundial.[6]

En el Estado de México, esta problemática adquiere especial relevancia. Durante los últimos 23 años, la entidad ha perdido más de 10.4 mil hectáreas de cobertura arbórea, lo que ha generado emisiones estimadas en 5.22 megatoneladas de dióxido de carbono. Entre los municipios que registran mayores pérdidas se encuentra Temascaltepec, que tiene la mayor pérdida de cobertura arbórea con 899 hectáreas, seguido por Valle de Bravo, Amatepec, Donato Guerra, Sultepec, Texcaltitlán, Xalatlaco, Tejupilco, Texcoco, Villa Guerrero, San Felipe del Progreso, Ocuilan, Tianguistenco, Zacualpan y Tlatlaya.[7]

Es imperativo señalar que, además de las problemáticas relacionadas con la conservación forestal anteriormente expuestas, el Estado de México enfrenta diversos fenómenos que generan afectaciones recurrentes a la población y al territorio. Entre ellos destacan las inundaciones, particularmente aquellas que se presentan en zonas susceptibles a este tipo de eventos. Estas tienen su origen, entre otros factores, en la presencia de lluvias continuas o intensas que superan la capacidad de absorción de los suelos y de conducción de los cauces. Esto ocasiona que el excedente de agua se desborde e invada áreas urbanas, rurales y zonas habitadas.

De acuerdo con el Atlas de Inundaciones XXXII, Primera Edición 2026, elaborado por el Gobierno del Estado de México,[8] cuyo propósito es identificar los sitios afectados por fenómenos hidrometeorológicos extremos y contribuir a la toma de decisiones para la definición de obras y acciones preventivas, correctivas y emergentes, durante 2025 se registraron 382 eventos de inundación y encharcamiento, distribuidos en 94 sitios correspondientes a 41 municipios y 96 colonias. De estos eventos, 285 correspondieron a encharcamientos, 92 a inundaciones urbanas y 5 a inundaciones rurales.

---

[6] Badillo, D. (2026, 15 agosto). México registra una deforestación bruta de 178,000 hectáreas y restaura menos de 35,000. *El Economista*. https://www.eleconomista.com.mx/politica/mexico-registra-deforestacion-bruta-178-000-hectareas-restaura-35-20260815-828430.html

[7] Ríos, A. (2025, 24 marzo). ¡Ecocidio en Edomex! Miles de hectáreas deforestadas de 2001 a 2023. El Universal Edomex. https://www.eluniversaledomex.com.mx/valle-de-toluca/ecocidio-en-edomex-miles-de-hectareas-deforestadas-de-2001-a-2023/

[8] Disponible en: https://caem.edomex.gob.mx/sites/caem.edomex.gob.mx/files/files/AtlasInundaciones/Atlas2026/AtlasInundacionesXXXII-2026.pdf

El mismo documento señala que los municipios de Ecatepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Atlacomulco concentraron el mayor número de eventos durante la temporada de lluvias de 2025. Asimismo, se reportaron más de 11 mil habitantes afectados, principalmente en municipios urbanos como Ecatepec, La Paz, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl. Particularmente, en la zona de Lerma y Ocoyoacac, el 2 de junio de 2025 se registró una inundación en la zona industrial, con un tirante aproximado de 90 centímetros.

La recurrencia y magnitud de estos fenómenos hacen evidente la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y mitigación de riesgos mediante estrategias integrales que atiendan las causas y condiciones que favorecen su ocurrencia. En este sentido, la conservación, restauración y recuperación de la cobertura vegetal adquieren especial relevancia, toda vez que los ecosistemas forestales contribuyen a la infiltración y regulación del agua, favorecen la estabilidad del suelo y disminuyen los procesos de erosión y escurrimiento superficial.

Aunado a lo anterior, otra problemática que afecta de manera recurrente a diversos municipios del Estado de México es la ocurrencia de deslaves y movimientos de ladera. Estos fenómenos consisten en el desplazamiento de masas de suelo, roca y otros materiales pendiente abajo. Estos fenómenos pueden generar graves afectaciones a la población, la infraestructura y los bienes.

La ocurrencia de estos fenómenos responde a la interacción de diversos factores naturales. Entre ellos se encuentran las características geológicas y geomorfológicas del territorio, la pendiente y estabilidad de las laderas, la saturación del suelo derivada de lluvias intensas o prolongadas y, en determinados casos, la actividad sísmica. A estos factores pueden sumarse procesos de deforestación, pérdida de cobertura vegetal, erosión y modificaciones del terreno, que disminuyen la estabilidad de las laderas y pueden incrementar su susceptibilidad a los deslizamientos.

En el Estado de México, los deslaves y movimientos de ladera han ocasionado afectaciones en distintos municipios. En julio de 2026, las intensas lluvias provocaron afectaciones en la comunidad de San Pedro Tenayac, municipio de Temascaltepec. De acuerdo con el censo municipal, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de la zona. Asimismo, seis vehículos y 14 viviendas resultaron afectados, además del colapso de las bardas perimetrales de una escuela primaria y una secundaria.[9]

De igual manera, el municipio de Tlalnepantla de Baz ha enfrentado de manera recurrente situaciones de riesgo asociadas con deslaves y movimientos de ladera en el cerro del Chiquihuite, lo que ha llevado a las autoridades a llevar a cabo estudios especializados con la participación de geólogos, académicos e investigadores, ante el riesgo que representa para la población asentada en sus laderas. En septiembre de 2021, un deslizamiento registrado en esta zona afectó viviendas de la calle Alacranes, en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, dejando como saldo una persona fallecida y diez personas desaparecidas.[10]

Asimismo, durante 2025 se reportó un deslave en el cerro El Capulín, en Naucalpan de Juárez, que afectó una vivienda.[11] Estos hechos, lejos de constituir casos aislados, evidencian la presencia de condiciones de vulnerabilidad en distintas regiones de la entidad y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y mitigación frente a los movimientos de ladera.

En el ámbito internacional, la propuesta se encuentra vinculada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 de la Agenda 2030, relativo a “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras

[9] MILENIO, Lluvias provocan deslave de cerro en Temascaltepec, Edomex; hay afectaciones en viviendas y escuelas, 2026. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/lluvias-provocan-deslave-cerro-temascaltepec-edomex-danos
[10] LA PRENSA, Cerro del Chiquihuite: estudian con inteligencia artificial las zonas de mayor riesgo de deslaves, 2026. Disponible en: https://oem.com.mx/la-prensa/metropoli/cerro-del-chiquihuite-estudian-con-inteligencia-artificial-las-zonas-de-mayor-riesgo-de-deslaves-31918012
[11] N+, Reportan Deslave de Cerro 'El Capulín' en Naucalpan, Edomex, 2025. Disponible en: https://www.nmas.com.mx/seguridad/accidentes/reportan-deslave-cerro-el-capulin-naucalpan-edomex/

y detener la pérdida de biodiversidad", el cual reconoce la importancia de la conservación y gestión sostenible de los ecosistemas terrestres y forestales.

En el ámbito nacional, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y establece que el Estado garantizará el respeto a este derecho.

En concordancia con este mandato constitucional, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 11, establece las atribuciones de las entidades federativas en materia forestal y, entre ellas, contempla la elaboración y aplicación de programas de forestación y reforestación en zonas degradadas, de conformidad con las disposiciones de dicha Ley y de las leyes locales en la materia.

En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 18, reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como a la protección de la naturaleza, con el propósito de garantizar la existencia, preservación, conservación, reparación, restauración, mantenimiento, regeneración, cuidado y protección de los ecosistemas, asegurando el pleno desarrollo de los ciclos biológicos de todos los seres vivos.

Por su parte, el Código para la Biodiversidad del Estado de México establece, entre sus fines, el fomento del desarrollo forestal sostenible. En particular, el Libro Tercero, denominado "Del Fomento para el Desarrollo Forestal Sostenible del Estado de México", tiene por objeto regular la protección, conservación, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo, fomento y aprovechamiento de los ecosistemas forestales. Asimismo, el artículo 3.66 del citado Código establece actualmente criterios de prioridad para las acciones de reforestación, al disponer que se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente aquellas que hayan sufrido incendios reiterados.

En atención a las problemáticas anteriormente expuestas, y fundado en las disposiciones normativas referidas, la presente iniciativa tiene como finalidad orientar las acciones de

reforestación y restauración ecológica hacia aquellas zonas del Estado de México en las que la recuperación de la cobertura forestal pueda contribuir a prevenir y mitigar los efectos de los deslaves, la erosión del suelo y las inundaciones, mediante la identificación y delimitación técnica de las áreas que, por sus características territoriales, requieren atención prioritaria.

La propuesta parte de una premisa sencilla, pero jurídicamente relevante: la reforestación debe responder a las necesidades concretas del territorio y no desarrollarse únicamente como una acción aislada de plantación de árboles. Para que una política de reforestación sea eficaz, debe considerar las condiciones ambientales, físicas, hidrológicas y territoriales de cada región, así como los riesgos existentes y las características de las especies que se pretende establecer. Por ello, se propone reformar el artículo 3.66 del Código Administrativo del Estado de México, a fin de establecer expresamente como zonas prioritarias para las acciones de reforestación aquellas que presenten vulnerabilidad ante deslaves, erosión del suelo e inundaciones.

Con esta modificación se busca que la priorización de las acciones de reforestación incorpore una perspectiva de gestión preventiva del territorio. De esta manera, los recursos y esfuerzos institucionales pueden dirigirse, de forma estratégica, hacia aquellos sitios en los que la recuperación de la cobertura vegetal pueda generar mayores beneficios ambientales y contribuir a reducir condiciones de vulnerabilidad.

De esta manera, la propuesta pretende que las decisiones sobre dónde y cómo llevar a cabo las acciones de forestación y reforestación cuenten con un sustento técnico y territorial, evitando que dichas acciones se desarrollen de manera aislada o sin considerar las características particulares de cada región. La identificación previa de las zonas prioritarias permitirá orientar los recursos y esfuerzos institucionales hacia aquellos sitios donde la recuperación de la cobertura vegetal pueda generar mayores beneficios ambientales y contribuir a la prevención y mitigación de riesgos.

Para hacer efectiva esta modificación, los artículos transitorios establecen una ruta de implementación. En primer término, se dispone que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, la Secretaría del Campo lleve a cabo el estudio técnico. Esto debe hacerse a través de la Protectora de Bosques del Estado de México y en colaboración con las autoridades competentes y los municipios. Este estudio debe identificar y delimitar las zonas prioritarias. Posteriormente, con base en sus resultados, deberán priorizarse e incorporarse dichas zonas en los programas, campañas y acciones de forestación y reforestación.

La propuesta también contempla que las especies utilizadas se seleccionen de acuerdo con las características ambientales y del suelo de cada región, y que las acciones se desarrollen durante las temporadas climáticas y ambientales más adecuadas para favorecer la supervivencia y el establecimiento de las especies. Con ello, se busca que la reforestación responda a criterios técnicos que permitan incrementar la eficacia y permanencia de las acciones realizadas.

Finalmente, se establece que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prever los recursos necesarios para el cumplimiento del Decreto en sus respectivos presupuestos de egresos. Esta previsión resulta indispensable para que las disposiciones propuestas trasciendan del plano normativo y puedan traducirse efectivamente en acciones de prevención, restauración ecológica y protección del territorio y de las comunidades mexiquenses.

El Grupo Parlamentario propone esta iniciativa con la convicción de que la protección ambiental debe partir del reconocimiento de las condiciones específicas de cada territorio y de las necesidades concretas de sus comunidades. Reforestar no debe significar únicamente plantar árboles; significa recuperar cobertura vegetal, fortalecer ecosistemas y, cuando las condiciones lo permitan, contribuir a disminuir factores de vulnerabilidad frente a fenómenos que pueden poner en riesgo a las personas, sus bienes y su entorno.

Orientar prioritariamente las acciones de reforestación y restauración ecológica hacia zonas susceptibles a deslaves, erosión del suelo e inundaciones permitirá aprovechar de mejor manera los esfuerzos institucionales, fortalecer la conservación ambiental y contribuir a la prevención y mitigación de riesgos en el Estado de México.

Se trata de que las acciones públicas en materia de reforestación sean más estratégicas, eficientes y permanentes. Además, que los recursos destinados a ellas se orienten hacia donde pueden generar mayores beneficios. Además, que la recuperación de nuestros ecosistemas contribuya también a construir comunidades más resilientes frente a los efectos del cambio climático y de los fenómenos hidrometeorológicos. En suma, la propuesta pretende fortalecer el marco jurídico estatal para que la restauración de la cobertura vegetal se entienda como una herramienta de conservación ambiental, pero también como una medida complementaria de prevención y mitigación de riesgos.

Con la intención de contar con más elementos para facilitar la comprensión de las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, se hace un estudio comparativo entre el texto vigente y el que se propone modificar:

CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 3.66. La reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración, las actividades de forestación, así como las prácticas de agroforestales en terrenos degradados de vocación forestal, se realizará preferentemente con especies compatibles con las nativas y con la persistencia de los ecosistemas, no requerirán de autorización y solamente estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales. … … … Para los efectos del presente Capítulo se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados.	**Artículo 3.66.** … … … … Para los efectos del presente Capítulo se consideran prioritarias las **zonas vulnerables a deslaves, erosión de suelo e inundaciones, así como las** zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados.

CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 3.67. El Gobierno del Estado y los Municipios promoverán programas tendientes a la forestación y reforestación de los terrenos de vocación forestal, degradados o que han sufrido cambio de uso del suelo. … **Sin correlativo**	**Artículo 3.67.** … … **Los programas de reforestación y de restauración ecológica se realizarán preferentemente en zonas vulnerables a deslaves, erosión e inundaciones. Para tal efecto, la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes en materia de protección civil, ordenamiento territorial y gestión del agua, llevará a cabo los estudios técnicos correspondientes, considerando, entre otros elementos, las condiciones de riesgo de deslaves, erosión del suelo e inundaciones y la recurrencia de incendios forestales.**

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Poder Legislativo del Estado de México, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación en sus términos, la presente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 3.66, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3.67 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS VULNERABLES A DESLAVES, EROSIÓN DE SUELO E INUNDACIONES.**

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DECRETO NÚMERO ____
LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

ÚNICO.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 3.66 y un tercer párrafo al artículo 3.67 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, para quedar como sigue:

CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 3.66. …

Para los efectos del presente Capítulo se consideran prioritarias las **zonas vulnerables a deslaves, erosión de suelo e inundaciones, así como las** zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados.

Artículo 3.67…

…

Los programas de reforestación y de restauración ecológica se realizarán preferentemente en zonas vulnerables a deslaves, erosión e inundaciones. Para tal efecto, la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes en materia de protección civil, ordenamiento territorial y gestión del agua, llevará a cabo los estudios técnicos correspondientes, considerando, entre otros elementos, las condiciones de riesgo de deslaves, erosión del suelo e inundaciones y la recurrencia de incendios forestales.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México.

La persona titular del Poder Ejecutivo lo tendrá por entendido, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los días _ del mes _ de dos mil veintiséis.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a __ de __de 2026.

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

P R E S E N T E
Honorable Asamblea:

Quienes suscriben, **JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO, HÉCTOR RAÚL GARCÍA GONZÁLEZ, HONORIA ARELLANO OCAMPO, ALEJANDRA FIGUEROA ADAME, GLORIA VANESSA LINARES ZETINA, CARLOS ALBERTO LÓPEZ IMM, ISAÍAS PELÁEZ SORIA, ITZEL GUADALUPE PÉREZ CORREA** y **MIRIAM SILVA MATA,** diputadas y diputados integrantes del **GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO** en la LXII Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción II, 28, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a la consideración de este Órgano legislativo la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 75 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 159, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE, POR LO MENOS, 100 LITROS DE AGUA POR PERSONA AL DÍA,** con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua es uno de los recursos más importantes del planeta, pues representa la vida misma, y constituye un elemento indispensable para la supervivencia de los seres humanos, los ecosistemas y el desarrollo de las actividades económicas y sociales. Su disponibilidad y gestión sostenible son fundamentales para garantizar la salud, la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

A pesar de su importancia vital, el acceso al agua se ha convertido en un privilegio para muchas familias mexiquenses. Esta problemática obedece a diversos factores, entre ellos el estrés hídrico, el deterioro y la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, el uso ineficiente y desperdicio del recurso, así como la creciente demanda derivada de las actividades domésticas, agrícolas e industriales. Es un problema de tipo multifactorial que afecta a toda la población, pero que recae con mayor intensidad sobre los más vulnerables que tienen más dificultades de acceder de forma suficiente a este recurso indispensable para la vida.

El acceso al agua potable constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta la comunidad internacional. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas,[1] alrededor de 2,200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, mientras que 3,500 millones aún no cuentan con servicios de saneamiento que garanticen seguridad.

La disponibilidad del recurso hídrico también enfrenta una presión creciente. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 2,000 millones de personas viven en países con estrés hídrico, fenómeno que se agravará como consecuencia del cambio climático, el crecimiento demográfico y el incremento en la demanda de agua. En el mismo sentido, la FAO señala que aproximadamente el 10% de la población mundial habita en países con un nivel alto o crítico de estrés hídrico. Mientras tanto, el 72% de

[1] ONU, agua. Disponible en: https://www.un.org/es/global-issues/water

las extracciones de agua dulce se destinan a la agricultura. Esto refleja la necesidad de fortalecer estrategias para un uso más eficiente y sostenible del recurso.

A esta problemática se suma el deterioro en la calidad del agua. En 2022, al menos 1,700 millones de personas consumían agua potable contaminada, situación que representa el principal riesgo microbiológico para la seguridad del recurso destinado al consumo humano.Esta contaminación favorece la propagación de enfermedades como diarrea, cólera, disentería, fiebre tifoidea y poliomielitis, y se estima que provoca aproximadamente 505 mil muertes por diarrea cada año. Asimismo, el 44% de las aguas residuales domésticas no recibe un tratamiento adecuado y cerca del 80% de esas generadas en el mundo regresan a los ecosistemas sin ser tratadas ni reutilizadas, con graves consecuencias para la salud pública y el equilibrio ambiental.

Las repercusiones de esta crisis trascienden el ámbito sanitario. El Banco Mundial señala que los desastres relacionados con el agua han sido los fenómenos naturales más frecuentes durante los últimos cincuenta años y concentran el 70% de las muertes ocasionadas por este tipo de eventos. En contraste, la Organización Mundial de la Salud[2] estima que mejorar el acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene permitiría salvar la vida de aproximadamente 1.4 millones de personas cada año. También evitaría la muerte diaria de alrededor de mil niñas y niños menores de cinco años.

En México, la situación no es más favorable, según datos de la UNICEF,[3] el país enfrenta una creciente presión sobre sus recursos hídricos que compromete la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. Si bien, durante las últimas décadas, el país ha logrado ampliar la cobertura de agua entubada, al pasar de 78.4% en 1990 a 96.1% en 2020, este avance no se ha traducido en un acceso continuo y suficiente. Actualmente, únicamente el 56.3% de la población dispone de agua entubada de manera diaria, situación que evidencia importantes deficiencias en el suministro y una marcada

[2] OMS, agua potable, 2023. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
[3] INICEF México, Agua, higiene y saneamiento. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/agua-higiene-y-saneamiento

desigualdad territorial. Mientras que en algunas entidades la cobertura diaria alcanza niveles cercanos a la universalidad, como ocurre en Nuevo León, en otras, como Guerrero, apenas una minoría de la población recibe el servicio de forma continua.

La disponibilidad del recurso también se encuentra seriamente comprometida. México ocupa el lugar 26 entre los países con mayor estrés hídrico en el mundo y registra un índice de 45.48%, lo que significa que se extrae casi la mitad del agua dulce disponible cada año. Este nivel rebasa el umbral internacional considerado de alto riesgo y pone en evidencia la necesidad de adoptar medidas que garanticen un aprovechamiento sostenible del recurso. A ello se suma una disminución constante en la disponibilidad anual de agua por habitante, que pasó de aproximadamente 10 mil metros cúbicos en 1960 a cerca de 4 mil en 2012, con estimaciones que prevén un descenso por debajo de los 3 mil metros cúbicos para 2030.

El cambio climático ha profundizado esta problemática. Más de la mitad del territorio nacional presenta condiciones áridas o semiáridas y las sequías han incrementado su frecuencia, intensidad y duración durante la última década. Tan solo en 2021 se registraron 8,491 eventos de sequía, de los cuales el 97% correspondieron a categorías severa o extrema. Paralelamente, la distribución de las lluvias es desigual. Cerca del 67% de la precipitación anual ocurre entre junio y septiembre. La mitad se concentra en la región sur-sureste. Mientras tanto, entidades como la Ciudad de México y el Estado de México han registrado una disminución en sus niveles de precipitación.Estas condiciones han provocado que las regiones centro y norte del país enfrenten periodos recurrentes de escasez de agua y que millones de personas, se encuentren expuestas tanto a sequías como a inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos.[4]

La presión sobre el recurso hídrico también responde a la forma en la que se distribuye su aprovechamiento. El sector agropecuario concentra el 76% del volumen total de agua concesionada, seguido del abastecimiento público con el 15%, la industria

[4] CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA PÚBLICA, Situación del agua en México, 2023. Disponible en: https://imco.org.mx/situacion-del-agua-en-mexico/

autoabastecida con el 5% y las centrales termoeléctricas con el 4%. Esta demanda exige fortalecer las políticas de eficiencia, conservación y reutilización del agua para garantizar el equilibrio entre las actividades productivas y el consumo humano.

A los problemas de disponibilidad se suman importantes retos relacionados con la calidad del agua. En México, el 60% del agua potable proviene de fuentes superficiales, las cuales presentan altos niveles de contaminación derivados de descargas domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias que, en muchos casos, se realizan sin tratamiento previo. Por su parte, los acuíferos enfrentan un deterioro progresivo: el 18% presenta sobreexplotación, mientras que otros registran problemas de salinización e intrusión marina, fenómenos que reducen la calidad del agua, incrementan los costos de extracción y generan afectaciones como hundimientos del suelo.

El saneamiento constituye otro desafío relevante. Aunque el 95.2% de la población cuenta con acceso a alcantarillado, únicamente el 89.2% dispone de servicios de saneamiento adecuados, es decir, sistemas capaces de conducir y tratar correctamente las aguas residuales. Esta diferencia representa millones de personas cuyos desechos continúan contaminando el entorno y elevando los riesgos para la salud pública.

Este panorama evidencia que la problemática del agua en México trasciende la disponibilidad física del recurso. Se trata de un desafío que involucra la gestión integral del agua, la modernización de la infraestructura hidráulica, la protección de las fuentes de abastecimiento, el fortalecimiento de los sistemas de saneamiento y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.

En el Estado de México, según datos del Plan de Desarrollo 2023-2029,[5] enfrenta una creciente crisis hídrica derivada del aumento en la demanda de agua, la gestión ineficiente del recurso, el uso agrícola poco sostenible, el tratamiento insuficiente de

[5] Plan de Desarrollo del Estado de México 2023 – 2029. Disponible en: https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/plan-desarrollo-2023-2029

aguas residuales y la disminución en la recarga de los acuíferos. Esta situación ha comprometido la disponibilidad y calidad del agua para la población.

Aunque la entidad concentra el 1.05% del agua dulce renovable del país, equivalente a 4,786 hm^3, su disponibilidad es de apenas 268 m^3 por habitante al año, menos de la mitad del promedio nacional de 549 m^3, lo que la ubica en el penúltimo lugar del país, únicamente por encima de la Ciudad de México. La problemática es más evidente en las zonas metropolitanas de Toluca y del Valle de México, donde municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla enfrentan un abastecimiento cada vez más limitado.

La reducción de las precipitaciones y el incremento de las sequías han agravado este panorama. En 2022, el 87% de los municipios presentó algún grado de sequía. Mientras que las principales presas del Sistema Cutzamala permanecen desde ese año por debajo del 50% de su capacidad. Esto redujo el caudal de abastecimiento de 14.8 a 8.2 m3 por segundo a inicios de 2024.

A esta situación se suma la sobreexplotación de los acuíferos, de los cuales depende cerca del 40% del suministro estatal. Seis de los nueve acuíferos del Estado de México presentan niveles de extracción superiores a su capacidad de recarga natural, destacando los de Texcoco y Valle de Toluca, cuya explotación compromete la disponibilidad futura del recurso y pone en riesgo el abastecimiento de millones de mexiquenses.

En este contexto, el marco normativo, tanto internacional como nacional, ha buscado establecer las directrices legales mínimas a fin de buscar subsanar estas problemáticas. Primeramente, la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el agua como un derecho humano indispensable para una vida digna y establece que toda persona debe contar con agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para satisfacer sus necesidades personales y domésticas. Asimismo, señala que los Estados tienen la obligación de garantizar este

derecho sin discriminación, protegiendo los recursos hídricos y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.[6]

De igual manera, el derecho humano al agua se encuentra reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, dispone que la ley definirá las bases y modalidades para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, con la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.

De la mano a esta prerrogativa, la Ley General de Aguas reglamenta el derecho humano al agua, estableciendo las competencias de los distintos órdenes de gobierno y fija las bases para su acceso y aprovechamiento sustentable. Además, en su artículo 9 prevé que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago, debiendo garantizar, en todo caso, la cantidad mínima indispensable para el consumo humano básico.

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 18, reconoce que toda persona tiene derecho al acceso y disposición de agua suficiente, salubre y asequible para consumo personal y doméstico, y establece que la ley determinará las bases y modalidades para el ejercicio de este derecho, así como la obligación de la ciudadanía de procurar su cuidado y uso racional.

Asimismo, la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios es la legislación garante de este derecho fundamental en la entidad, la misma que tiene por objeto normar la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción estatal y municipal y sus bienes inherentes, para la prestación de los

[6] OBSERVACIÓN GENERAL Nº 15: EL DERECHO AL AGUA (ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES). Disponible en: https://aguaysaneamiento.cndh.org.mx/Content/doc/Normatividad/Observacion15_DESC.pdf

servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento, y tratamiento de aguas residuales, su reúso y disposición final.

Es importante destacar que una de las características esenciales de los derechos humanos es su universalidad, lo que implica que corresponden a todas las personas, sin distinción alguna, y que su ejercicio no puede condicionarse arbitrariamente. En consecuencia, el derecho humano al agua debe garantizarse de manera efectiva, aun cuando existan circunstancias como el incumplimiento en el pago del servicio. Si bien el Estado y los organismos operadores pueden establecer mecanismos para recuperar los adeudos, estos no pueden traducirse en la privación absoluta del acceso al agua, pues ello comprometería la satisfacción de necesidades básicas y la protección de otros derechos fundamentales, como la vida, la salud y la dignidad humana.

En este sentido, diversos estándares nacionales e internacionales reconocen que, aun en casos de morosidad, debe preservarse un suministro mínimo indispensable para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento Cantidad de agua doméstica, nivel de servicio y salud, señala que el abastecimiento diario puede clasificarse en distintos niveles, considerando un mínimo de 20 litros por persona al día, cantidad que únicamente permite atender necesidades básicas y cuya insuficiencia puede comprometer el ejercicio de otros derechos humanos; un nivel intermedio de 50 litros por persona al día, suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de consumo e higiene; y un nivel óptimo de 100 litros diarios por persona.

Este criterio ha sido retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la jurisprudencia de rubro "Servicio concesionado de agua potable, saneamiento, drenaje y/o alcantarillado para uso doméstico" La medida cautelar concedida contra su suspensión procede sin exigir requisito de efectividad alguno, para el efecto de que se otorgue el mínimo vital". Se determinó que, cuando el servicio sea suspendido totalmente, procede conceder la suspensión para que se restablezca un suministro suficiente que garantice la satisfacción de las necesidades vitales de las personas.

De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió la jurisprudencia sobre el "Servicio de suministro de agua potable para uso doméstico". "La suspensión provisional o definitiva otorgada contra el corte de tal servicio, cuando se pretenda la restitución no restringida de este, debe condicionarse a que el quejoso garantice su pago", sostuvo que la falta de pago no justifica la interrupción absoluta del suministro. Por el contrario, consideró que una medida válida para incentivar el cumplimiento de las obligaciones de pago consiste en reducir el suministro únicamente hasta el nivel necesario para garantizar el mínimo vital, reservando la restitución plena del servicio a la garantía del pago correspondiente. La Suprema Corte reconoce que, incluso ante un adeudo, el acceso al agua indispensable para la subsistencia no puede ser suprimido. Solo puede ser restringido de manera compatible con la protección del derecho humano al agua.

Es de suma importancia destacar que el Gobierno de México publicó el documento Elementos para la armonización normativa en las entidades federativas conforme a la Ley General de Aguas, en el cual retoma los criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los criterios referidos. En este documento se recomienda garantizar el acceso al agua, como mínimo, en un nivel intermedio, equivalente a 50 litros por persona al día, cantidad suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de consumo, higiene y saneamiento. Asimismo, identifica un nivel óptimo de 100 litros diarios por persona, el cual supone un suministro continuo e inmediato mediante múltiples puntos de acceso dentro de la vivienda.

En este contexto, la presente iniciativa propone incorporar expresamente en la legislación estatal el parámetro mínimo de 100 litros diarios por persona. El propósito es garantizar el contenido esencial del derecho humano al agua, particularmente en aquellos casos en los que el suministro sea objeto de restricción por falta de pago.

Es imperativo señalar que la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, en su artículo 159, ya prevé que, cuando existan dos o más periodos de adeudo debidamente notificados, el suministro de agua potable podrá restringirse hasta en un 75%. Sin

embargo, dicha disposición no establece un volumen mínimo que deba garantizarse para preservar el derecho humano al agua. Por ello, resulta necesario fortalecer este precepto incorporando los parámetros técnicos e internacionales reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto es necesario a fin de asegurar que, aun en los supuestos de restricción del servicio, toda persona cuente con el mínimo indispensable de agua para satisfacer sus necesidades básicas. Esto debe hacerse en concordancia con los estándares internacionales y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un antecedente en la materia se encuentra en la legislación de la Ciudad de México. El artículo 61 Bis de su ley en materia de agua faculta al Sistema de Aguas para determinar, caso por caso, la suspensión o restricción del servicio de agua potable por falta de pago; sin embargo, aun en estos supuestos, garantiza el suministro mínimo indispensable para satisfacer las necesidades básicas de la población, equivalente a 50 litros de agua por persona al día, mediante carros tanque, hidrantes provisionales o públicos, o vales para garrafones de agua potable. Este modelo reconoce que la recuperación de los adeudos no puede traducirse en la privación absoluta del derecho humano al agua.

Además, en el Estado de Querétaro, su Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento constituye otro referente de derecho comparado en la materia. Dicho ordenamiento dispone que, cuando se limite el servicio de agua potable a usuarios domésticos por falta de pago, deberá garantizarse en todo momento el suministro continuo para cubrir las necesidades básicas de las personas, asegurando una dotación mínima de 50 litros de agua por persona al día, la misma que deberá ser proporcionada por el prestador del servicio. La constitucionalidad de esta disposición fue analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el 21 de abril de 2025 la Acción de Inconstitucionalidad 102/2024,[7] en contra de los artículos 74 y 75 de dicho ordenamiento. En esa resolución, la Suprema Corte declaró infundada la acción y reconoció la validez de las disposiciones impugnadas, al concluir que la posibilidad de limitar el servicio por falta de pago, garantizando un suministro

[7] Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2024/19/3_334416_7137_firmado.pdf

mínimo de 50 litros diarios por persona, no vulnera el derecho humano al agua. Por el contrario, estimó que esa medida satisface las garantías de disponibilidad y accesibilidad del derecho al agua, al asegurar el volumen indispensable para cubrir las necesidades básicas de las personas, sin impedir que los prestadores del servicio ejerzan las acciones correspondientes para el cobro de los adeudos.

En ese sentido, este precedente de la Corte confirma que es constitucionalmente válido establecer en la legislación local un volumen mínimo de suministro para proteger el contenido esencial del derecho humano al agua, aun en los casos de restricción del servicio por falta de pago. Por ello, la presente iniciativa retoma ese modelo normativo, armonizándolo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y con la interpretación constitucional realizada por el Máximo Tribunal del país.

Asimismo, resulta de suma importancia destacar que la misma Corte, el pasado 24 de agosto de 2026, resolvió los Amparos en Revisión 13/2026 y 14/2026, así como el Recurso de Inconformidad 1/2026. Estos asuntos derivaron de dos juicios de amparo promovidos en 2021 por cientos de personas habitantes de diversas colonias de la Quinta Zona de Ecatepec de Morelos. Ellos denunciaron la falta de suministro suficiente de agua a través de la red pública, la distribución inequitativa del servicio, la ausencia de acciones eficaces para reparar fugas y combatir las tomas clandestinas, así como diversas omisiones relacionadas con la infraestructura hidráulica.[8]

En la sentencia, la Suprema Corte reconoció que las personas habitantes de diversas colonias de la Quinta Zona de Ecatepec de Morelos cuentan con interés legítimo para reclamar las omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales relacionadas con la garantía de su derecho humano al agua. Asimismo, destacó que este municipio presenta condiciones de pobreza y rezago social, así como la existencia de

[8] SCJN, La Suprema Corte garantiza el derecho al agua en Ecatepec, Estado de México, y valida la reforma sobre la asignación de regidurías en Quintana Roo, 2026. Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=8541

asentamientos irregulares, y que se encuentra catalogado como Zona de Atención Prioritaria.

Como parte de los efectos de la sentencia, la Corte ordenó a las autoridades responsables garantizar de inmediato el suministro suficiente de agua potable para uso personal y doméstico, preferentemente mediante la red hidráulica. Cuando ello no sea materialmente posible, el abastecimiento deberá realizarse mediante pipas u otros medios idóneos que aseguren el mínimo vital de 100 litros diarios por persona, con registros verificables de entrega y bajo supervisión sanitaria para garantizar la calidad del agua.

De igual manera, la Suprema Corte ordenó al organismo operador del agua de Ecatepec implementar un programa de infraestructura hidráulica encaminado a corregir las deficiencias estructurales del sistema de agua potable. Para tal efecto, dispuso que las autoridades municipales, estatales y federales coordinen acciones de carácter técnico, administrativo y presupuestal destinadas a fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar, de manera progresiva y sostenible, el acceso al agua en la zona afectada.

Finalmente, la Suprema Corte estableció que el suministro de agua mediante pipas, por sí solo, no acredita el cumplimiento de una sentencia de amparo. Las autoridades deben demostrar objetivamente tanto la cantidad de agua efectivamente suministrada, como su calidad. En consecuencia, corresponde a los órganos jurisdiccionales verificar que las medidas ordenadas en las sentencias se materialicen de manera efectiva y que resulten idóneas para garantizar el derecho humano al agua, y no se limiten a la adopción de medidas meramente formales o paliativas.

En consecuencia, la experiencia legislativa de estas entidades, así como los criterios de la SCJN del país, demuestran que es jurídica y operativamente viable armonizar la legislación con la protección efectiva del derecho humano al agua.

Es preciso referir que, aun cuando el marco jurídico nacional y estatal contempla diversas disposiciones encaminadas a garantizar el derecho humano al agua, la realidad demuestra que miles de personas enfrentan diariamente dificultades para acceder a un suministro suficiente, continuo y de calidad. Factores como la escasez hídrica, la infraestructura deficiente, la desigualdad en la prestación del servicio y las restricciones derivadas de la falta de pago evidencian la necesidad de fortalecer las medidas normativas que aseguren el contenido esencial de este derecho.

Por ello, la presente iniciativa retoma el modelo normativo referido para incorporar en la legislación del Estado de México un parámetro que garantice, aun en los casos de restricción del servicio por falta de pago, el suministro mínimo indispensable de 100 litros diarios por persona, conforme a los estándares reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, se propone adicionar un último párrafo a los artículos 75 y 159 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, con el objeto de incorporar expresamente que el prestador de los servicios de agua deberá garantizar en todo momento el suministro continuo de, por lo menos, cien litros diarios por persona. Con estas adiciones se armoniza la legislación estatal con el contenido del derecho humano al agua reconocido en el artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estándares internacionales en la materia y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, los artículos transitorios prevén un plazo para que el Poder Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y los organismos operadores realicen las adecuaciones reglamentarias y administrativas necesarias para su implementación, y disponen que las acciones derivadas de su cumplimiento se lleven a cabo con cargo a los recursos aprobados en sus respectivos presupuestos, sin generar ampliaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, se dispone que, en tanto se emitan las adecuaciones reglamentarias y administrativas a que se refiere el presente Decreto, los prestadores de los servicios deberán garantizar el suministro mínimo de cien litros diarios por persona previsto en el Decreto.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que el acceso al agua constituye un derecho humano indispensable para la vida, la salud y la dignidad de las personas, cuyo contenido esencial debe garantizarse en todo momento. En ese sentido, considera que las medidas para incentivar el pago del servicio no pueden traducirse en la privación absoluta del acceso al agua para uso doméstico. Por lo tanto, resulta necesario incorporar en la legislación estatal este principio. Esto asegura un suministro continuo de al menos cien litros diarios por persona, en armonía con los estándares internacionales, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la protección efectiva del derecho humano al agua.

Con la intención de contar con mayores elementos para facilitar la comprensión de las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, se hace un estudio comparativo entre el texto de la norma vigente y el que la reforma propone modificar, como se muestra a continuación:

LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
LEY VIGENTE	**INICIATIVA**
Artículo 75.- El prestador del servicio de agua potable organismo operador podrá restringir o suspender el servicio, sin responsabilidad a su cargo, cuando: I. a III. … **Sin correlativo**	**Artículo 75.-** … I. a III. … **En el caso de restricción o suspensión del servicio de agua potable de uso doméstico, se garantizará el servicio de suministro continuo para necesidades básicas, considerando por lo menos cien litros al día por persona, cuya dotación será proporcionada por el prestador de los servicios.**
Artículo 159.- Las infracciones que procedan en los términos de los artículos anteriores serán independientes de las relativas a la restricción del servicio o a las que procedan por la responsabilidad penal que resulte. La restricción en el suministro de agua potable se hará hasta en un 75%, por la falta de pago de dos o más períodos debidamente notificados o por incurrir en alguno de los supuestos del artículo 155 de esta Ley, procediendo el restablecimiento del servicio una vez que hayan sido cubiertos los	**Artículo 159**.- … …

LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
LEY VIGENTE	**INICIATIVA**
créditos fiscales a cargo del usuario, subsanadas las irregularidades y cubiertos los gastos originados por motivo de la restricción, con independencia de otra u otras responsabilidades en que pudiera incurrir el infractor.	
Sin correlativo	**En ningún caso la restricción del servicio de agua potable destinado al uso doméstico podrá impedir el acceso al volumen indispensable para satisfacer las necesidades básicas de las personas. El prestador de los servicios garantizará el suministro continuo de, por lo menos, cien litros diarios por persona, mediante los mecanismos que resulten necesarios para asegurar su acceso efectivo.**

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Poder Legislativo del Estado de México, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación en sus términos, la presente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 75 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE, POR LO MENOS, 100 LITROS DE AGUA POR PERSONA AL DÍA.**

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DECRETO NÚMERO ____
LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

ÚNICO. Se adiciona un último párrafo al artículo 75 y un tercer párrafo al artículo 159 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, para quedar como sigue:

LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 75.- …

I. a III. …

En el caso de restricción o suspensión del servicio de agua potable de uso doméstico, se garantizará el servicio de suministro continuo para necesidades básicas, considerando por lo menos cien litros al día por persona, cuya dotación será proporcionada por el prestador de los servicios.

Artículo 159.- …

…

En ningún caso la restricción del servicio de agua potable destinado al uso doméstico podrá impedir el acceso al volumen indispensable para satisfacer las necesidades básicas de las personas. El prestador de los servicios garantizará el suministro continuo de, por lo menos, cien litros diarios por persona, mediante los mecanismos que resulten necesarios para asegurar su acceso efectivo.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México.

ARTÍCULO TERCERO. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de las dependencias competentes, realizará las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias para el debido cumplimiento del presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

ARTÍCULO CUARTO. Los ayuntamientos y los organismos operadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán o adecuarán las disposiciones administrativas, lineamientos, protocolos y demás instrumentos necesarios para garantizar el suministro mínimo previsto en el presente Decreto, dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.

ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos operadores llevarán a cabo las acciones administrativas, técnicas, operativas y presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

ARTÍCULO SEXTO. En tanto se emitan las adecuaciones reglamentarias y administrativas a que se refiere el presente Decreto, los prestadores de los servicios deberán garantizar el suministro mínimo de cien litros diarios por persona previsto en los artículos 75 y 159 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones jurídicas, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto quedarán sin efecto en lo conducente.

La persona titular del Poder Ejecutivo lo tendrá por entendido, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los días _ del mes _ de dos mil veintiséis.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a __ de __de 2026.

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

P R E S E N T E
Honorable Asamblea:

Quienes suscriben, **JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO, HÉCTOR RAÚL GARCÍA GONZÁLEZ, HONORIA ARELLANO OCAMPO, ALEJANDRA FIGUEROA ADAME, GLORIA VANESSA LINARES ZETINA, CARLOS ALBERTO LÓPEZ IMM, ISAÍAS PELÁEZ SORIA, ITZEL GUADALUPE PÉREZ CORREA** y **MIRIAM SILVA MATA,** diputadas y diputados integrantes del **GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO** en la LXII Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción II, 28, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a la consideración de este Órgano legislativo la siguiente **INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE DECLARA LA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL SEÑOR DEL HUERTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO,** con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las sociedades construyen su continuidad histórica no solamente mediante instituciones políticas o sistemas jurídicos, sino también a través de prácticas culturales que permiten a las personas reconocerse como parte de una comunidad. Las celebraciones religiosas, las festividades populares, los conocimientos transmitidos entre generaciones, las expresiones artísticas, las lenguas, las técnicas artesanales y los rituales constituyen formas de memoria colectiva que fortalecen el sentido de pertenencia, preservan la identidad cultural y favorecen la cohesión social. En ese contexto, las tradiciones representan uno de los principales mecanismos mediante los cuales las comunidades mantienen vivos sus referentes históricos, simbólicos y espirituales.

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, las tradiciones no constituyen simples manifestaciones folclóricas o expresiones aisladas de religiosidad popular. Por el contrario, representan procesos sociales complejos mediante los cuales una comunidad produce, transmite y resignifica su patrimonio cultural: “La importancia de estas celebraciones radica también en su capacidad para fortalecer los lazos sociales y promover la cohesión comunitaria”[1].

La sociología clásica reconoció el papel integrador de las prácticas colectivas, un ejemplo notable es “Las formas elementales de la vida religiosa” de Émile Durkheim, quien sostiene que los rituales poseen una función eminentemente social al reforzar los vínculos entre quienes participan en ellos. El sociólogo francés señala que la experiencia ritual trasciende la dimensión individual y fortalece la conciencia colectiva:

> Es la sociedad la que lo eleva [el culto] por encima de sí mismo; es incluso ella la que lo configura. Porque lo que crea al hombre es ese conjunto de bienes intelectuales que constituye la civilización, y la civilización es obra de la sociedad. Y así se explica el papel preponderante del culto en todas las religiones, sean las que sean... Es mediante la acción común como cobra conciencia de sí misma y se asienta; antes que nada, es

[1] Colcha Vallejo, E. (2025). *Rituales y tradiciones: un análisis etnográfico de las festividades religiosas del barrio San Miguel de Tapi-Riobamba*. (Tesis para obtener el título de licenciado en Historia y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador). Disponible en: http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/15398/1/Colcha%20V%20Evelyn%20D%20%282024%29%20Rituales%20y%20tradiciones%20un%20an%C3%A1lisis%20etnogr%C3%A1fico%20.pdf

> una cooperación activa.[2] (p. 540)

En otras palabras, son las celebraciones religiosas y de culto las que constituyen momentos de encuentro comunitario; en la actualidad, esas fiestas rituales convocan a toda la comunidad, de ahí que en ellas participen familias completas, asociaciones civiles, autoridades religiosas, instituciones públicas y diversos sectores sociales. Bajo esa lógica, la festividad deja de ser un acto exclusivamente litúrgico para convertirse en un espacio de interacción social donde se reproducen valores compartidos, formas de cooperación y mecanismos de solidaridad comunitaria.

Durkheim explica que los símbolos religiosos representan simultáneamente símbolos de la propia sociedad y símbolos que se encargan de preservar la memoria colectiva. En ese sentido, estos aportes teóricos son útiles para explicar las fiestas religiosas populares que se desarrollan en diferentes regiones del Estado de México, donde las imágenes religiosas constituyen referentes de identidad territorial, además de objetos de veneración espiritual y cohesión social.

Pero la sociología no es la única ciencia que se ha preocupado por explicar la importancia de las tradiciones y los ritos en nuestra sociedad; la antropología, desde la visión de Clifford Geertz, sostiene que:

> … Los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el *ethos* de un pueblo —el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético— y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas acerca del orden. En la creencia y en la práctica religiosas, el *ethos* de un grupo se convierte en algo intelectualmente razonable al mostrárselo como representante de un estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas descrito por la cosmovisión, en tanto que ésta se hace emocionalmente convincente al presentársela como una imagen de un estado de cosas peculiarmente bien dispuesto para acomodarse a tal estilo de vida[3]. (p. 89)

Esta idea permite comprender que las tradiciones no son únicamente acontecimientos periódicos, sino entramados simbólicos construidos históricamente y que dan forma a la identidad de los pueblos. En ese sentido, las procesiones, danzas, peregrinaciones,

[2] Durkheim, E. (2013). Las formas elementales de la vida religiosa. FCE
[3] Geertz, C. (2003). La interpretación de las culturas. Gedisa.

ceremonias religiosas y la expresión musical o celebración patronal contienen significados específicos que representan la forma en la que se organiza una comunidad.

En consecuencia, la preservación de una festividad tradicional implica conservar un complejo sistema de símbolos que expresa la historia, las creencias, las prácticas sociales y la memoria colectiva de una comunidad determinada. Cuando una tradición desaparece, no únicamente se extingue una celebración anual; también se debilita un conjunto de conocimientos, narrativas, formas de organización comunitaria y mecanismos de transmisión cultural, es decir, una forma de ser y estar en el mundo.

La riqueza de las tradiciones mexicanas en general y mexiquenses en particular reside en su capacidad de adaptarse a nuevas dinámicas sociales y a su capacidad para amalgamar elementos de los pueblos originarios, con europeos y mestizos, y es de esa forma como dichas celebraciones se mantienen vigentes, gracias al sincretismo que ha sido parte de la identidad mexicana.

Vale la pena destacar que las tradiciones poseen, además, una dimensión democrática. Constituyen espacios de participación comunitaria en los que convergen personas de distintas edades, ocupaciones y condiciones sociales. La organización de una festividad implica la colaboración de mayordomías, asociaciones religiosas, músicos, artesanos, comerciantes, cocineras tradicionales, cronistas, danzantes y miles de habitantes que participan voluntariamente en la preservación de una práctica compartida. De esta forma, la tradición fortalece el capital social de las comunidades al generar redes de confianza, cooperación y reciprocidad.

En sociedades caracterizadas por acelerados procesos de urbanización, movilidad poblacional y transformación tecnológica, las tradiciones adquieren una importancia adicional como mecanismos de continuidad histórica. Constituyen espacios donde las nuevas generaciones establecen vínculos con su memoria colectiva y reconocen la existencia de referentes culturales que fortalecen su sentido de pertenencia. Ello explica que las políticas culturales contemporáneas ya no conciban el patrimonio cultural

únicamente como un conjunto de monumentos o edificios históricos, sino también como aquellas prácticas vivas que las comunidades consideran parte esencial de su identidad.

Para el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, la desaparición de los rituales provocada por las transformaciones tecnológicas y el modelo económico capitalista en su vertiente neoliberal pone en riesgo las relaciones sociales, para él, los rituales "son técnicas simbólicas de instalación en un hogar"[4], es decir, es una forma en la que las comunidades se sienten en "casa". Desde esa perspectiva, los rituales y las tradiciones que se manifiestan a través de fiestas patronales otorgan un universo simbólico a una comunidad y son esas metáforas las que dan estabilidad a la vida comunitaria.

Desde esta perspectiva sociológica, antropológica y filosófica, el reconocimiento legislativo de determinadas expresiones culturales como patrimonio cultural inmaterial no representa un acto meramente declarativo. Constituye el reconocimiento institucional de procesos sociales cuya conservación resulta indispensable para garantizar la continuidad de la memoria colectiva, proteger la diversidad cultural y fortalecer los derechos culturales de las comunidades que les dan vida. Por ello, la preservación de tradiciones profundamente arraigadas, como la festividad dedicada al Señor del Huerto en el municipio de Atlacomulco, encuentra sustento no solamente en el valor histórico de la celebración. También se debe considerar la función social que desempeña como elemento articulador de la identidad colectiva, la cohesión comunitaria y la continuidad cultural de una de las regiones con mayor riqueza histórica del Estado de México.

Por otro lado, el reconocimiento del patrimonio cultural encuentra sustento jurídico en diversos instrumentos, tanto internacionales como nacionales. En principio, se encuentra la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 17 de octubre de 2003 y vigente desde 2006; en sus "Textos Fundamentales" es clara respecto al principio de lo que debe entenderse como patrimonio cultural, y señala:

[4] Han, B. (2021). La desaparición de los rituales. Herder

> El concepto de patrimonio cultural no solo se refiere a edificios y monumentos del pasado, sino también a las ricas tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Como vehículo de identidad y cohesión social, este patrimonio cultural inmaterial también debe ser protegido y promovido. Gracias a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en 2003, actualmente existe un reconocimiento generalizado de la importancia de salvaguardar las prácticas vivas, expresiones y conocimientos teóricos y prácticos que las sociedades valoran y reconocen como patrimonio cultural, lo cual debe lograrse mediante la implicación plena y activa de las propias comunidades[5]. (p. V)

Para efectos de la presente iniciativa, también vale la pena señalar que, en los "Textos Fundamentales" de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en su artículo segundo, se incorpora una definición que constituye un referente internacional en la materia. Esta definición permite entender la importancia del reconocimiento de "patrimonio cultural inmaterial".

> "Se entiende por 'patrimonio cultural inmaterial' los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana". (p. 5)[6]

Otro acierto de la Convención es que identifica cinco ejes en los que puede manifestarse el patrimonio cultural inmaterial. Estos ejes son las tradiciones y expresiones orales; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y las técnicas artesanales tradicionales.Entre estas categorías destacan especialmente los usos sociales, los rituales y las festividades comunitarias, debido a que constituyen espacios privilegiados para la transmisión de valores, prácticas culturales y formas de organización social.

Consciente de esta realidad, la Convención establece obligaciones concretas para los Estados Parte. El artículo 11 señala que corresponde a cada Estado adoptar las medidas

[5] Unesco. (2018). Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. Disponible en línea: https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-SP.pdf
[6] Unesco. (2018). Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. Disponible en línea: https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-SP.pdf

necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Además, debe identificar y definir los distintos elementos que lo integran con la participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Vale la pena destacar lo que la UNESCO reconoce como "salvaguardia". Conforme al propio artículo 2 de la Convención, la salvaguardia comprende la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión —particularmente mediante la enseñanza formal y no formal— y revitalización del patrimonio cultural inmaterial. Como consecuencia, la protección jurídica de una manifestación cultural no se limita a emitir una declaratoria honorífica, sino que va más allá y obliga a los Estados miembros a diseñar mecanismos que preserven esas manifestaciones.

En el ámbito nacional, el derecho a la cultura se encuentra sustentado en el artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. El mismo precepto establece la obligación estatal de promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo al respeto de la diversidad cultural y la libertad creativa.

En ese tenor, se deduce que los derechos culturales reconocidos constitucionalmente no se agotan en el acceso a bienes culturales producidos por instituciones públicas. Comprenden también el derecho de las comunidades a conservar, desarrollar y transmitir aquellas expresiones culturales que forman parte de su identidad histórica. En este sentido, las festividades tradicionales constituyen una manifestación concreta del ejercicio de los derechos culturales tanto en su dimensión individual como colectiva.

De igual manera, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece entre sus objetivos promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales de todas las personas, así como reconocer la diversidad de las expresiones culturales

que conforman el patrimonio de la Nación[7]. La propia ley incorpora como principios rectores el respeto a la diversidad cultural, la igualdad entre las culturas y la participación social en la preservación del patrimonio cultural.

En el ámbito local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México reconoce igualmente el derecho de las personas a participar en la vida cultural y a disfrutar de los bienes que integran el patrimonio de la entidad. Además, la Constitución local establece que el Estado deberá promover medios para el disfrute de la cultura, atendiendo la diversidad de la entidad, así como la diversidad de esas manifestaciones. Dicho reconocimiento impone a las autoridades estatales la responsabilidad de adoptar medidas orientadas a preservar las expresiones culturales que representan un elemento esencial de la identidad mexiquense.

Desde esta perspectiva, la intervención del Poder Legislativo adquiere una especial relevancia. Las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial constituyen expresiones de reconocimiento público respecto de aquellas manifestaciones que, por su arraigo histórico, su permanencia intergeneracional, su capacidad de fortalecer la cohesión social y su relevancia para la identidad colectiva, merecen ser objeto de acciones específicas de protección y promoción.

En consecuencia, el reconocimiento de la festividad del Señor del Huerto de Atlacomulco como patrimonio cultural inmaterial del Estado de México no debe entenderse como un acto de naturaleza exclusivamente simbólica. Representa el cumplimiento de los principios establecidos por la UNESCO y la materialización de los derechos culturales reconocidos por el orden jurídico mexicano. Además, incluye el fortalecimiento de las acciones de salvaguardia encaminadas a preservar una manifestación cultural que, desde hace generaciones, forma parte del patrimonio vivo de las comunidades del Estado de México.

En el municipio de Atlacomulco, la festividad del Señor del Huerto representa una de las

[7] Ley general de Cultura y Derechos Culturales. (15-01-26). Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC.pdf

expresiones culturales de mayor arraigo y continuidad histórica. Su relevancia no puede comprenderse de manera aislada, sino como parte del proceso de conformación histórica de una comunidad cuya identidad se encuentra estrechamente vinculada con sus tradiciones religiosas y con la preservación de un patrimonio cultural construido colectivamente.

La Monografía Municipal de Atlacomulco, elaborada por Perama Colín Martínez, describe al municipio como una comunidad que combina un "pasado glorioso" y la convergencia de la cultura mazahua.[8] Asimismo, identifica las festividades religiosas entre las manifestaciones culturales más representativas del municipio, al señalar que constituyen espacios de participación social e identidad colectiva que han permanecido vigentes a través del tiempo.

En el mismo documento se da cuenta de la festividad del Señor del Huerto y se señala que "esta es la festividad de mayor importancia en el municipio y es, en su esencia, una muestra viva de las costumbres, de las tradiciones y de la fe del pueblo"[9]. Algunos medios de comunicación señalan que la tradición tiene más de 250 años de existencia[10], y que, con el paso de las generaciones, la festividad evolucionó hasta convertirse en una de las celebraciones de mayor convocatoria del norte del Estado de México. Se sabe que la fiesta principal tiene lugar durante la tercera semana del mes de septiembre. El tercer domingo es el momento culminante de una serie de actividades religiosas, culturales y comunitarias que congregan a miles de peregrinos provenientes de diversas regiones de la entidad y de estados vecinos.

En esta celebración convergen múltiples expresiones del patrimonio cultural inmaterial: la organización comunitaria, la elaboración de arreglos florales, la preparación de alimentos tradicionales, la música popular, las danzas, las peregrinaciones, las

[8] Colín, P. (2022). Monografía Municipal de Atlacomulco. Disponible en: https://atlacomulco.gob.mx/documentos/tramites/Cronista/MONOGRAFIA%20DE%20ATLACOMULCO%202022%20-%202024%20Fecha%2013%20Sep.pdf
[9] Ibid.
[10] El Universal. (01-09-24). Celebración del Señor del Huerto, tradición viva en Atlacomulco desde 1853. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/edomex/celebracion-del-senor-del-huerto-tradicion-viva-en-atlacomulco-desde-1853/

expresiones de religiosidad popular y los conocimientos organizativos que permiten la continuidad de la celebración. Cada una de estas manifestaciones constituye un mecanismo mediante el cual la comunidad transmite saberes, fortalece vínculos sociales y reafirma su identidad colectiva.

Precisamente esta capacidad para articular memoria histórica, participación social e identidad territorial explica que la festividad del Señor del Huerto reúna los elementos que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial identifica como característicos del patrimonio cultural vivo.

Su permanencia no depende exclusivamente de la conservación de un inmueble religioso o de una imagen de culto, sino de la voluntad colectiva de una comunidad que, año con año, recrea y transmite una tradición que considera parte esencial de su patrimonio cultural. Ejemplo de ello es que la festividad inicia con el cambio de ropa de la imagen del “Señor del Huerto”, la cual es donada por una familia del municipio y vuelve a renovar en “Semana Santa”, esto da cuenta de un nivel de organización social que convierte esta tradición en un principio fundamental para la conservación del tejido social.

Con base en ello, el reconocimiento de la festividad del Señor del Huerto como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México constituye una medida congruente con los principios establecidos por la UNESCO. Además, está congruente con la responsabilidad constitucional del Estado de proteger las manifestaciones culturales que fortalecen la identidad de los pueblos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Poder Legislativo del Estado de México, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación en sus términos, la presente: **INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE DECLARA LA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL SEÑOR DEL HUERTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.**

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DECRETO NÚMERO ____
LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara la Celebración Tradicional del Señor del Huerto del municipio de Atlacomulco como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, por su valor histórico, cultural y comunitario.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara de interés público y social la salvaguarda, preservación, transmisión, promoción y fortalecimiento de los saberes tradicionales, los procesos, y los valores culturales asociados a la Celebración Tradicional del Señor del Huerto del municipio de Atlacomulco.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México.

ARTÍCULO TERCERO. El H. Ayuntamiento de Atlacomulco, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad, protección, conservación, transmisión y promoción de la Celebración Tradicional del Señor del Huerto, así como la participación de las comunidades portadoras de esta tradición, conforme a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

La persona titular del Poder Ejecutivo lo tendrá por entendido, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los días _ del mes _ de dos mil veintiséis.

Toluca de Lerdo, México a ___de ------- de 2026

DIP.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

La que suscribe Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, Integrante de la LXII Legislatura Local y del Grupo Parlamentario del PT, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un texto a las fracciones X y XXIII del artículo 48, se adiciona una fracción XIV bis al artículo 96 quaterdecies, y se adiciona el artículo 121 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, con la finalidad de que se publique en la Gaceta Municipal de los once Municipios Alertados por Feminicidio y Desaparición, los montos que les fueron asignados para la atención de las Alertas de Género, así como los Planes Operativos correspondientes al tenor de la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, en su Eje 1 "Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo. Estado de Derecho y Austeridad", **reconoce que un gobierno transparente reduce significativamente las probabilidades de que ocurran hechos de corrupción dentro de la administración pública y fortalece la confianza de la población en sus autoridades**. Asimismo, establece como objetivo promover un gobierno honesto, transparente,

responsable y austero, que rinda cuentas claras mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos.

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales de todo Estado democrático, pues permiten a la ciudadanía conocer, evaluar y vigilar el ejercicio de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza en las instituciones gubernamentales y contribuyendo a la prevención de actos de corrupción.

En congruencia con dicho instrumento de planeación, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 5, párrafos 44,45 y 46 garantiza el **derecho humano de acceso a la información pública y dispone que los poderes públicos, municipios y organismos autónomos transparenten sus acciones mediante información oportuna, clara, veraz y de fácil acceso**. De igual manera, establece el principio de máxima publicidad respecto de toda información en posesión de las autoridades, así como la obligación de documentar y difundir los actos derivados del ejercicio de sus atribuciones.

Para el ejercicio fiscal 2026, **el Presupuesto de Egresos del Estado de México contempla contempla $260,000,000 (doscientos sesenta millones de pesos) para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición en los Municipios del Estado de México, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los municipios de la entidad**.

Dichos recursos representan una herramienta fundamental para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y para cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

No obstante, si bien los Mecanismos de Operación para la Ejecución de estos **recursos establecen la obligación de los Municipios de elaborar Proyectos Operativos y Anexos Técnicos que contengan la planeación, programación y aplicación de las acciones financiadas, actualmente no existe una disposición expresa que obligue a su publicación en las Gacetas Municipales.**

Lo anterior, limita la posibilidad para el ciudadano de conocer las metas, acciones, montos y resultados comprometidos por las autoridades municipales, y que están obligados a transparentar la ejecución de dichos recursos; por lo tanto, la presente Iniciativa de Ley tiene por objeto, que dichos Planes Operativos y Anexos Técnicos, así como el monto de los recursos que les han sido asignados, se publiquen en la Gaceta Municipal de cada Municipio independientemente de que lo hagan por la vía electrónica en la página oficial correspondiente.

La ausencia de mecanismos de difusión accesibles dificulta la supervisión social del ejercicio de los recursos públicos destinados a la mitigación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, restringiendo la posibilidad de que la Ciudadanía, Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivos de Mujeres, Madres Buscadoras, Victimas Directas e Indirectas de Feminicidio, Instituciones Académicas y Órganos de Control puedan

dar seguimiento oportuno a las acciones implementadas por los Ayuntamientos.

Actualmente la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su Artículo 48 establece lo siguiente:

Artículo 48.- La persona titular de la presidencia municipal tiene las siguientes atribuciones:

X. "Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos;"

XIII."Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, ***unidades administrativas*** y organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura administrativa;"

Respecto a las Dependencias Administrativas en los Ayuntamientos el ordenamiento jurídico de referencia señala lo siguiente:

Artículo 87.- Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias:

Fracción IX. "La Dirección de las Mujeres o equivalente".

Así mismo, el **Articulo 96 Quaterdecies** de la misma Ley, faculta la creación de la Dirección de las Mujeres o su equivalente para cada Ayuntamiento, señalando como atribución en la fracción XIII qué a través de su titular, deberá fungir como coordinadora para el seguimiento, cumplimiento y evaluación de las acciones para mitigar las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Por otra parte, la fracción XVI del mismo numeral señala que tendrá como atribución coordinar la transversalización de la perspectiva de Género en la Administración Pública Municipal.

Considerando que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 se destinaron 260 millones de pesos para fortalecer las acciones encaminadas a mitigar las Alertas de Género por Feminicidio y Desaparición en los once Municipios de la entidad, y toda vez que ya se dio inicio a la dispersión de dichos recursos, es importante que se transparenten los gastos en su ejecución, publicando en la Gaceta Municipal de cada Municipio los montos que les han sido asignados, así como los Planes Operativos correspondientes, con la finalidad de que se pueda realizar un seguimiento de los logros alcanzados así como para dar certeza y certidumbre jurídica de su aplicación, tal como lo señala el Acuerdo de la Secretaría de las Mujeres por el que se establecen los Mecanismos de Operación para la Ejecución de los Recursos asignados para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición en Municipios del estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2026 publicado en la Gaceta del Gobierno el 26 de febrero de 2026.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Órgano Legislativo, la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un texto a las fracciones X y XXIII del artículo 48, se adiciona una fracción XIV bis al artículo 96 quaterdecies, y se adiciona el artículo 121 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, con la finalidad de que se publique en la Gaceta Municipal de los once Municipios Alertados por Feminicidio y Desaparición, los montos que les fueron asignados para la atención de las Alertas de Género, así como los Planes Operativos correspondientes.**

A T E N T A M E N T E

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO MUMERO

LA H. "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO

DECRETA:

UNICO. – Se adiciona un texto a las fracciones X y XXIII del artículo 48, se adiciona una fracción XIV bis al artículo 96 quaterdecies, y se adiciona el artículo 121 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:

Artículo 48.- La persona Titular de la Presidencia Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

I a la IX ...

X. Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos; ***para el caso de que el Municipio cuente con Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y/o Desaparición o ambas, deberá publicar en la Gaceta Municipal los montos que les fueron asignados para la atención de las Alertas de Género, así como los Planes Operativos correspondientes.***

XI a la XXII ...

XXIII. Rendir un informe anual sobre el cumplimiento de su Programa Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; ***para el caso de que el Municipio cuente con Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y/o***

Desaparición o ambas, deberá publicar en la Gaceta Municipal los montos que les fueron asignados para la atención de las Alertas de Género, así como los Planes Operativos correspondientes.

XXIV a XXVI ...

Artículo 96 quaterdecies. La Dirección de las Mujeres, tiene las siguientes atribuciones:

I a la XIV...

XIV bis.- ***Para el caso de que el Municipio cuente con Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y/o Desaparición o ambas, deberá realizar las gestiones necesarias para publicar en la Gaceta Municipal los montos que les fueron asignados para la atención de las Alertas de Género, así como los Planes Operativos correspondientes.***

XV a la XVIII. ...

Artículo 121 bis. Los Ayuntamientos de los Municipios que cuenten con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y/o Desaparición o ambas, estarán obligados a:

I. Publicar en la Gaceta Municipal y en sus medios electrónicos oficiales los Proyectos Operativos y Anexos Técnicos elaborados para la atención de dichas alertas;
II. Difundir información relativa al ejercicio de los recursos públicos asignados, incluyendo montos, acciones ejecutadas, beneficiarios y resultados;

III. Garantizar que la información publicada sea clara, veraz, oportuna y de fácil acceso para la ciudadanía;

IV. Actualizar de manera periódica la información sobre los avances, seguimiento y evaluación para la mitigación de las Alertas de Género; y

V. Coordinarse con las autoridades estatales para asegurar el cumplimiento de objetivos en materia de transparencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

TERCERO. Los Ayuntamientos de los Municipios que cuenten con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y/o Desaparición o ambas, contarán con un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para publicar en su Gaceta Municipal para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca de Lerdo Capital del Estado de México a los ____días del mes de _____del año 2026.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".
Dip. Isaac Josué Hernández Méndez
DTTO. XV IXTLAHUACA DE RAYÓN

Toluca de Lerdo, México; a 02 de Septiembre 2026.

DIPUTADA MARTHA AZUCENA CAMACHO REYNOSO PRESIDENTA DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

P R E S E N T E

Quien suscribe **LIC. ISAAC JOSÚE HERNÁNDEZ MÉNDEZ** diputado integrante del **GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO** en la LXII Legislatura del Estado de México; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como los artículos 28, fracción I de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México; y los artículos 68 y 69 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO.**

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de México, que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la protección de la salud de las personas que viven con lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes, mediante la definición de acciones de prevención, atención integral, control y seguimiento como parte de las políticas públicas de salud en el Estado de México.

Asimismo, propone establecer medidas orientadas a garantizar su detección oportuna, tratamiento integral y acceso equitativo a los servicios de salud, así como promover acciones de concientización social. Se reconoce que estas enfermedades afectan de manera desproporcionada a las mujeres, han sido históricamente invisibilizadas y generan impactos significativos en la calidad de vida de quienes las padecen, sin distinción de edad, condición social o región.

De igual forma, se incorporan principios de igualdad y no discriminación como ejes transversales de la ley, con el fin de fortalecer la inclusión y la igualdad de trato hacia las personas que viven con enfermedades autoinmunes, reconociéndolas como condiciones de salud crónicas que requieren atención prioritaria.

Por ello, se considera crucial concientizar a la ciudadanía sobre sus implicaciones, promover la no discriminación hacia quienes las padecen y fortalecer el sistema de salud estatal mediante acciones como la detección temprana, la mejora de los servicios y la formación especializada del personal médico, con el objetivo de garantizar una atención digna, oportuna y con enfoque de derechos humanos.

El lupus es una enfermedad autoinmune compleja, crónico degenerativa e incurable, multisistémica y ataca de manera indistinta a quien la padece. Es potencialmente mortal si no se cuenta con acceso a tratamientos, servicios médicos

adecuados de forma oportuna. La prevalencia aproximada en la Región Latinoamericana es de 20/70 personas por cada 100 mil habitantes,[i] en dónde 9 de cada 10 personas que la padecen son mujeres, suele presentarse en la edad reproductiva, de los 15 a los 45 años de edad[ii] y uno de los mayores retos en nuestro país es el diagnóstico tardío que puede llegar a ser de hasta seis años,[iii] razón por la cual es un padecimiento considerado raro y difícil de diagnosticar, pues tiene más de 100 manifestaciones clínicas diferentes y más de 100 distintas manifestaciones serológicas en el laboratorio, lo que la convierte en la enfermedad la más heterogénea y más compleja dentro de las autoinmunes sistémicas.[iv] En el lupus el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos de manera impredecible, causando inflamación y daños diversos. Puede afectar a distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. Más de la mitad de las personas que la padecen desarrollan daño permanente en diferentes órganos y sistemas.

Las investigaciones mundiales más recientes indican que puede resultar de la interacción de factores genéticos, hormonales y ambientales, pero aún no se sabe con certeza cuál es su origen. Aunque esta enfermedad no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlarla y mejoran la calidad de vida de quien la padece.

La Fundación Americana de Lupus (LFA, por sus siglas en inglés) señala cuatro tipos de lupus:[v]

- El **lupus sistémico eritematoso (LES)** representa el 70% de todos los casos de lupus. En aproximadamente la mitad de estos casos, un órgano o tejido importante en el cuerpo, como el corazón, pulmones, riñones o el cerebro, se verá afectado;

- El **lupus cutáneo** (que afecta solo a la piel) representa aproximadamente el 10% de todos los casos de lupus;
- El **lupus inducido por medicamentos** representa alrededor del 10% de todos los casos de lupus y es causado por altas dosis de ciertos medicamentos. Los síntomas del lupus inducido por fármacos son similares a los del LES; generalmente desaparecen cuando se suspenden los medicamentos; y
- El **lupus neonatal** es una afección rara en la que los anticuerpos de la madre afectan al feto. Al nacer, el bebé puede tener una erupción cutánea, problemas hepáticos o recuentos sanguíneos bajos, los síntomas generalmente desaparecen por completo después de seis meses, sin efectos duraderos.

De estas categorías, el LES, el más grave, presenta síntomas como la debilidad, la anorexia y fiebre, dolor articular, agotamiento constante que no se debe a ningún proceso infeccioso. Sin embargo, no todos los pacientes con lupus tienen los mismos síntomas, además de que no existe ninguna prueba de laboratorio que permita, por si sola, hacer el diagnóstico. Según el órgano atacado, el lupus puede ser leve, moderado o severo.[vi] Esto puede presentarse tanto al inicio como en el desarrollo de la enfermedad.[vii] Aproximadamente el 90 por ciento de los pacientes tienen dolor e inflamación de las articulaciones (artritis), siendo los más afectados los dedos de las manos, muñecas, codos y rodillas, acompañados de rigidez articular por las mañanas. Además, aparecen lesiones internas y externas a la piel en cualquier parte del cuerpo.

El LES puede causar daño renal y neurológico grave, siendo la insuficiencia renal una de las principales causas de muerte en personas que padecen lupus. Esta lesión aumenta la urea en sangre, y aparecen proteínas o sangre en la orina, siendo asintomática y manifestándose en algunas ocasiones como cansancio o subida de la tensión arterial.[viii] Cuando el lupus afecta el cerebro, pueden presentarse dolores de cabeza, mareos, cambios en el comportamiento, problemas de la vista,

accidentes cerebrovasculares o convulsiones; problemas de memoria y dificultad para expresar pensamientos.[ix]

Por otro lado, las personas con lupus eritematoso sistémico presentan una alta sensibilidad a la radiación ultravioleta, lo que puede desencadenar brotes de la enfermedad.[x] Por ello, se recomienda el uso diario de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior. Sin embargo, el costo elevado de estos productos representa una carga económica significativa para los pacientes, ya que no están cubiertos por la seguridad social.[xi]

Es fundamental destacar que el lupus no es exclusivo de adultos; aproximadamente entre el 20% y el 30% de los pacientes presentan la enfermedad desde la infancia y suelen tener familiares afectados, con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años.[xii] [xiii] Si bien frecuentemente es englobado dentro de la categoría de LES, la sociedad, Aunque a menudo se clasifica como LES, tanto la Sociedad Americana de Reumatología como la Liga Europea contra el Reumatismo diferencian el LES juvenil o de inicio en la infancia (cLES) del LES en adultos. Esto se debe a los retos diagnósticos y terapéuticos particulares derivados de las necesidades infantiles, así como a factores geográficos, terapéuticos y sistemas de salud específico.[xiv]

En Latinoamérica, los niños con LES experimentan una incidencia entre 2.5 y 6 veces mayor en poblaciones indígenas e hispanas en comparación con grupos caucásicos. Además, este aumento está acompañado de manifestaciones más graves, con mayor afectación renal y del sistema nervioso central que en adultos.[xv] [xvi]A esto se suma la escasez de reumatólogos pediátricos: en México, de los 1002 reumatólogos certificados en 2020, solo 94 eran pediátricos, y de ellos, 41 estaban localizados en la Ciudad de México. Esta disparidad limita el acceso de los pacientes infantiles a especialistas adecuados,[xvii] lo que retrasa el diagnóstico y manejo, incrementando comorbilidades, mortalidad y dificultando su transición hacia

la vida adulta. Contar con especialistas capacitados disponibilidad de recursos permite un diagnóstico oportuno, un manejo adecuado y la reducción de complicaciones, mejorando así la calidad de vida y el pronóstico de los niños afectados por LES. Por ello, es fundamental fortalecer la detección temprana, la formación en reumatología pediátrica, garantizar el acceso equitativo a estos profesionales en todo México en especial en el sector público.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el lupus eritematoso sistémico como "una enfermedad crónica, progresiva y multisistémica" en su publicación "Enfermedades Reumáticas".[xviii] Por otra parte, y en concordancia con la gravedad de la situación de las personas que viven con Lupus, la Federación Mundial del Lupus (WLF, por sus siglas en inglés) promueve desde el 2005, el Día Mundial del Lupus cada 10 de mayo para concienciar sobre esta enfermedad, establecido en el VII Congreso Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico y otras Enfermedades Relacionadas, en la ciudad de Nueva York.[xix] En ese marco, en México y en diversas entidades del país, desde el 2015 se celebran caminatas, marchas y actividades de visibilizarían sobre las necesidades de quienes viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes.[xx]

Uno de los problemas más serios en México y en las entidades en torno al lupus y a otras enfermedades autoinmunes, es la ausencia de un censo nacional y de censos estatales. Aun cuando en el 2019 nació el Registro Mexicano de Lupus (LupusRGMX),[xxi] en el **Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano (LIIGH-UNAM)**, con el objetivo de recabar información clínica, genómica y sociodemográfica de personas con la enfermedad, es vital recalcar que este proyecto busca las cualidades genómicas de la población mexicana con lupus, sin embargo, no es un programa nacional de registro censal. A la ausencia de un conteo de la población nacional con lupus desde el Estado Mexicano, se suma la inexistencia de un marco jurídico relativo al lupus y otras enfermedades

autoinmunes, como en otros países europeos o latinoamericanos. Esto genera un severo subregistro de personas diagnosticadas.

En México se han dado avances significativos en materia de reconocimiento de derechos de las personas que viven con lupus. Un ejemplo de ello es el Estado de Puebla, donde el **15 de septiembre de 2025 se aprobó una iniciativa local en favor de las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes**,[xxii] lo cual sienta un precedente nacional para que otras entidades federativas asuman compromisos similares. En el ámbito internacional, encontramos también referentes importantes: **Argentina** cuenta con las Leyes **No. 24.901 y No. 23.661,** que reglamentan la normativa para la certificación de discapacidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES); **Chile** reconoce a las personas con lupus en los regímenes especiales de **Garantías Explícitas en Salud (GES)** y en la **Ley Ricarte Soto**; mientras que en **España,** la Ley General de la Seguridad Social contempla la incapacidad laboral por lupus.[xxiii] Todos estos marcos normativos han permitido a dichos países establecer **garantías concretas que van desde pensiones y cobertura de tratamientos de alto costo, hasta descuentos en transporte y apoyos familiares,** con lo cual se asegura una mejor calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

En este marco, el movimiento iniciado desde que en el Senado de la República, la senadora Amalia García Medina y el Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (Cetlu) Cetlu, impulsaron la iniciativa conocida como #LeyLupus, bajo el nombre: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de lupus y otras enfermedades autoinmunes, publicada en la Gaceta del Senado el 20 de noviembre de 2024[xxiv].

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

Desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, la **Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus (Limdeplu),** creada y coordinada por Cetlu, ha presentado iniciativas estatales y exhortos en 10 entidades: Puebla y Morelos (aprobadas por unanimidad), Tlaxcala, Sinaloa, Michoacán, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, Tabasco y Quintana Roo. En Baja California, además, se presentó una iniciativa y un exhorto para destinar recursos en el presupuesto estatal hacia la atención integral de personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes, mientras que en Coahuila, se presentó un exhorto y se está impulsando el proyecto de iniciativa. Estos ejemplos reflejan el crecimiento de un movimiento legislativo plural en torno a esta causa.

Este movimiento, es derivado de la iniciativa federal, la cual tiene la finalidad de establecer un marco legal para la atención de las personas con lupus, a fin de mejorar su calidad de vida. Dicha iniciativa propone incorporar a la Ley General de Salud un nuevo capítulo denominado "Enfermedades Autoinmunes y Lupus", a fin de establecer que el Estado en los órdenes de gobierno Federal y Estatales, realicen actividades de prevención y control de las enfermedades autoinmunes, así como para crear el Censo Nacional del Lupus.

Panorama nacional e internacional

El lupus eritematoso sistémico (LES) es el prototipo de enfermedad autoinmune crónica, multisistémica y de difícil diagnóstico. A nivel mundial, afecta a más de **5 millones de personas**, siendo una de las afecciones autoinmunes más complejas, invisibles y desatendidas dentro de los sistemas de salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025), existen entre **80 y 100 enfermedades autoinmunes** reconocidas, muchas de las cuales coexisten con el lupus, como la fibromialgia, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide o la

esclerosis múltiple, entre muchas otras. Esta condición, conocida como **síndrome de superposición**, agrava el diagnóstico y el tratamiento.

- **9 de cada 10 personas con lupus son mujeres**, especialmente en edad reproductiva.
- Presenta un **amplio espectro clínico multivariado** y puede atacar simultáneamente diversos órganos como riñones, pulmones, corazón, sistema nervioso central, piel y articulaciones.
- Existen **más de 100 manifestaciones clínicas y serológicas documentadas** (Pons-Estel, 2023), lo que impide establecer un perfil único de la enfermedad.
- Su naturaleza fluctuante y variable la convierte en una enfermedad **invisible e invisibilizada**, tanto para médicos como para instituciones.

En América Latina, la prevalencia del lupus eritematoso sistémico se estima entre 20 y 70 casos por cada 100 000 habitantes, siendo las mujeres el 90 % de los casos, especialmente en edad reproductiva.[xxv] La complejidad diagnóstica y la escasez de especialistas agravan la desigualdad en la atención: en México se registran alrededor de 1 100 reumatólogos activos, de los cuales apenas 100 se especializan en reumatología pediátrica, cifra inferior a la recomendación de la OMS de al menos un especialista por cada 100 000 habitantes.[xxvi] En ese marco, en México existe además una **distribución desigual y deficitaria de médicos reumatólogos,** concentrada principalmente en las entidades federativas de **Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco,** lo que genera una marcada **inequidad regional** en la atención de enfermedades reumatológicas.[xxvii] Asimismo, la **formación y recertificación de especialistas** continúa siendo limitada y que persisten **grandes brechas en cobertura,** afectando particularmente a los estados del sur y del centro del país, donde la falta de acceso a atención especializada **dificulta el diagnóstico**

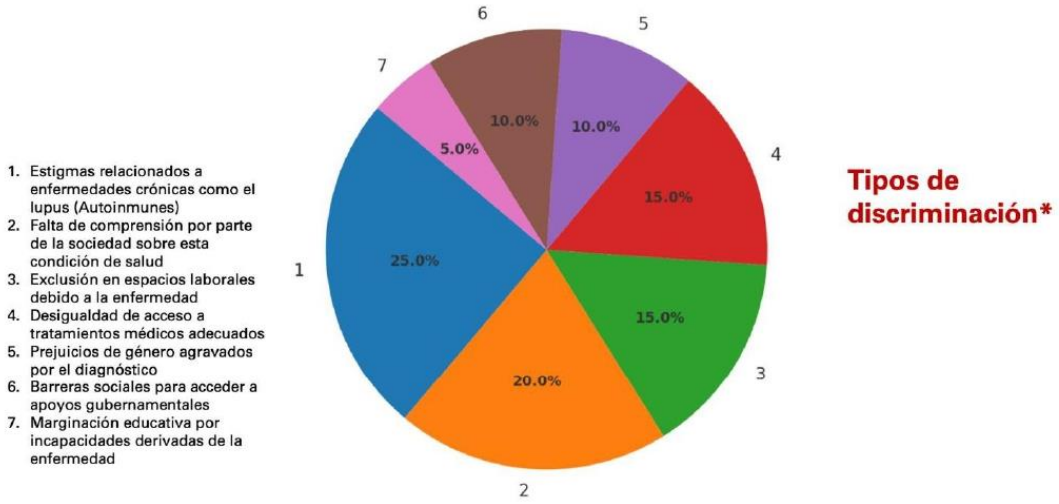
temprano y el tratamiento oportuno de enfermedades autoinmunes como el **lupus eritematoso es limitada.** El mayor reto es el diagnóstico oportuno, subregistro y escasez de especialistas.

- A pesar de su impacto, el lupus **no cuenta con un censo nacional ni estatal.**
- Las estimaciones varían entre **4 y 250 casos por cada 100 mil habitantes** (Amigo, 2024), o **20 por cada 100 mil habitantes (LupusRgMX, 2023).**
- México cuenta con poco más de **1,100 reumatólogos certificados para todo el país,** muy debajo de la recomendación de la OMS (1/100 mil habs.) (ColMexReuma, 2024).
- El acceso a diagnóstico oportuno es limitado: **el tiempo promedio para recibir un diagnóstico en México puede superar los 6 años** (Cardiel, 2023).

Urgencia sanitaria

El análisis de las más de treinta y un mil firmas recabadas en apoyo a la presente iniciativa permite identificar patrones consistentes de discriminación y exclusión que enfrentan las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes. De acuerdo con los resultados, de los diagnósticos participativos realizados por el Cetlu en octubre de 2025, a través de una encuesta en línea con preguntas abiertas, se permite observar un panorama de **vulnerabilidad y subatención** (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Tipos de discriminación señalada por las personas con lupus encuestadas



Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de más de treinta y un mil firmas recabadas en apoyo a la iniciativa Ley Lupus, y en los diagnósticos participativos realizados por el Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A. C. (CETLU), mediante encuesta en línea, octubre de 2025.

El 25 % de las personas señaló estigmas asociados a las enfermedades crónicas como la principal forma de discriminación, seguido de la falta de comprensión social (20 %) y la exclusión en espacios laborales (15 %). Asimismo, el 15 % reportó desigualdad en el acceso a tratamientos médicos adecuados, mientras que el 10 % manifestó haber enfrentado prejuicios de género vinculados al diagnóstico y otro 10 % barreras para acceder a apoyos gubernamentales. Finalmente, el 5 % identificó experiencias de marginación educativa derivadas de las limitaciones físicas ocasionadas por la enfermedad. Estos datos evidencian que la discriminación no se limita al ámbito sanitario, sino que atraviesa de manera estructural los espacios laborales, educativos, sociales e institucionales, afectando el ejercicio pleno de derechos y reforzando la necesidad de un marco normativo que garantice atención

integral, igualdad de trato y mecanismos efectivos de protección. De ahí, además, se desprenden problemáticas percibidas por las mujeres que viven con enfermedades autoinmunes que respondieron (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Principales problemáticas percibidas por mujeres con enfermedades autoinmunes

Categoría	Testimonios y observaciones principales
Invisibilidad y desconocimiento	"No hay instancias en donde den a conocer más sobre esta enfermedad." "Existen personas desinformadas." Varias respuestas señalan la escasez de espacios institucionales para informar, la invisibilización social y desconocimiento generalizado del lupus.
Discriminación en el sistema de salud	Se perciben actitudes de desdén y estigmatización por parte de personal médico, quienes tienden a minimizar los síntomas o atribuirlos a exageración, negando acceso a tratamientos o incapacidades.
Escasez de especialistas y medicamentos	"Se necesita más apoyo médico inmediato y atención." En la capital del estado se identifica falta de reumatólogos especializados, además de frecuentes desabastos de medicamentos y trabas administrativas. Problema central: Atención tardía, limitada o inaccesible.
Impacto familiar del diagnóstico	El lupus afecta directamente a núcleos familiares: "Tengo familia con el diagnóstico." "Mi hija acaba de ser diagnosticada." "Debemos viajar a Ciudad de México para ser atendidas". Problema central: Carga emocional, económica y de cuidados en el entorno familiar.

Fuente: Elaboración propia con base en el diagnóstico participativo realizado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (Cetlu) en octubre de 2025. La información proviene de testimonios de dos mujeres residentes en Baja California Sur y fue sistematizada en categorías temáticas de análisis cualitativo. **Metodología:** Instrumento: Formulario digital de apoyo ciudadano. **Periodo de levantamiento:** 2024–2026. **Población analizada:** Personas residentes en Estado de México. **Tipo de información:** Datos sociodemográficos básicos, condición de salud y motivaciones para el apoyo. El análisis se centra exclusivamente en los registros correspondientes al Estado de México.

Como se observa, las participantes enfatizan tres dimensiones críticas: la **invisibilidad social y médica de las enfermedades autoinmunes, el trato discriminatorio dentro del sistema de salud, y la escasez de especialistas y medicamentos, además del impacto emocional y económico que implica la enfermedad en las familias.** A pesar del contexto adverso, ambas refieren la existencia de redes de acompañamiento que surgen como un espacio de contención emocional y de fortalecimiento comunitario. Estos hallazgos cualitativos reflejan no sólo carencias estructurales en la atención reumatológica, sino también la urgencia de incorporar perspectivas de género, empatía clínica y políticas públicas que garanticen acceso equitativo y trato digno.

Aunado a ello, otro de los problemas graves a nivel nacional y en las entidades, es el subdiagnóstico y el diagnóstico tardío.

El panorama en Estado de México

Para la construcción del panorama en Estado de México, se implementaron dos encuestas en línea que permitieron hacer una consulta digital de los principales elementos que constituyen la problemática local. Dichas encuestas, lanzadas con apoyo de organizaciones locales, permitieron recuperar las siguientes

preocupaciones de las personas que viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes en esa entidad:

Tabla 3. Principales preocupaciones de las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en Estado de México

Principales preocupaciones	Descripción – Eje
Falta de diagnóstico oportuno	Se reiteran experiencias de diagnósticos tardíos, años de incertidumbre y errores médicos. Las personas describen trayectorias largas antes de nombrar la enfermedad, lo que agrava su condición.
Desabasto y alto costo de medicamentos	Aparece de forma constante la preocupación por la falta de medicamentos en instituciones públicas y el alto costo de tratamientos, especialmente biológicos, que genera endeudamiento o abandono terapéutico.
Falta de atención médica especializada	Se señala escasez de reumatólogos y atención fragmentada. El sistema de salud es percibido como insuficiente para atender una enfermedad compleja y crónica.
Desconocimiento social y médico del lupus	Se menciona falta de información en personal de salud, familias y sociedad. Esto se traduce en minimización de síntomas y falta de comprensión del padecimiento.
Invisibilidad de la enfermedad	Al no ser siempre visible, las personas reportan necesidad constante de justificar su dolor, fatiga o limitaciones, lo que genera desgaste emocional.

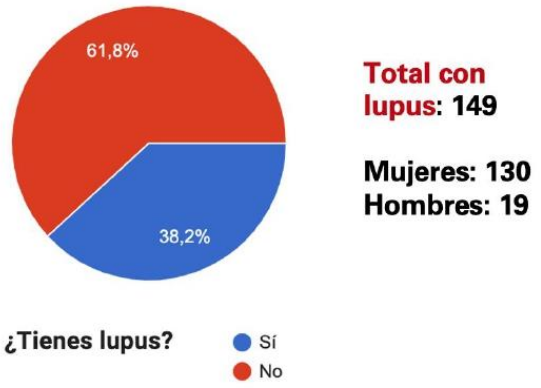
Principales preocupaciones	Descripción – Eje
Discriminación laboral	Se reportan despidos, dificultades para mantener empleo y falta de comprensión de incapacidades. El lupus impacta directamente en la estabilidad laboral.
Impacto económico	El padecimiento se asocia con empobrecimiento progresivo por gastos médicos, transporte y pérdida de ingresos. Se vive como carga económica familiar.
Falta de reconocimiento legal	Se demanda el reconocimiento del lupus como enfermedad incapacitante y acceso a derechos: pensiones, incapacidades, cobertura integral y políticas públicas específicas.
Trato médico deshumanizado	Algunos testimonios refieren desinterés, poca escucha o maltrato en consultas, generando desconfianza hacia el sistema de salud.
Afectaciones emocionales y sociales	Se mencionan depresión, ansiedad, miedo al futuro y sensación de soledad. La enfermedad impacta la vida social y afectiva.
Necesidad de información y sensibilización	Se demanda mayor difusión para reducir estigmas, favorecer diagnósticos tempranos y generar comprensión en espacios laborales, educativos y familiares.
Sentido de colectividad y acción	Muchas respuestas expresan apoyo a la iniciativa como acto de solidaridad, esperanza y construcción colectiva para lograr cambios estructurales y reconocimiento de derechos.

Fuente: Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (2024–2025). Encuesta - (Noviembre 2024 a febrero 2026) [Formulario de encuesta]. Cetlu.

Como se observa en la Tabla 3. Principales preocupaciones de las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en Estado de México, los resultados de la encuesta aplicada entre noviembre de 2024 y febrero de 2026 evidencian una serie de problemáticas estructurales y persistentes en la vida de quienes viven con estas condiciones. Destacan la falta de atención médica especializada, el desabasto y alto costo de medicamentos, así como diagnósticos tardíos asociados al desconocimiento médico en el primer nivel de atención. A ello se suman experiencias de discriminación laboral, invisibilización de la enfermedad y trato médico deshumanizado, que profundizan el impacto económico, emocional y social del padecimiento. Asimismo, las personas participantes señalan la urgencia de reconocimiento legal, acceso a apoyos y mayor información y sensibilización social, elementos considerados indispensables para mejorar la calidad de vida y el ejercicio pleno de derechos en el estado.

En este mismo periodo, el ejercicio de consulta y movilización comunitaria muestra también un proceso activo de organización e incidencia: 723 personas firmaron su apoyo a la iniciativa Ley Lupus y Autoinmunes Estado de México, de las cuales 149 viven con lupus (130 mujeres y 19 hombres), lo que refleja tanto la presencia significativa de personas directamente afectadas como la solidaridad de redes familiares y sociales (Ver gráfico 4). Este panorama permite observar no sólo la magnitud de las dificultades cotidianas asociadas a la enfermedad, sino también la emergencia de una ciudadanía organizada que demanda reconocimiento, atención integral y políticas públicas específicas para las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en el estado.

Gráfico 4. Personas con lupus que firmaron su apoyo en Estado de México



Fuente: Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (2024–2025). Encuesta - (Noviembre 2024 a febrero 2026) [Formulario de encuesta]. Cetlu.

En este marco, las personas que respondieron esta encuesta y las subsecuentes, muestran el patrón común: las enfermedades autoinmunes vienen una tras otra. Así, con el lupus, la enfermedad autoinmune por excelencia, vienen otras como la artritis, hipotiroidismo, artrosis y otras más que atacan de manera indistinta al organismo cuando se carece de tratamiento y acompañamiento médico adecuado. Las enfermedades autoinmunes constituyen un conjunto amplio y complejo de padecimientos crónicos que incluyen no sólo el lupus eritematoso sistémico, sino también artritis reumatoide, esclerosis múltiple, síndrome de Sjögren, tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1 y otras más de carácter multisistémico, neurológico, endocrino, gastrointestinal y hematológico, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones médicas internacionales. En este sentido, la iniciativa de Ley por los derechos de las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en Estado de México se sustenta en una visión integral de salud pública que reconoce la coexistencia de múltiples diagnósticos autoinmunes y la necesidad de políticas específicas de atención, detección oportuna, investigación y no discriminación.

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

Los datos aquí presentados derivan del **Diagnóstico social nacional Lupus y otras enfermedades autoinmunes en México Cetlu 2025-2026**, instrumento respondido por **569 personas a nivel nacional**, de las cuales **65 corresponden al estado de Estado de México**, lo que permite delinear un primer panorama territorial de las condiciones de vida, atención médica y reconocimiento social de quienes viven con estas enfermedades. Dentro de las respuestas provenientes de Estado de México, se identifican casos en los que el lupus se presenta junto con otras enfermedades autoinmunes, 19 personas señalan tener artritis reumatoide, y además, quienes firman reportan tener otras enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias, fibromialgia y espondilitis anquilosante, lo que confirma la coexistencia diagnóstica y la necesidad de una legislación que contemple de explícitamente este conjunto de padecimientos y sus interrelaciones clínicas, sociales y económicas.

Tabla 4. Impactos laborales de las personas con artritis y lupus en Estado de México

Impacto laboral y económico	
Dificultad para trabajar	Las personas reportan limitaciones físicas y agotamiento que afectan la continuidad laboral y la estabilidad económica.
Necesidad de seguro o ayuda familiar	Se depende de redes familiares o seguros médicos para sostener tratamientos y gastos cotidianos.
Compra de medicamentos por cuenta propia	Ante el desabasto o cobertura parcial, se adquieren medicamentos con recursos propios.

Impacto laboral y económico	
Dependencia parcial de IMSS o donaciones	Se combinan servicios públicos de salud con donaciones o apoyos externos para continuar el tratamiento.
Impacto estructural	La artritis asociada al lupus incrementa la carga económica y la vulnerabilidad laboral de las personas afectadas.

Fuente: Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (Cetlu). *Diagnóstico social nacional Lupus y otras enfermedades autoinmunes en México Cetlu 2025-2026*. Respuestas correspondientes al estado de Estado de México.

En el Estado de México, las personas que viven con lupus y artritis describen una experiencia marcada por dolor articular intenso, inflamación persistente, agotamiento crónico y pérdida progresiva de movilidad. La coexistencia de ambas enfermedades profundiza el impacto emocional, laboral y económico, generando miedo, ansiedad y dependencia parcial de sistemas de seguridad social o redes familiares. La artritis asociada al lupus no aparece como un diagnóstico secundario menor, sino como un factor que incrementa la discapacidad funcional y la carga cotidiana del padecimiento.

Finalmente, en concordancia con la iniciativa federal presentada en noviembre de 2024 ante el Senado de la República por Cetlu-Limdeplu, la **Iniciativa de Ley Lupus y Autoinmunes Estado de México (noviembre de 2025)** busca establecer un marco estatal que garantice el **censo digital de personas con estas enfermedades,** la **no discriminación**, la **detección oportuna,** la **formación del personal de salud**, el **acceso efectivo a tratamientos y atención integral,** así

como acciones permanentes de **visibilidad y divulgación**, incluyendo la instauración de **una semana estatal de sensibilización en la segunda semana de mayo de cada año.** Asimismo, incorpora de manera explícita una **perspectiva de género**, reconociendo el impacto diferenciado de estas enfermedades en mujeres y la necesidad de políticas públicas específicas que atiendan dicha realidad.

Tabla 5. Comparativo Incoativas Senado y Estado de México

Iniciativa federal	**Puntos clave**
Ley Lupus y Autoinmunes **Noviembre de 2024** Cetlu-Limdeplu **Senado de la República**	**Censo** **No discriminación** Formación |Detección oportuna Accesibilidad |Investigación
Ley Lupus y autoinmunes **Estado de México** Cetlu-Limdeplu-Lupus y Somos Valientes Toluca **Congreso Local**	**Una semana de visibilización estatal en mayo** Segunda semana de mayo de cada año Censo digital | No discriminación Detección oportuna | Formación Acceso a tratamientos y atención Visibilidad y divulgación Cruzada por el tema de género

Fuente: Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (Cetlu).

Tanto la iniciativa federal presentada ante el Senado de la República como la iniciativa de Ley Lupus y Autoinmunes en Estado de México buscan armonizar y fortalecer el marco jurídico existente mediante reformas a la **Ley General de Salud** y a la **Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación**, con el fin de garantizar atención integral, detección oportuna, acceso a tratamientos y no discriminación para las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes. De manera concordante, las propuestas estatales contemplan la adecuación de sus

leyes locales de salud y de sus **leyes estatales para prevenir y eliminar la discriminación,** a fin de asegurar la protección efectiva de derechos, la generación de registros y políticas públicas específicas en Estado de México y en las demás entidades federativas.

Respaldo nacional y necesidades en formación médica

En concordancia con la iniciativa federal presentada en noviembre de 2024 ante el Senado de la República, estructurada por el Cetlu, que ha contado con el respaldo de diversas asociaciones, grupos y sociedad interesada en la enfermedad de todo el país, también propone reformar Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de prevenir la discriminación a personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en los ámbitos laborales y sociales. Esto debido a que la condición de quienes la padecen, deriva en una espiral de violencias traducidas en la escasez de medicamentos, información, servicios de salud, tratamientos, servicios de laboratorio y médicos especializados tanto en el primer nivel de atención, cuya función principal es la **prevención, detección temprana y tratamiento de enfermedades,**[xxviii] **como en la** atención especializada de hospitales generales o regionales, e incluso en los del tercer nivel de alta especialidad.

A raíz de ello, el **Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C.**, convocó y formó la **Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus (Limdeplu),** una red nacional que articula a colectivos y grupos de incidencia en 31 estados del país con el objetivo de impulsar iniciativas de ley en los congresos locales. **En el caso del Estado de México** 723 **personas han firmado de apoyo a la iniciativa Ley Lupus y Autoinmunes, de las cuales, 130 son mujeres con lupus y otras enfermedades autoinmunes.** La articulación se encuentra representada por **Cetlu** y la asociación **Red de Apoyo Somos Valientes Toluca,** así como sociedad solidaria, quienes de manera conjunta conforman el grupo encargado de promover, difundir y acompañar esta iniciativa de ley.

Somos Valientes Toluca es una red de apoyo creada el 17 de mayo de 2023 en Toluca, Estado de México, con el propósito de acompañar a personas con lupus, así como a sus familiares y cuidadores. Surge ante la necesidad de contar con un espacio seguro donde se brinde apoyo emocional, información confiable y herramientas prácticas para enfrentar esta enfermedad. Su misión es fortalecer una comunidad solidaria que promueva la comprensión, la aceptación y el bienestar integral, trabajando de la mano con profesionales de la salud y la sociedad para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos con lupus. Actualmente cuenta con 85, entre personas con lupus, familiares y médicos.

En el caso del estado de México, la situación del lupus y de las enfermedades autoinmunes aún refleja múltiples retos estructurales y sociales, por ejemplo, aunque en algunos municipios existe cobertura parcial de medicamentos, la atención es insuficiente y desigual centralizada en su capital.

Por ejemplo, hasta 2025, el Colegio Mexicano de Reumatología reporta **54 reumatólogos en atención de adultos y 4 en atención pediátrica**,[xxix] lo que evidencia la limitada disponibilidad de atención especializada, particularmente para niñas, niños y adolescentes. Esto implica que las posibilidades de atención y detección disminuyan generando barreras de acceso para las comunidades alejadas de la capital, así como que la atención respectiva esté siendo brindada por médicos generales o internistas.[xxx]

Aunado a ello, y considerando que el lupus eritematoso sistémico afecta predominantemente a mujeres (con una razón aproximada de 9:1 respecto de los hombres), en el Estado de México residen aproximadamente 8.7 millones de mujeres, de las cuales cerca de 4.5 millones se encuentran en edad reproductiva (INEGI-CONAPO, estimaciones 2020–2025). En ese contexto, y tomando como referencia el rango de prevalencia estimado para el lupus eritematoso sistémico de 20 a 70 casos por cada 100,000 habitantes, [xxxi] el Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A. C. (Cetlu) estima que entre 1,740 y 6,090 mujeres que viven en el Estado de México

podrían cursar con lupus eritematoso sistémico. [xxxii] Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer medidas normativas orientadas a la atención integral, oportuna y continua de las personas que viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes en la entidad.

Estos datos evidencian un **reto específico en materia de salud reproductiva y de género**, ya que la enfermedad afecta principalmente a **mujeres jóvenes y adultas en etapas de alta demanda social y económica**, con consecuencias que trascienden el ámbito clínico e impactan su **vida personal, laboral y comunitaria.** La falta de servicios especializados en el estado agrava la vulnerabilidad de este grupo, al limitar el acceso a diagnóstico, control médico y acompañamiento integral (ver **Tabla 5**).

Tabla 5. Casos estimados en mujeres en edad reproductiva en Estado de México

Escenario	Casos estimados en mujeres (≈ 85 %)	Mujeres en edad reproductiva (≈)
Prevalencia baja (20/100,000)	1,740	4,500,000
Prevalencia alta (70/100,000)	6,090	4,500,000

Fuente: Cetlu, *Estatus del lupus en México*, 2025. Cifras estimadas con base en INEGI y CONAPO, y Ocampo-Torres, M. C., Bravo-Rojas, F. M., Martínez-Badajoz, A., *et al.* (2024)[xxxiii]

En suma, el panorama estatal muestra una realidad marcada por la necesidad de especialistas, campañas de sensibilización y el desconocimiento social. Todo ello subraya la urgencia de diseñar e implementar políticas públicas integrales que garanticen atención médica especializada, difusión adecuada y redes de apoyo para

las personas que viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes en Estado de México.

Adicional a ello, dado que el lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad multisistémica que requiere atención especializada por reumatólogos y puesto que en México, existe una concentración de estos especialistas en zonas metropolitanas como Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara, dejando a estados como Estado de México y particularmente en sus estados más desfavorecidos con una cobertura insuficiente. Esta escasez obliga a los pacientes a recurrir a médicos internistas, quienes, aunque capacitados, no siempre cuentan con la especialización necesaria para manejar la complejidad del lupus (González-Chávez, 2022. SS, 2023).[xxxiv]

Es importante mencionar que el tratamiento del lupus implica el uso de medicamentos como corticosteroides, inmunosupresores y terapias biológicas, cuyos costos pueden ser prohibitivos. Por ejemplo, un medicamento biológico, puede costar aproximadamente $28,000 USD anuales. Estos altos costos, sumados a la falta de cobertura integral por parte del Estado, generan una carga financiera significativa para los pacientes y sus familias.[xxxv]

En cuanto a los servicios médicos, otro de los desafíos implica que el manejo efectivo del lupus requiere un enfoque multidisciplinario que incluya, además del reumatólogo, especialistas como nefrólogos, dermatólogos, cardiólogos, neurólogos, psicólogos y trabajadores sociales. Esta atención integral es esencial para abordar las diversas manifestaciones de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes,[xxxvi] algo que, dada la condición de invisibilización y la ausencia de un censo, no sucede en México ni en ninguna entidad incluyendo Estado de México.

En ese marco, la presente iniciativa tiene como propósito atender un problema de salud pública invisibilizado: las enfermedades autoinmunes y autoinmunes reumatológicas (EAR), que afectan tanto a la población adulta como pediátrica en el Estado de México. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),

existen más de 60 enfermedades autoinmunes reconocidas, cuya prevalencia global combinada oscila entre el 3 % y el 5 % de la población mundial, y cuya etiología se asocia a factores genéticos, hormonales y ambientales interrelacionados.[xxxvii] Sin embargo, investigaciones recientes del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) y revisiones publicadas en *Nature* y *Frontiers in Immunology* señalan que el número de enfermedades autoinmunes podría superar las 100 a 150 entidades clínicas, dada la expansión de los criterios inmunológicos y la identificación de nuevos síndromes inmunomediados.[xxxviii]

En Estado de México, como en todo el país y en la Región Latinoamericana, el diagnóstico oportuno de las enfermedades autoinmunes en menores de edad es difícil por múltiples razones: la escasa disponibilidad de reumatólogos pediátricos, la concentración de especialistas en las zonas urbanas, y la falta de protocolos de atención temprana en los primeros niveles del sistema de salud. A ello se suma el escaso conocimiento por parte del personal médico general y de primer contacto, lo cual ocasiona que síntomas como rigidez matutina, eritema malar, fatiga persistente o dolor articular, sean confundidos con cuadros infecciosos comunes o "dolores de crecimiento", retrasando así su detección por meses o incluso años.

Las brechas en el sistema estatal de salud se reflejan no solo en la falta de subespecialistas, sino también en la escasez de insumos diagnósticos avanzados (como anticuerpos ANA o anti-CCP en centros periféricos), la falta de acceso a tratamientos biológicos e inmunosupresores, y la ausencia de atención integral con enfoque multidisciplinario.

A esto se suma el impacto psicosocial que viven las niñas, niños y jóvenes con enfermedades autoinmunes: ausentismo escolar, estigmatización, dificultades en la movilidad y afectaciones emocionales por el curso crónico y la visibilidad de los síntomas.

El lupus no solo afecta físicamente, sino que tiene un profundo impacto psicosocial y en la salud mental de quienes lo padecen. Las personas con lupus enfrentan tasas elevadas de **ansiedad, depresión, fatiga crónica y aislamiento social**,

exacerbadas por la incertidumbre del diagnóstico, los brotes impredecibles y el estigma asociado a una enfermedad invisible (Drenkard, 2022).[xxxix] Este desgaste emocional disminuye la calidad de vida, dificulta el apego al tratamiento y puede conducir al abandono laboral o educativo, afectando su proyecto de vida. Aunado a esto las personas con Lupus presentan alteraciones en la cognición, principalmente en atención, memoria y fluidez verbal a edades tempranas (36.5 años) y raramente son evaluados desde la neuropsicología.[28,29] Reconocer este impacto es clave para garantizar una atención integral y con perspectiva de derechos.

Por otro lado, existen consideraciones importantes que impactan a las personas con lupus. Además de las estructurales relacionadas con la falta de atención oportuna, formación de médicos y médicas de primer nivel o trabajo curricular en las licenciaturas de Medicina para estudiar a las enfermedades autoinmunes con mayor profundidad, se encuentran la presencia de otras enfermedades o síndromes aunados al lupus a lo largo del periodo de la enfermedad. Las personas con lupus eritematoso sistémico (LES) pueden desarrollar otras enfermedades autoinmunes de forma concomitante, lo cual complica el diagnóstico y tratamiento. Las más comunes incluyen la **tiroiditis autoinmune de Hashimoto**, que puede provocar hipotiroidismo; el **Síndrome de Sjögren**, caracterizado por sequedad en ojos y boca; la **anemia hemolítica autoinmune**; la **trombocitopenia inmunológica**; y el **Síndrome antifosfolípido (SAF)**, que incrementa el riesgo de trombosis y pérdidas gestacionales. También se ha documentado la coexistencia con **artritis reumatoide, esclerosis sistémica** y **miositis inflamatoria (**Kaul, 2016) y fibromialgia.[30] Este recibe el nombre de síndrome de superposición y es más frecuente en mujeres jóvenes, ya de por sí el grupo más afectado por el lupus.

En ese marco, el lupus eritematoso sistémico (LES) y la fibromialgia (FM) comparten síntomas como dolor musculoesquelético generalizado, fatiga crónica y trastornos del sueño, lo que puede dificultar su diagnóstico diferencial. La coexistencia de ambas condiciones es común y puede intensificar la carga sintomática en los pacientes.[31] Estudios han demostrado que la presencia de FM en pacientes con LES se asocia con una mayor discapacidad funcional y una calidad de vida

reducida. [32] Además, la fibromialgia puede influir en la percepción de la actividad del lupus, lo que podría llevar a tratamientos más agresivos de lo necesario. Por lo tanto, es crucial una evaluación cuidadosa para distinguir entre los síntomas de ambas enfermedades y evitar intervenciones terapéuticas inadecuadas. [33]

A esto se suma la inexistencia de un censo estatal de personas con lupus, la falta histórica de capacitación para médicos generales, y un periodo diagnóstico que puede superar los cinco años (Athié, 2023).[xl] Esta situación propicia complicaciones severas e incluso la muerte, al tiempo que limita el acceso a tratamientos adecuados y asequibles. La discriminación laboral, la exclusión del sistema educativo y los costos inasumibles de tratamientos como la hemodiálisis —). El costo anual promedio en el sector público por el tratamiento de un individuo en hemodiálisis es de $158 964.00 M. N.)[37]— agravan la ya precaria calidad de vida de quienes viven con lupus en la entidad. Esta realidad exige una respuesta legislativa urgente y con enfoque de justicia social.

Esta cifra adquiere mayor relevancia si se considera que el lupus afecta de forma desproporcionada a mujeres jóvenes, especialmente en edad reproductiva, entre los 15 y los 45 años. Este panorama refuerza la urgencia de implementar políticas públicas específicas con enfoque de género y atención especializada para esta población altamente vulnerable.[39] Esta significativa proporción de la población femenina en edad fértil subraya la urgencia de establecer políticas públicas que garanticen atención médica especializada, acceso continuo a tratamientos y un enfoque integral que tome en cuenta los impactos físicos, emocionales y sociales de la enfermedad.

Por ello, la presente iniciativa propone declarar la segunda semana de mayo como la "Semana Estatal de Concientización sobre el Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes" en el Estado de México, así como expedir la Ley para la Atención Integral y la Garantía de Derechos de las Personas con Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes en la entidad, con el objetivo de:

- Impulsar un **Censo Estatal digital de Personas con Lupus y otras enfermedades autoinmunes de todas las edades.**
- Reconocer formalmente a las **enfermedades autoinmunes como un problema prioritario de salud pública** que puede afectar a personas de todas las edades.
- Promover la **formación especializada en reumatología y reumatología pediátrica.**
- Garantizar el **acceso a medicamentos esenciales, médicos especialistas y estudios diagnósticos.**
- Fomentar la **detección temprana,** especialmente en el primer nivel de atención.
- Impulsar **campañas de sensibilización, tamizaje y divulgación escolar.**
- Prevenir la **discriminación institucional hacia pacientes con enfermedades invisibles y crónicas.**
- Promover la integración de la **evaluación neuropsicológica** en personas con lupus eritematoso sistémico en el sector público.
- Reconocer el **lupus eritematoso sistémico como enfermedad discapacitante** en el Estado de México.

Atender estas necesidades no solo implica **salvar vidas y prevenir discapacidad**, sino también **garantizar los derechos fundamentales a la salud, la educación y una vida digna** para niñas, niños, jóvenes y personas adultas que viven con enfermedades reumáticas y autoinmunes en la entidad.

Finalmente, debe mencionarse que el lupus, conocido como la enfermedad autoinmune por excelencia, dada su complejidad y dificulta de ser diagnosticada, es una de las 100 afecciones consideradas dentro del espectro las enfermedades autoinmunes en dónde se considera la fibromialgia que vive igual condición de invisibilidad[40], y que contempla la iniciativa de ley presentada en el Senado el 20 de

noviembre de 2024. Quien padece lupus, es una enfermedad crónica, degenerativa y discapacitante, además suele presentar otras enfermedades consideradas raras y autoinmunes.[41]

De esa manera, con esta iniciativa se busca garantizar el derecho a una atención médica de calidad para todas y todos los que padecen la enfermedad de lupus y otras enfermedades autoinmunes, pero en especial a las mujeres, pues ellas constituyen la inmensa mayoría del grupo poblacional afectado por estas enfermedades, teniendo por objetivo establecer en nuestro marco legal la atención a personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes, a fin de mejorar la calidad de vida de quienes viven con la enfermedad. Por otro lado, es preciso que en el Estado de México se mejore la atención y el acceso a los servicios de salud relacionados con padecimientos con lupus y otras enfermedades autoinmunes, a efecto de impulsar políticas públicas que propicien el mejoramiento en la cobertura médica de este tipo de enfermedades, impulsando además la creación del Censo Estatal digital de personas con Lupus y otras enfermedades autoinmunes.

---

[i] Registro Mexicano de Lupus. (2023). Prevalencia de Lupus en México. Recuperado de https://lupusrgmx.liigh.unam.mx/
[ii] Drenkard, Cristina. (2022). Prólogo. En Athié, Laura (Comp.), *Nos esforzamos y somos valientes: Memorias de nuestras batallas con el lupus* (pp. 9-12). LEM México.
[iii] Cardiel, M., entrevista con Martínez Vélez, N. A. (2024). *Las múltiples realidades de la odisea diagnóstica. Lúpica: Experiencias, saberes y contranarrativas del lupus*, 1(0), 8-12. Recuperado de https://cetlu.com.mx/articulos/08-entrevista/
[iv] Athié, L. (2024). La interrogante contemporánea: ¿síndrome o enfermedad? *Lúpica, Cetlu*, entrevista al Dr. Bernardo Pons-Estel, 1(0), 18-21. Recuperado de https://cetlu.com.mx/articulos/18-entrevista/
[v] Lupus Foundation of America. Lupus. https://www.lupus.org/
[vi] Drenkard, Cristina. (2022). Prólogo. En L. Athié (Comp.), *Nos esforzamos y somos valientes: Memorias de nuestras batallas con el lupus* (pp. 9-12). LEM México.
[vii] Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/lupus/symptoms-causes /syc-20365789
[viii] National Resource Center on Lupus. Las causas de muerte más comunes en personas con lupus. Lupus Foundation of America: https://www.lupus.org/es/resources/las-causas-de-muerte-mas-comunes-en-personas-con-lupus
[ix] **Manual MSD.** (2023). *Lupus eritematoso sistémico (LES)*. MSD Manuals. https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-de-los-tejidos-musculoesquel%C3%A9tico-y-conectivo/enfermedades-reum%C3%A1ticas-autoinmumunitarias/lupus-eritematoso-sist%C3%A9mico-les
[x] Mayo Clinic. (2022). *Lupus: Diagnóstico y tratamiento*. Recuperado de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/lupus/diagnosis-treatment/drc-20365790
[xi] Salud y Medicina. (2022, 4 de agosto). *Cremas solares para el lupus*. Recuperado de https://saludymedicina.org/post/cremas-solares-para-el-lupus

[xii] Levy DM, Kamphuis S. Systemic lupus erythematosus in children and adolescents. Pediatr Clin North Am. 2012;59(2):345–64.
[xiii] Renson T, Lightstone L, Ciurtin C, Gaymer C, Marks SD. The unique challenges of childhood-onset systemic lupus erythematosus and lupus nephritis patients: a proposed framework for an individualized transitional care plan. Pediatric Nephrology. 2025;40(10):3045–53.
[xiv] Abdwani R, Al Masroori E, Abdullah E, Al Abrawi S, Al-Zakwani I. Evaluating the performance of ACR, SLICC and EULAR/ACR classification criteria in childhood onset systemic lupus erythematosus. Pediatric Rheumatology. 2021;19(1):141.
[xv] Villarreal-Treviño AV, Saad-Magalhães C, Álvarez M, Rubio-Pérez N, García Rodríguez F. Juvenile systemic lupus erythematosus: Challenge for equity in Latin America. Reumatología Clínica (English Edition). 2025;21(9).
[xvi] Pons-Estel BA, Catoggio LJ, Cardiel MH, Soriano ER, Gentiletti S, Villa AR, et al. The GLADEL multinational Latin American prospective inception cohort of 1,214 patients with systemic lupus erythematosus: ethnic and disease heterogeneity among "Hispanics". Medicine (Baltimore). 2004;83(1):1–17.
[xvii] Villarreal-Treviño AV, Saad-Magalhães C, Álvarez M, Rubio-Pérez N, García Rodríguez F. Juvenile systemic lupus erythematosus: Challenge for equity in Latin America. Reumatología Clínica (English Edition). 2025;21(9).
[xviii] Organización Mundial de la Salud. (1992). *Enfermedades reumáticas* (Serie de Informes Técnicos, No. 816). Ginebra: OMS. Recuperado de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39682/9243208160_spa.pdf
[xix] Asociación Catalana de Lupus Eritematoso. (s.f.). *Orígenes del Día Mundial del Lupus*. Recuperado de https://www.acleg.org/origenes-del-dia-mundial-del-lupus/
[xx] Athié, Laura (2023). *Contranarrativas ante la violencia discursiva: El caso de las personas con lupus* (Tesis doctoral, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Repositorio Institucional BUAP: https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/41a1c9a0-f16e-4565-b8d5-4d7ec1fecae7 Pág. 96
[xxi] **Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, UNAM.** (s.f.). *Registro Mexicano de Lupus (LupusRGMX)*. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el [31 de febrero de 2025], de https://lupusrgmx.liigh.unam.mx/
[xxii] Congreso del Estado de Puebla. (2025, 15 de septiembre). Iniciativa en materia de detección, control y tratamiento del lupus, esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Aprobado por unanimidad. https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?id=56805&option=com_k2&task=download&view=item
[xxiii] Athié, Laura (2023). *Contranarrativas ante la violencia discursiva: El caso de las personas con lupus* (Tesis doctoral, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Repositorio Institucional BUAP. https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/41a1c9a0-f16e-4565-b8d5-4d7ec1fecae7 Pág. 336
[xxiv] https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/145730
[xxv] Pons-Estel, B. A., et al. (2014). *Understanding the epidemiology and progression of systemic lupus erythematosus in Latin America: The GLADEL experience. Autoimmunity Reviews*.
[xxvi] Cortés-Castell, E., Castillo-Ortiz, J. D., Sánchez-González, A. I., & Goycochea-Robles, M. V. (2022). *Distribución y características de la certificación de los reumatólogos en México*.
[xxvii] *Ibidem.*
[xxviii] Athié, Laura (2023). *Contranarrativas ante la violencia discursiva: El caso de las personas con lupus* (Tesis doctoral, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Repositorio Institucional BUAP. Págs. 236-279.
[xxix] Fuente: Encuentra un reumatólogo. **Colegio Mexicano de Reumatología: https://reumatologia.org.mx/encuentra-reumatologo/**
[xxx] **Colegio Mexicano de Reumatología.** (s.f.). *Directorio de reumatólogos certificados en México*. Recuperado el [20 de mayo de 2025], de https://reumatologia.org.mx/directorio/
[xxxi] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021, 26 de enero). INEGI.
Ocampo-Torres, M. C., Bravo-Rojas, F. M., Martínez-Badajoz, A., et al. (2024). *Características epidemiológicas, clínicas y bioquímicas de los pacientes en la cohorte LUPUS-IMMex. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 62*(1), e5247. https://doi.org/10.5281/zenodo.10278103
[xxxii] Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (2025, octubre). *Estatus del lupus en México*. Documento interno. Cifras estimadas con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021, 26 de enero). Álvarez-Hernández, E., Barreira-Mercado,

E., Fragoso-Loyo, H. E., Hernández-Díaz, C., Mota-Mondragón, B., Muñoz-López, S., & Pacheco-Tena, C. (2023). *Distribution and characteristics of the certification of rheumatologists in Mexico*. *Reumatología Clínica (English Edition), 19*(7), 379–385; Ocampo-Torres, M. C., Bravo-Rojas, F. M., Martínez-Badajoz, A., et al. (2024). *Características epidemiológicas, clínicas y bioquímicas de los pacientes en la cohorte LUPUS-IMMex*. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 62*(1), e5247. https://doi.org/10.5281/zenodo.10278103

[xxxiii] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Consejo Nacional de Población & Ocampo-Torres, M. C., Bravo-Rojas, F. M., Martínez-Badajoz, A., *et al.* (2024). (CETLU 2026). INEGI / CONAPO / Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Jal.pdf; https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2020-2070; https://doi.org/10.5281/zenodo.10278103

[xxxiv] González-Chávez, A., & Gutiérrez, M. (2022). Situación de la reumatología en México: Déficit de reumatólogos en el país. *Reumatología Clínica*, 18(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.reuma.2021.05.005 / Secretaría de Salud. (2023). De cada 10 personas con lupus, entre siete y nueve son mujeres. https://www.gob.mx/salud/es/articulos/de-cada-10-personas-con-lupus-entre-siete-y-nueve-son-mujeres

[xxxv] Lupus Foundation of America. (2022). Datos y estadísticas sobre el lupus. https://www.lupus.org/es/resources/datos-y-estadisticas-sobre-el-lupus

[xxxvi] Mayo Clinic. (2021). Clínica de Lupus - Panorama general. https://www.mayoclinic.org/es/departments-centers/lupus-clinic/overview/ovc-20477808

[xxxvii] National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). (2023). *Autoimmune Diseases Overview*. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/autoimmune-diseases

[xxxviii] Xiang, Y., Zhang, M., Jiang, D., Su, Q., & Shi, J. (2023). *The role of inflammation in autoimmune disease: A therapeutic target. Frontiers in Immunology*, 14, 1267091. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1267091

[xxxix] Drenkard, C., Bao, G., Dennis, G., & Lim, S. S. (2022). Mental Health in Systemic Lupus Erythematosus: A Growing but Neglected Concern. *Current Opinion in Rheumatology*, 34(2), 120–127. https://doi.org/10.1097/BOR.0000000000000854

[28] Bonet-Alvarez, J., Torres-Rivas, C., Vergel-Scetti, M., & Bonet-Alvarez, M. (2017). Cognitive impairment in lupus erythematosus: a case report. *Acta Neurológica Colombiana, 33(1)*, 16-21.

[29] Al Rayes, H., Tani, C., Kwan, A., Marzouk, S., Colosimo, K., Medina-Rosas, J., ... y Touma, Z. (octubre de 2018). ¿Cuál es la prevalencia del deterioro cognitivo en el lupus y qué instrumentos se utilizan para medirlo? Una revisión sistemática y un metaanálisis. En *Seminarios sobre artritis y reumatismo* (Vol. 48, N.° 2, págs. 240-255). WB Saunders.

[30] Kaul, A., Gordon, C., Crow, M. K., Touma, Z., Urowitz, M. B., van Vollenhoven, R., & Ruiz-Irastorza, G. (2016). Systemic lupus erythematosus. *Nature Reviews Disease Primers*, 2, 16039. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.39

[31] Lupus Research Alliance. (s.f.). *Síntomas comunes del lupus*. Recuperado el 20 de mayo de 2025, de https://www.lupusresearch.org/en-espanol/acerca-del-lupus/sintomas-comunes-del-lupus/

[32] Mayo Clinic. (2022). *Fibromialgia: Síntomas y causas*. Recuperado el 20 de mayo de 2025, de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/fibromyalgia/symptoms-causes/syc-20354780

[33] Arthritis Foundation. (s.f.). *¿Fibromialgia, lupus o ambas cosas?*. Recuperado el 20 de mayo de 2025, de https://espanol.arthritis.org/diseases/more-about/fibromyalgia%2C-lupus%2C-or-both

[34] Documento Interno. Informe para Indesol (Instituto Nacional de desarrollo Social)

[35] *Informe sobre la situación de las personas con lupus.* Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus (LIMDEPLU). Manuscrito no publicado.

[36] Álvarez-Hernández, E., Barreira-Mercado, E., Fragoso-Loyo, H. E., Hernández-Díaz, C., Mota-Mondragón, B., Muñoz-López, S., ... & Alpízar-Rodríguez, D. (2023). Distribución y características de la certificación de los reumatólogos en México. *Reumatología Clínica*, *19*(7), 379-385.

[37] Durán-Arenas, L., Ávila-Palomares, P. D., Zendejas-Villanueva, R., Vargas-Ruiz, M. M., Tirado-Gómez, L. L., & López-Cervantes, M. (2011). Costos directos de la hemodiálisis en unidades públicas y privadas. *Salud pública de México*, *53*(suppl 4), 516-524.

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro

Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

[38] Instituto Mexicano del Seguro Social. (2019, mayo). *Detección y tratamiento oportuno mejora calidad de vida de personas con lupus*. Recuperado de https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201905/115
[39] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020.*
[40] Asociación Autoinmune. (s.f.). *Información sobre enfermedades*. Recuperado de https://autoimmune.org/es/disease-information/
[41] Lupus Foundation of America. (s.f.). *Enfermedades comunes que se superponen con el lupus*. Recuperado el 20 de mayo de 2025, de https://www.lupus.org/es/resources/common-diseases-that-overlap-with-lupus
[xl] Athié, Laura (2023). *Contranarrativas ante la violencia discursiva: El caso de las personas con lupus* (Tesis doctoral, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Repositorio Institucional BUAP: https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/41a1c9a0-f16e-4565-b8d5-4d7ec1fecae7

Para efectos de estudio y análisis, se proporciona la siguiente información, para un mejor entendimiento de las modificaciones planteadas.

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
TEXTO VIGENTE	**PROPUESTA**
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderán los siguientes términos: I. … a XXIV. … XXV. Hemovigilancia: … XXVI. … a XXX. … XXXI. Personal de salud: …	Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderán los siguientes términos: ○ I… a XXIV. … **XXV.** Enfermedad autoinmune: Condición crónica, de origen multifactorial, caracterizada por una

XXXII. … a XLV. …	alteración del sistema inmunológico mediante la cual este pierde la capacidad de reconocer como propios los tejidos, células u órganos del organismo y desencadena una respuesta inmunitaria en su contra, ocasionando inflamación, daño tisular y alteraciones funcionales que pueden afectar uno o diversos órganos o sistemas, con distintos grados de gravedad y evolución. **XXVI.** Hemovigilancia. :.. **XXVII.** IMSS - Bienestar… **XXVIII.** ISEM. … **XXIX.** Ley. … **XXX.** Ley General. … **XXXI.** Lupus: Enfermedad autoinmune, crónico degenerativa e incurable, multisistémica que ataca de manera indistinta a quien la padece. Es potencialmente mortal si no se cuenta con acceso a tratamientos, servicios médicos adecuados de forma oportuna. **XXXII.** Niveles de atención **XXXIII**. Personal de salud. **XXXIV.** Prestación de servicios de salud

	XXXV. Red Estatal De Salud Mental y Adiciones. **XXXVI.** Reglamento … **XXXVII**. Reproducción Asistida. … **XXXVIII**. Salud Mental. … **XXXIX**. Salud Pública. … **XL**. Secretaria. … **XLI**. Secretaria Federal … **XLII**. Sistema Estatal. … **XLIII.** Suicidio. … **XLIV**. Sustancia Psicoactiva. … **XLV.** Vacunación … **XLVI.**Vigilancia Epidemiológica … **XLVII** Zoonosis. …
Artículo 104. La Secretaría ejecutará proyectos estratégicos, programas, campañas permanentes y planes de contingencia necesarios para la promoción de la salud, la prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles y no transmisibles que representen un riesgo real o potencial para la salud pública en el Estado de México. . …	Artículo 104. La Secretaría ejecutará proyectos estratégicos, programas, campañas permanentes y planes de contingencia necesarios para la promoción de la salud, la prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles, no **transmisibles o autoinmunes** que representen un riesgo real o potencial para la salud pública en el Estado de México. . …
SIN CORRELATIVO	TITULO DECIMO TERCERO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS

	PERSONAS CON LUPUS Y OTRAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES.
SIN CORRELATIVO	CAPITULO I
SIN CORRELATIVO	Artículo 308. La Secretaría de Salud del Estado de México implementará acciones permanentes de prevención, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento integral, control y seguimiento del lupus y otras enfermedades autoinmunes.
SIN CORRELATIVO	Artículo 309. Las acciones comprenderán, al menos: I. Diagnóstico oportuno; II. Protocolos de referencia y contrarreferencia; III. Capacitación continua del personal de salud; IV. Vigilancia epidemiológica; V. Acceso equitativo a tratamiento; VI. Las demás que determine la autoridad competente.
SIN CORRELATIVO	Artículo 310. La Secretaría de Salud integrará y administrará el Registro Estatal de Personas con Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes, con fines estadísticos, epidemiológicos y de planeación de políticas públicas, garantizando la protección de datos personales.

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

SIN CORRELATIVO	Artículo 311. Las personas profesionales, técnicas y auxiliares de la salud deberán notificar los casos diagnosticados conforme a la normatividad aplicable para efectos del Registro Estatal.
SIN CORRELATIVO	Articulo 312. Se declara la segunda semana del mes de mayo de cada año como la Semana Estatal de Concientización sobre el Lupus y otras Enfermedades Autoinmunes, con el objeto de promover acciones de información, sensibilización, educación para la salud, prevención, detección oportuna y difusión sobre estos padecimientos, así como contribuir al reconocimiento de las necesidades de las personas que viven con dichas enfermedades. Durante la semana referida, la Secretaría de Salud del Estado de México, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes, podrá implementar acciones orientadas a fortalecer el conocimiento de la población sobre el lupus y otras enfermedades autoinmunes.

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO	
CAPITULO II . DE LA DISCRIMINACIÓN	
Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo o restricción que, basada en el origen étnico o nacional como el antisemitismo o cualquier otro tipo de segregación; sexo o género; edad; discapacidad; condición social o económica; condiciones de salud; embarazo; lengua; religión; opiniones; predilecciones de cualquier índole; estado civil o alguna otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato de las personas. . …	Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo o restricción que, basada en el origen étnico o nacional como el antisemitismo o cualquier otro tipo de segregación; sexo o género; edad; discapacidad; condición social o económica; condiciones de salud; **las enfermedades crónicas, degenerativas, discapacitantes, transmisibles o no transmisibles, así como cualquier condición médica, incluyendo las enfermedades autoinmunes**; embarazo; lengua; religión; opiniones; predilecciones de cualquier índole; estado civil o alguna otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato de las personas. . …

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, la presente iniciativa, para su análisis, discusión y en su caso aprobación en sus términos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Articulo primero. Se Reforman los artículos 3 fracción XXV, fracción XXXI; el articulo 104;de la Ley General de Salud del Estado de México; **Se reforma** el articulo 5 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México; **Se adicionan** El Título décimo tercero de la atención integral a las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes; los artículos 308; 309. 310, 311 y 312; todos ellos de la Ley General de Salud del Estado de México.

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO Generalidades

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderán los siguientes términos:

I. … a XXIV. …

XXV. Enfermedad autoinmune: Condición crónica, de origen multifactorial, caracterizada por una alteración del sistema inmunológico mediante la cual este pierde la capacidad de reconocer como propios los tejidos, células u órganos del organismo y desencadena una respuesta inmunitaria en su contra, ocasionando inflamación, daño tisular y alteraciones funcionales que pueden afectar uno o diversos órganos o sistemas, con distintos grados de gravedad y evolución.

XXVI. … a XXX. …

XXXI. Lupus: Enfermedad autoinmune, crónico degenerativa e incurable, multisistémica que ataca de manera indistinta a quien la padece. Es potencialmente mortal si no se cuenta con acceso a tratamientos, servicios médicos adecuados de forma oportuna.

XXXII. … a **XLVII**. …

Se adicionan dos fracciones al artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de México, respetando el orden alfabético de las definiciones contenidas en dicho artículo, por lo que las fracciones subsecuentes se recorren en su orden y numeración correspondiente, sin que ello implique la eliminación o supresión de las disposiciones actualmente vigentes.

Artículo 104. La Secretaría ejecutará proyectos estratégicos, programas, campañas permanentes y planes de contingencia necesarios para la promoción de la salud, la prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles, no **transmisibles o autoinmunes** que representen un riesgo real o potencial para la salud pública en el Estado de México.

.

…

TITULO DECIMO TERCERO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON LUPUS Y OTRAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES.

CAPITULO I

Artículo 308. La Secretaría de Salud del Estado de México implementará acciones permanentes de prevención, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento integral, control y seguimiento del lupus y otras enfermedades autoinmunes.

Artículo 309. Las acciones comprenderán, al menos:

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

I. Diagnóstico oportuno;

II. Protocolos de referencia y contrarreferencia;

III. Capacitación continua del personal de salud;

IV. Vigilancia epidemiológica;

V. Acceso equitativo a tratamiento;

VI. Las demás que determine la autoridad competente.

Artículo 310. La Secretaría de Salud integrará y administrará el Registro Estatal de Personas con Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes, con fines estadísticos, epidemiológicos y de planeación de políticas públicas, garantizando la protección de datos personales.

Artículo 311. Las personas profesionales, técnicas y auxiliares de la salud deberán notificar los casos diagnosticados conforme a la normatividad aplicable para efectos del Registro Estatal.

Articulo 312. Se declara la segunda semana del mes de mayo de cada año como la Semana Estatal de Concientización sobre el Lupus y otras Enfermedades Autoinmunes, con el objeto de promover acciones de información, sensibilización, educación para la salud, prevención, detección oportuna y difusión sobre estos padecimientos, así como contribuir al reconocimiento de las necesidades de las personas que viven con dichas enfermedades.

Durante la semana referida, la Secretaría de Salud del Estado de México, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes, podrá implementar acciones orientadas a fortalecer el conocimiento de la población sobre el lupus y otras enfermedades autoinmunes.

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

CAPITULO II . DE LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo o restricción que, basada en el origen étnico o nacional como el antisemitismo o cualquier otro tipo de segregación; sexo o género; edad; discapacidad; condición social o económica; condiciones de salud; **las enfermedades crónicas, degenerativas, discapacitantes, transmisibles o no transmisibles, así como cualquier condición médica, incluyendo las enfermedades autoinmunes**; embarazo; lengua; religión; opiniones; predilecciones de cualquier índole; estado civil o alguna otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato de las personas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO- El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud y en coordinación con las instituciones del sector salud y los municipios, adoptará las medidas y previsiones necesarias para la implementación de la presente Ley, incluyendo la integración y operación del Registro Estatal de Personas con Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes, en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

TERCERO-.Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a los preceptos de esta Ley.

Plaza Hidalgo S/N Col. Centro
Toluca, México, C.P. 50000
Tel.722 279 64 00 EXT. 6471

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Toluca de Lerdo, México; a 7 de septiembre de 2026.

DIPUTADO
VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE LA
H. "LXII" LEGISLATURA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
PRESENTE

La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción II y 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esa Honorable Legislatura por el digno conducto de Usted, Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Censo Agropecuario 2022 (CA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en torno a las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción del país, lo que favorece la definición de políticas públicas pertinentes, a partir de medidas legislativas y administrativas en beneficio de tan importante sector.

De acuerdo con los "Resultados Definitivos" del mismo, el Estado de México cuenta con más de un millón 270 mil hectáreas (ha) de superficie con uso y vocación agropecuaria y aprovechamiento forestal y casi 475 mil unidades de producción agropecuaria y forestal; de la superficie agrícola, se reportaron 610 mil ha sembradas, casi el 85 por ciento, corresponde a cultivos de temporal.

Entre los principales cultivos de nuestra entidad destaca el maíz, la avena, la papa y el jitomate, así como la alfalfa, el nopal, el aguacate y el agave. Además, el Estado tiene una importante vocación en la cría de bovinos, porcinos aves y ovinos, producto del trabajo de casi dos millones 800 mil personas que conforman la mano de obra, de los cuales, poco más de la mitad es de carácter permanente, casi el 30 por ciento es adulto mayor y cerca de la mitad se consideran indígenas.

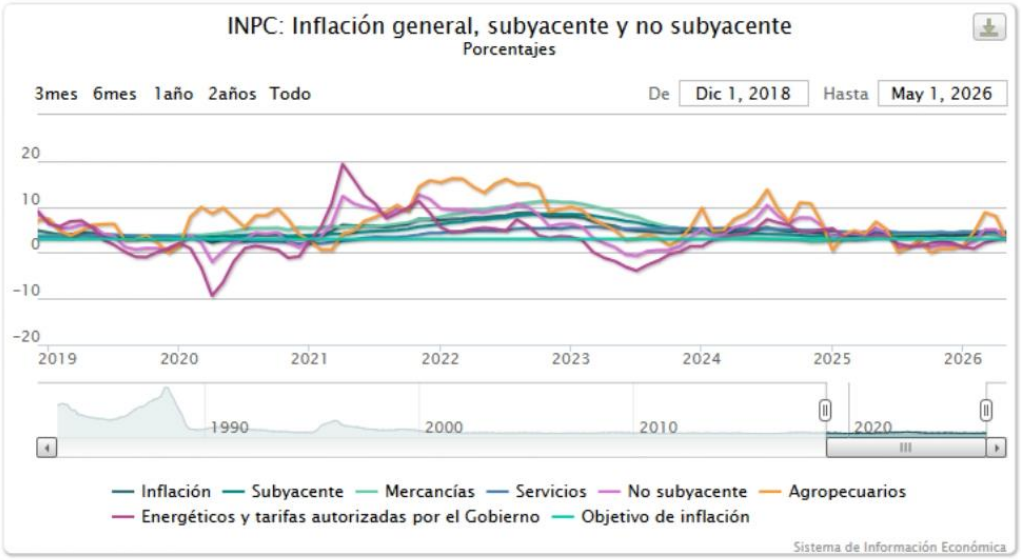
Así también, el CA documentó los principales problemas de las unidades de producción agropecuaria para realizar su actividad, destacando que, casi el 95% reportó alto costo de insumos y servicios, más del 40% pérdida de fertilidad del suelo, más del 35% inseguridad y con porcentajes menores, dificultades de transportación, falta de mano de obra y dificultades para el almacenamiento, aunado a que el acceso a crédito y aseguramientos de las unidades de producción agropecuaria continúan siendo muy bajos, con niveles apenas cercanos al uno por ciento.

Por si fuera poco, las unidades de producción deben realizar múltiples acciones que, si bien protegen al medio ambiente, también implican erogaciones que merman su rentabilidad tales como la separación de empaques de insecticidas, herbicidas y fertilizantes, disminución del consumo de agua y energía eléctrica, prevención de incendios y el combate a plagas y enfermedades.

Adicionalmente, la inflación afecta significativamente la capacidad adquisitiva de la población. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI de diciembre 2018 a mayo 2026, se ha verificado un incremento en ese rubro del 41.26%.

Es importante considerar que la inflación puede ser subyacente y no subyacente. La primera mide la canasta básica, excluyendo bienes y servicios con precios más volátiles; por su parte la segunda contempla los precios de productos cuyo costo se ve afectado como factores externos como el clima y tarifas gubernamentales, tales como los energéticos: gasolina, electricidad y gas, así como productos agropecuarios.

Así, en el periodo referido y de acuerdo con la información disponible en el portal del INEGI se observa que, mientras que el objetivo de inflación ha sido del 3%, los diversos indicadores fluctúan de manera muy diversa a lo largo del periodo, destacando por ejemplo inflación general del 7.37% en noviembre de 2021 y 8.70 en agosto de 2022, así como índices porcentuales elevados en el rubro agropecuarios como los registrados en febrero de 2022 alcanzando 16.17% y 13.72, en julio de 2024.



Como puede apreciarse los porcentajes de inflación varían de acuerdo con el rubro, sin embargo, tienen en común que todos impactan, directa o indirectamente en la economía de los mexiquenses y de manera muy particular, de los campesinos, quienes para desarrollar su actividad deben contar con insumos, maquinaria y combustibles, entre muchos otros elementos.

En este orden de ideas, el Presupuesto de Egresos es el instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto, en el cual se establece el ejercicio, control del gasto público y evaluación del desempeño de los entes públicos, de acuerdo con su naturaleza jurídica, con base en los objetivos, parámetros e indicadores de desempeño y programas derivados del Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Su distribución se realiza conforme a los sectores previstos en el PDEM: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Territorial, Seguridad y Gobierno, entre otros. A su vez, el sector Desarrollo Económico se integra con los sectores Económico, Empleo, Movilidad y Agropecuario.

A este último le fue asignado, para el Ejercicio Fiscal del Año 2026, un monto superior a los 4 mil 200 millones de pesos, resultado de sumar los presupuestos de la Secretaría del Campo (SECAMPO), del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria,

Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) y la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), organismos sectorizados a la dependencia referida, instancias que, en su conjunto son responsables de instrumentar las políticas públicas del sector agropecuario.

En este sentido, el presupuesto del referido sector, en torno al cual, se centra la presente Iniciativa ha tenido, durante los últimos años, la dinámica que a continuación se indica:

PRESUPUESTO SECTOR AGROPECUARIO					
AÑO	**SECAMPO**	**ICAMEX**	**PROBOSQUE**	**TOTAL**	**Δ%**
2026	$3,418,957,761	$93,013,653	$712,519,247	**$4,224,490,661**	**+11.87**
2025	$3,021,791,599	$91,871,499	$662,466,000	**$3,776,129,098**	**+1.79**
2024	$2,968,134,693	$89,349,727	$652,366,818	**$3,709,851,238**	**+12.11**
2023	$2,584,602,431	$83,787,298	$640,834,115	**$3,309,223,844**	**+25.92**
2022	$2,011,668,709	$60,268,333	$556,057,614	**$2,627,994,656**	**-14.14**
2021	$2,502,726,531	$48,892,382	$509,210,117	**$3,060,829,030**	**---***

* Mediante Decreto 191 de la "LX" Legislatura, publicado en Gaceta el 20 de septiembre de 2020, se determinó el cambio de denominación de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) por Secretaría del Campo (SECAMPO), así como la sectorización de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) a dicha dependencia; por lo que, a la fecha de publicación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del Año 2020, el 23 de diciembre de 2019, el presupuesto de ese organismo, que ascendió a la cantidad de $528,174,494 era parte del sector medio ambiente y no así, del sector agropecuario, cuyo presupuesto sectorizado alcanzó $2,549,059,570, resultado de sumar los presupuestos de la entonces SEDAGRO e ICAMEX.

Resulta evidente que la variación porcentual anual del presupuesto del sector agropecuario dista de ser uniforme, lo que dificulta la continuidad de las acciones y programas de desarrollo social implementados por la dependencia y organismos involucrados, en perjuicio de los beneficiarios de esos programas.

La importancia del sector primario para el sostenimiento de la economía del Estado y del país amerita que los diferentes actores de los ámbitos público y privado afrontemos de manera decidida los diversos retos del mismo. Gracias a los campesinos es posible que nuestras mesas tengan los alimentos que todos los días consumen nuestras familias.

Por ello, la presente Iniciativa tiene el propósito de garantizar que el presupuesto anual para el campo sea suficiente para favorecer el desarrollo de las actividades agropecuarias, minimizando los efectos negativos que los efectos inflacionarios puedan tener en los productores del campo, permitiéndoles desarrollar su actividad con mejores elementos para que esa actividad sea rentable.

Al efecto, se propone incorporar un precepto constitucional mediante el cual se garantice que el presupuesto de egresos de cada Ejercicio Fiscal, correspondiente al sector agropecuario se incremente en al menos un diez por ciento respecto al del año inmediato anterior lo que favorecerá la eficiente atención del mismo y su desarrollo integral.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Legislatura, la presente Iniciativa, para que, de estimarla correcta se apruebe en sus términos.

Reitero a Usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DIPUTADA LETICIA MEJÍA GARCÍA

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO NÚMERO:
LA "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo décimo séptimo del artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:

Artículo 5. …

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

El Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a personas trabajadoras del campo que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a personas productoras de pequeña escala, y un apoyo anual directo a personas pescadoras de pequeña escala. **Para la eficiente atención del sector agropecuario y con el propósito de favorecer el desarrollo integral del mismo, el presupuesto de egresos de cada Ejercicio Fiscal, correspondiente a ese sector se incrementará al menos un diez por ciento respecto al del año inmediato anterior.**

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

I. a **IX**. …

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil veintiséis.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Emma Laura Alvarez Villavicencio
Diputada Local
Grupo Parlamentario PAN

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Toluca de Lerdo México; 10 de septiembre de 2026

DIP. VLADIMIR HERNANDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. LXII LEGISLATURA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Los que suscriben **Diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio y el Diputado Pablo Fernández De Cevallos González,** a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 5 párrafo séptimo y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esta H. Legislatura, **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 290 del Código Penal del Estado de México**, en materia de robo de combustible que ofrecen las unidades económicas, al tenor de la siguiente:

emma.alvarez@congresoedomex.gob.m

Tel. (722) 279 64 56
Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro
Toluca, México C.P. 50000

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Emma Laura Alvarez Villavicencio
Diputada Local
Grupo Parlamentario PAN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para Acción Nacional, la protección a las unidades económicas y el fortalecimiento de la seguridad jurídica representan pilares fundamentales del desarrollo y la paz social en el Estado de México.

Desde la perspectiva humanista y de fomento económico que abandera el PAN, respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas **así como a las miles de familias de trabajadores despachadores que enfrentan pérdidas injustas en su ingreso por el apoderamiento ilícito de combustibles e insumos** no es solo un compromiso con el sector productivo, sino un deber ético con la justicia social, la integridad física de las personas en los centros de abasto y el combate frontal a la impunidad mediante leyes modernas, eficientes y rigurosas.

Las estaciones de servicio y expendio de combustibles constituyen unidades económicas esenciales para la movilidad, el transporte público, la logística de mercancías y el dinamismo productivo en los 125 municipios del Estado de México.

De acuerdo con la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, una unidad económica comprende el conjunto de acciones y recursos empleados para la producción de bienes o la prestación de servicios indispensables para la sociedad.

En este contexto, las estaciones de servicio no solo comercializan un insumo de primera necesidad, sino que generan empleos formales en la entidad, particularmente para miles de trabajadoras y trabajadores despachadores cuya subsistencia depende directamente de la estabilidad y seguridad en sus centros de trabajo.

emma.alvarez@congresoedomex.gob.m

Tel. (722) 279 64 56
Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro
Toluca, México C.P. 50000

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
Dip. Emma Laura Alvarez Villavicencio
Diputada Local
Grupo Parlamentario PAN

La gasolina en México cobra auge a partir de 1940, tras la expropiación petrolera del 18 de marzo 1938, el surgimiento de PEMEX, y la primera gasolina que se denominó MEXOLINA, con un octanaje[1] del 70%, la cual 10 años después fue sustituida por otra de mejor calidad que fue la SUPERMEXOLINA de 80% octanos, a la que le siguieron GASOLMEX de 90% octanos y PEMEX de 100 octanos. En 1973 aparecieron en el mercado las gasolinas NOVA de 81 % octanos y la EXTRA de 94% octanos, que sustituyeron a las anteriores. En la década de los años ochenta surgieron las gasolinas MAGNA y PREMUM. Actualmente con la reforma energética del año 2013, se liberó el mercado de las gasolinas, con la apertura de diferentes marcas, haciendo la competencia a PEMEX, entre otras Gulf oil corporation, Shell, Total, Texaco, ExxonMobil.

En los últimos años, de manera acentuada en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de México, se ha incrementado un patrón delictivo que atenta gravemente contra el patrimonio de los establecimientos y la seguridad de las personas. Esta conducta consiste en que conductores acuden a las estaciones de servicio, solicitan el abastecimiento de combustible en el tanque de sus vehículos y, una vez suministrado el producto, emprenden una huida intempestiva y a alta velocidad a bordo de la propia unidad para evitar realizar el pago correspondiente.

Este fenómeno, conocido en el sector como apoderamiento con evasión vehicular, no constituye un mero **"incumplimiento de pago de carácter mercantil"**, sino un delito de robo con alto grado de peligrosidad social, que conlleva las siguientes afectaciones:

Quebranto Patrimonial: Genera pérdidas directas a las unidades económicas y, de manera ruinosa e injusta, a las y los trabajadores despachadores, a quienes en

[1] El término octanaje hace referencia a la capacidad de resistencia que tiene la gasolina a la detonación durante el proceso de comprensión que ocurre en el interior de los cilindros de los motores de los vehículos.
Por lo tanto, cuanto más elevado sea el octanaje de una gasolina, mayor capacidad tendrá para soportar la compresión que se produce en el interior de los cilindros, la combustión se producirá con mayor suavidad y de una manera más eficiente. https://helloauto.com/glorario/octanaje.

emma.alvarez@congresoedomex.gob.m
Tel. (722) 279 64 56
Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro
Toluca, México C.P. 50000

CONGRESO ESTADO DE MÉXICO
Dip. Emma Laura Alvarez Villavicencio
Diputada Local
Grupo Parlamentario PAN

ocasiones se les pretende responsabilizar por los montos no cobrados, impactando directamente su economía familiar.

Riesgo Físico y de Protección Civil: La huida intempestiva en zonas de abastecimiento de hidrocarburos incrementa potencialmente el riesgo de deflagración o incendio por el desprendimiento violento de mangueras de las bombas despachadoras, además de poner en peligro inminente la vida e integridad física de los empleados, otros usuarios y peatones por atropellamiento o colisiones en la vía pública.

Impunidad por Carencia de Claridad Técnica: Ante la falta de una especificación clara en la norma penal, en ocasiones las autoridades de procuración de justicia catalogan erróneamente el hecho como una controversia civil o un robo simple, obstaculizando la integración de las carpetas de investigación a pesar de contar con registros en cámaras de videovigilancia.

Para Acción Nacional es fundamental actuar con estricto rigor jurídico y técnica penal, el apoderamiento ilícito de un bien mueble **como lo es el combustible una vez depositado en el contenedor del vehículo** encuadra de origen en el tipo básico del delito de Robo previsto en el Artículo 287 del Código Penal del Estado de México.

Por ello, la solución jurídicamente adecuada no radica en la creación de tipos penales redundantes o en la falsa equiparación del combustible a fluidos intangibles (como la energía eléctrica), **sino en sancionar con severidad la circunstancia agravante de la conducta.**

El Artículo 290 de nuestro Código Penal prevé las circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo. En su fracción XXII, tipifica el robo cometido contra una ***"unidad económica"*** imponiendo penas de 5 a 10 años de prisión.

Mediante la presente iniciativa, proponemos **reformar la fracción XXII del artículo 290 para precisar con absoluta claridad taxativa** que dicha pena agravada aplicará

emma.alvarez@congresoedomex.gob.m
Tel. (722) 279 64 56
Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro
Toluca, México C.P. 50000

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Emma Laura Alvarez Villavicencio
Diputada Local
Grupo Parlamentario PAN

a quien, habiéndose abastecido de insumos o servicios en una unidad económica, evite el pago dándose a la fuga a bordo de un vehículo.

Garantizamos así la Taxatividad **(Art. 14 Constitucional)**: Describiendo la conducta objetiva de evasión a bordo de vehículo sin ambigüedades técnicas, sancionado con penas de cinco a diez años de prisión a quienes pongan en riesgo la vida de los trabajadores y el patrimonio comercial mediante este modus operandi.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de la "LXII" Legislatura, la presente iniciativa, para efecto de que, si se encuentra procedente, se admita a trámite, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente:

A T E N T A M E N T E

DIP. EMMA LAURA ALVAREZ VILLAVICENCIO **DIP. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ**

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

emma.alvarez@congresoedomex.gob.m

Tel. (722) 279 64 56
Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro
Toluca, México C.P. 50000

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Dip. Emma Laura Alvarez Villavicencio
Diputada Local
Grupo Parlamentario PAN

DECRETO NUMERO:
LA H. LXII LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO.

DECRETA

ARTÍCULO UNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 290.- Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes:

I. a **XXI. ...**

XXII. Cuando se cometa contra una unidad económica, **o cuando habiéndose abastecido o recibido insumos, productos o servicios en la misma, el sujeto activo evite el pago correspondiente o se dé a la fuga a bordo de un vehículo**, se impondrán de cinco a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

emma.alvarez@congresoedomex.gob.m

Tel. (722) 279 64 56
Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro
Toluca, México C.P. 50000

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México,
09 de septiembre del 2026.

DIPUTADO VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Quienes suscriben, Diputados **Krishna Karina Romero Velázquez y Pablo Fernández de Cevallos González**, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57, 61 fracción I y demás relativos aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 30 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como de los artículo 68 y 70 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México; sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México y de la Ley de Seguridad del Estado de México, en materia de Cámaras Corporales para la Actuación Policial**, con sustento en la siguiente:

Exposición De Motivos

La seguridad pública de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una función esencial del Estado, a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

1

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, define a la seguridad ciudadana, como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.[1]

Para las y los mexicanos, más allá de su definición jurídica, la seguridad representa la posibilidad de salir de casa y regresar con bien; caminar por una calle sin miedo; utilizar el transporte público con tranquilidad; abrir un negocio cada mañana; llevar a sus hijas e hijos a la escuela y saber que, cuando exista una emergencia, habrá una autoridad preparada para proteger su vida, su integridad y su patrimonio.

Sin embargo, entre el mandato constitucional y la realidad que viven millones de mexicanas y mexicanos persiste una brecha que no podemos ignorar, aunque nuestro marco jurídico reconoce la seguridad como una función esencial del Estado y coloca en el centro la protección de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio, para más de la mitad de la población del país esa protección todavía no se percibe plenamente en las calles, en el transporte público, en sus comunidades ni en los espacios donde desarrolla su vida cotidiana.

Los datos oficiales permiten dimensionar esta realidad, información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que durante 2025 se registraron poco más de dos millones de presuntos delitos del fuero común en nuestro país. Esto significa que, en promedio, se inició una carpeta de investigación por un presunto delito cada 16 segundos; más de 225 cada hora y

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Seguridad Ciudadana, disponible en la pág. web. - https://www.undp.org/es/publicaciones/sinopsis-seguridad-ciudadana, consultada el 18-08-2026.

alrededor de 5 mil 400 cada día, detrás de cada registro existe una víctima, una familia afectada o una persona cuya vida, integridad, libertad o patrimonio pudo haber resultado vulnerado.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2026, durante junio de ese año 59.8% de la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas consideradas por la encuesta manifestó que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad era inseguro.[2] Dicho de otra manera, prácticamente seis de cada diez personas adultas en nuestro país viven con una percepción de inseguridad en el lugar donde deberían sentirse protegidas.

Además, los resultados de la ENSU permiten, advertir que el temor a la delincuencia se manifiesta precisamente en aquellos lugares donde las personas desarrollan su vida cotidiana, dado que el 70.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 63.4% en la calle; 62.4% en el transporte público; y 56.3% en las carreteras.[3]

La inseguridad, por tanto, no solamente se percibe, también modifica la vida de las personas, pues el 42% de la población modificó el hábito de llevar objetos de valor por temor a la delincuencia; 38.2% cambió prácticas relacionadas con permitir que las personas menores de edad de su hogar salieran solas; y 35.9% modificó la costumbre de caminar de noche en los alrededores de su vivienda.

---

[2] Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Segundo Trimestre 2026, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2026_junio_presentacion_ejecutiva.pdf, consultada el 19-08-2026.
[3] Ibidem.

A ello se suma que, durante el primer semestre del 2026, el 31% por ciento de los hogares considerados por la ENSU tuvo al menos una víctima de robo, extorsión o fraude, lo que representó aproximadamente 6 millones 218 mil 941 hogares dentro del universo de estimación de la encuesta. Esta realidad adquiere una dimensión todavía mayor cuando se considera la cifra negra, los delitos nunca llegan formalmente al conocimiento de las autoridades, ya que de acuerdo con la ENVIPE 2025, el 93.2% de los delitos no se denuncian.

Ante este contexto, para garantizar la seguridad pública se requiere construir instituciones capaces de generar confianza en la ciudadanía, actuar con profesionalismo, respetar los derechos humanos y responder con eficacia, legalidad y transparencia frente a una emergencia. La confianza constituye un elemento indispensable de cualquier política de seguridad, porque de ella depende, en buena medida, que una persona se acerque a una autoridad, denuncie un delito, solicite auxilio, aporte información o colabore con las instituciones encargadas de protegerla.

En este sentido, las instituciones policiales ocupan una posición particularmente relevante, son las y los policías quienes realizan labores de prevención y proximidad; atienden emergencias; acuden al lugar donde probablemente se ha cometido un delito; tienen contacto directo con víctimas y testigos; participan en operativos; practican detenciones dentro de los supuestos constitucionales y legales; intervienen en la preservación inicial de determinados indicios y, en situaciones de especial complejidad, deben tomar decisiones en cuestión de segundos para proteger la vida y la integridad de las personas.

Para una parte importante de la ciudadanía, la o el policía que responde a una llamada de emergencia constituye el primer contacto directo con el Estado frente a una situación de peligro. De la legalidad, profesionalismo y eficacia con que se desarrolle esa intervención puede depender no solamente la atención inmediata de una emergencia, sino también la confianza que una persona conserve en sus instituciones.

Sin embargo, los indicadores oficiales muestran que en la relación entre ciudadanía e instituciones policiales persisten importantes desafíos. La ENVIPE 2025 permite advertir diferencias relevantes en los niveles de confianza que la población del Estado de México manifiesta respecto de las distintas autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

A ello se agrega la percepción ciudadana sobre corrupción, según datos de la ENVIPE 2025 para el Estado de México, entre la población de 18 años y más que identificó a cada autoridad, el 81.7% consideró corrupta a la Policía de Tránsito; el 74.2% manifestó esa percepción respecto de la Policía Preventiva Municipal y el 74.0% respecto de la Policía Estatal.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del INEGI, indica que el 63.5% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública experimentó al menos un acto de corrupción. Esto significa que más de seis de cada diez personas que interactuaron con estas autoridades enfrentaron alguna práctica de corrupción, situación que debilita la confianza de la ciudadanía en quienes tienen la responsabilidad de protegerla.[4]

[4] Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, INEGI, disponible en la pág. web. - https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2025/, consultada el día 22-08-2026.

5

Esta problemática también encuentra expresión en el espacio público, de manera recurrente, ciudadanos, automovilistas y transportistas utilizan las redes sociales para denunciar presuntos actos de extorsión, solicitudes indebidas de dinero —comúnmente conocidas como "moches"— y operativos que consideran de carácter recaudatorio, particularmente en municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, la existencia de conductas indebidas atribuibles a determinados elementos no debe traducirse en una acusación generalizada contra quienes integran las instituciones policiales. Miles de mujeres y hombres policías desempeñan diariamente una función compleja y de riesgo y, en muchas ocasiones, deben tomar decisiones en cuestión de segundos para proteger la vida y la integridad de las personas. Precisamente por ello, así como la ciudadanía requiere herramientas que permitan prevenir, documentar y esclarecer posibles abusos, las y los policías que actúan conforme a derecho también necesitan instrumentos que respalden objetivamente su actuación frente a señalamientos o acusaciones infundadas.

En este contexto, el desarrollo tecnológico ofrece herramientas que pueden contribuir al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, entre ellas se encuentran las cámaras corporales, conocidas internacionalmente como body-worn cameras o bodycams, dispositivos tecnológicos portátiles incorporados, adaptados o vinculados al uniforme o equipamiento policial, con capacidad para captar y almacenar imágenes y sonidos relacionados con determinadas intervenciones realizadas en ejercicio de las funciones de seguridad pública.

Su incorporación responde a una finalidad jurídicamente relevante: contar con un registro audiovisual que pueda complementar los informes, testimonios y otros elementos disponibles para reconstruir determinadas actuaciones policiales, sin sustituir los procedimientos legales ni las reglas aplicables a la obtención, preservación y valoración de la evidencia.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico del Estado de México para incorporar y regular el uso de cámaras corporales por parte de las y los integrantes de las instituciones policiales, con la finalidad de prevenir e inhibir posibles actos de corrupción, extorsión, abuso de autoridad y otras conductas indebidas, aportando mayores elementos para su investigación y esclarecimiento cuando lleguen a presentarse.

De igual forma, la presente reforma también busca proteger y respaldar a las y los buenos policías que todos los días cumplen con su deber, brindándoles una herramienta que permita documentar objetivamente su actuación y acreditar que procedieron conforme a la ley frente a señalamientos o acusaciones infundadas.

El uso de cámaras corporales no constituye una experiencia aislada ni una propuesta ajena a la evolución de las instituciones de seguridad pública. En el ámbito internacional, Inglaterra y Gales cuentan con un marco jurídico aplicable al uso de cámaras corporales o Body Worn Video (BWV), sustentado en la Protection of Freedoms Act 2012 y el Surveillance Camera Code of Practice. Este modelo establece que su utilización debe responder a una finalidad legítima, ser necesaria

y proporcional, respetar la privacidad y sujetarse a reglas sobre conservación, acceso, seguridad e integridad de las grabaciones.[5]

Por su parte, Escocia ha establecido reglas específicas para el uso de las grabaciones obtenidas mediante cámaras corporales en investigaciones y procedimientos penales. Las directrices de la Lord Advocate prevén que estos dispositivos pueden documentar interacciones policiales, manifestaciones de víctimas, testigos o personas sospechosas, así como las circunstancias y evidencia existentes en el lugar de los hechos; además, disponen que las grabaciones relevantes sean identificadas y puestas a disposición de la fiscalía. Esta experiencia demuestra que las cámaras corporales pueden funcionar tanto como mecanismo de transparencia como herramienta para preservar evidencia y esclarecer objetivamente una intervención policial.[6]

En México, distintas entidades y municipios han avanzado en su incorporación como parte de estrategias orientadas a fortalecer la profesionalización policial, la transparencia, la supervisión de las intervenciones y la generación de evidencia objetiva.

Un referente reciente se encuentra en el Estado de Nuevo León, en marzo de 2026 fueron publicadas reformas a su legislación en materia de seguridad pública

[5] Reino Unido, Protection of Freedoms Act 2012 y Surveillance Camera Code of Practice, normativa aplicable a sistemas de videovigilancia, incluido el Body Worn Video (BWV). Gobierno del Reino Unido. Consulta: https://www.gov.uk/government/publications/surveillance-camera-code-of-practice-guidance-for-local-authorities/surveillance-camera-code-of-practice-a-guide-for-local-authorities-accessible, consultada el día 22-08-2026

[6] Crown Office and Procurator Fiscal Service, Escocia, Lord Advocate's Guidelines on the Provision of Body Worn Video Evidence to the Procurator Fiscal in Criminal Cases, 2025, actualización 2026. Consulta: https://www.copfs.gov.uk/publications/lord-advocate-s-guidelines-body-worn-video-bwv/html/, consultada el día 25-08-2026

mediante las cuales se priorizó el uso de cámaras corporales por parte de elementos policiales.[7] Asimismo, la Secretaría de Seguridad de dicha entidad ha establecido disposiciones para el tratamiento de las imágenes, audio y video obtenidos mediante estos dispositivos, señalando entre sus finalidades documentar las actuaciones policiales, registrar hechos relacionados con la probable comisión de delitos o faltas administrativas, preservar evidencia y fortalecer los mecanismos de control, supervisión, transparencia y rendición de cuentas.[8]

En el ámbito municipal también existen experiencias recientes. En abril de 2026, el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, inició formalmente la utilización de cámaras corporales por elementos de su Policía Municipal, con la adquisición de 400 dispositivos destinados a distintas secciones operativas. De acuerdo con la propia autoridad municipal, su implementación busca fortalecer la transparencia y mejorar los procesos de supervisión y actuación policial durante las intervenciones con la ciudadanía.[9]

En el Estado de México, además, el uso de cámaras corporales no parte de cero. Existen antecedentes administrativos que demuestran que las propias instituciones estatales han reconocido la utilidad de esta tecnología. El 28 de junio de 2022 se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el Manual de Políticas y

[7] Fortalece Nuevo León su estrategia de seguridad, Boletín, Gobierno de Nuevo León 24-03-26, disponible en la pág.: https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/DECRETO%20191.pdf, consultada el 24-08-2026.
[8] Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León. (2026). Aviso de Privacidad Integral Cámara de Solapa o Cámara Corporal (Body Cam). Disponible en : https://www.nl.gob.mx/es/publicaciones/aviso-privacidad-integral-camara-solapa-o-corporal-body-cam-secretaria-seguridad, consultada el 24-08-2026.
[9] Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. (2026, 24 de abril). Entrega Ismael Burgueño cámaras corporales a elementos de la Policía Municipal de Tijuana. Comunicado oficial. Disponible en: https://www.tijuana.gob.mx/, consultada el 28-08-2026.

Procedimiento para el Uso de Cámaras Corporales (Body Cam) de la Unidad de Asuntos Internos, instrumento que establece disposiciones relacionadas con la asignación, utilización, activación, cuidado, supervisión, almacenamiento y consulta de las grabaciones generadas mediante estos dispositivos.[10]

El referido Manual reconoce entre los objetivos de las cámaras corporales documentar incidentes, preservar evidencia, registrar interacciones con la ciudadanía, prevenir conductas contrarias a la normatividad y generar información susceptible de ser utilizada para capacitación y mejoramiento institucional. Sin embargo, su ámbito de aplicación se encuentra circunscrito fundamentalmente al personal de la Unidad de Asuntos Internos, por lo que constituye un antecedente relevante, pero de alcance administrativo y limitado respecto del universo de instituciones y elementos policiales que operan en la entidad.

A ello se suma que, el 24 de octubre de 2023, fue publicado en la "Gaceta del Gobierno" el Protocolo de Actuación para el Uso de Cámaras Corporales en la Verificación de Entorno Socioeconómico, aplicable a determinadas actividades desarrolladas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México. Ambos instrumentos permiten advertir que el Estado de México ya reconoce institucionalmente la utilidad de las cámaras corporales y cuenta con experiencia administrativa en su utilización.

La utilización de cámaras corporales por elementos policiales trasciende la operación interna de una institución, pues puede implicar la captación de imágenes

[10] Manual de Políticas y Procedimiento para el Uso de Cámaras Corporales (Body Cam), Unidad de Asuntos Internos. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", disponible en la pág. web: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/junio/jun281/jun281a.pdf, consultada el 28-08-2026

y sonidos de ciudadanos, víctimas, testigos y personas detenidas, así como documentar intervenciones, detenciones, uso de la fuerza o hechos posiblemente constitutivos de delito. Por ello, su utilización requiere reglas claras que otorguen certeza sobre su activación, preservación de las grabaciones, protección de datos personales y utilización de la información generada.

En este sentido, resulta necesario dar un paso adicional: transitar de manuales y protocolos aplicables a determinadas áreas hacia un marco de rango legal que permita avanzar progresivamente hacia un modelo de cámaras corporales para las instituciones policiales del Estado y de los municipios del Estado de México. El propósito es establecer un piso jurídico común que otorgue certeza tanto a la ciudadanía como a las y los policías, definiendo desde la ley sus finalidades, principios, supuestos básicos de activación, deberes de preservación y garantías mínimas para la protección de los derechos de las personas, dejando a los protocolos la regulación de los aspectos técnicos y operativos.

Para ello, se propone reformar la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México y, de manera complementaria, la Ley de Seguridad del Estado de México, estableciendo las bases para una implementación progresiva y sujeta a disponibilidad presupuestaria en las instituciones policiales estatales y municipales, incluyendo a los elementos que desempeñen funciones de seguridad pública, prevención, proximidad y tránsito.

La seguridad pública requiere instituciones fuertes, pero también instituciones confiables. Requiere policías profesionales, pero también policías protegidos. Requiere mecanismos para investigar y sancionar a quien abuse de su autoridad,

pero también herramientas capaces de demostrar cuándo un elemento actuó correctamente.

Porque detrás de una intervención policial pueden existir dos personas que necesitan certeza: un ciudadano que merece saber que la autoridad actuará conforme a la ley y un policía que merece contar con elementos objetivos para demostrar que cumplió con su deber.

Las cámaras corporales no sustituirán la capacitación, la profesionalización, mejores condiciones laborales, controles internos eficaces ni una política integral de seguridad pública. Pero correctamente reguladas pueden convertirse en una herramienta adicional para recuperar confianza, generar evidencia y acercar nuevamente a las instituciones con las y los mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado se somete a la consideración de ésta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO NÚMERO__
LA H. "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción XXI al artículo 2 y un CAPÍTULO IV BIS denominado "De Las Cámaras Corporales", integrado por los artículos 21 Bis,

21 Ter, 21 Quáter, 21 Quinquies, 21 Sexies y 21 Septies, a la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XX. …

XXI. Cámara Corporal: Dispositivo tecnológico portátil incorporado, adaptado o vinculado al uniforme o equipo de las personas integrantes de las Instituciones Policiales, con capacidad para captar y almacenar imágenes y sonidos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO IV BIS

DE LAS CÁMARAS CORPORALES

Artículo 21 Bis. Las instituciones policiales del Estado y de los municipios implementarán progresivamente, conforme a su disponibilidad presupuestaria, capacidad operativa y planeación institucional, el uso de cámaras corporales por parte de sus integrantes.

Para su implementación se priorizarán las funciones que, por su naturaleza, impliquen mayor interacción directa con la ciudadanía, particularmente las relacionadas con prevención, proximidad, tránsito, operativos, inspecciones, detenciones y aquellas en las que exista una mayor probabilidad de uso de la fuerza, de conformidad con los protocolos y demás disposiciones aplicables.

La asignación de una cámara corporal deberá acompañarse de la capacitación necesaria para su utilización adecuada.

Artículo 21 Ter. Las personas integrantes de las instituciones policiales a quienes les haya sido formalmente asignada una cámara corporal deberán activarla, conforme a los protocolos aplicables, cuando:

I. Realicen una detención;

II. Practiquen inspecciones o revisiones legalmente procedentes;

III. Participen en persecuciones;

IV. Se presente o sea razonablemente previsible el uso de la fuerza;

V. Brinden la atención inicial a hechos probablemente constitutivos de delito;

VI. Participen en operativos policiales en los que resulte procedente su utilización;

VII. Ejecuten mandamientos ministeriales o judiciales cuando la naturaleza de la diligencia permita la utilización del dispositivo;

VIII. Intervengan en hechos o circunstancias que razonablemente puedan representar un riesgo para la ciudadanía, terceras personas o para el propio elemento policial; y

IX. En los demás supuestos que establezcan los protocolos y disposiciones jurídicas aplicables.

Cuando las circunstancias lo permitan y ello no genere un riesgo para la seguridad de las personas o para el desarrollo de la intervención, el elemento policial procurará informar que la actuación está siendo registrada mediante cámara corporal.

Artículo 21 Quáter. Una vez iniciada la grabación, la cámara corporal deberá permanecer activa hasta que concluya la intervención que motivó su activación, salvo que exista una causa legal, material, técnica o de seguridad debidamente justificada que impida continuar con el registro.

Las fallas técnicas no atribuibles a la persona usuaria no constituirán por sí mismas incumplimiento de las obligaciones previstas en este Capítulo.

La falta injustificada de activación o la interrupción deliberada de la grabación podrá dar lugar a las responsabilidades administrativas o disciplinarias que correspondan.

La falta de activación o la interrupción de la grabación no producirá, por sí misma, la invalidez automática de la intervención, detención o actuación policial, ni determinará automáticamente la exclusión de otros elementos de prueba, lo cual se resolverá conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 21 Quinquies. Las cámaras corporales únicamente podrán utilizarse para fines relacionados con la seguridad pública y el ejercicio de las funciones legalmente encomendadas a las instituciones policiales.

Queda prohibido utilizar estos dispositivos para fines personales, comerciales, político-electorales o ajenos al servicio, así como para realizar actos de acoso, discriminación o cualquier otra conducta contraria a derecho.

La utilización de las cámaras corporales deberá observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.

Artículo 21 Sexies. El tratamiento de las imágenes, sonidos y demás información obtenida mediante cámaras corporales se sujetará a las disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, seguridad pública y, cuando corresponda, cadena de custodia.

Las instituciones deberán establecer medidas que garanticen la integridad, autenticidad, inalterabilidad, seguridad, trazabilidad, almacenamiento y preservación de las grabaciones, así como controles para identificar los accesos y operaciones realizadas sobre éstas.

Queda prohibida la alteración, edición, eliminación, copia, extracción, difusión o utilización no autorizada de las grabaciones, incluyendo su publicación en redes sociales o plataformas digitales, sin perjuicio de los supuestos expresamente permitidos por las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 21 Septies. La utilización de cámaras corporales deberá realizarse con especial consideración a la privacidad, dignidad y protección de los datos personales de las personas registradas.

Los protocolos deberán establecer medidas reforzadas respecto de niñas, niños y adolescentes; víctimas de delitos sexuales; víctimas y testigos cuya identidad requiera protección; personas que reciban atención médica; así como respecto de grabaciones realizadas en domicilios o lugares en los que exista una expectativa reforzada de privacidad.

El ingreso y grabación mediante cámaras corporales dentro de un domicilio únicamente procederá cuando la actuación policial dentro de éste sea jurídicamente válida y la utilización del dispositivo resulte necesaria conforme a la naturaleza de la intervención.

Las instituciones policiales deberán evaluar periódicamente la implementación de las cámaras corporales mediante indicadores que permitan conocer, entre otros aspectos, su utilización, funcionamiento, cumplimiento de los protocolos y resultados institucionales, incorporando información estadística agregada al informe previsto en el artículo 42 de esta Ley, sin comprometer datos personales, investigaciones o información legalmente reservada.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el inciso aq) al apartado B del artículo 100 de la Ley de Seguridad del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 100. …

a) a ap) …

aq) Portar, utilizar y activar la cámara corporal que, en su caso, les sea asignada formalmente por la Institución Policial, así como preservar el equipo y observar las disposiciones aplicables para el tratamiento de la información generada, de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México, los protocolos y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO. La Secretaría de Seguridad del Estado de México, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las instancias competentes, deberá emitir o adecuar, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los protocolos, lineamientos y demás disposiciones administrativas necesarias para su cumplimiento.

CUARTO. Las instituciones policiales estatales y municipales implementarán progresivamente el uso de cámaras corporales de conformidad con su disponibilidad presupuestaria, capacidad operativa, planeación institucional y las disposiciones que se emitan para tal efecto.

QUINTO. Para la implementación progresiva se priorizarán las funciones que impliquen mayor interacción directa con la ciudadanía, particularmente las relacionadas con prevención, proximidad, tránsito, operativos, inspecciones, detenciones y aquellas en las que exista una mayor probabilidad de uso de la fuerza.

SEXTO. Las obligaciones individuales relativas a la portación, utilización y activación de cámaras corporales serán exigibles a las personas integrantes de las

instituciones policiales únicamente cuando el dispositivo les haya sido formalmente asignado y hayan recibido la capacitación correspondiente.

SÉPTIMO. Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la implementación del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos autorizados de las instituciones correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y las disposiciones aplicables.

OCTAVO. La Secretaría de Seguridad establecerá los criterios e indicadores generales para evaluar progresivamente la implementación y utilización de las cámaras corporales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los municipios.

NOVENO. Los manuales, protocolos, lineamientos y demás disposiciones administrativas vigentes en materia de cámaras corporales continuarán aplicándose en lo que no se opongan al presente Decreto, hasta en tanto sean modificados, sustituidos o abrogados.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los 09 días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

Diputada Krishna Karina Romero Velázquez **Diputado Pablo Fernández de Cevallos G.**

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Toluca de Lerdo, Estado de México, 23 de septiembre de 2026.

DIPUTADO
VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA LXII LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28, fracción I, 30, 38 fracción II, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y por su digno conducto, las Diputadas y los Diputados, Ruth Salinas Reyes, Maricela Beltrán Sánchez, Lilia Urbina Salazar, Juan Manuel Zepeda Hernández y Martín Zepeda Hernández integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos a la consideración de esta Honorable Legislatura, la **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México; se deroga el Título Décimo denominado "Del Testigo Social" del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México; se reforma la fracción XII del artículo 3 y se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; se adiciona un último párrafo al artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y se adiciona un último párrafo al artículo 2 del Código Electoral del Estado de México, en materia de armonización legislative en materia de particiapación ciudadana, conformidad con la siguiente:**

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa que expide la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, y armoniza la legislación estatal en la materia, busca proteger y fortalecer un de los factores reales de poder que ha sido delimitado por el gobierno en turno, la voz

1

ciudadana. En Movimiento Ciudadano temenos la ferrea creencia de que toda decicisión, politica publica, o acción del gobierno sin importar del nivel que sea, nacional o subnacional deber ser avalado, supervisado e incluso sancionado por las y los ciudadano, ya que son ellas y ellos de quienes emana el poder de acuerdo a la concepción y de la democració y en suma son ellas y ellos quienes se ven beneficiados o perjudicados por esas decisiones que muchas veces se contruyen únicamente desde los escritos y no toman en cuenta la realidad de las y los gobernados.

El proyecto se construye bajo seis decisiones de técnica legislative, reconocimiento amplio del derecho a participar; diferenciación estricta entre mecanismos administrativos y mecanismos político-electorales; mínima intervención sobre el Código Electoral, la Ley Orgánica Municipal y los demás ordenamientos especializados; reserva constitucional del procedimiento especial de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; aprovechamiento de estructuras existentes para evitar duplicidad burocrática; e integración del testigo social dentro de un sistema general de participación, vigilancia y trazabilidad ciudadana de las contrataciones públicas, preservando la especialidad de la legislación de contratación.

La democracia constitucional contemporánea no puede ser entendida exclusivamente como un procedimiento periódico para elegir representantes. El sufragio libre, auténtico y periódico continúa siendo el fundamento de la legitimidad de origen de los poderes públicos; sin embargo, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, del constitucionalismo democrático y de la administración pública ha consolidado una dimensión complementaria, las personas tienen derecho a intervenir, individual o colectivamente, en la discusión, formulación, ejecución, vigilancia y evaluación de las decisiones públicas que inciden en su vida y en el desarrollo de sus comunidades.

La participación ciudadana no sustituye a las instituciones representativas ni desconoce las atribuciones constitucionales de los poderes públicos. Las complementa. Una democracia participativa constitucionalmente ordenada mejora la

calidad de la información disponible para las autoridades, permite anticipar conflictos, incorpora conocimientos territoriales y comunitarios, fortalece la rendición de cuentas y genera canales institucionales para procesar demandas sociales.

Para el Grupo Parlamentario de Moviento Ciudadano el reto legislativo consiste en evitar dos extremos, por una parte, una participación meramente simbólica, convocada cuando la decisión ya está tomada; por otra, una concepción ilimitada de la voluntad mayoritaria capaz de desplazar derechos humanos, competencias constitucionales o garantías de las minorías.

Desde esta perspectiva, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México debe constituir un ordenamiento general de derechos, principios, procedimientos y garantías. No se propone convertir toda intervención social en un proceso electoral ni crear un organismo autónomo adicional. Se pretende, en cambio, ordenar mecanismos administrativos, deliberativos, presupuestarios, colaborativos y de vigilancia; articularlos con las figuras político-electorales ya existentes; y establecer una regla común de información, accesibilidad, respuesta fundada, trazabilidad y seguimiento.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoció que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Su artículo 21 colocó, desde el inicio del sistema universal de derechos humanos, la participación directa y la representación como vías compatibles de intervención política (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948). Este reconocimiento se complementa con las libertades de expresión, reunión y asociación, indispensables para que la participación sea auténtica.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desarrolló ese mandato en su artículo 25 al reconocer el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. La expresión conjunta de "derecho" y "oportunidad" resulta jurídicamente relevante: el reconocimiento formal es insuficiente si las personas carecen de información, medios materiales, procedimientos accesibles o condiciones de igualdad para ejercerlo (ONU,

3

1966). México promulgó el Pacto en 1981, por lo que forma parte del parámetro de regularidad constitucional.

La Observación general número 25 del Comité de Derechos Humanos precisó que la dirección de los asuntos públicos comprende el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo, así como la formulación y aplicación de políticas en los ámbitos nacional, regional y local. También destacó que la participación efectiva requiere libertad de expresión, reunión, asociación y acceso a información pública suficiente (Comité de Derechos Humanos, 1996).

Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública, elaboradas en 2018, consolidaron estándares especialmente útiles para el diseño legislativo. La participación debe ser previa y oportuna, informada, incluyente, segura, significativa, transparente y sujeta a rendición de cuentas. Una autoridad que consulta después de haber adoptado una decisión, que entrega información incompleta o que recibe opiniones sin explicar su tratamiento no satisface plenamente esos estándares de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2018).

La Agenda 2030 incorporó en su meta 16.7 el objetivo de garantizar decisiones inclusivas, participativas y representativas en todos los niveles. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible no sustituyen obligaciones constitucionales, muestran que la participación forma parte de la calidad institucional y de la gobernanza democrática (ONU, 2015).

En el sistema interamericano, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos (Organización de los Estados Americanos, 1969). La Carta Democrática Interamericana agrega que la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía fortalece y profundiza la democracia representativa, y que promover

distintas formas de participación es condición para el desarrollo democrático (OEA, 2001).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las políticas públicas con enfoque de derechos deben incorporar a las personas titulares de derechos en el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Este enfoque abandona la idea de una ciudadanía únicamente receptora y reconoce su capacidad para producir conocimiento, supervisar programas y exigir explicaciones públicas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018a). La CIDH también ha relacionado transparencia, participación y rendición de cuentas con la prevención de la corrupción y la protección de los derechos humanos (CIDH, 2018b).

De los instrumentos universales e interamericanos se desprenden parámetros que deben incorporarse transversalmente al proyecto, reconocimiento de la participación como derecho; igualdad y ausencia de restricciones irrazonables; acceso oportuno a información; participación antes de que la decisión sea irreversible; medidas reforzadas de inclusión; deliberación efectiva; respuesta institucional; publicidad y trazabilidad; mecanismos de revisión; y compatibilidad con el orden constitucional.

La participación significativa exige que las personas sepan, antes de intervenir, cuál es el objeto del ejercicio, qué autoridad decidirá, qué efectos puede producir el resultado y qué materias se encuentran excluidas. También requiere una obligación correlativa de la autoridad de explicar el tratamiento de las propuestas. El derecho a ser escuchado pierde contenido si el Estado no demuestra que escuchó, analizó y respondió.

La protección de derechos humanos constituye un límite infranqueable. Ninguna mayoría puede decidir legítimamente la supresión de derechos fundamentales, la discriminación de un grupo o la sustitución de competencias jurisdiccionales. El principio mayoritario debe operar dentro del constitucionalismo de derechos.

La Constitución de 1917 construyó un régimen republicano, representativo, democrático y federal y consagró los principios de soberanía popular, sufragio, libertad

5

de expresión, petición, asociación y municipio libre. Aunque su diseño original fue predominantemente representativo, dejó bases jurídicas que posteriormente permitieron ampliar la intervención directa de la ciudadanía (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

La reforma política de 1977 fue determinante para institucionalizar el pluralismo y ampliar la representación. Las reformas electorales de 1990 y 1996, por su parte, consolidaron autoridades electorales especializadas y un sistema de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que después serviría de referencia para los mecanismos de democracia directa.

La reforma constitucional de derechos humanos de 10 de junio de 2011 modificó profundamente la forma de interpretar la participación. El artículo 1 estableció que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, conforme al principio pro persona (Diario Oficial de la Federación, 2011). Desde entonces, los artículos 23 de la Convención Americana y 25 del Pacto Internacional deben considerarse en la interpretación de los derechos políticos y de participación pública.

La reforma política de 9 de agosto de 2012 incorporó de manera expresa la iniciativa ciudadana y la consulta popular al artículo 35 constitucional, además de ampliar el régimen de candidaturas independientes (DOF, 2012). El cambio marcó un punto de inflexion, la ciudadanía dejó de ser sólo electora de quienes deciden y obtuvo instrumentos para activar el procedimiento legislativo y pronunciarse directamente sobre asuntos públicos determinados.

La reforma político-electoral de 2014 y la Ley Federal de Consulta Popular desarrollaron reglas sobre legitimación, verificación de apoyos, control de constitucionalidad, organización, cómputo y efectos. En 2019 se incorporó la revocación de mandato, posteriormente reglamentada a nivel federal. Esta evolución confirma que el orden constitucional mexicano admite mecanismos de intervención

directa siempre que cuenten con reglas previas, límites materiales y tutela jurisdiccional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la consulta popular es un derecho humano de participación política, pero que opera dentro de límites constitucionales y no puede utilizarse para condicionar el cumplimiento de deberes jurídicos indisponibles. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su parte, ha reconocido que los mecanismos de democracia directa mediante voto deben observar los principios constitucionales del sufragio y disponer de medios de impugnación efectivos (SCJN, 2020; TEPJF, 2010, 2016).

El Estado de México posee antecedentes tempranos de participación ciudadana. Los trabajos legislativos estatales han identificado el reconocimiento del derecho de iniciativa de la ciudadanía desde la Constitución local de 1861, antecedente que muestra que la participación directa en la formación de la ley forma parte de la tradición constitucional mexiquense.

En 1995 se reformó el artículo 14 de la Constitución local para establecer la figura del referéndum constitucional y legislativo y se expidió una ley reglamentaria específica. Aquel modelo tuvo importancia histórica porque permitió concebir a la ciudadanía como sujeto capaz de aprobar o rechazar disposiciones normativas. También reflejó limitaciones propias de su época, altos umbrales, mediación política del Ejecutivo y ausencia de una autoridad electoral permanente para organizar todos los aspectos del procedimiento.

En 2011 se fortalecieron mecanismos relacionados con la iniciativa ciudadana. En 2013 se incorporó en el artículo 29 de la Constitución mexiquense el derecho a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia estatal. El diseño constitucional local estableció sujetos legitimados, un umbral ciudadano del dos por ciento de la lista nominal, un umbral de participación del cuarenta por ciento para efectos vinculantes, control previo de constitucionalidad y organización por el Instituto Electoral del Estado

de México. En 2014 el Código Electoral desarrolló el procedimiento y abrogó la antigua ley reglamentaria del artículo 14.

La participación municipal se ha desarrollado mediante cabildos abiertos, consejos de participación ciudadana, autoridades auxiliares y procedimientos de planeación. La Ley Orgánica Municipal reconoce mecanismos de comunicación y colaboración con las comunidades; la legislación de planeación incorpora la participación de los sectores social y privado; y diversas leyes sectoriales contemplan consejos, comités y contralorías sociales. Esta pluralidad es valiosa, pero produce fragmentación normativa cuando no existen principios, definiciones y garantías transversales.

El Censo de Población y Vivienda 2020 registró 16,992,418 habitantes en el Estado de México, lo que lo coloca como la entidad más poblada del país. La escala demográfica y la diversidad territorial municipios metropolitanos, rurales, industriales, agrícolas, conurbados y comunidades con distintos niveles de conectividad, justifican un modelo híbrido que combine procedimientos digitales y presenciales (INEGI, 2021).

La experiencia reciente de planeación muestra también una demanda institucional por mecanismos permanentes de interacción. El desafío no radica en demostrar que existe participación, sino en asegurar que ésta tenga reglas comunes, información suficiente, registro, respuesta y seguimiento.

Dentro de los antecedentes estatales de participación vinculada directamente con el ejercicio del gasto público debe destacarse la incorporación del Testigo Social al Código Administrativo del Estado de México mediante el Decreto número 147, publicado el 6 de septiembre de 2010.

El régimen vigente lo concibe expresamente como un mecanismo de participación ciudadana para involucrar a la sociedad civil en procedimientos de contratación pública relevantes por su complejidad, impacto o monto de recursos, con la finalidad de minimizar riesgos de opacidad y corrupción de acuerdo con lo determinado en el Código Administrativo del Estado de México, en los artículos. 1.42 a 1.73. Su existencia demuestra que el orden jurídico mexiquense ya reconoce una modalidad de

8

participación no electoral orientada a la vigilancia del gasto; la presente iniciativa la sistematiza dentro de la futura ley general de participación, sin desnaturalizar las reglas técnicas de la contratación pública.

El 3 de junio de 2026 se publicó el Decreto número 330, por el que se reformó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La reforma reconoció al Estado como pluricultural y multiétnico; reconoció a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; reforzó sus derechos de libre determinación, sistemas normativos, desarrollo, participación y consulta; y reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas dentro de la composición pluricultural del Estado.

El nuevo artículo 17 reconoce expresamente el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o alcanzar un acuerdo. También dispone que el Estado y los municipios celebren consultas y cooperen de buena fe por conducto de sus instituciones representativas. Los pueblos y comunidades afromexicanas gozan, en lo conducente, de los derechos previstos por el propio precepto.

Nuestra iniciativa adopta una decisión de técnica constitucional, no reglamentar dentro de esta Ley de Participación Ciudadana los sujetos, etapas, procedimientos, efectos ni medios de impugnación de ese derecho colectivo. El artículo Tercero Transitorio del Decreto 330 ordena armonizar las leyes estatales dentro de los ciento veinte días siguientes a la expedición de la Ley General de la materia por el Congreso de la Unión. Al 7 de agosto de 2026, el proceso federal seguía en fase de consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, según publicaciones del Diario Oficial de la Federación de 29 de junio y 22 de julio de 2026.

Por esa razón, el proyecto únicamente contiene una cláusula de reserva y salvaguarda que esta ningún mecanismo general de consulta ciudadana, audiencia, asamblea, parlamento abierto o encuesta podrá sustituir una consulta constitucionalmente exigible. La exclusión del procedimiento especial no suspende ni desconoce el derecho; simplemente evita anticipar una regulación que deberá armonizarse con la futura Ley General y con la legislación estatal especializada.

La revisión conjunta de la Constitución estatal, el Código Electoral, la Ley Orgánica Municipal, la legislación de planeación, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los ordenamientos sectoriales permite identificar un conjunto amplio de figuras de participación, pero no un sistema general que las ordene. La dispersión genera diferencias conceptuales, incertidumbre sobre autoridades competentes, ausencia de criterios uniformes de accesibilidad, reglas desiguales de seguimiento y dificultades para identificar medios de defensa.

La nueva ley debe resolver esta fragmentación sin absorber materias especializadas. La consulta popular y el referéndum deben permanecer en el Código Electoral; la iniciativa ciudadana debe conservar su procedimiento parlamentario; el cabildo abierto y los consejos de participación deben seguir vinculados a la Ley Orgánica Municipal; y las consultas constitucionalmente especiales deben permanecer fuera del régimen general de consulta ciudadana. La ley propuesta funcionará como un marco transversal de derechos, garantías y mecanismos administrativos.

El tránsito de mecanismos aislados a un sistema integral permitirá que la ciudadanía conozca qué puede promover, ante qué autoridad, mediante qué requisitos, con qué efectos y cómo puede exigir una respuesta. La seguridad jurídica es una condición de la participación democrática, no un obstáculo para ella.

Los antecedentes internacionales, nacionales y estatales permiten afirmar que la participación ciudadana es un derecho humano, complementario de la democracia representativa y sujeto al orden constitucional. Su ejercicio requiere información, inclusión, accesibilidad, respuesta, trazabilidad y medios de defensa. El municipio

debe ocupar una posición central por su cercanía territorial, sin que ello autorice a desconocer su autonomía. La tecnología puede ampliar cobertura, pero no puede convertirse en requisito excluyente.

Como se ha enuncadio, el Estado de México cuenta con bases constitucionales suficientes y una historia normativa relevante, pero necesita articular sus mecanismos en un ordenamiento general. Este instrumento propone hacerlo con mínima intervención, gradualidad presupuestaria y respeto a los regímenes constitucionales y sectoriales especiales.

La expedición de una Ley de Participación Ciudadana debe partir del parámetro de regularidad constitucional integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución local y la jurisprudencia aplicable.

El artículo 1o federal obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y a interpretar las normas en el sentido más favorable a las personas. En materia de participación, esta obligación posee una dimensión positiva: el Estado debe crear procedimientos, información, condiciones de accesibilidad, plazos y vías de revisión que conviertan el derecho formal en una oportunidad real de incidencia.

El artículo 35 de nuestra Carta Magna reconoce derechos políticos como votar, ser votado, iniciar leyes, participar en consultas populares y en procesos de revocación de mandato. Estos derechos representan la dimensión político-electoral de la participación y están sometidos a garantías reforzadas. Sin embargo, la Constitución no agota todas las modalidades posibles de interacción entre sociedad y gobierno. Las entidades federativas conservan competencias para regular mecanismos administrativos, deliberativos y comunitarios, dentro del marco de los artículos 115, 116 y 124 constitucionales.

La Constitución mexiquense contiene una habilitación expresa. El artículo 61 faculta a la Legislatura para legislar en materia de participación ciudadana y para convocar consultas populares conforme a la Constitución y a la ley. Los artículos 14 y 29 regulan referéndum y consulta popular; el artículo 15 reconoce la intervención de organizaciones civiles; el artículo 29 contempla la iniciativa ciudadana y la participación comunitaria; y el artículo 139 sustenta la planeación democrática.

De esta arquitectura se desprende que una ley general es constitucionalmente viable, siempre que no altere por vía ordinaria los elementos reservados a la Constitución o a la legislación electoral especial.

Por ello, la iniciativa no modifica porcentajes, umbrales, autoridades o fechas de la consulta popular estatal; no redefine el referéndum; no transforma al Instituto Electoral en una autoridad general de participación administrativa; y no crea un órgano constitucional autónomo. Es una ley de desarrollo y articulación, no de sustitución constitucional.

La técnica de mínima intervención legislativa implica reformar otros ordenamientos sólo cuando sea indispensable para evitar una contradicción o vacío insuperable. La nueva ley debe concentrar los principios generales y los mecanismos administrativos, mientras cada legislación especial conserva sus procedimientos. Esta solución protege la coherencia del sistema, reduce antinomias y evita duplicar competencias.

La consulta popular y el referéndum permanecerán en los Libros Octavo y Noveno del Código Electoral. La Ley de Participación Ciudadana reconocerá esas figuras y remitirá a la Constitución y al Código. De igual forma, la iniciativa ciudadana conservará su regulación parlamentaria y el cabildo abierto seguirá sujeto a la Ley Orgánica Municipal. En materia de planeación y de mecanismos sectoriales, la ley general operará complementariamente respecto de accesibilidad, transparencia, respuesta y seguimiento.

Los mecanismos político-electorales son aquellos que implican ejercicio del sufragio o activación de procedimientos constitucionales directamente relacionados con

derechos políticos. Los mecanismos administrativos y deliberativos incluyen audiencias, consultas ciudadanas no electorales, agendas, observatorios, contralorías sociales, recorridos, evaluación de servicios, colaboración y presupuesto participativo. El uso de urnas o de una plataforma de votación no convierte por sí mismo un ejercicio administrativo en elección constitucional.

Esta distinción tiene efectos en materia de autoridad organizadora, padrón, fiscalización, medios de impugnación y costo. Extender automáticamente la estructura electoral a los mecanismos administrativos sería jurídicamente innecesario y financieramente ineficiente.

El Código Electoral regula la consulta popular y el referéndum, incluyendo convocatoria, verificación de apoyos, organización, cómputo, declaración de resultados y medios de impugnación. La ley propuesta no reproduce estas etapas. Se limita a establecer que los principios generales de accesibilidad, lenguaje ciudadano, protección de datos y máxima publicidad serán complementarios cuando resulten compatibles con la naturaleza electoral.

La legislación electoral debe mantener la competencia del Instituto Electoral del Estado de México sobre los mecanismos que la Constitución le encomienda. El Instituto podrá prestar asistencia técnica a mecanismos administrativos mediante convenio, pero la ley no le asignará la organización cotidiana de audiencias, asambleas, observatorios o presupuestos participativos. Esta delimitación preserva su especialización y evita costos permanentes adicionales.

La tutela judicial efectiva exige que los actos definitivos capaces de impedir el ejercicio de derechos político-electorales cuenten con medios de impugnación. La jurisprudencia 40/2010 del TEPJF reconoce la impugnabilidad de actos relacionados con referéndums y plebiscitos cuando se proyecta el derecho de voto. La revisión de las cláusulas de improcedencia del Código Electoral deberá realizarse mediante una reforma específica y mínima, sin duplicar en esta ley el sistema electoral de medios de defensa.

13

El artículo 115 federal protege la autonomía municipal. La ley estatal puede establecer un piso común de derechos y garantías para los 125 municipios, pero no debe imponer una autoridad intermedia ni una estructura administrativa idéntica. Cada ayuntamiento conservará su potestad reglamentaria y podrá desarrollar modalidades adaptadas a su población, territorio y capacidad financiera.

El cabildo abierto continuará regulándose por la Ley Orgánica Municipal. La nueva ley agregará estándares transversales como la convocatoria anticipada, información comprensible, inscripción abierta, accesibilidad física y comunicacional, registro de intervenciones, respuesta y seguimiento. Los consejos de participación ciudadana conservarán su naturaleza municipal y no quedarán subordinados al Consejo Estatal.

La ley tampoco obligará a crear una nueva dirección municipal. Bastará con designar una unidad responsable dentro de la estructura existente. Esta decisión permite cumplir el derecho sin generar burocracia innecesaria y respeta la diversidad organizativa de los ayuntamientos.

La reforma al artículo 17 de la Constitución local publicada mediante Decreto 330 creó un régimen constitucional especial que debe ser respetado por esta ley. El precepto reconoce el derecho de consulta respecto de medidas legislativas o administrativas susceptibles de producir afectaciones o impactos significativos y ordena que las consultas se realicen conforme a principios y normas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas. También reconoce, en lo conducente, derechos a los pueblos y comunidades afromexicanas.

El propio Decreto 330 dispone en su artículo Tercero Transitorio que el Congreso del Estado armonizará las leyes correspondientes dentro de los ciento veinte días siguientes a la expedición de la Ley General de la materia por el Congreso de la Unión. El Diario Oficial de la Federación publicó el 29 de junio de 2026 la convocatoria y el protocolo para consultar la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; posteriormente, el 22 de julio publicó las sedes

de las asambleas regionales y mesas de trabajo. Esto acredita que, al cierre de este proyecto, la ley general se encontraba aún en proceso de construcción.

En consecuencia, la iniciativa excluye del ámbito regulatorio de esta ley el procedimiento especial de consulta indígena y afromexicana. No define impacto significativo, no fija etapas, plazos, autoridades, legitimación, consentimiento ni medios de impugnación. Conserva únicamente una cláusula de salvaguarda que prohíbe utilizar los mecanismos generales como sustitutos de la consulta constitucional. Esta solución evita invadir la futura distribución de competencias y reduce el riesgo de una antinomia posterior.

La reserva de materia no implica suspensión del derecho. Los artículos 2 federal y 17 local poseen eficacia normativa directa. Cuando una autoridad deba consultar conforme a la Constitución, deberá hacerlo con base en el régimen constitucional, convencional y especializado aplicable, aun cuando esta Ley de Participación Ciudadana no reglamente el procedimiento.

En la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020, el Pleno de la Suprema Corte reconoció la consulta popular como un derecho humano de participación política y sostuvo que, entre interpretaciones razonables, debe preferirse aquella que maximice el acceso al derecho, sin desconocer los límites constitucionales. De este criterio se desprende el principio de facilitación donde las autoridades deben prevenir errores subsanables, orientar a las personas promoventes y evitar formalismos desproporcionados.

La Corte también ha explicado que la participación directa complementa, pero no sustituye, la democracia representativa. Los resultados ciudadanos pueden incidir en decisiones públicas, pero no crean competencias no previstas ni permiten someter a votación el cumplimiento de obligaciones regladas. Por ello, el proyecto excluye de las consultas administrativas la ejecución de sentencias, la determinación individual de responsabilidades, la investigación de delitos, la protección de derechos humanos y otras obligaciones indisponibles.

15

La claridad y neutralidad de las preguntas constituye otra garantía jurisprudencial. Una pregunta no debe contener información falsa, juicios de valor, asuntos inconexos, conceptos incomprensibles o formulaciones que induzcan una respuesta. La ley extiende este principio a las consultas ciudadanas no electorales y obliga a publicar información suficiente sobre antecedentes, impactos y alternativas.

La tesis XLIX/2016 del TEPJF dispone que los mecanismos de democracia directa mediante voto deben observar los principios constitucionales del sufragio: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. La jurisprudencia 40/2010, a su vez, reconoce tutela electoral para referéndums y plebiscitos cuando se afecta el derecho a votar.

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-JDC-46/2019, la Sala Superior enfatizó que la denominación política de un ejercicio no basta para conferirle naturaleza electoral o efectos vinculantes. Debe existir fundamento legal, autoridad competente, objeto, etapas, requisitos, efectos y medio de defensa. Esta enseñanza se incorpora al proyecto mediante la prohibición de presentar encuestas, sondeos o foros como si fueran consultas populares vinculantes.

En materia municipal, la jurisprudencia electoral ha señalado que los procedimientos de integración de autoridades u órganos auxiliares realizados mediante voto deben respetar principios electorales mínimos, aunque la organización corresponda a los ayuntamientos. La ley mantiene esta distinción y evita remitir indiscriminadamente todas las controversias municipales al Tribunal Electoral.

La elaboración de una ley destinada a garantizar la participación ciudadana debe ser congruente con su propio objeto. Por ello, el proceso legislativo no puede agotarse en la revisión de normas, doctrina y jurisprudencia, sino que debe incorporar la experiencia de quienes intervienen cotidianamente en organizaciones vecinales,

instituciones académicas, órganos ciudadanos, gobiernos municipales, espacios de rendición de cuentas y mecanismos de vigilancia social.

Esta dimensión adquirió especial relevancia con la celebración, el 28 de agosto de 2026, del Foro "Ley de Participación Ciudadana del Estado de México", convocado en el Congreso mexiquense como espacio de deliberación para identificar los contenidos que debe reunir una legislación estatal en la materia.

En el foro se planteó que la futura ley debe tener vocación municipal y democrática, ser equitativa, inclusiva, universal e intercultural, emplear lenguaje claro y accesible, reconocer la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía y establecer mecanismos que permitan que las aportaciones sociales produzcan consecuencias institucionales. También se formularon propuestas relacionadas con capacitación de la población, educación cívica, fortalecimiento de comités y estructuras municipales y delegacionales, cabildos abiertos, sanciones por incumplimiento de las obligaciones de participación, uso de tecnologías y establecimiento de canales permanentes para recibir propuestas legislativas.

Estas aportaciones obligan a precisar un aspecto central del diseño normative, como la efectividad de la participación no puede medirse únicamente por el número de consultas, foros o audiencias realizadas. Una participación jurídicamente significativa requiere que la intervención de las personas deje una huella institucional verificable.

La autoridad debe registrar lo planteado, identificar al área competente, emitir una respuesta y permitir el seguimiento de los compromisos. En consecuencia, la iniciativa incorpora el principio de incidencia efectiva, entendido como la obligación de que cada mecanismo produzca los efectos previstos por la ley o por su convocatoria y, como mínimo, genere registro, respuesta y trazabilidad.

La demanda de mecanismos "vinculatorios" debe armonizarse con el principio de supremacía constitucional y con la distribución de competencias. Una ley ordinaria no puede convertir toda opinión mayoritaria en una orden capaz de sustituir las atribuciones constitucionales del Congreso, del Ejecutivo, de los ayuntamientos o de

17

los órganos jurisdiccionales. Por ello, el proyecto distingue entre efectos vinculantes, de reconsideración obligatoria, de respuesta obligatoria, de incorporación a agenda, consultivos y de seguimiento.

La vinculatoriedad estricta sólo existirá cuando derive expresamente de la Constitución o de una ley; en los demás casos se fortalece el deber de motivación y respuesta, evitando que la participación se reduzca a una práctica meramente testimonial.

En esa misma lógica se incorpora la solicitud de revisión ciudadana de decisiones administrativas generales. Este instrumento no constituye un veto ciudadano ni suspende automáticamente una política pública. Su finalidad es permitir que, cuando exista un respaldo ciudadano suficiente, una autoridad deba reabrir públicamente el análisis de una política, programa o decisión administrativa general, exponer sus antecedentes, celebrar una audiencia y emitir una resolución reforzadamente fundada en la que determine si mantiene, modifica, sustituye o, dentro de sus atribuciones, deja sin efectos la medida. La figura genera incidencia sin alterar las competencias constitucionales.

Las intervenciones del foro también destacaron la necesidad de prever consecuencias frente a las personas servidoras públicas que incumplan las obligaciones derivadas de la participación. Esta propuesta requiere precisión por el principio de legalidad. No puede sancionarse a una autoridad simplemente por no aceptar una petición ciudadana, pues subsiste su deber de decidir conforme al orden jurídico, la planeación y las disponibilidades presupuestarias. Sí resulta jurídicamente sancionable obstaculizar injustificadamente un mecanismo, omitir una convocatoria obligatoria, alterar resultados, ocultar información, incumplir deliberadamente el deber de responder, ejercer represalias, manipular expedientes o reportar falsamente el cumplimiento de compromisos. El proyecto desarrolla las responsabilidades bajo esta lógica.

La formación ciudadana constituye otro eje de la ampliación. Los mecanismos sólo pueden utilizarse plenamente cuando las personas conocen su existencia, requisitos,

efectos y vías de seguimiento. En consecuencia, se crea un Programa Estatal de Cultura y Formación para la Participación Ciudadana, desarrollado mediante estructuras existentes y con la colaboración de municipios, instituciones públicas de educación superior y organismos especializados. El programa deberá abarcar derechos de participación, deliberación democrática, acceso a la información, elaboración de propuestas, seguimiento presupuestario, contraloría social, gobierno abierto y herramientas digitales.

Respecto de la propuesta de incorporar la participación ciudadana en los espacios educativos, la iniciativa adopta una fórmula respetuosa de la distribución constitucional de competencias. La presente ley no modifica planes y programas de estudio ni invade atribuciones de las autoridades educativas federales. Establece, en cambio, la posibilidad de promover actividades complementarias, simulaciones, parlamentos, consultas escolares, proyectos comunitarios y materiales de formación cívica, en coordinación con las autoridades educativas y conforme a la legislación especializada. De esta forma se impulsa la participación de niñas, niños, adolescentes y juventudes sin alterar el régimen educativo.

La vocación municipal planteada en el foro se fortalece mediante una Red Municipal de Participación Ciudadana. La Red no crea una autoridad intermedia, un nuevo organismo ni una estructura remunerada. Su finalidad es coordinar a la Unidad Municipal con autoridades auxiliares, consejos de participación ciudadana, organizaciones, observatorios y demás instancias comunitarias, respetando la Ley Orgánica Municipal y la autonomía reglamentaria de cada ayuntamiento. Con ello se evitan duplicidades y se mejora la canalización territorial de las propuestas.

En materia de cabildo abierto se establece un mecanismo de trazabilidad. Toda propuesta formulada formalmente durante una sesión deberá recibir un folio, identificar el área responsable y contar con una respuesta inicial dentro de un plazo legal. El objetivo no es trasladar la decisión del cabildo a quienes intervienen con voz, sino

impedir que la participación concluya al término de la sesión sin constancia de atención posterior.

Asimismo, se incorpora un Buzón Permanente de Participación Legislativa, presencial y digital, para recibir propuestas, observaciones y diagnósticos relacionados con asuntos de competencia del Congreso. El Buzón no sustituye la iniciativa ciudadana ni los procedimientos parlamentarios formales. Su función es abrir un canal permanente, otorgar folio, canalizar cada planteamiento y hacer visible su estado de atención. Cuando una promoción pueda tramitarse mediante un mecanismo jurídico específico, la Legislatura deberá orientar a la persona promovente.

La tecnología se concibe como instrumento de ampliación y no de exclusión. La Plataforma Estatal evoluciona hacia un sistema de trazabilidad en el que cada expediente pueda consultarse por estados de atención recibido, en análisis, admitido, en deliberación, resuelto, en ejecución, cumplido o cerrado, con identificación de responsables, plazos y documentos públicos. Al mismo tiempo, se preservan canales presenciales, itinerantes y comunitarios para que la brecha digital no se convierta en una barrera de acceso.

El lenguaje ciudadano se incorpora como principio rector. Las convocatorias, informes de resultados, respuestas y documentos técnicos esenciales deberán contar con versiones comprensibles que expliquen qué se decide, quién puede participar, cómo hacerlo, qué efectos tendrá el mecanismo, qué resultado obtuvo y qué acciones posteriores deberá realizar la autoridad. La precisión jurídica no es incompatible con la claridad; por el contrario, la comprensión de las reglas constituye una condición para el ejercicio efectivo del derecho.

Finalmente, la incorporación de la interculturalidad como principio general no modifica la reserva normativa establecida respecto de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La interculturalidad orientará los mecanismos generales, la comunicación pública y las medidas de inclusión, pero los procedimientos especiales de consulta constitucional continuarán excluidos de esta ley y sujetos a los artículos

2o. federal y 17 local, al Decreto número 330 y a la legislación general y estatal especializada que resulte aplicable.

La participación ciudadana adquiere una dimensión especialmente relevante cuando se proyecta sobre la contratación pública. En estos procedimientos confluyen decisiones técnicas, presupuestarias y administrativas mediante las cuales el Estado y los municipios transforman recursos públicos en bienes, servicios, infraestructura y proyectos. La posibilidad de incorporar observación social especializada fortalece la publicidad, la integridad, la prevención de conflictos de interés y la detección oportuna de irregularidades, sin sustituir las responsabilidades de las autoridades contratantes ni de los órganos de control.

El Estado de México cuenta desde 2010 con la figura del Testigo Social. El Título Décimo del Libro Primero del Código Administrativo, artículos 1.42 a 1.73, lo define como un mecanismo de participación ciudadana y regula su registro, obligaciones, contratación, intervención en los procedimientos, emisión de testimonio e infracciones. El régimen vigente reconoce su derecho a voz, su deber de informar irregularidades, su participación desde la revisión de bases hasta la formalización contractual y la obligación de emitir un testimonio público con recomendaciones. El Reglamento del Título Décimo, publicado el 10 de junio de 2011, desarrolla el registro, la actuación, las cuotas, el expediente y la integración del Comité de Registro.

La ubicación histórica de la figura dentro del Código Administrativo fue funcional para su creación, pero su naturaleza sustantiva es inequívocamente participativa. Trasladar su régimen general a la Ley de Participación Ciudadana permite ordenar el sistema sin convertir esta ley en un ordenamiento de adquisiciones.

La ley de participación regulará la naturaleza del Testigo Social, registro, independencia, designación, derechos, obligaciones, testimonio, publicidad, respuesta institucional, seguimiento y responsabilidad; mientras que la Ley de Contratación Pública, el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo y la legislación de asociaciones público privadas conservarán la regulación técnica de los

procedimientos, modalidades, comités, evaluación, adjudicación, ejecución y responsabilidades contractuales.

Existe, además, un antecedente formal de reordenamiento normativo. En 2020 el Poder Ejecutivo sometió a análisis regulatorio un proyecto que proponía derogar el Título Décimo del Libro Primero del Código Administrativo y redistribuir la figura del Testigo Social en la legislación especializada de contratación pública, obra y asociaciones público privadas. Aunque aquella propuesta no se convirtió en derecho vigente, confirma que la ubicación del Testigo Social no constituye una reserva material del Código Administrativo y que su traslado puede realizarse mediante una armonización legislativa expresa, siempre que se eviten remisiones rotas y se preserve la continuidad de los procedimientos en curso.

También debe considerarse la iniciativa presentada el 29 de octubre de 2025 por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura, que propuso reformar los artículos 1.49, 1.50 y 1.51 del Código Administrativo para sustituir al órgano garante de transparencia en la integración del registro por la Secretaría de la Contraloría, profesionalizar la figura mediante capacitación y examen de conocimientos y ampliar la vigencia del registro a cuatro años . La presente iniciativa recupera esos objetivos de continuidad institucional y profesionalización, pero los inserta dentro de una reforma sistemática de participación ciudadana.

El nuevo diseño conserva la participación conjunta de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría en el registro, a través de un Comité de Registro de Testigos Sociales sin personalidad jurídica ni patrimonio propios. Esta fórmula combina conocimiento técnico, autonomía académica y capacidad institucional de control. El registro tendrá vigencia de cuatro años y podrá renovarse conforme al desempeño, previa acreditación de los requisitos de integridad, experiencia, capacitación y evaluación de conocimientos previstos en la ley y los lineamientos.

La reforma introduce una segunda innovación, qu es la coexistencia de participación obligatoria y facultativa. El Testigo Social deberá intervenir en procedimientos que

rebasen los umbrales objetivos que el Comité publique anualmente en Unidades de Medida y Actualización, así como en aquellos que la Secretaría de la Contraloría determine de alto riesgo o especial impacto conforme a criterios públicos. En los demás casos, las unidades contratantes podrán solicitar su intervención. De esta manera se evita que la vigilancia dependa exclusivamente de la voluntad de la autoridad contratante y, al mismo tiempo, se mantiene proporcionalidad respecto de procedimientos de menor entidad.

La ciudadanía podrá activar una vía de solicitud de atestiguamiento social. Cualquier persona, organización, observatorio o contraloría social podrá pedir fundadamente a la Secretaría de la Contraloría que determine la intervención de un Testigo Social en una contratación relevante. La solicitud no suspenderá el procedimiento por sí misma y deberá resolverse con criterios de riesgo, impacto, monto, complejidad y antecedentes. Este instrumento incorpora incidencia ciudadana sin permitir que una petición no verificada paralice el funcionamiento administrativo.

Para proteger la independencia, la unidad contratante no seleccionará discrecionalmente a la persona Testigo Social. La designación se realizará desde el registro mediante criterios públicos de especialidad, rotación, disponibilidad, carga de trabajo y ausencia de conflicto de interés. La contraprestación seguirá a cargo de la entidad contratante y se sujetará a cuotas públicas; sin embargo, el pago no podrá condicionarse al sentido favorable o desfavorable del testimonio, ni podrá utilizarse el contrato para reducir las facultades legales de observación.

La intervención se amplía con un enfoque de trazabilidad. El Testigo Social podrá observar los actos preparatorios directamente vinculados con la contratación, la revisión de convocatoria y bases, las juntas de aclaraciones, visitas, presentación y apertura de propuestas, evaluación, fallo y formalización. En contrataciones de especial impacto podrá extender su observación a hitos de ejecución, entrega o recepción expresamente determinados, sin asumir funciones de supervisión técnica, residencia de obra, fiscalización o administración contractual.

23

El testimonio social deja de concebirse como un documento que simplemente se publica al cierre. La unidad contratante deberá responderlo dentro de un plazo legal, identificando las recomendaciones aceptadas, rechazadas o canalizadas, las medidas correctivas y la autoridad responsable. Tanto el testimonio como la respuesta y su seguimiento se incorporarán a la Plataforma Estatal de Participación Ciudadana. Con ello se aplica al gasto público el principio de incidencia efectiva incorporado a esta iniciativa: observación, recomendación, respuesta y trazabilidad.

La responsabilidad por la legalidad de la contratación permanecerá en las personas servidoras públicas facultadas. El Testigo Social no valida, autoriza ni convalida el procedimiento; tampoco sustituye a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior de Fiscalización, al Tribunal de Justicia Administrativa ni a las autoridades penales. La independencia de responsabilidades, ya reconocida por el régimen vigente, se mantiene como garantía para impedir que la presencia de un observador social sea utilizada como eximente institucional.

Desde la perspectiva presupuestaria, el traslado no parte de cero, el régimen vigente ya contempla cuotas a cargo de las unidades contratantes y una estructura de registro.

La reforma no crea un organismo autónomo ni un nuevo ente con patrimonio propio. Los costos incrementales provendrán principalmente de la profesionalización, la ampliación de supuestos obligatorios, la trazabilidad digital y la respuesta institucional. Tales costos deberán integrarse desde la planeación de la contratación y estarán sujetos a transparencia y disciplina financiera. La transición conservará temporalmente registros, cuotas y reglas reglamentarias existentes para impedir un vacío operativo.

La reubicación del Testigo Social dentro de la Ley de Participación Ciudadana responde, por tanto, a una lógica de sistematización y fortalecimiento. No se disminuye la especialidad de la contratación pública; se reconoce que la vigilancia ciudadana del gasto forma parte del derecho más amplio de intervenir, observar y exigir rendición de cuentas en los asuntos públicos. Este diseño enlaza al Testigo Social con la contraloría

social, los observatorios ciudadanos, la Plataforma y el principio de incidencia efectiva, formando un continuo institucional de prevención, vigilancia y seguimiento.

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para 2026 se encuentra dentro de un marco financiero aproximado de 410,341.6 millones de pesos, monto coincidente con los ingresos totales autorizados para el ejercicio. Por su parte, al Instituto Electoral del Estado de México le fueron asignados 1,764,459,768 pesos para 2026, incluyendo prerrogativas de financiamiento público a partidos políticos. Estas cifras sirven como referencia de escala, no como disponibilidad automática para la nueva ley.

El impacto fiscal debe distinguir entre costos permanentes, costos variables y gastos extraordinarios. Los costos permanentes incluyen reglamentación, capacitación, plataforma, accesibilidad, archivo, registro y evaluación. Los variables dependen de la frecuencia de audiencias, consultas, recorridos, observatorios o ejercicios de presupuesto participativo. Las consultas populares y referéndums deben presupuestarse separadamente dentro del régimen electoral.

El modelo institucional propuesto minimiza gastos recurrentes. El Sistema Estatal carece de personalidad y patrimonio propios; el Consejo es honorífico; la Secretaría Técnica se ubica en una unidad existente; los municipios pueden designar áreas ya creadas; y la Plataforma debe aprovechar infraestructura interoperable. Con este diseño, una banda indicativa de implementación administrativa estatal entre 0.005 y 0.020 por ciento del presupuesto estatal representaría aproximadamente entre 20.5 y 82.1 millones de pesos. Se trata de escenarios de sensibilidad, no de una solicitud presupuestaria definitiva.

Los 125 municipios presentan capacidades fiscales y territoriales muy diferentes. La ley evita imponer un gasto uniforme. La asistencia estatal, cuando exista, deberá considerar población, marginación, dispersión territorial, capacidad fiscal, brecha digital y necesidades de accesibilidad. El presupuesto participativo deberá financiarse

con una bolsa identificable de recursos municipales susceptibles de priorización, sin comprometer deuda, nómina, servicios esenciales o recursos etiquetados.

La disciplina presupuestaria exige gradualidad, reutilización de infraestructura, interoperabilidad tecnológica, transparencia del gasto, reintegro de recursos no ejercidos, memoria de cálculo para mecanismos extraordinarios y evaluación costo-beneficio. La disponibilidad presupuestaria no debe convertirse en una excusa para negar indefinidamente derechos; cuando exista insuficiencia, la autoridad deberá justificarla, adoptar alternativas menos costosas y programar progresivamente el cumplimiento.

Las adecuaciones derivadas del foro formación ciudadana, Red Municipal, Buzón Permanente, trazabilidad digital y solicitud de revisión ciudadana incrementan principalmente cargas de coordinación, capacitación y gestión de expedientes, pero no requieren la creación de un organismo autónomo, nuevas estructuras municipales obligatorias ni una autoridad electoral adicional. Por ello, su impacto puede absorberse dentro de los escenarios de implementación moderada y reforzada ya planteados, siempre que se privilegien plataformas interoperables, capacitación conjunta y uso de personal existente.

Cualquier ampliación de plazas, infraestructura o contratación deberá contar con memoria de cálculo y suficiencia presupuestaria. La integración del Testigo Social tampoco implica crear una institución desde cero: sustituye y moderniza un régimen ya existente en el Código Administrativo. Los costos adicionales se concentran en capacitación, evaluación, asignación independiente, ampliación de supuestos obligatorios y trazabilidad digital; las contraprestaciones continuarán presupuestándose dentro del procedimiento de contratación correspondiente.

La consolidación de una democracia participativa debe armonizarse invariablemente con el diseño federalista y, de manera específica, con el principio de libre administración hacendaria de los municipios consagrado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, la presente iniciativa

abandona cualquier pretensión impositiva que obligue a los ayuntamientos a comprometer porcentajes rígidos o prohibiciones de reducción de sus presupuestos que pudieran asfixiar sus finanzas, especialmente en aquellos municipios con alta marginación o baja recaudación de ingresos propios.

En su lugar, el proyecto opta por un modelo de progresividad institucional y corresponsabilidad fiscal. Se faculta al Consejo Estatal para emitir lineamientos que clasifiquen a los municipios, permitiendo que la implementación del presupuesto participativo sea gradual y acorde a su realidad financiera. Como verdadero motor de este modelo, se propone la creación del Fondo Estatal de Coinversión Participativa, un mecanismo de incentivos mediante el cual el Gobierno del Estado empata o complementa los recursos que los ayuntamientos destinen a proyectos avalados por la ciudadanía. Esta fórmula transforma el presupuesto participativo de una carga fiscal impuesta a una oportunidad de inversión concurrente, alineando los incentivos de los gobiernos municipales con las demandas vecinales.

Un sistema de participación ciudadana carece de legitimidad si los mecanismos para validar el respaldo social son frágiles, discrecionales o propensos a la opacidad. Resulta materialmente imposible y jurídicamente riesgoso que las autoridades administrativas municipales o estatales verifiquen firmas ciudadanas sin tener acceso a las bases de datos registrales correspondientes.

Para dotar de plena certeza jurídica a los mecanismos de democracia directa y administrativa, la ley mandata el uso de herramientas tecnológicas interoperables y la celebración de convenios de colaboración con las autoridades electorales como son el INE e IEEM. El objetivo es transitar hacia el uso de aplicaciones oficiales de captación de apoyos y la validación mediante plataformas de identidad digital ciudadana como Llave Estado de México. Esta transición tecnológica no solo previene el fraude procedimental y el clientelismo, sino que protege de manera irrestricta los datos personales de los promoventes, garantizando que el ejercicio del derecho a participar cuente con un blindaje institucional de vanguardia.

27

La integración del Testigo Social como mecanismo de vigilancia ciudadana de las contrataciones públicas busca fortalecer la integridad del gasto gubernamental, sin que ello se traduzca en una parálisis de las funciones sustantivas del Estado. La iniciativa reconoce que la Secretaría de la Contraloría requiere tiempos materiales y jurídicos razonables para evaluar la pertinencia de integrar a un Testigo Social frente a peticiones ciudadanas.

Por ello, se establece un plazo de quince días hábiles para la resolución de dichas solicitudes, anclado a la aplicación estricta de una matriz pública de riesgos en la contratación. Esta medida dota a la autoridad de un filtro objetivo para desechar peticiones infundadas o frívolas que pretendan utilizar el mecanismo como herramienta de dilación política o comercial. Asimismo, se incorpora la figura de la negativa ficta para asegurar que, ante cualquier eventualidad burocrática, los procedimientos de contratación pública necesarios para el desarrollo del Estado no se detengan.

La eficacia de los derechos de participación ciudadana depende de su accesibilidad, no de la proliferación enciclopédica de figuras jurídicas ni de la judicialización excesiva de los conflictos. Con este propósito, la iniciativa compacta conceptualmente los mecanismos de diálogo y proximidad comunitaria, facilitando su comprensión y uso por parte de la población.

De manera destacada, se introduce un enfoque de justicia restaurativa administrativa. Antes de someter a la ciudadanía a la carga de un litigio largo y oneroso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la ley abre la vía de la mediación y protección sumaria a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y las Defensorías Municipales. Esta innovación procesal garantiza que las controversias por negativas burocráticas u obstaculización del derecho a participar se resuelvan con agilidad, privilegiando la restitución inmediata del ejercicio ciudadano sobre la confrontación jurisdiccional prolongada.

La Legislatura del Estado de México posee competencia suficiente para expedir la presente ley. No se requiere reforma constitucional previa mientras se respeten los

regímenes de consulta popular, referéndum, iniciativa ciudadana, autonomía municipal y consulta constitucional especial. La ley se construye, por tanto, como ordenamiento general de mecanismos administrativos y deliberativos y como marco complementario de principios respecto de figuras reguladas en leyes especiales.

Esta arquitectura permite fortalecer la democracia participativa sin fragmentar el sistema electoral, sin centralizar a los municipios y sin anticipar la regulación de materias cuya armonización depende de una ley general federal pendiente. Las aportaciones del Foro de 28 de agosto de 2026 se traducen en obligaciones concretas de incidencia, formación, trazabilidad, revisión y seguimiento, evitando que la ley quede reducida a una declaración programática. Desde la perspectiva financiera, el proyecto es sostenible si se implementa gradualmente y con estructuras existentes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Legislatura el siguiente Proyecto de Decreto.

A T E N T A M E N T E

DIP. RUTH SALINAS REYES **DIP. MARICELA BELTRÁN SÁNCHEZ**

DIP. LILIA URBINA SALAZAR **DIP. MARTÍN ZEPEDA HERNÁNDEZ**

DIP. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ

Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

de la LXII Legislatura del Estado de México

29

PROYECTO DE DECRETO

La H.LXII Legislatura del Estado de México

Decreta:

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, para quedar como sigue:

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de México. Tiene por objeto reconocer, garantizar, promover y regular el derecho de las personas a participar, individual o colectivamente, en la deliberación, formulación, ejecución, seguimiento, vigilancia y evaluación de las decisiones públicas estatales y municipales, dentro del ámbito de competencia de cada autoridad.

Artículo 2. Son finalidades de esta Ley:

I. Garantizar el ejercicio efectivo, informado, libre, incluyente y accesible del derecho a la participación ciudadana;

II. Complementar y fortalecer la democracia representativa mediante mecanismos de democracia participativa, deliberativa y colaborativa;

III. Establecer las bases del Sistema Estatal de Participación Ciudadana;

IV. Determinar los derechos de las personas participantes y las obligaciones de las autoridades;

V. Regular los mecanismos de naturaleza administrativa, consultiva, deliberativa, comunitaria, colaborativa, presupuestaria, evaluativa y de vigilancia social;

VI. Articular los mecanismos previstos en la legislación electoral, municipal, parlamentaria, de planeación y en los ordenamientos sectoriales;

VII. Garantizar la participación de personas y grupos que enfrenten discriminación, desigualdad, exclusión territorial o brecha digital;

VIII. Promover transparencia, rendición de cuentas, trazabilidad y respuesta fundada;

IX. Establecer bases para la participación en planes, programas, servicios, obras y políticas públicas;

X. Fortalecer la colaboración entre poderes públicos, municipios, organismos autónomos, instituciones académicas, organizaciones sociales y comunidades;

XI. Contribuir a la prevención de la corrupción, al uso eficiente de recursos públicos, a la buena administración y a la construcción de confianza institucional;

XII. Promover una cultura permanente de formación, corresponsabilidad y educación para la participación ciudadana; y

XIII. Garantizar que los mecanismos formales produzcan una incidencia institucional verificable conforme a su naturaleza y efectos jurídicos.

Artículo 3. Las disposiciones de esta Ley son aplicables, dentro de sus respectivas competencias, a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; a los ayuntamientos y sus administraciones públicas; a los organismos constitucionales autónomos; a los organismos auxiliares y demás entidades de las administraciones públicas estatal o municipal; a los fideicomisos y fondos públicos que realicen actos de autoridad o ejecuten programas sujetos a participación ciudadana; y a las demás autoridades a las que el orden jurídico atribuya funciones relacionadas con los mecanismos previstos en esta Ley.

Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos aplicarán esta Ley con respeto a su autonomía, independencia, régimen interior y competencias constitucionales.

Artículo 4. La interpretación y aplicación de esta Ley se realizará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la jurisprudencia aplicable. En todo momento se favorecerá la protección más amplia de las personas y la máxima

efectividad del derecho a participar en los asuntos públicos, sin desconocer los límites materiales, las competencias constitucionales ni los derechos de terceros.

Artículo 5. La aplicación de esta Ley se sujetará a las reglas siguientes:

I. La consulta popular de trascendencia estatal y el referéndum se regirán por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Electoral del Estado de México y las demás disposiciones electorales aplicables;

II. La iniciativa ciudadana se regirá por la Constitución estatal, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo y, de manera complementaria, por esta Ley;

III. El cabildo abierto, las autoridades auxiliares municipales y los consejos de participación ciudadana se regirán por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los reglamentos municipales y, de manera complementaria, por esta Ley;

IV. El derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocido en los artículos 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México constituye un régimen constitucional especial y queda excluido del ámbito regulatorio de la presente Ley. Su ejercicio se sujetará directamente a las disposiciones constitucionales, convencionales y a la legislación general y estatal especializada que resulte aplicable;

V. Ningún mecanismo regulado en esta Ley podrá interpretarse, utilizarse o hacerse valer como sustituto, cumplimiento o equivalente de una consulta a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas constitucionalmente exigible;

VI. Los mecanismos previstos en leyes sectoriales conservarán su régimen especial y esta Ley se aplicará complementariamente en materia de accesibilidad, inclusión, transparencia, deliberación, respuesta y seguimiento, cuando ello resulte compatible con su naturaleza;

VII. Los mecanismos que impliquen el ejercicio del sufragio o posean naturaleza político-electoral observarán los principios constitucionales y los medios de impugnación correspondientes; y

VIII. Los mecanismos administrativos regulados por esta Ley no adquirirán naturaleza electoral por el solo hecho de utilizar urnas, plataformas, votaciones abiertas o expresiones de preferencia.

Artículo 6. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Agenda ciudadana: instrumento mediante el cual se identifican, sistematizan y someten a consideración de las autoridades asuntos, necesidades y propuestas de interés público;

II. Asamblea comunitaria: espacio de deliberación territorial o comunitaria convocado conforme a esta Ley o a la reglamentación municipal;

III. Audiencia pública: mecanismo de diálogo directo entre personas y autoridades sobre asuntos determinados;

IV. Autoridad responsable: ente público facultado para convocar, organizar, atender o ejecutar un mecanismo;

V. Cabildo abierto: sesión del ayuntamiento regulada por la Ley Orgánica Municipal en la que las personas habitantes participan con voz;

VI. Colaboración ciudadana: aportación voluntaria de conocimientos, trabajo comunitario, propuestas, bienes o recursos permitidos por la ley;

VII. Consejo: Consejo Estatal de Participación Ciudadana;

VIII. Consulta ciudadana: mecanismo administrativo y no electoral para conocer opiniones, preferencias, diagnósticos o propuestas sobre un asunto público;

IX. Consulta legislativa: proceso mediante el cual el Poder Legislativo recibe y analiza opiniones sobre iniciativas o proyectos normativos;

X. Contraloría social: mecanismo organizado de vigilancia ciudadana de programas, obras, acciones y recursos públicos, sin sustitución de las atribuciones de fiscalización o control;

XI. Democracia deliberativa: proceso público de intercambio razonado de información, argumentos, alternativas y consecuencias;

XII. Democracia participativa: forma de intervención directa o colaborativa de las personas en asuntos públicos, complementaria de la democracia representativa;

XIII. Enlace institucional: persona servidora pública designada para coordinar el cumplimiento de esta Ley;

XIV. Expediente de participación: conjunto organizado de documentos, datos, antecedentes, opiniones, actas, resultados y respuestas relacionados con un mecanismo;

XV. Facilitación: conducción imparcial de un proceso de diálogo o deliberación;

XVI. Habitante: persona que reside habitual o temporalmente en el territorio del Estado, con independencia de su nacionalidad, sin perjuicio de los requisitos constitucionales aplicables a derechos político-electorales;

XVII. Mecanismo: procedimiento de participación ciudadana previsto en esta Ley o en una legislación especial;

XVIII. Observatorio ciudadano: espacio autónomo de análisis, seguimiento y evaluación social de asuntos públicos;

XIX. Organización ciudadana: agrupación formal o informal de personas que participa en asuntos de interés colectivo;

XX. Personas participantes: habitantes, ciudadanas, ciudadanos, organizaciones, colectivos, comunidades o instituciones que intervienen en un mecanismo;

XXI. Plataforma: Plataforma Estatal de Participación Ciudadana;

XXII. Presupuesto participativo: mecanismo mediante el cual las personas proponen, priorizan y seleccionan proyectos financiados con una bolsa pública previamente determinada;

XXIII. Principio de trazabilidad: posibilidad de conocer el registro, tratamiento, respuesta, ejecución y evaluación de una propuesta ciudadana;

XXIV. Registro: Registro Estatal de Mecanismos de Participación Ciudadana;

XXV. Recorrido participativo: inspección conjunta de un espacio, obra, servicio o problemática por autoridades y habitantes;

XXVI. Respuesta fundada: determinación de la autoridad que expone antecedentes y razones jurídicas, técnicas, presupuestarias y de política pública;

XXVII. Secretaría: Secretaría General de Gobierno;

XXVIII. Sistema: Sistema Estatal de Participación Ciudadana;

XXIX. Unidad Coordinadora: unidad administrativa de la Secretaría responsable de coordinar la aplicación de esta Ley;

XXX. Unidad Municipal: dependencia o unidad administrativa que cada ayuntamiento designe como responsable de participación ciudadana;

XXXI. Vigilancia ciudadana: seguimiento social de actos, programas, servicios, obras y compromisos gubernamentales;

XXXII. Votación participativa: expresión de preferencia dentro de un mecanismo administrativo que no constituye sufragio político-electoral;

XXXIII. Grupo de atención prioritaria: conjunto de personas que enfrenta desigualdad estructural, discriminación o barreras particulares para participar;

XXXIV. Matriz de respuesta: documento que identifica las propuestas recibidas y explica su incorporación, rechazo, modificación, canalización o programación;

XXXV. Autoridad garante competente: institución a la que el orden jurídico atribuya la protección del acceso a la información pública o de los datos personales;

XXXVI. Buzón Permanente de Participación Legislativa: canal presencial y digital de la Legislatura para recibir, registrar, canalizar y dar seguimiento a propuestas, observaciones y diagnósticos ciudadanos;

XXXVII. Incidencia efectiva: capacidad jurídica e institucional de un mecanismo para producir consecuencias verificables en forma de decisión, reconsideración, respuesta, incorporación a agenda, seguimiento o evaluación;

XXXVIII. Lenguaje ciudadano: forma de comunicación pública clara, comprensible y accesible que conserva la precisión jurídica indispensable;

XXXIX. Red Municipal de Participación Ciudadana: mecanismo de coordinación territorial entre la Unidad Municipal y las instancias comunitarias y ciudadanas existentes, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios;

XL. Solicitud de revisión ciudadana: mecanismo administrativo mediante el cual se solicita la reconsideración pública de una política, programa o decisión administrativa general conforme a esta Ley;

XLI. Testigo Social: persona física o jurídica colectiva con registro vigente que, como representante imparcial de la sociedad civil, observa procedimientos de contratación pública en los términos de esta Ley; y

XLII. Testimonio Social: documento público que emite el Testigo Social al concluir su intervención, en el que hace constar el desarrollo del procedimiento observado, las incidencias relevantes, conclusiones, recomendaciones y propuestas.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 7. La actuación de las autoridades y el desarrollo de los mecanismos se regirán por los principios de accesibilidad, autonomía ciudadana, buena fe, certeza, corresponsabilidad, deliberación informada, efectividad, equidad territorial, gratuidad, igualdad sustantiva, incidencia efectiva, inclusión, interculturalidad, lenguaje

ciudadano, legalidad, máxima publicidad, neutralidad, no discriminación, paridad de género, perspectiva de derechos humanos, pluralismo, progresividad, rendición de cuentas, respeto a la autonomía municipal, seguridad jurídica, trazabilidad, transparencia, universalidad y uso responsable de los recursos públicos.

Artículo 8. Ninguna autoridad podrá establecer requisitos, cargas, plazos, formatos o condiciones que resulten desproporcionados o que hagan materialmente imposible el ejercicio del derecho de participación. Las dudas sobre requisitos subsanables deberán resolverse mediante prevención y asistencia a la persona promovente antes de declarar improcedente una solicitud.

CAPÍTULO III

DE LAS PERSONAS TITULARES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 9. Toda persona tiene derecho a participar en los mecanismos administrativos, deliberativos, comunitarios, colaborativos, evaluativos y de vigilancia regulados por esta Ley. El ejercicio de derechos político-electorales se reservará a quienes reúnan los requisitos establecidos en la Constitución y la legislación electoral.

Artículo 10. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión y participar, conforme a su edad, desarrollo evolutivo y madurez, en los asuntos públicos que les afecten. Su participación no podrá condicionarse a la autorización de una organización, partido político o autoridad distinta de la que legalmente corresponda a su protección.

Artículo 11. Las personas extranjeras residentes, migrantes, visitantes y quienes se encuentren en tránsito podrán intervenir en mecanismos no electorales relacionados con servicios públicos, convivencia, derechos humanos, desarrollo comunitario y asuntos que les afecten. Su participación no les conferirá derechos político-electorales reservados constitucionalmente a la ciudadanía mexicana.

Artículo 12. Son derechos de las personas participantes:

I. Promover los mecanismos previstos en esta Ley;

II. Recibir orientación y asistencia;

III. Acceder gratuitamente a información suficiente, comprensible, objetiva y oportuna;

IV. Participar en condiciones de igualdad, seguridad y respeto;

V. Formular propuestas, observaciones, preguntas y alternativas;

VI. Conocer reglas, autoridades, plazos y efectos;

VII. Recibir constancia o acuse;

VIII. Consultar el expediente público;

IX. Conocer resultados, metodología y versiones ciudadanas de los documentos esenciales;

X. Obtener respuesta fundada;

XI. Dar seguimiento a acuerdos y compromisos;

XII. Impugnar actos u omisiones conforme a la ley;

XIII. Solicitar ajustes razonables;

XIV. Participar sin afiliación partidista obligatoria;

XV. Ejercer libertad de expresión y deliberación pacífica;

XVI. Solicitar protección de datos personales; y

XVII. No sufrir represalias por su intervención lícita.

Artículo 13. Las organizaciones, colectivos, instituciones académicas, colegios profesionales, comunidades y grupos vecinales podrán promover y participar en los mecanismos, sin que la falta de personalidad jurídica sea causa automática de exclusión.

Cuando pretendan asumir obligaciones, administrar recursos o celebrar convenios deberán acreditar la capacidad jurídica requerida por la legislación aplicable.

Artículo 14. Las autoridades deberán garantizar que la afiliación política, condición socioeconómica, domicilio dentro de una colonia determinada, pertenencia a una asociación, discapacidad, origen étnico, lengua, edad, identidad o expresión de género y cualquier otra condición no constituyan barreras indebidas para participar.

Artículo 15. Son deberes de las personas participantes:

I. Conducirse con respeto y de manera pacífica;

II. Proporcionar información veraz cuando sea necesaria para validar una actuación;

III. Abstenerse de suplantar identidades, falsificar apoyos o alterar resultados;

IV. Respetar derechos de terceros y reglas del mecanismo;

V. Informar conflictos de interés relevantes;

VI. Evitar amenazas, violencia o discriminación;

VII. Proteger información confidencial a la que legítimamente tengan acceso; y

VIII. Utilizar los mecanismos para fines lícitos.

Artículo 16. La participación será gratuita.

Ninguna autoridad podrá exigir cuotas, aportaciones, dádivas, afiliaciones, contraprestaciones o servicios como condición para participar.

Artículo 17. Las opiniones expresadas en los mecanismos no generarán responsabilidad administrativa, civil o penal, salvo cuando constituyan conductas sancionadas expresamente por la ley.

Artículo 18. Las personas servidoras públicas deberán abstenerse de intimidar, discriminar, condicionar servicios, obstaculizar trámites, amenazar o adoptar represalias contra quienes promuevan o participen en los mecanismos.

TÍTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO I

DE LAS AUTORIDADES

Artículo 19. Son autoridades responsables de aplicar esta Ley:

I. La Legislatura del Estado;

II. La persona titular del Poder Ejecutivo y las dependencias y entidades de la administración pública estatal;

III. Los ayuntamientos y las dependencias y entidades municipales;

IV. Los organismos constitucionales autónomos, dentro de sus competencias;

V. El Instituto Electoral del Estado de México, exclusivamente respecto de las atribuciones que le confieran la Constitución, el Código Electoral y otras leyes;

VI. Las autoridades jurisdiccionales competentes; y

VII. Las demás autoridades a las que una disposición jurídica atribuya funciones de participación ciudadana.

Artículo 20. Corresponde a la Legislatura:

I. Garantizar la participación ciudadana en el ámbito parlamentario;

II. Recibir y tramitar las iniciativas ciudadanas;

III. Desarrollar mecanismos de parlamento abierto y consulta legislativa;

IV. Designar a las personas consejeras ciudadanas conforme a esta Ley;

V. Aprobar los recursos presupuestarios correspondientes;

VI. Dar seguimiento a los resultados de los mecanismos relacionados con su competencia; y

VII. Ejercer las demás atribuciones previstas en la Constitución y las leyes.

Artículo 21. Corresponde al Poder Ejecutivo:

I. Formular la política estatal de participación ciudadana;

II. Coordinar el Sistema por conducto de la Secretaría;

III. Incorporar la participación en la planeación, programación, ejecución y evaluación de políticas públicas;

IV. Garantizar el funcionamiento de la Plataforma y del Registro;

V. Proporcionar asistencia técnica a los municipios;

VI. Incluir previsiones presupuestarias;

VII. Promover procesos de consulta pública regulatoria;

VIII. Cumplir y dar seguimiento a determinaciones vinculantes que legalmente correspondan; y

IX. Las demás previstas en esta Ley.

Artículo 22. Corresponde a los ayuntamientos:

I. Garantizar la participación de las personas habitantes en asuntos municipales;

II. Expedir y mantener actualizado su reglamento de participación ciudadana;

III. Designar la Unidad Municipal;

IV. Organizar los mecanismos municipales;

V. Implementar el presupuesto participativo;

VI. Fortalecer el cabildo abierto y los consejos de participación ciudadana;

VII. Integrar y facilitar la operación de la Red Municipal de Participación Ciudadana;

VIII. Incorporar mecanismos presenciales para localidades sin conectividad;

IX. Promover la formación ciudadana y la difusión de los mecanismos;

X. Publicar resultados, respuestas y avances;

XI. Prever los recursos necesarios; y

XII. Las demás atribuciones previstas en esta Ley, la Ley Orgánica Municipal y sus reglamentos.

Artículo 23. Los organismos constitucionales autónomos incorporarán mecanismos de participación relacionados con sus atribuciones sustantivas, sin perjuicio de su autonomía técnica, presupuestaria y de gestión.

Artículo 24. La intervención del Instituto Electoral en consultas populares, referéndums y demás mecanismos político-electorales se sujetará exclusivamente a la Constitución estatal y a la legislación electoral.

El Instituto podrá celebrar convenios de asistencia técnica respecto de mecanismos administrativos, siempre que ello no implique transferirle competencias ajenas a su naturaleza ni utilizar indebidamente el padrón electoral.

Artículo 25. Ninguna autoridad podrá convocar un ejercicio con la denominación de consulta popular, referéndum u otro mecanismo político-electoral si no se encuentra expresamente previsto y regulado por el orden jurídico.

CAPÍTULO II

DE LA NATURALEZA E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Artículo 26. El Sistema es el conjunto de principios, autoridades, mecanismos, instrumentos, registros, procedimientos y relaciones de coordinación destinados a garantizar el derecho de participación ciudadana.

Artículo 27. El Sistema no tendrá personalidad jurídica ni patrimonio propios y no constituirá una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y los municipios.

Artículo 28. Son objetivos del Sistema:

I. Coordinar las políticas de participación;

II. Facilitar el ejercicio de los mecanismos;

III. Evitar duplicidades institucionales;

IV. Establecer estándares comunes de calidad;

V. Generar información comparable;

VI. Fortalecer capacidades estatales y municipales;

VII. Promover buenas prácticas;

VIII. Evaluar los resultados de la participación; y

IX. Impulsar la innovación democrática.

Artículo 29. El Sistema se integrará por:

I. El Consejo;

II. La Unidad Coordinadora;

III. Las unidades municipales;

IV. Los enlaces institucionales;

V. El Registro;

VI. La Plataforma;

VII. Los mecanismos previstos en esta Ley y en las leyes especiales; y

VIII. Los instrumentos de planeación, evaluación y rendición de cuentas.

Artículo 30. La coordinación dentro del Sistema no implicará subordinación entre poderes, organismos autónomos o municipios. Los acuerdos del Consejo tendrán carácter de recomendaciones, lineamientos técnicos o mecanismos de coordinación, salvo que una ley les atribuya expresamente efectos distintos.

Artículo 31. Las autoridades deberán intercambiar información, metodologías y buenas prácticas, respetando las competencias, la protección de datos personales y las restricciones legales aplicables.

CAPÍTULO III

DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 32. El Consejo es la instancia plural, honorífica, consultiva y de coordinación estratégica del Sistema.

Artículo 33. El Consejo se integrará por:

I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá;

II. La persona titular de la Secretaría de Finanzas;

III. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría;

IV. La persona titular de la autoridad estatal competente en materia de gobierno digital;

V. Tres representantes municipales, provenientes de regiones distintas;

VI. Seis personas consejeras ciudadanas; y

VII. La persona titular de la Unidad Coordinadora, quien ejercerá la Secretaría Técnica con voz, pero sin voto. La integración deberá observar paridad de género y diversidad regional.

Artículo 34. Serán personas invitadas permanentes, con voz pero sin voto:

I. Una representación de la Legislatura;

II. Una representación del Poder Judicial;

III. Una representación del Instituto Electoral;

IV. Una representación del organismo público de derechos humanos;

V. Una representación de la autoridad garante competente en transparencia y protección de datos;

VI. Una representación de las instituciones públicas de educación superior estatales; y

VII. Las demás que acuerde el Consejo por la naturaleza de los asuntos.

Artículo 35. Las representaciones municipales serán seleccionadas anualmente mediante convocatoria pública e insaculación entre los municipios que manifiesten interés. La selección deberá procurar la presencia de municipios metropolitanos, urbanos y rurales.

Artículo 36. Las personas consejeras ciudadanas serán designadas por la Legislatura mediante convocatoria pública, evaluación documental y comparecencia abierta. La designación requerirá el voto de las dos terceras partes de las personas legisladoras presentes.

Artículo 37. Para ser persona consejera ciudadana se requiere:

I. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Acreditar residencia en el Estado durante los cinco años anteriores;

III. Contar con experiencia en participación ciudadana, derechos humanos, administración pública, desarrollo comunitario, transparencia, planeación, evaluación, academia o materias afines;

IV. No haber sido dirigente de partido político, candidata o candidato a un cargo de elección popular, ni haber ocupado un cargo partidista de dirección durante los tres años anteriores;

V. No encontrarse inhabilitada para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público;

VI. No tener conflicto de interés permanente con las funciones del Consejo; y

VII. Presentar declaración de intereses.

Artículo 38. Las personas consejeras ciudadanas durarán cuatro años en su encargo, no podrán ser designadas para un periodo inmediato y ejercerán sus funciones de manera honorífica. Los gastos indispensables de traslado y accesibilidad podrán ser cubiertos conforme a las disposiciones presupuestarias y de austeridad.

Artículo 39. Las personas consejeras ciudadanas podrán ser removidas por la Legislatura, previa garantía de audiencia, por incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones; faltas injustificadas a tres sesiones consecutivas; uso del encargo para

obtener beneficio personal, partidista o electoral; violación grave a la confidencialidad legalmente protegida; conflicto de interés no revelado; o pérdida de alguno de los requisitos de elegibilidad.

Artículo 40. Corresponde al Consejo:

I. Aprobar el Programa Estatal de Participación Ciudadana;

II. Emitir recomendaciones y criterios técnicos;

III. Proponer estándares de accesibilidad, deliberación y evaluación;

IV. Analizar los informes anuales;

V. Promover la coordinación municipal;

VI. Formular recomendaciones sobre la Plataforma y el Registro;

VII. Impulsar investigación, formación y educación cívica;

VIII. Recomendar medidas para reducir barreras de participación;

IX. Evaluar el funcionamiento general del Sistema;

X. Reconocer buenas prácticas;

XI. Aprobar su calendario de sesiones; y

XII. Las demás previstas en esta Ley.

Artículo 41. El Consejo sesionará ordinariamente al menos cuatro veces al año y extraordinariamente cuando lo convoque su presidencia o la mayoría de sus integrantes.

Artículo 42. Habrá quórum con la presencia de la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, siempre que concurran al menos tres personas consejeras ciudadanas.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad.

Artículo 43. Las sesiones del Consejo serán públicas y se transmitirán por medios digitales, salvo las porciones en las que se analice información reservada o

confidencial. Las convocatorias, documentos, actas, votaciones y acuerdos deberán publicarse en la Plataforma.

Artículo 44. El Consejo podrá integrar grupos de trabajo temporales. Su creación no generará estructuras administrativas ni remuneraciones adicionales.

CAPÍTULO IV

DE LA UNIDAD COORDINADORA, LAS UNIDADES MUNICIPALES, LOS ENLACES Y LAS REDES MUNICIPALES

Artículo 45. La Secretaría contará con una Unidad Coordinadora, utilizando preferentemente su estructura administrativa existente.

Artículo 46. Corresponde a la Unidad Coordinadora:

I. Ejecutar los acuerdos del Consejo;

II. Elaborar el proyecto del Programa Estatal;

III. Administrar la Plataforma y el Registro;

IV. Proporcionar asistencia técnica;

V. Diseñar formatos y metodologías;

VI. Coordinar actividades de capacitación;

VII. Recibir y canalizar solicitudes;

VIII. Elaborar el informe estatal anual;

IX. Integrar indicadores;

X. Promover convenios de colaboración;

XI. Dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo; y

XII. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento.

Artículo 47. Cada ayuntamiento designará una Unidad Municipal responsable de coordinar el cumplimiento de esta Ley. La designación podrá recaer en una dependencia existente y no obligará a crear una nueva estructura.

Artículo 48. Corresponde a las unidades municipales:

I. Elaborar el programa municipal de participación;

II. Organizar los mecanismos municipales;

III. Administrar la sección municipal de la Plataforma;

IV. Integrar los expedientes;

V. Brindar asistencia a las personas promoventes;

VI. Coordinar el presupuesto participativo;

VII. Mantener actualizado el registro municipal;

VIII. Coordinar la Red Municipal de Participación Ciudadana;

IX. Elaborar informes;

X. Proponer mejoras reglamentarias; y

XI. Las demás previstas en la reglamentación municipal.

Artículo 49. Cada municipio integrará una Red Municipal de Participación Ciudadana como mecanismo de coordinación entre la Unidad Municipal, las autoridades auxiliares, los consejos de participación ciudadana, organizaciones, colectivos, observatorios y demás instancias comunitarias existentes.

La Red no tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio, estructura administrativa permanente ni generará remuneraciones por su sola integración.

Artículo 50. La Red Municipal tendrá por objeto facilitar la canalización de propuestas, compartir información, identificar problemáticas recurrentes, coordinar ejercicios territoriales, promover la formación ciudadana y dar seguimiento a asuntos comunitarios.

Su operación respetará la autonomía municipal, las atribuciones de las autoridades auxiliares y el régimen de los consejos de participación ciudadana previsto en la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 51. Cada ente público designará un enlace institucional, quien deberá contar con capacidad para coordinar las obligaciones previstas en esta Ley.

Artículo 52. Las personas titulares de las unidades y enlaces deberán recibir capacitación periódica en derechos humanos, accesibilidad, interculturalidad, perspectiva de género, deliberación, protección de datos y gestión de conflictos.

Artículo 53. Las unidades y enlaces no podrán alterar, ocultar o filtrar políticamente las propuestas ciudadanas. Toda canalización, clasificación o determinación deberá quedar registrada.

CAPÍTULO V

DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA

Artículo 54. El Programa Estatal de Participación Ciudadana establecerá objetivos anuales, mecanismos prioritarios, estrategias de inclusión, acciones de capacitación, metas e indicadores, proyectos tecnológicos, coordinación municipal, previsiones presupuestarias y métodos de evaluación.

Artículo 55. Los municipios aprobarán anualmente un programa municipal congruente con sus planes de desarrollo, capacidades financieras y características territoriales.

Artículo 56. El Registro contendrá, al menos, la denominación del mecanismo, autoridad responsable, ámbito territorial, materia y objetivo, fecha y modalidad, número y perfil general de participantes, documentos y propuestas recibidas, resultados, respuesta de la autoridad, compromisos y grado de cumplimiento y recursos públicos ejercidos.

Artículo 57. El Registro será público y se presentará en formatos abiertos, salvo la información reservada o confidencial.

Artículo 58. La falta de inscripción de un observatorio, colectivo u organización en el Registro no será causa para desconocer su existencia ni para impedirle participar.

Artículo 59. Las autoridades deberán remitir a la Unidad Coordinadora la información necesaria para actualizar el Registro, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento.

CAPÍTULO VI

DE LA CULTURA Y FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 60. El Estado y los municipios promoverán permanentemente una cultura democrática de participación, corresponsabilidad, legalidad, respeto a los derechos humanos, deliberación informada, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 61. La Unidad Coordinadora elaborará y ejecutará el Programa Estatal de Cultura y Formación para la Participación Ciudadana, con el objeto de proporcionar a las personas herramientas para conocer, promover, ejercer, vigilar y evaluar los mecanismos previstos en esta Ley.

Artículo 62. El Programa comprenderá, al menos, derechos de participación, mecanismos estatales y municipales, elaboración de propuestas, acceso a la información, seguimiento presupuestario, contraloría social, gobierno abierto, deliberación democrática, cultura de la legalidad, herramientas digitales y mecanismos de exigibilidad.

Artículo 63. Las actividades de formación se dirigirán a habitantes, personas servidoras públicas, organizaciones, autoridades auxiliares, consejos de participación ciudadana, observatorios, juventudes y demás grupos interesados.

Las autoridades deberán procurar cobertura territorial y modalidades presenciales y digitales.

Artículo 64. La Secretaría podrá celebrar convenios con municipios, instituciones públicas de educación superior, organismos constitucionales autónomos y organizaciones especializadas para desarrollar materiales, investigación, asistencia técnica y procesos de formación, sin transferir funciones indelegables.

Artículo 65. En coordinación con las autoridades educativas y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, se promoverán actividades complementarias de formación cívica, simulaciones, parlamentos, consultas escolares, proyectos comunitarios y ejercicios de participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estas actividades respetarán la legislación educativa y no modificarán por sí mismas los planes y programas de estudio.

Artículo 66. Los materiales básicos de formación y difusión de esta Ley serán gratuitos, estarán disponibles en formatos accesibles y deberán emplear lenguaje ciudadano. La Unidad Coordinadora y los municipios realizarán campañas periódicas para difundir los mecanismos y las formas de ejercerlos.

TÍTULO TERCERO
DE LAS REGLAS COMUNES DE LOS MECANISMOS
CAPÍTULO I
DE LA INICIACIÓN, PROCEDENCIA Y ADMISIÓN

Artículo 67. Los mecanismos podrán iniciarse de oficio por la autoridad competente; a petición de una o más personas; a solicitud de una organización, colectivo o comunidad; por acuerdo de un órgano colegiado; por disposición legal; o como consecuencia de otro mecanismo.

Artículo 68. La solicitud deberá contener nombre de las personas promoventes, medio para recibir notificaciones, descripción clara del asunto, autoridad a la que se dirige cuando sea conocida, mecanismo solicitado o finalidad perseguida, ámbito territorial, razones de interés público, propuesta inicial en su caso y apoyos ciudadanos cuando el mecanismo los requiera. No podrán exigirse formalidades adicionales a las previstas en esta Ley o en la regulación especial.

Artículo 69. Las solicitudes podrán presentarse por escrito, en comparecencia, a través de la Plataforma o mediante los módulos que habiliten las autoridades. Las comparecencias se documentarán en un formato que deberá ser leído y, en su caso, firmado o validado por la persona promovente.

50

Artículo 70. Cuando la solicitud sea incompleta, la autoridad prevendrá por una sola ocasión para que sea subsanada dentro de los diez días hábiles siguientes. La prevención deberá indicar claramente las omisiones y la forma de corregirlas.

Artículo 71. Cuando la autoridad receptora carezca de competencia, deberá remitir la solicitud a la autoridad que estime competente dentro de los cinco días hábiles siguientes e informar a la persona promovente.

Artículo 72. La autoridad resolverá sobre la admisión dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud completa. La falta de resolución no implicará autorización ni rechazo automático, pero permitirá ejercer los medios de defensa aplicables.

Artículo 73. Sólo podrá declararse improcedente una solicitud cuando la autoridad carezca de competencia y no sea posible identificar a la competente; se pretenda restringir derechos humanos; su objeto sea discriminatorio, violento o contrario al orden constitucional; se solicite decidir sobre la culpabilidad, responsabilidad o situación jurídica individual de una persona; se pretenda interferir en procesos jurisdiccionales, investigaciones, sanciones o procedimientos en trámite; se refiera a información reservada o confidencial cuya divulgación esté prohibida; se pretenda sustituir una obligación reglada o someter a votación el cumplimiento de una sentencia o deber legal indisponible; el mecanismo solicitado sea electoral y no cumpla las condiciones constitucionales y legales aplicables; la solicitud resulte materialmente idéntica a otra resuelta durante los doce meses anteriores y no existan hechos nuevos; se trate de una promoción ficticia o basada en apoyos falsificados; o exista imposibilidad jurídica insuperable.

Artículo 74. La controversia, complejidad, costo, oposición de una autoridad, crítica gubernamental o falta de consenso no constituirán por sí mismas causas de improcedencia.

Artículo 75. La resolución de improcedencia deberá ser fundada, motivada, notificada y publicada en versión pública. La autoridad indicará, cuando sea posible, un mecanismo alternativo para atender el asunto.

Artículo 76. Las solicitudes relacionadas podrán acumularse cuando ello favorezca su atención, sin afectar los derechos de las personas promoventes.

Artículo 77. El desistimiento de una persona promovente no impedirá continuar el mecanismo cuando exista interés público, otras personas promoventes o una obligación legal de realizarlo.

CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA Y LA INFORMACIÓN

Artículo 78. Todo mecanismo deberá contar con convocatoria pública, salvo las actuaciones de colaboración inmediata o recorridos que, por su naturaleza, no la requieran.

Artículo 79. La convocatoria contendrá fundamento jurídico; autoridad responsable; objeto, alcance y efectos; personas convocadas; materia y ámbito territorial; etapas y calendario; modalidades de participación; requisitos estrictamente necesarios; información disponible; medidas de accesibilidad; tratamiento de datos personales; metodología para procesar resultados; medio para formular preguntas o inconformidades; y forma de seguimiento.

Artículo 80. La convocatoria se publicará con una anticipación mínima de quince días hábiles, salvo que esta Ley establezca un plazo distinto o exista una causa urgente debidamente justificada.

Artículo 81. La difusión deberá realizarse mediante la Plataforma y, de acuerdo con el ámbito del mecanismo, mediante gacetas, estrados, redes institucionales, medios comunitarios, carteles, perifoneo, módulos y otros instrumentos adecuados.

Artículo 82. La autoridad integrará un expediente de información que contenga diagnóstico del problema, antecedentes, marco jurídico, alternativas, impactos previsibles, estimación presupuestaria cuando proceda, documentos técnicos, opiniones institucionales relevantes y una síntesis en lenguaje ciudadano. La versión ciudadana deberá explicar de manera accesible el objeto, las alternativas, los efectos posibles y la forma de participar.

Artículo 83. La información deberá publicarse antes de iniciar la deliberación y mantenerse disponible durante todo el mecanismo. Las modificaciones posteriores deberán identificarse claramente.

Artículo 84. Las autoridades deberán distinguir entre información institucional, opiniones técnicas, propuestas ciudadanas y mensajes de promoción.

Artículo 85. Las preguntas, opciones y materiales deberán utilizar lenguaje neutral, sencillo, comprensible y no tendencioso. No podrán contener afirmaciones falsas, juicios de valor, alternativas inconexas o formulaciones que induzcan una respuesta. Toda convocatoria, informe de resultados, respuesta y documento técnico esencial deberá acompañarse de una versión ciudadana, sin perjuicio de la publicación íntegra del documento jurídico o técnico correspondiente.

CAPÍTULO III

DE LA DELIBERACIÓN, RESULTADOS Y RESPUESTA

Artículo 86. Los mecanismos podrán realizarse mediante modalidades presenciales, digitales, itinerantes o híbridas. La modalidad deberá corresponder a las características territoriales y a las personas convocadas.

Artículo 87. La autoridad garantizará condiciones razonables para la expresión de posiciones diversas y evitará que una sola organización, autoridad o grupo monopolice la deliberación.

Artículo 88. Cuando la complejidad o conflictividad del asunto lo amerite, deberá designarse una persona facilitadora imparcial.

Artículo 89. Las personas servidoras públicas que intervengan deberán informar con objetividad; abstenerse de coaccionar; evitar el uso de recursos públicos para favorecer una posición, salvo la explicación técnica institucional; revelar conflictos de interés; registrar las propuestas; y respetar la pluralidad.

Artículo 90. Los partidos políticos podrán expresar posiciones conforme a la ley, pero no podrán apropiarse institucionalmente de los mecanismos administrativos ni condicionar el acceso a ellos.

Artículo 91. Todo mecanismo deberá generar acta, memoria o registro equivalente que documente participantes, temas, propuestas, incidencias, acuerdos y resultados.

Artículo 92. La autoridad publicará el informe de resultados dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del mecanismo, salvo que una disposición especial establezca otro plazo.

Artículo 93. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del informe, la autoridad emitirá una respuesta fundada y una matriz de respuesta. El plazo podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por quince días hábiles, mediante determinación pública y justificada.

Artículo 94. La respuesta deberá indicar propuestas aceptadas; aceptadas parcialmente; rechazadas y sus razones; canalizadas a otra autoridad; acciones, plazos y responsables; recursos presupuestarios disponibles o requeridos; y mecanismos de seguimiento.

Artículo 95. Cuando el resultado sea vinculante, la autoridad deberá aprobar y publicar el programa de cumplimiento correspondiente.

Artículo 96. Cuando el resultado sea consultivo, la autoridad conservará sus atribuciones decisorias, pero deberá valorar de buena fe las aportaciones y motivar cualquier decisión sustancialmente contraria a la posición mayoritaria o a los consensos alcanzados.

TÍTULO CUARTO
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 97. Son mecanismos de participación: iniciativa ciudadana; consulta popular; referéndum; consulta ciudadana; mecanismos de diálogo, deliberación y proximidad comunitaria que comprenden la audiencia pública, asamblea comunitaria, cabildo abierto recorrido participativo; agenda ciudadana; colaboración ciudadana; observatorio ciudadano; contraloría social; testigo social; presupuesto participativo; evaluación ciudadana de servicios públicos; consulta legislativa; consulta pública regulatoria; solicitud de revisión ciudadana de decisiones administrativas generales; y los demás reconocidos por la Constitución, las leyes y los reglamentos municipales.

Artículo 98. Los mecanismos se clasificarán, conforme a su naturaleza, en electorales o político-electorales, consultivos, deliberativos, propositivos, colaborativos, de vigilancia, de evaluación y de revisión. Conforme a sus efectos podrán ser vinculantes, de reconsideración obligatoria, de respuesta obligatoria, de incorporación a agenda, consultivos o de seguimiento.

Artículo 99. Un mecanismo sólo tendrá efectos vinculantes cuando la Constitución o una ley lo establezca expresamente. Los demás mecanismos producirán los efectos previstos en esta Ley, en la legislación especial o en su convocatoria, sin que puedan sustituir las competencias constitucionales de las autoridades.

Artículo 100. Todo mecanismo formal producirá, como mínimo, la obligación de registro, respuesta y trazabilidad, salvo que por su naturaleza una disposición especial establezca un régimen distinto. La autoridad deberá informar desde la convocatoria si el mecanismo genera reconsideración obligatoria, incorporación a agenda, seguimiento u otro efecto específico.

Artículo 101. Las autoridades podrán integrar dos o más mecanismos en un mismo proceso, siempre que se distingan sus etapas y efectos.

CAPÍTULO II

DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 102. La iniciativa ciudadana es el derecho de la ciudadanía mexiquense a presentar proyectos de ley o decreto ante la Legislatura.

Artículo 103. Su ejercicio se regirá por la Constitución estatal, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo. La presente Ley será aplicable complementariamente en materia de orientación, accesibilidad, publicidad, seguimiento y participación de las personas promoventes.

Artículo 104. La Legislatura dispondrá de formatos accesibles, guías para elaborar iniciativas, mecanismos de recepción presencial y electrónica, asistencia técnica no vinculante, sistema público de seguimiento, protección de datos personales y apoyos lingüísticos y de accesibilidad.

Artículo 105. La asistencia técnica no podrá condicionarse a que la propuesta coincida con la posición de un grupo parlamentario, comisión o persona legisladora.

Artículo 106. Las personas promoventes podrán solicitar ser escuchadas por la comisión competente, conforme a las reglas parlamentarias. La intervención no generará derecho a que la iniciativa sea aprobada en determinado sentido.

Artículo 107. La Legislatura publicará el turno, estado procesal, reuniones, dictamen y resolución correspondiente, salvo información legalmente protegida.

Artículo 108. La Legislatura contará con un Buzón Permanente de Participación Legislativa, en modalidades presencial y digital, mediante el cual cualquier persona podrá presentar propuestas, observaciones, diagnósticos o solicitudes relacionadas con asuntos de competencia legislativa.

Artículo 109. Toda promoción presentada en el Buzón recibirá un folio que permita conocer, en versión pública, la fecha de recepción, materia, comisión o unidad a la que fue canalizada, estado de atención, respuesta emitida y, en su caso, las acciones subsecuentes.

Artículo 110. El Buzón no sustituirá la iniciativa ciudadana ni los procedimientos parlamentarios formales. Cuando una propuesta pueda tramitarse mediante un mecanismo jurídico específico, la Legislatura deberá informar a la persona promovente y facilitar su canalización. La presentación en el Buzón no obligará a iniciar por sí misma un procedimiento legislativo.

CAPÍTULO III
DE LA CONSULTA POPULAR Y EL REFERÉNDUM

Artículo 111. La consulta popular de trascendencia estatal se regirá por el artículo 29 de la Constitución estatal y por el Libro Octavo del Código Electoral.

Artículo 112. El referéndum constitucional o legislativo se regirá por el artículo 14 de la Constitución estatal y por el Libro Noveno del Código Electoral.

Artículo 113. La organización, verificación de apoyos, control de constitucionalidad, difusión, jornada, cómputo, declaración de resultados y medios de impugnación se sujetarán a la legislación electoral.

Artículo 114. Los principios de accesibilidad, inclusión, lenguaje ciudadano, protección de datos y máxima publicidad previstos en esta Ley serán aplicables de manera complementaria, siempre que no se opongan al régimen electoral.

CAPÍTULO IV

DE LA CONSULTA CIUDADANA

Artículo 115. La consulta ciudadana es el mecanismo no electoral mediante el cual una autoridad conoce la opinión, preferencias, prioridades, diagnósticos o propuestas de las personas sobre un asunto de su competencia.

Artículo 116. La consulta podrá ser estatal, regional, metropolitana, municipal, territorial, comunitaria o sectorial.

Artículo 117. Podrá convocarse de oficio por la autoridad competente; a petición de las personas habitantes; por acuerdo de un órgano colegiado; como etapa de planeación, regulación o evaluación; o en cumplimiento de una disposición jurídica.

Artículo 118. La autoridad estará obligada a convocar una consulta ciudadana cuando la solicitud reúna:

I. En asuntos estatales, el apoyo equivalente al cero punto cero cinco por ciento de la población de dieciocho años o más, conforme a la última información oficial disponible, distribuido en al menos diez municipios; o

II. En asuntos municipales, el apoyo equivalente al cero punto diez por ciento de la población de dieciocho años o más del municipio, con un mínimo de cincuenta y un máximo exigible de mil quinientas personas.

Los umbrales no serán aplicables a consultas obligatorias previstas en otras disposiciones.

Artículo 119. La verificación de los apoyos ciudadanos será realizada por la autoridad administrativa responsable. Para garantizar la certeza jurídica, legalidad y protección de datos personales, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán celebrar convenios de colaboración con el Instituto Electoral del Estado de México o, en su

caso, con el Instituto Nacional Electoral, para el uso de aplicaciones tecnológicas de captación y validación directa contra el padrón electoral y lista nominal. Asimismo, las autoridades promoverán la validación mediante plataformas de identidad digital ciudadana que cuenten con reconocimiento legal, sustituyendo progresivamente la recolección física de firmas.

Artículo 120. Cuando una solicitud no alcance el umbral, la autoridad podrá convocar la consulta o canalizar el asunto a audiencia pública, agenda ciudadana u otro mecanismo.

Artículo 121. No podrán someterse a consulta ciudadana:

I. La restricción de derechos humanos;

II. El cumplimiento de sentencias;

III. La responsabilidad individual de personas;

IV. Investigaciones o procedimientos en trámite;

V. Información reservada o confidencial;

VI. Operaciones específicas de seguridad cuya divulgación genere riesgo;

VII. La continuidad de servicios públicos indispensables;

VIII. El nombramiento o remoción de personas servidoras públicas, salvo mecanismos expresamente previstos;

IX. Materias ajenas a la competencia de la autoridad; y

X. Las medidas respecto de las cuales resulte constitucionalmente exigible un procedimiento especial de consulta a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas.

En ningún caso la consulta ciudadana prevista en este Capítulo sustituirá los derechos colectivos de consulta reconocidos directamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La exclusión no impedirá consultar políticas generales, prioridades, modelos de servicio o alternativas de solución cuando ello sea jurídicamente procedente.

Artículo 122. La consulta deberá permanecer abierta durante un periodo suficiente, que no podrá ser menor de quince días naturales ni mayor de cuarenta y cinco, salvo justificación.

Artículo 123. Los resultados serán consultivos. La autoridad podrá asumir públicamente el compromiso de implementar la opción mayoritaria, siempre que ello sea jurídicamente viable, exista suficiencia presupuestaria y no se alteren competencias constitucionales.

CAPÍTULO V

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 124. La audiencia pública es un mecanismo de diálogo directo para exponer necesidades, recibir información, formular propuestas y establecer compromisos.

Artículo 125. Podrá ser solicitada por cualquier persona, organización, colectivo o comunidad.

Artículo 126. La audiencia será obligatoria cuando la petición cuente, al menos, con cien apoyos en asuntos de competencia estatal; veinte apoyos en asuntos municipales; o el respaldo de una asamblea comunitaria, autoridad auxiliar o consejo de participación ciudadana.

Artículo 127. La autoridad resolverá sobre la solicitud dentro de diez días hábiles y, de resultar procedente, celebrará la audiencia dentro de los treinta días hábiles siguientes.

Artículo 128. En asuntos complejos podrán celebrarse varias sesiones o mesas técnicas.

Artículo 129. La audiencia será presidida por la persona titular de la autoridad competente o por una persona servidora pública con facultades suficientes para asumir compromisos. La delegación deberá justificarse.

Artículo 130. La autoridad publicará la minuta, los compromisos, responsables y plazos dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 131. No se resolverán en audiencia pública procedimientos individuales, sanciones, contrataciones, litigios o asuntos sujetos a formalidades especiales.

Artículo 132. Cada dependencia estatal y ayuntamiento deberá celebrar, al menos, una audiencia pública general al año, sin perjuicio de las audiencias solicitadas por la ciudadanía.

CAPÍTULO VI
DE LA AGENDA CIUDADANA

Artículo 133. La agenda ciudadana es el instrumento para identificar y priorizar asuntos que requieren atención, deliberación, planeación o respuesta pública.

Artículo 134. Se integrará mediante propuestas recibidas durante todo el año, consultas, audiencias, asambleas, observatorios y otros mecanismos.

Artículo 135. Las propuestas deberán clasificarse por materia, territorio, población afectada, urgencia y autoridad competente.

Artículo 136. La agenda estatal será presentada anualmente al Consejo y publicada por la Unidad Coordinadora.

Artículo 137. La agenda municipal será presentada al ayuntamiento en sesión pública y deberá ser considerada en la elaboración del presupuesto y de los programas municipales.

Artículo 138. La inclusión de un asunto no implicará su aprobación automática, pero obligará a emitir una respuesta fundada.

Artículo 139. Las autoridades identificarán las propuestas recurrentes y explicarán las causas por las que no hayan sido atendidas.

Artículo 140. La agenda se vinculará con los procesos de planeación y evaluación, sin sustituir los procedimientos previstos en la legislación correspondiente.

CAPÍTULO VII

DEL CABILDO ABIERTO Y LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS

Artículo 141. El cabildo abierto se regirá por la Ley Orgánica Municipal y los reglamentos municipales.

Artículo 142. En su organización deberán garantizarse convocatoria anticipada, información accesible, inscripción presencial y digital, criterios objetivos para ordenar intervenciones, accesibilidad física y comunicacional, registro íntegro, respuesta y seguimiento y publicación del acta.

Artículo 143. Las intervenciones de las personas habitantes tendrán carácter deliberativo. La votación formal corresponderá a las personas integrantes del ayuntamiento, salvo disposición legal expresa.

Artículo 144. Toda propuesta presentada formalmente durante una sesión de cabildo abierto deberá registrarse con un folio de seguimiento que identifique el asunto, la unidad administrativa competente y el estado de atención. El ayuntamiento emitirá una respuesta inicial dentro de los treinta días hábiles siguientes. Cuando la solución requiera actuaciones posteriores, la respuesta deberá señalar la ruta de atención, las autoridades responsables y un plazo estimado.

Artículo 145. Las asambleas comunitarias podrán ser convocadas por el ayuntamiento, las autoridades auxiliares, los consejos de participación ciudadana, la Unidad Municipal o las personas habitantes conforme al reglamento.

Artículo 146. Las asambleas podrán deliberar sobre servicios, obras, seguridad comunitaria, convivencia, medio ambiente, movilidad, desarrollo urbano, presupuesto participativo y otros asuntos municipales.

Artículo 147. Sus resoluciones serán propositivas, salvo que formen parte de un mecanismo con efectos vinculantes.

Artículo 148. La autoridad municipal deberá recibir, registrar y responder los acuerdos de la asamblea.

Artículo 149. Las asambleas reguladas en este capítulo no sustituirán instituciones, autoridades, sistemas normativos ni formas de deliberación sujetas a regímenes constitucionales o legales especiales.

Artículo 150. Los municipios definirán territorialmente las unidades de participación, procurando congruencia con localidades, barrios, colonias, pueblos, comunidades y formas de organización existentes.

CAPÍTULO VIII

DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA Y LOS RECORRIDOS PARTICIPATIVOS

Artículo 151. La colaboración ciudadana permite que personas y organizaciones contribuyan voluntariamente a resolver necesidades colectivas.

Artículo 152. La colaboración podrá consistir en conocimientos y asistencia técnica, trabajo comunitario voluntario, actividades culturales, ambientales o educativas, cuidado y recuperación de espacios públicos, propuestas de innovación, donaciones permitidas u otras aportaciones lícitas.

Artículo 153. La colaboración no podrá sustituir empleos públicos o relaciones laborales; condicionar el acceso a servicios; encubrir aportaciones político-electorales; generar privilegios indebidos; transferir funciones de autoridad; ni permitir el uso privado de bienes públicos.

Artículo 154. Cuando se aporten bienes o recursos se observarán las disposiciones patrimoniales, presupuestarias, fiscales, de contratación y responsabilidades.

Artículo 155. Los recorridos participativos permitirán identificar directamente condiciones de obras, servicios, espacios o problemáticas.

Artículo 156. Podrán ser solicitados por habitantes, autoridades auxiliares, consejos, observatorios o contralorías sociales.

Artículo 157. La autoridad elaborará una minuta georreferenciada o descriptiva con hallazgos, compromisos y plazos.

Artículo 158. Los recorridos no sustituirán inspecciones, verificaciones, peritajes o procedimientos administrativos formales.

CAPÍTULO IX

DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS Y LA CONTRALORÍA SOCIAL

Artículo 159. Los observatorios ciudadanos son espacios autónomos de análisis y seguimiento que pueden constituirse libremente.

Artículo 160. Podrán desarrollar indicadores, estudios y diagnósticos, monitoreo de compromisos, evaluaciones, recomendaciones, datos y visualizaciones e informes públicos.

Artículo 161. El registro de un observatorio será voluntario y tendrá fines de publicidad y coordinación, no de autorización.

Artículo 162. Los observatorios registrados deberán publicar integrantes, objetivos, metodología, fuentes de financiamiento, conflictos de interés e informes producidos.

Artículo 163. El registro no conferirá carácter de autoridad, representación oficial ni facultades de auditoría.

Artículo 164. Las autoridades deberán responder las recomendaciones de los observatorios cuando éstos acrediten relación directa con sus competencias.

Artículo 165. La contraloría social tiene por objeto vigilar la ejecución de programas, obras, apoyos, servicios y recursos públicos.

Artículo 166. Las personas integrantes tendrán derecho a recibir información pública; conocer reglas de operación, metas y calendarios; realizar visitas permitidas; formular observaciones; presentar quejas y denuncias; y conocer las respuestas institucionales.

Artículo 167. La contraloría social no sustituirá las atribuciones de los órganos internos de control, la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización, el Tribunal de Justicia Administrativa ni las autoridades penales.

Artículo 168. Las autoridades deberán proteger a quienes formulen denuncias de buena fe y evitar represalias.

Artículo 169. Las observaciones deberán remitirse a la autoridad competente, que informará sobre su atención dentro de los plazos legales.

CAPÍTULO X

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 170. El presupuesto participativo es un mecanismo municipal mediante el cual las personas habitantes proponen, deliberan, priorizan y seleccionan proyectos de inversión pública o mejoramiento comunitario.

Artículo 171. Los municipios, en ejercicio de su autonomía hacendaria y conforme a su capacidad institucional y financiera, implementarán el presupuesto participativo. Para el diseño de este mecanismo, el Consejo Estatal emitirá lineamientos generales que clasificarán a los municipios según su categoría poblacional y nivel de marginación, promoviendo una aplicación gradual, progresiva y optativa en las haciendas municipales con mayor rezago.

Artículo 172. El ayuntamiento determinará en su Presupuesto de Egresos una bolsa específica, identificable y distinta de los gastos de operación del mecanismo.

Artículo 173. El monto asignado al presupuesto participativo será determinado anualmente por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos. Dicha determinación se realizará mediante un dictamen técnico de viabilidad y sostenibilidad financiera que considere la recaudación de ingresos propios, el balance presupuestario, la disponibilidad de recursos de libre disposición y las obligaciones de deuda pública inscritas.

Artículo 174. Para incentivar la participación ciudadana sin comprometer las finanzas municipales, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, constituirá el Fondo Estatal de Coinversión Participativa. Este fondo operará bajo el principio de concurrencia, destinando recursos estatales complementarios a los municipios que acrediten la asignación y ejecución efectiva de recursos propios en proyectos de presupuesto participativo, conforme a las reglas de operación correspondientes.

Artículo 175. Los recursos podrán distribuirse entre unidades territoriales mediante una fórmula objetiva que considere población, grado de marginación, rezago de infraestructura y servicios, ruralidad, dispersión territorial, condiciones de accesibilidad, desigualdades territoriales y los demás indicadores objetivos aprobados por el ayuntamiento.

Artículo 176. Podrán presentar proyectos personas habitantes de dieciséis años o más; niñas, niños y adolescentes mediante modalidades adecuadas; organizaciones y colectivos; autoridades auxiliares; consejos de participación; e instituciones educativas o comunitarias.

Artículo 177. Los proyectos deberán ser de competencia municipal, beneficiar colectivamente, ser técnica y jurídicamente viables, respetar derechos humanos, ser compatibles con la planeación, contar con estimación de costo y poder ejecutarse dentro del periodo presupuestario o conforme a una programación autorizada.

Artículo 178. No podrán financiarse remuneraciones o prestaciones personales; deuda pública; gastos partidistas, electorales o religiosos; beneficios individualizados sin justificación social; obras en propiedad privada salvo servidumbre o utilidad pública legalmente acreditada; proyectos contrarios al ordenamiento territorial o ambiental; o actividades ajenas a la competencia municipal.

Artículo 179. La Unidad Municipal realizará una revisión inicial y remitirá los proyectos a un comité técnico integrado por las áreas competentes.

Artículo 180. El comité deberá emitir dictámenes públicos de viabilidad jurídica, técnica, ambiental, presupuestaria y operativa.

Artículo 181. Antes de excluir un proyecto por deficiencias subsanables, se otorgará a las personas promoventes un plazo para corregirlo.

Artículo 182. Las personas promoventes podrán solicitar aclaración o revisión técnica del dictamen dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 183. Los proyectos viables se someterán a deliberación y votación participativa presencial y digital.

Artículo 184. La votación no tendrá naturaleza político-electoral y será organizada por el municipio. Podrá solicitarse asistencia técnica del Instituto Electoral mediante convenio y dentro de sus atribuciones legales.

Artículo 185. Los proyectos seleccionados serán vinculantes dentro del monto aprobado. Sólo podrán dejar de ejecutarse por imposibilidad jurídica, técnica o financiera superveniente debidamente acreditada.

Artículo 186. Cuando un proyecto seleccionado resulte imposible, la autoridad deberá informar inmediatamente, publicar el dictamen correspondiente, escuchar a la comunidad afectada y aplicar los recursos al proyecto siguiente en la votación o realizar un proceso de sustitución.

Artículo 187. El municipio publicará trimestralmente el avance físico y financiero de cada proyecto.

Artículo 188. Las personas promoventes y beneficiarias podrán integrar comités de seguimiento y contraloría social.

Artículo 189. Los recursos no ejercidos se sujetarán a la legislación financiera y presupuestaria, procurando su aplicación a proyectos participativos y evitando su pérdida por negligencia administrativa.

Artículo 190. El Gobierno del Estado podrá establecer fondos de coinversión o incentivos para municipios que acrediten buenas prácticas, transparencia y cumplimiento.

Artículo 191. La fiscalización corresponderá a las autoridades competentes conforme a la legislación aplicable.

CAPÍTULO XI

DE LA EVALUACIÓN CIUDADANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 192. La evaluación ciudadana permite conocer la calidad, accesibilidad, oportunidad, trato y resultados de los servicios públicos.

Artículo 193. Podrá realizarse mediante encuestas, paneles ciudadanos, reportes comunitarios, auditorías sociales, usuarios simulados conforme a protocolos legales, indicadores participativos y otros métodos verificables.

Artículo 194. Las metodologías deberán ser públicas, técnicamente justificadas y proteger los datos personales.

Artículo 195. La evaluación no podrá utilizarse como único elemento para imponer sanciones laborales o administrativas individuales.

Artículo 196. La autoridad evaluada deberá publicar un plan de mejora con acciones, responsables, indicadores y plazos.

Artículo 197. Los resultados se incorporarán a la planeación, evaluación del desempeño y mejora regulatoria, cuando corresponda.

Artículo 198. La manipulación de muestras, preguntas o resultados para presentar una valoración engañosa será sancionada conforme a la legislación de responsabilidades.

CAPÍTULO XII

DE LA CONSULTA LEGISLATIVA Y REGULATORIA

Artículo 199. La consulta legislativa tiene por objeto incorporar opiniones y conocimientos sociales al análisis de iniciativas, dictámenes y reformas de interés general.

Artículo 200. Las comisiones legislativas podrán realizar foros, parlamento abierto, mesas técnicas, audiencias, plataformas de opinión y consultas territoriales.

Artículo 201. La consulta no limitará la libertad deliberativa ni las facultades constitucionales de la Legislatura, pero sus resultados deberán documentarse en el dictamen o en un informe anexo.

Artículo 202. La consulta pública regulatoria se realizará respecto de proyectos de reglamentos, normas administrativas generales, programas y disposiciones que produzcan impactos relevantes.

Artículo 203. Los proyectos se publicarán por un plazo no menor de quince días hábiles, acompañados de una explicación, diagnóstico y, cuando proceda, análisis de impacto.

Artículo 204. La consulta regulatoria se coordinará con los procedimientos de mejora regulatoria para evitar duplicidades.

Artículo 205. Podrán exceptuarse de consulta previa las disposiciones de emergencia; medidas de seguridad cuya publicidad anticipada genere riesgo; disposiciones estrictamente internas sin efectos sobre particulares; actos individualizados; medidas para cumplir sentencias; y disposiciones cuya consulta esté sujeta a un procedimiento especial. La excepción deberá fundarse y publicarse, salvo información legalmente reservada.

Artículo 206. Cuando se emita una regulación urgente, la autoridad realizará una evaluación participativa posterior si sus efectos se prolongan por más de noventa días.

CAPÍTULO XIII

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CIUDADANA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Artículo 207. La solicitud de revisión ciudadana es el mecanismo mediante el cual las personas pueden pedir a una autoridad administrativa estatal o municipal que reexamine públicamente una política, programa, lineamiento o decisión administrativa de carácter general que se encuentre vigente y produzca efectos relevantes para una comunidad o sector de la población.

Artículo 208. La solicitud podrá presentarse por personas habitantes, organizaciones, colectivos o comunidades. Cuando cuente con apoyos equivalentes a los exigidos para la consulta ciudadana del ámbito correspondiente, la autoridad estará obligada a iniciar el procedimiento de revisión. Cuando no alcance dicho respaldo, podrá admitirlo de oficio si advierte interés público suficiente.

Artículo 209. No procederá la revisión respecto de actos individualizados, sentencias, investigaciones, sanciones, procedimientos en trámite, materias electorales, decisiones jurisdiccionales, obligaciones regladas, información legalmente reservada, actos cuya suspensión pueda comprometer servicios esenciales o medidas sujetas a un régimen especial de impugnación o consulta.

Artículo 210. La admisión de la solicitud no suspenderá por sí misma la vigencia ni los efectos de la decisión cuestionada. La autoridad abrirá un expediente público, difundirá los antecedentes esenciales y celebrará una audiencia pública dentro de los treinta días hábiles siguientes, salvo que exista una causa jurídica o material debidamente justificada para ampliar el plazo.

Artículo 211. Dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la audiencia, la autoridad emitirá resolución fundada y motivada en la que determine, dentro de sus competencias, mantener, modificar, sustituir o dejar sin efectos la decisión revisada. Cuando se aparte de manera sustancial de las propuestas predominantes deberá expresar una motivación reforzada que atienda los principales argumentos ciudadanos.

Artículo 212. La resolución y los compromisos derivados de la revisión se incorporarán a la Plataforma y estarán sujetos a las reglas de seguimiento de esta Ley. Cuando del procedimiento se desprenda la competencia de otra autoridad, la solicitud será canalizada sin perjuicio de continuar la atención de los aspectos que correspondan a la autoridad inicialmente requerida.

TÍTULO QUINTO

DEL TESTIGO SOCIAL Y LA VIGILANCIA CIUDADANA DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 213. El Testigo Social es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual una persona física o jurídica colectiva con registro vigente interviene, como representante imparcial de la sociedad civil, en procedimientos de contratación pública relevantes para fortalecer su transparencia, integridad, legalidad, eficiencia y rendición de cuentas, así como para prevenir y advertir riesgos de opacidad, conflicto de interés o corrupción.

Artículo 214. El régimen previsto en este Título será aplicable a las contrataciones públicas que realicen las dependencias y unidades administrativas del Poder Ejecutivo; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; los ayuntamientos; los organismos auxiliares estatales y municipales; los tribunales administrativos; y, en lo que no se oponga a sus ordenamientos, los poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos, cuando ejerzan recursos estatales o municipales y se encuentren sujetos a la legislación de contratación correspondiente.

Artículo 215. La actuación del Testigo Social se regirá, además de los principios generales de esta Ley, por objetividad, independencia, imparcialidad, integridad, profesionalismo, especialidad técnica, confidencialidad respecto de la información legalmente protegida, publicidad del testimonio y ausencia de conflicto de interés.

Artículo 216. El Testigo Social podrá intervenir en procedimientos relativos a concesión de infraestructura vial; obra pública y servicios relacionados; adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes; contratación de servicios; asociaciones público privadas; y demás procedimientos de contratación pública en los que una disposición legal prevea su participación.

La participación del Testigo Social constituye un derecho de observación ciudadana que no interrumpe ni modifica la naturaleza del procedimiento administrativo. Las modalidades, etapas, requisitos técnicos de adjudicación, formalización, ejecución contractual, recursos de revisión y medios de defensa de las personas licitantes se regirán íntegra y exclusivamente por la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y demás legislación especializada aplicable; limitándose la presente Ley a regular los requisitos, designación, derechos, obligaciones, actuación y emisión del testimonio de la persona observadora ciudadana.

Artículo 217. La participación de un Testigo Social no valida, autoriza, certifica ni convalida la legalidad del procedimiento. La responsabilidad por la planeación, contratación, evaluación, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, pago y recepción corresponderá a las personas servidoras públicas facultadas. Su intervención tampoco limitará las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control, el Órgano Superior de Fiscalización, el Tribunal de Justicia Administrativa ni las autoridades investigadoras, fiscalizadoras o jurisdiccionales.

CAPÍTULO II

DEL REGISTRO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES

Artículo 218. Para actuar como Testigo Social se requerirá registro vigente otorgado conjuntamente por la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con base en el dictamen del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México.

Artículo 219. El Comité de Registro de Testigos Sociales es un órgano colegiado de coordinación técnica que no tendrá personalidad jurídica ni patrimonio propios. Se integrará con representaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México y

de la Secretaría de la Contraloría, en los términos que establezcan esta Ley, su Reglamento y los lineamientos conjuntos que emitan ambas instituciones. Sus cargos serán honoríficos, sin perjuicio de las funciones públicas o académicas de quienes lo integren.

Artículo 220. Corresponde al Comité:

I. Dictaminar las solicitudes de registro, renovación, suspensión y cancelación;

II. Administrar y publicar el padrón de Testigos Sociales;

III. Determinar especialidades y perfiles técnicos;

IV. Aprobar programas de capacitación y evaluación;

V. Establecer las cuotas y criterios para determinar contraprestaciones;

VI. Emitir criterios de asignación, rotación, impedimentos y conflictos de interés;

VII. Evaluar el desempeño de las personas registradas;

VIII. Establecer y publicar anualmente los umbrales y criterios de riesgo para la intervención obligatoria;

IX. Dar seguimiento estadístico a los testimonios y recomendaciones; y

X. Las demás que establezcan esta Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 221. Para obtener el registro se deberá acreditar:

I. Identidad y capacidad jurídica; tratándose de persona jurídica colectiva, su constitución formal y que su finalidad no sea preponderantemente económica;

II. Experiencia profesional, académica, técnica o social relacionada con contratación pública, obra, administración, finanzas, ingeniería, derecho, integridad, transparencia o materias afines;

III. No haber sido condenada mediante sentencia firme por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, salvo que legalmente se encuentre rehabilitada;

IV. No ser persona servidora pública federal, estatal, municipal o extranjera ni haber tenido esa calidad durante el año inmediato anterior a la solicitud;

V. No encontrarse inhabilitada para ejercer empleo, cargo, comisión o contratación pública;

VI. Manifestar bajo protesta de decir verdad los posibles conflictos de interés y la obligación de excusarse;

VII. Acreditar los cursos de capacitación determinados por el Comité;

VIII. Aprobar la evaluación de conocimientos con una calificación mínima de ocho sobre diez, salvo los supuestos de equivalencia que establezcan los lineamientos; y

IX. Cumplir los demás requisitos documentales estrictamente necesarios que establezca el Reglamento.

Artículo 222. El registro tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de la expedición de la constancia y podrá renovarse por periodos iguales, sujeto al cumplimiento de los requisitos, actualización profesional, ausencia de sanciones y evaluación del desempeño en los procedimientos en que la persona haya intervenido.

Artículo 223. El padrón será público y contendrá, al menos, nombre o denominación, número y vigencia del registro, especialidades acreditadas, asignaciones realizadas, testimonios emitidos y, en su caso, sanciones firmes.

Asimismo, se publicará una relación histórica de registros suspendidos o cancelados, con protección de los datos personales que legalmente corresponda. Las cuotas aplicables y sus actualizaciones se publicarán en la Plataforma y en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

CAPÍTULO III

DE LA PROCEDENCIA, SOLICITUD Y DESIGNACIÓN

Artículo 224. La intervención del Testigo Social podrá ser obligatoria o facultativa. Será obligatoria en los procedimientos que rebasen los umbrales objetivos que el Comité determine anualmente, expresados en Unidades de Medida y Actualización y diferenciados por tipo de contratación; en aquellos que la Secretaría de la Contraloría determine de alto riesgo o especial impacto mediante criterios públicos; y en los demás casos que establezcan expresamente las leyes de contratación, obra pública, concesiones o asociaciones público privadas.

Artículo 225. Para determinar los umbrales y los supuestos de alto riesgo deberán considerarse, entre otros elementos, el monto; complejidad técnica; impacto social; duración; fuente y concentración de recursos; relevancia estratégica; naturaleza del bien, servicio, obra o proyecto; uso de excepciones a la licitación pública; antecedentes de observaciones; nivel de competencia del mercado; y necesidad reforzada de transparencia. Queda prohibido fraccionar contrataciones con el propósito de eludir la intervención obligatoria del Testigo Social.

Artículo 226. En los casos que no sean obligatorios, la unidad contratante podrá solicitar la participación de un Testigo Social cuando considere que el procedimiento requiere vigilancia adicional por su impacto, complejidad o relevancia. La solicitud y la determinación correspondiente serán públicas.

Artículo 227. Cualquier persona, organización ciudadana, observatorio ciudadano, contraloría social, institución académica o colectivo podrá solicitar a la Secretaría de la Contraloría la intervención de un Testigo Social en un procedimiento determinado. La solicitud deberá identificar, en la medida de lo posible, la contratación y exponer las razones de interés público, riesgo, monto, impacto o complejidad que justifiquen el atestiguamiento.

Artículo 228. La Secretaría de la Contraloría resolverá la solicitud ciudadana dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción, previa valoración de los criterios previstos en esta Ley y mediante la aplicación de una matriz pública de riesgos en la contratación. La resolución deberá ser fundada, motivada y publicada. En caso de que la solicitud carezca de elementos mínimos de justificación sobre el riesgo, monto o complejidad del procedimiento, podrá desecharse de plano.

La presentación de la solicitud no suspenderá por sí misma el procedimiento de contratación. Si transcurrido el plazo la autoridad no emite resolución, operará la negativa ficta para los efectos legales conducentes, garantizando la continuidad de las funciones sustantivas del Estado. Si la contratación corresponde a un ente no sujeto a su dirección funcional, la Secretaría remitirá la solicitud al órgano de control competente y emitirá opinión técnica no vinculante.

Artículo 229. La designación del Testigo Social se realizará por el Comité mediante un procedimiento público de asignación que atienda a especialidad, experiencia, disponibilidad, rotación, carga de trabajo y ausencia de conflicto de interés. Cuando existan varias personas igualmente idóneas podrá utilizarse insaculación. La unidad contratante no podrá seleccionar discrecionalmente a la persona Testigo Social ni solicitar su sustitución por el contenido previsible de sus opiniones.

CAPÍTULO IV

DE LA PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 230. El Testigo Social tendrá derecho a voz, pero no a voto; acceso oportuno a la documentación necesaria; asistencia a los actos del procedimiento; formulación de preguntas técnicas y solicitudes de aclaración; presentación de observaciones y recomendaciones; comunicación directa con la unidad contratante y el órgano de control; y acceso a la Plataforma para incorporar incidencias, testimonio y seguimiento. El acceso a información reservada o confidencial se sujetará a la legislación aplicable y a las obligaciones de secreto correspondientes.

Artículo 231. Conforme al alcance de su designación, el Testigo Social podrá intervenir desde los actos preparatorios directamente vinculados con el procedimiento, incluidos la revisión de convocatoria, bases o invitaciones y, cuando legalmente proceda, elementos del estudio de mercado; así como en juntas de aclaraciones, visitas, presentación y apertura de proposiciones, evaluación, fallo y formalización. En procedimientos de especial impacto la designación podrá comprender hitos determinados de ejecución, entrega o recepción, sin que el Testigo Social asuma funciones de supervisión técnica, residencia de obra, administración contractual o fiscalización.

Artículo 232. La documentación relativa a los asuntos que serán sometidos a comités o actos del procedimiento se proporcionará al Testigo Social con al menos dos días hábiles de anticipación en sesiones ordinarias y un día hábil en extraordinarias, salvo imposibilidad material debidamente justificada o reserva legal. La información deberá entregarse en formatos que permitan su análisis y conservación.

Artículo 233. Son obligaciones del Testigo Social:

I. Conducirse con objetividad, independencia, imparcialidad, honestidad, profesionalismo y respeto;

II. Excusarse inmediatamente ante cualquier conflicto de interés;

III. Utilizar la información exclusivamente para el cumplimiento de su encargo;

IV. Guardar confidencialidad respecto de la información legalmente protegida;

V. Abstenerse de influir indebidamente en la adjudicación o favorecer participantes;

VI. Documentar de manera verificable sus observaciones;

VII. Permanecer en el procedimiento hasta la conclusión del alcance para el que fue designado;

VIII. Emitir el testimonio social dentro del plazo legal; y

IX. Cumplir las demás obligaciones previstas en esta Ley y las disposiciones especializadas.

Artículo 234. Cuando el Testigo Social advierta hechos que puedan constituir irregularidades, faltas administrativas, responsabilidades resarcitorias o delitos, deberá informarlos de inmediato y por escrito al órgano interno de control o a la Secretaría de la Contraloría, según corresponda, sin perjuicio de dar vista a otras autoridades competentes. La presentación del aviso no extinguirá su obligación de continuar observando el procedimiento, salvo que exista impedimento legal o riesgo para su integridad.

Artículo 235. La contratación y contraprestación del Testigo Social se sujetarán a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y a las cuotas públicas aprobadas por el Comité. El gasto estará a cargo de la entidad contratante y deberá presupuestarse dentro del costo del procedimiento.

El contrato no podrá reducir las atribuciones reconocidas por esta Ley ni condicionar el pago al sentido favorable, desfavorable o crítico del testimonio. Las personas Testigos Sociales deberán cumplir las obligaciones fiscales y administrativas aplicables.

CAPÍTULO V

DEL TESTIMONIO SOCIAL, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO

Artículo 236. El Testigo Social emitirá su testimonio dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de su participación, sin perjuicio de los avisos inmediatos de irregularidad previstos en esta Ley.

El testimonio tendrá naturaleza pública y constituirá una opinión independiente de participación ciudadana; no será dictamen de legalidad ni liberará de responsabilidad a persona servidora pública alguna.

Artículo 237. El testimonio contendrá, como mínimo:

I. Lugar y fecha de emisión;

II. Identificación de la contratación;

III. Datos del Testigo Social y número de registro;

IV. Antecedentes relevantes; V. Etapas y actos observados;

VI. Personas servidoras públicas y participantes institucionales vinculados con los actos observados, en lo legalmente publicable;

VII. Incidencias e irregularidades advertidas;

VIII. Conclusiones;

IX. Recomendaciones y propuestas para fortalecer transparencia, imparcialidad, competencia, eficiencia, eficacia, economía, integridad y rendición de cuentas; y

X. Firma autógrafa o electrónica válida.

Artículo 238. El testimonio será entregado a la unidad contratante, a la Secretaría de la Contraloría o al órgano interno de control competente y al Comité de Registro. Deberá publicarse, en versión íntegra o pública según corresponda, dentro de los cinco días hábiles siguientes en el sitio de la entidad contratante, en la Plataforma y en el padrón de Testigos Sociales. Sólo podrán suprimirse datos mediante clasificación fundada conforme a la legislación de transparencia y protección de datos.

Artículo 239. La unidad contratante deberá emitir, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación del testimonio, una respuesta institucional que identifique las recomendaciones aceptadas, parcialmente aceptadas, rechazadas o canalizadas; exponga las razones técnicas y jurídicas; señale medidas correctivas, autoridades responsables y plazos; e informe sobre las vistas realizadas a los órganos de control. Cuando una investigación se encuentre en trámite, podrá reservarse exclusivamente la información cuya publicidad comprometa legalmente el procedimiento.

Artículo 240. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control llevarán el seguimiento de las observaciones que correspondan a su competencia.

La Plataforma mostrará el estado del testimonio, respuesta y acciones de atención. El Comité integrará anualmente información estadística sobre procedimientos observados, recomendaciones, atención institucional, sanciones y resultados, sin sustituir las funciones de fiscalización o control.

CAPÍTULO VI

DE LAS INFRACCIONES Y CONSECUENCIAS DEL REGISTRO

Artículo 241. Constituyen incumplimientos de las personas Testigos Sociales, además de los previstos en otras leyes: actuar con parcialidad; omitir un conflicto de interés; utilizar información para beneficio propio o de terceros; revelar información legalmente protegida; intentar influir indebidamente en una adjudicación; favorecer a una persona participante; obstaculizar intencionalmente el procedimiento; falsear hechos o documentos; omitir deliberadamente la notificación de irregularidades relevantes; incumplir injustificadamente la obligación de emitir testimonio; o utilizar su calidad para obtener beneficios ajenos al encargo.

Artículo 242. Previa garantía de audiencia y mediante resolución fundada y motivada, el Comité podrá imponer amonestación, suspensión temporal del registro hasta por dos años o cancelación definitiva, atendiendo a gravedad, intencionalidad, beneficio obtenido, daño causado, reincidencia y afectación al procedimiento. La falsificación, cohecho, colusión, manipulación deliberada del testimonio o uso doloso de información protegida serán causas de cancelación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales procedentes.

Artículo 243. Cuando una persona Testigo Social actúe en representación de una persona jurídica colectiva, las sanciones individuales no producirán automáticamente la cancelación del registro de ésta. No obstante, el Comité podrá suspender o cancelar el registro de la organización cuando se acredite tolerancia, instrucción, encubrimiento o reincidencia institucional, o cuando dos de sus representantes sean objeto de cancelación definitiva durante el mismo periodo de vigencia. Las resoluciones serán públicas una vez firmes.

TÍTULO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE Y ACCESIBLE
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN

Artículo 244. Las autoridades adoptarán medidas razonables y diferenciadas para remover barreras económicas, territoriales, lingüísticas, tecnológicas, culturales, físicas, sensoriales, intelectuales y actitudinales que impidan o dificulten el ejercicio efectivo de los mecanismos regulados en esta Ley.

Artículo 245. Los mecanismos deberán observar el principio de igualdad sustantiva y promover la participación efectiva de las mujeres, evitando horarios, sedes o dinámicas que reproduzcan desigualdades de cuidados o violencia.

Artículo 246. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ajustes razonables, formatos accesibles, interpretación en lengua de señas mexicana, lectura fácil, asistencia humana o tecnológica y accesibilidad física.

Artículo 247. Para niñas, niños y adolescentes se utilizarán metodologías seguras, comprensibles y apropiadas a su edad y desarrollo evolutivo. Sus opiniones deberán valorarse conforme a su autonomía progresiva.

Artículo 248. Las comunidades rurales y localidades con limitada conectividad deberán contar con sedes presenciales, unidades itinerantes, materiales impresos y medios comunitarios.

Artículo 249. Las personas adultas mayores tendrán acceso a acompañamiento y mecanismos no digitales.

Artículo 250. Las personas migrantes, desplazadas, víctimas y quienes se encuentren en situación de riesgo podrán solicitar medidas de confidencialidad y participación segura.

Artículo 251. Las medidas de inclusión previstas en este Capítulo no podrán interpretarse como sustitución, modificación o reglamentación de derechos colectivos sujetos a un régimen constitucional o legal especial.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA PARTICIPACIÓN DIGITAL, LA INFORMACIÓN Y LOS ARCHIVOS

CAPÍTULO I

DE LA PLATAFORMA

Artículo 252. La Plataforma será el medio digital oficial para registrar, difundir y dar seguimiento a los mecanismos.

Artículo 253. La Plataforma deberá permitir presentar solicitudes, asignar folios, consultar convocatorias, acceder a expedientes públicos, emitir opiniones o apoyos, conocer resultados, identificar a la autoridad responsable, consultar plazos, dar seguimiento a compromisos, acceder a datos abiertos y solicitar asistencia.

Artículo 254. La Plataforma deberá cumplir estándares de accesibilidad, interoperabilidad, seguridad, disponibilidad, neutralidad tecnológica y protección de datos.

Artículo 255. Ningún mecanismo será exclusivamente digital cuando ello excluya a una parte relevante de la población.

Artículo 256. Los sistemas de autenticación serán proporcionales a la naturaleza y efectos del mecanismo. No se exigirán datos innecesarios.

Artículo 257. Las decisiones de admisión, exclusión, validación o cómputo no podrán basarse exclusivamente en sistemas automatizados sin revisión humana.

Artículo 258. Cuando se utilicen algoritmos para clasificar, agrupar o analizar propuestas, deberán publicarse su finalidad, criterios generales, limitaciones y mecanismos de revisión.

Artículo 259. Cada expediente registrado en la Plataforma contará con un tablero de trazabilidad que, según corresponda, identifique al menos los estados de recibido, en análisis, admitido, en deliberación, resuelto, en ejecución, cumplido o cerrado. Todo cambio de estado deberá indicar fecha, autoridad responsable y documento que lo sustente.

Artículo 260. Las autoridades no podrán eliminar, ocultar, desindexar o alterar propuestas o expedientes por contener críticas, desacuerdos o posiciones contrarias a la autoridad. Las correcciones, actualizaciones y versiones públicas deberán conservar trazabilidad. Sólo podrá restringirse información por una causa expresamente prevista en la legislación aplicable.

CAPÍTULO II

DE LA INFORMACIÓN, DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS

Artículo 261. La información generada será pública, con excepción de aquella clasificada conforme a la ley.

Artículo 262. Los datos personales se tratarán exclusivamente para las finalidades informadas y durante el tiempo necesario.

Artículo 263. La publicación de apoyos ciudadanos se realizará mediante datos agregados, salvo consentimiento o disposición legal expresa.

Artículo 264. Los expedientes se organizarán, conservarán y transferirán conforme a la legislación archivística.

Artículo 265. Los resultados, bases de datos anonimizadas, metodologías e indicadores deberán difundirse en formatos abiertos y reutilizables.

Artículo 266. Las autoridades deberán publicar avisos de privacidad claros y específicos para cada mecanismo.

Artículo 267. Toda vulneración de seguridad deberá atenderse conforme a la legislación de protección de datos y seguridad digital.

TÍTULO OCTAVO.
DE LOS EFECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Artículo 268. Los efectos de cada mecanismo deberán anunciarse desde la convocatoria y ser congruentes con su fundamento jurídico. Cuando proceda reconsideración obligatoria, incorporación a agenda, respuesta reforzada o seguimiento específico, la autoridad deberá describir con claridad la consecuencia institucional correspondiente.

Artículo 269. Ninguna autoridad podrá atribuir efectos vinculantes a una encuesta, sondeo, foro, consulta informal o ejercicio que no cumpla las reglas legales correspondientes.

Artículo 270. Los compromisos asumidos deberán contener acción concreta, autoridad responsable, plazo, indicador, fuente de financiamiento cuando proceda y forma de verificación.

Artículo 271. Las autoridades publicarán informes de avance al menos trimestralmente respecto de compromisos con plazo superior a noventa días.

Artículo 272. Cuando un compromiso no pueda cumplirse, la autoridad deberá explicar las causas, las medidas alternativas y el nuevo calendario.

Artículo 273. La Unidad Coordinadora elaborará un informe estatal anual que contenga número y tipo de mecanismos, participación registrada, distribución territorial, medidas de inclusión, propuestas recibidas, grado de respuesta, cumplimiento de compromisos, recursos ejercidos, quejas e impugnaciones y recomendaciones.

Artículo 274. Los municipios presentarán informes anuales a sus ayuntamientos en sesión pública y los remitirán a la Unidad Coordinadora.

Artículo 275. El Consejo aprobará indicadores para evaluar accesibilidad, diversidad, incidencia, calidad deliberativa, tiempo de respuesta, cumplimiento, confianza y satisfacción, eficiencia presupuestaria y equidad territorial.

Artículo 276. La evaluación no se limitará al número de participantes, sino que considerará calidad, representatividad, incidencia y seguimiento.

Artículo 277. Cada tres años se realizará una evaluación externa del Sistema por una institución pública de educación superior o entidad especializada seleccionada mediante procedimiento transparente.

Artículo 278. Los resultados de la evaluación deberán presentarse a la Legislatura y utilizarse para revisar políticas, reglamentos y asignaciones presupuestarias.

TÍTULO NOVENO
DEL FINANCIAMIENTO Y LA RESPONSABILIDAD HACENDARIA
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 279. Los entes públicos incluirán en sus anteproyectos de presupuesto los recursos necesarios para cumplir esta Ley.

Artículo 280. La implementación deberá privilegiar el uso de estructuras existentes, interoperabilidad tecnológica, capacitación conjunta, convenios de colaboración, reutilización de infraestructura, austeridad y evaluación costo-beneficio.

Artículo 281. La Ley no obliga a crear nuevas dependencias, organismos descentralizados, plazas o unidades administrativas, salvo determinación expresa y presupuestariamente sustentada de la autoridad competente.

Artículo 282. Las convocatorias a mecanismos que generen gastos extraordinarios deberán acompañarse de una estimación de impacto y fuente de financiamiento.

Artículo 283. Las consultas populares y los referéndums se financiarán conforme al Código Electoral y a las partidas aprobadas al Instituto Electoral.

Artículo 284. Los recursos para presupuesto participativo se distinguirán de los gastos administrativos de organización.

Artículo 285. El Gobierno del Estado podrá crear fondos concursables de asistencia técnica, accesibilidad, innovación y coinversión municipal.

Artículo 286. La distribución de apoyos considerará criterios objetivos de población, marginación, dispersión territorial, capacidad fiscal, brecha digital, necesidades de accesibilidad, desigualdad regional y número y características de los mecanismos implementados.

Artículo 287. No se permitirá financiamiento privado de consultas populares, referéndums ni otros mecanismos electorales, salvo lo expresamente autorizado por la legislación aplicable.

Artículo 288. Las aportaciones privadas a proyectos de colaboración deberán ser transparentes, lícitas y no generar privilegios, contraprestaciones ni influencia indebida.

Artículo 289. Los recursos ejercidos estarán sujetos a transparencia, fiscalización, control y responsabilidades.

TÍTULO DÉCIMO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y LAS RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 290. Los actos relacionados con consulta popular, referéndum y demás mecanismos político-electorales se impugnarán conforme al Código Electoral y a la legislación jurisdiccional aplicable.

Artículo 291. Para tutelar el interés legítimo, colectivo o difuso frente a la negativa, desechamiento injustificado, omisión o alteración de un mecanismo administrativo de participación, las personas promoventes podrán interponer el Recurso de Inconformidad Ciudadana. Este recurso se interpondrá por escrito o a través de la Plataforma ante la persona superior jerárquica de la autoridad responsable o ante el respectivo Órgano Interno de Control, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto u omisión reclamada.

La autoridad resolutora deberá emitir su fallo en un plazo máximo de diez días hábiles, priorizando la suplencia de la deficiencia de la queja y la restitución inmediata del derecho a participar. La resolución que recaiga a este recurso constituirá el acto administrativo definitivo impugnable ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Previo a la interposición del recurso señalado, las personas participantes podrán acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México o ante las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, a efecto de tramitar una queja por obstaculización o vulneración al derecho a la participación ciudadana. Este procedimiento privilegiará la mediación y la emisión de medidas precautorias ágiles para restituir el ejercicio del mecanismo de participación afectado.

Artículo 292. Los actos de la Legislatura, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos se controvertirán mediante las vías previstas en sus ordenamientos y en los medios de control constitucional aplicables.

Artículo 293. Las controversias sobre acceso a la información o datos personales se tramitarán conforme a la legislación especial.

Artículo 294. La omisión de realizar un mecanismo obligatorio podrá hacerse valer en el medio de defensa procedente, sin perjuicio de los regímenes constitucionales o legales especiales de tutela.

Artículo 295. Cuando una irregularidad sea subsanable, la autoridad deberá adoptar medidas correctivas que preserven el ejercicio del derecho.

Artículo 296. La autoridad competente valorará si una irregularidad afectó de manera sustancial la libertad, inclusión, información, deliberación, resultado o efectos del mecanismo.

Artículo 297. Constituirán incumplimientos susceptibles de responsabilidad administrativa, conforme a la legislación aplicable:

I. Obstaculizar injustificadamente la promoción, convocatoria o desarrollo de un mecanismo;

II. Omitir, sin causa legal, la convocatoria de un mecanismo obligatorio;

III. Alterar, falsificar, destruir u ocultar apoyos, actas, expedientes o resultados;

IV. Ocultar información pública necesaria para una participación informada;

V. Incumplir deliberadamente los plazos u obligaciones de registro, respuesta o seguimiento previstos en esta Ley;

VI. Utilizar recursos públicos para coaccionar, inducir indebidamente o impedir la participación;

VII. Adoptar represalias contra las personas participantes;

VIII. Divulgar o utilizar ilícitamente datos personales;

89

IX. Presentar un ejercicio informal como vinculante o atribuirle efectos que no le correspondan;

X. Reportar falsamente como cumplido un compromiso ciudadano;

XI. Incumplir sin causa justificada una determinación vinculante; o

XII. Manipular el funcionamiento de la Plataforma para excluir, alterar o invisibilizar propuestas;

XIII. Impedir u obstaculizar injustificadamente la actuación de una persona Testigo Social;

XIV. Retener, alterar u ocultar al Testigo Social información que deba proporcionársele conforme a la ley;

XV. Condicionar, retrasar o negar indebidamente su contraprestación por el sentido de sus observaciones o testimonio; o

XVI. Omitir la publicación o respuesta institucional del testimonio social dentro de los plazos previstos en esta Ley.

No constituirá incumplimiento el rechazo total o parcial de una propuesta ciudadana cuando la decisión sea emitida por autoridad competente, esté fundada y motivada, respete los efectos del mecanismo y cumpla las obligaciones de respuesta y trazabilidad.

Artículo 298. Las personas servidoras públicas deberán denunciar los hechos que puedan constituir faltas administrativas o delitos.

Artículo 299. Las responsabilidades previstas serán independientes de las civiles, penales, electorales, patrimoniales o políticas que procedan.

Artículo 300. Ninguna persona será sancionada por formular de buena fe una crítica, denuncia, opinión o propuesta, aunque resulte incorrecta o no sea aceptada.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Título Décimo denominado "Del Testigo Social" del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, que comprende los artículos 1.42 a 1.73, para queda como sigue:

TÍTULO DÉCIMO

DEL TESTIGO SOCIAL

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.42.- Derogado.

Artículo 1.43.- Derogado.

Artículo 1.44.- Derogado.

Artículo 1.45.- Derogado.

Artículo 1.46.- Derogado.

Artículo 1.47.- Derogado.

Artículo 1.48.- Derogado.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL REGISTRO Y REQUISITOS PARA SER TESTIGO SOCIAL

Artículo 1.49.- Derogado.

Artículo 1.50.- Derogado.

Artículo 1.51.- Derogado.

Artículo 1.52.- Derogado.

Artículo 1.53.- Derogado.

CAPÍTULO TERCERO

OBLIGACIONES DEL TESTIGO SOCIAL

Artículo 1.54.- Derogado.

Artículo 1.55.- Derogado.

Artículo 1.56.- Derogado.

Artículo 1.57.- Derogado.

Artículo 1.58.- Derogado.

Artículo 1.59.- Derogado.

Artículo 1.60.- Derogado.

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL

Artículo 1.61.- Derogado.

Artículo 1.62.- Derogado.

Artículo 1.63.- Derogado.

Artículo 1.64.- Derogado.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA PARTICIPACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL EN LAS CONTRATACIONES

Artículo 1.65.- Derogado.

Artículo 1.66.- Derogado.

Artículo 1.67.- Derogado.

Artículo 1.68.- Derogado.

Artículo 1.69.- Derogado.

CAPITULO SEXTO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS TESTIGOS SOCIALES

Artículo 1.70.- Derogado.

Artículo 1.71.- Derogado.

Artículo 1.72. Derogado.

Artículo 1.73.- Derogado.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción XII del artículo 3 y se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 3.- ...

I. a XI. ...

XII. Testigo Social: A la persona física o jurídica colectiva con registro vigente que, como representante imparcial de la sociedad civil, participa en los procedimientos de contratación pública relevantes en los términos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México.

...

Artículo 28 Bis.- Las autoridades a que se refiere esta Ley deberán asegurar la intervención de Testigos Sociales en los procedimientos en que resulte obligatoria conforme a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México y podrán solicitarla en los demás supuestos previstos por dicho ordenamiento. La designación, registro, independencia, derechos, obligaciones, testimonio, publicidad, seguimiento y régimen de responsabilidades del Testigo Social se regirán por la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México. La participación del Testigo Social no sustituirá las atribuciones de la convocante, del Comité, de la Secretaría de la Contraloría ni de

los órganos internos de control, y no modificará por sí misma los plazos, etapas o medios de defensa previstos en esta Ley.

ARTÍCULO CUARTO. Se adiciona un último párrafo al artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.- ...

En materia de cabildo abierto, asambleas, sesiones itinerantes, autoridades auxiliares, consejos de participación ciudadana y demás mecanismos de interacción social directa, se aplicarán de manera supletoria los principios, garantías de inclusión, lenguaje ciudadano y reglas de trazabilidad previstos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, siempre que no contravengan la autonomía municipal.

ARTÍCULO QUINTO. Se adiciona un último párrafo al artículo 2 del Código Electoral del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ...

Para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana competencia del Instituto, aplicarán de manera supletoria los estándares de accesibilidad, máxima publicidad, protección de datos y lenguaje ciudadano dispuestos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, estrictamente en aquello que no se oponga a la naturaleza, plazos y principios político-electorales rectores de este Código.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, salvo las disposiciones cuya aplicación gradual se establezca en los artículos transitorios siguientes.

TERCERO. El Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento de esta Ley dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

CUARTO. La Secretaría designará la Unidad Coordinadora dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor, utilizando preferentemente su estructura y recursos existentes.

QUINTO. La Legislatura emitirá la convocatoria para designar a las personas consejeras ciudadanas dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor. Para la primera integración, tres personas serán designadas por dos años y tres por cuatro años, mediante insaculación pública, con el propósito de establecer renovación escalonada.

SEXTO. El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la designación de las personas consejeras ciudadanas.

SÉPTIMO. Los ayuntamientos designarán su Unidad Municipal dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor. La designación no implicará necesariamente la creación de una nueva unidad administrativa.

OCTAVO. Los ayuntamientos deberán expedir o armonizar sus reglamentos de participación ciudadana dentro de los doscientos setenta días naturales siguientes a la publicación del Reglamento de esta Ley. Hasta en tanto se realice la armonización, continuarán aplicándose las disposiciones municipales vigentes en lo que no se opongan a esta Ley.

NOVENO. La Plataforma y el Registro deberán iniciar operaciones dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor. Durante ese periodo, las autoridades garantizarán la recepción presencial, escrita y electrónica mediante los sistemas disponibles.

DÉCIMO. Los mecanismos, consejos, comités, observatorios y procedimientos existentes a la entrada en vigor continuarán operando conforme a sus disposiciones especiales. Las autoridades deberán armonizar progresivamente su funcionamiento con los principios de esta Ley.

DÉCIMO PRIMERO. Los registros de Testigo Social vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto conservarán sus efectos hasta la conclusión de la vigencia para la que fueron expedidos. Su renovación se sujetará a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México. Las personas que se encuentren en proceso de registro continuarán su trámite conforme a las disposiciones vigentes al momento de su solicitud, salvo que opten expresamente por acogerse al nuevo régimen.

DÉCIMO SEGUNDO. La Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría emitirán conjuntamente, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor, los lineamientos para la integración y funcionamiento

del Comité de Registro de Testigos Sociales, registro, evaluación, asignación, cuotas, umbrales, conflictos de interés y seguimiento. El Comité existente continuará realizando las funciones indispensables hasta la instalación del nuevo Comité, la cual deberá ocurrir dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor.

DÉCIMO TERCERO. El Reglamento del Título Décimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México "Del Testigo Social" continuará aplicándose transitoriamente, únicamente en lo que no se oponga al presente Decreto, por un plazo máximo de ciento ochenta días naturales. Dentro del mismo plazo, el Poder Ejecutivo deberá expedir o adecuar las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar el Título Quinto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México.

DÉCIMO CUARTO. El Poder Ejecutivo, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor, armonizará el Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios y las demás disposiciones administrativas que contengan referencias al Título Décimo derogado. Hasta entonces, las referencias reglamentarias al Testigo Social o al Título Décimo se entenderán hechas, en lo conducente, al Título Quinto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México.

DÉCIMO QUINTO. Los procedimientos de contratación pública iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto continuarán sustanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su convocatoria o inicio. Los Testigos Sociales ya designados conservarán sus funciones hasta la conclusión del procedimiento y emitirán el testimonio correspondiente conforme al régimen aplicable al momento de su designación.

DÉCIMO SEXTO. Las modificaciones al Código Electoral del Estado de México previstas en el Artículo Quinto del presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México declare formalmente la conclusión del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2027.

Hasta en tanto se cumpla dicha condición, la consulta popular, el referéndum y demás mecanismos político-electorales continuarán rigiéndose estrictamente por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las disposiciones electorales vigentes al momento de la publicación del presente Decreto. Esta Ley no modificará en ningún caso porcentajes, umbrales, competencias, fechas ni medios de impugnación electorales.

DÉCIMO SÉPTIMO. Las disposiciones del presente Decreto no reglamentan ni modifican el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocido en los artículos 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Los mecanismos de participación previstos en esta Ley no podrán sustituir los procedimientos de consulta constitucionalmente exigibles. La armonización de la legislación estatal en dicha materia se realizará en los términos y dentro del plazo establecido en el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 330 de la "LXII" Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 3 de junio de 2026, una vez expedida la Ley General de la materia por el Congreso de la Unión.

DÉCIMO OCTAVO. Los municipios realizarán durante el primer ejercicio fiscal completo posterior a la entrada en vigor, al menos, un ejercicio piloto de presupuesto participativo. La implementación anual obligatoria prevista en esta Ley será exigible a partir del segundo ejercicio fiscal completo, sin perjuicio de que los municipios puedan aplicarla con anterioridad.

DÉCIMO NOVENO. Las erogaciones correspondientes al ejercicio fiscal en curso se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados y mediante las estructuras existentes, sin afectar programas prioritarios ni servicios públicos esenciales. En los ejercicios subsecuentes deberán incorporarse las previsiones presupuestarias necesarias.

VIGÉSIMO. La creación de plazas, unidades administrativas, sistemas tecnológicos o contrataciones adicionales requerirá justificación de necesidad, memoria de cálculo, suficiencia presupuestaria y cumplimiento de las disposiciones de austeridad, contratación y disciplina financiera.

VIGÉSIMO PRIMERO. La Secretaría elaborará, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la instalación del Consejo, el Programa Estatal de Cultura y Formación para la Participación Ciudadana, los modelos de convocatoria, formatos, protocolos de accesibilidad, lineamientos de datos abiertos, criterios de lenguaje ciudadano, metodología de evaluación y orientaciones técnicas para la integración de las Redes Municipales de Participación Ciudadana.

VIGÉSIMO SEGUNDO. La Legislatura y los ayuntamientos realizarán las adecuaciones administrativas y reglamentarias indispensables para facilitar la presentación, seguimiento y publicidad de las iniciativas ciudadanas y de los mecanismos de su competencia. La Legislatura pondrá en operación el Buzón Permanente de Participación Legislativa dentro de los ciento ochenta días naturales

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. Los municipios integrarán sus Redes Municipales de Participación Ciudadana conforme a sus reglamentos y utilizando preferentemente las estructuras existentes.

VIGÉSIMO TERCERO. El Poder Ejecutivo presentará a la Legislatura, dentro de los veinticuatro meses siguientes a la entrada en vigor, un informe integral sobre costos de implementación; mecanismos realizados; participación territorial; funcionamiento municipal; operación de la Plataforma; presupuesto participativo; medidas de inclusión; controversias presentadas; y propuestas de armonización legislativa.

VIGÉSIMO CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto, sin perjuicio de la derogación expresa prevista en su Artículo Segundo y sin afectar los regímenes especiales de consulta popular, referéndum, iniciativa ciudadana, cabildo abierto y demás mecanismos sujetos a regulación constitucional o sectorial especial.

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los ___ días del mes de ___ del año dos mil veintiséis.

Toluca de Lerdo, Estado de México 22 de septiembre, 2026.

DIPUTADO VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA LXII LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28, fracción I, 30, 38 fracción II, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y por su digno conducto, las Diputadas y los Diputados, Ruth Salinas Reyes, Maricela Beltrán Sánchez, Lilia Urbina Salazar, Juan Manuel Zepeda Hernández y Martín Zepeda Hernández integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos a la consideración de esta Honorable Legislatura: **Iniciativa con Proyecto de Decreto "Ley Anti Grietas" que adiciona una fracción LXV. Bis. y reforma la fracción LXXX. del Artículo 6, reforma la fracción IV. del Artículo 15, reforma la fracción XXVII. y adiciona una fracción XXVIII. Bis al Artículo 18, adiciona una fracción XXVII. Bis. al Artículo 26 y adiciona un Artículo 95 Bis. a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, en materia de establecer, vigilar y mitigar el riesgo por Subsidencia del terreno.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado de México alberga dos de las zonas metropolitanas más grandes del país, asentadas sobre cuencas altas cuyos acuíferos registran, desde hace décadas, una extracción superior a su recarga natural. Este desequilibrio no se traduce únicamente en desabasto: genera también la deformación progresiva del subsuelo, la cual produce asentamientos diferenciales y, como consecuencia, el agrietamiento del terreno y de las construcciones desplantadas sobre él.

El fenómeno se encuentra medido en el territorio estatal. Conforme a los estudios de detección satelital del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad los hundimientos alcanzan máximos superiores a 35 centímetros anuales; en Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán rebasan los 25 centímetros; en Chalco y La Paz llegan a 20, y en Texcoco y Atenco se registran las magnitudes más altas de la entidad.[1] En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la subsidencia se documenta mediante interferometría satelital desde hace más de dos décadas.[2]

Debe destacarse que el fenómeno y sus efectos sobre la vivienda han sido reconocidos por la autoridad federal competente. En el estudio técnico del acuífero Chalco-Amecameca, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional del Agua consigna que la extracción intensiva de agua subterránea provoca hundimientos diferenciales, que en las zonas de transición se han formado grietas y que éstas destruyen equipamiento urbano y ocasionan daños severos en algunas viviendas.[3]

En la ciudad de Toluca se han identificado al menos 25 viviendas con grietas y hundimientos que comprometen gravemente la seguridad de sus ocupantes.[4] Por su parte, el Atlas Municipal de Riesgos de Toluca 2025-2027 registra 22 zonas de fracturamiento del suelo, ubicadas tanto en la zona norte San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán y Santiago Miltepec, como en el Centro Histórico y Santa Ana Tlapaltitlán, donde la exposición al riesgo es mayor por la densidad poblacional.[5]

---

[1] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, Detección de zonas de subsidencia en México con técnicas satelitales, volumen 2, México, INEGI, 2021, apartado 2.3 «Ciudad de México», pp. 8 y 9.

[2] CALDERHEAD, A. I., MARTEL, R., ALASSET, P.-J., RIVERA, A. y GARFIAS, J., «Land subsidence induced by groundwater pumping, monitored by D-InSAR and field data in the Toluca Valley, Mexico», Canadian Journal of Remote Sensing, vol. 36, núm. 1, 2010, pp. 9-23. En el mismo sentido, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, Detección de zonas de subsidencia en México con técnicas satelitales, volumen 3, México, INEGI, 2022, caso Toluca, Estado de México.

[3] COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, «Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Chalco-Amecameca, clave 1506, en el Estado de México, Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México», Diario Oficial de la Federación, 18 de septiembre de 2019, numeral 8.2 «Hundimientos del terreno».

[4] «Al menos 25 viviendas en Toluca presentan grietas y hundimientos», Milenio Estado de México, 2026.

[5] H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, Atlas Municipal de Riesgos de Toluca 2025-2027, apartado de riesgos geológicos, 22 zonas de fracturamiento del suelo. Consultable en https://www2.toluca.gob.mx/wp-content/uploads/2026/02/ATLAS-DE-RIESGO-DE-TOLUCA-2025-2027-1.pdf

No obstante, a lo anterior, la respuesta institucional ante las afectaciones recientes ha consistido, en lo esencial, en señalar que se desconocen las causas, atribuyéndolas a reacomodos superficiales del terreno o a la humedad acumulada, y descartando de origen la incidencia de la extracción de agua subterránea. La capital constituye hoy la manifestación más visible del problema, mas no la única: se trata de un proceso que se replica en el oriente del Valle de México y que tendrá que extenderse allí donde persista el abatimiento de los acuíferos.

En marzo de 2021, ante la XXI Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, un equipo de investigación de la Universidad de Guanajuato y de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México presentó un estudio de caracterización geológico-estructural de las grietas en construcciones habitacionales.[6]

El trabajo, sustentado en cartografía de campo, medición de rumbos y echados y en la clasificación geotécnica de las discontinuidades, identifica con precisión los sistemas de fallas de subsidencia que afectan a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca:

- Falla Totoltepec. Falla de subsidencia de tipo normal, con al menos 8 kilómetros cartografiados en campo, cuya expresión abarca de la vialidad Alfredo del Mazo al Aeropuerto de Toluca, afectando naves industriales y zonas habitacionales de San Pedro Totoltepec.
- Fallas Miltepec, La Mora y Lerdo. Con desplazamientos verticales relativos del orden de 25 centímetros, inciden en las colonias Santiago Miltepec, Independencia, Los Ángeles, Carlos Hank González y en el fraccionamiento Los Frailes.
- Fallas Oxtotitlán. En la delegación San Mateo Oxtotitlán se documentó, en una casa habitación de la calle Benito Juárez, una separación vertical mínima de 1.7 metros.
- Falla La Virgen-Magdalena. Con una longitud mínima de 6 kilómetros, alcanza el municipio de Metepec y la población de Santa María Magdalena Ocotitlán, lo que evidencia el carácter intermunicipal del fenómeno.

[6] ANGELES-MORENO, E., CABADAS-BÁEZ, H. V., PUY-ALQUIZA, M. J., ALMAZÁN VÁZQUEZ, A. R. y GUERRERO JACINTO, Z., «Características geológico-estructurales de grietas en construcciones habitacionales ante diversos riesgos geológicos, casos de la ciudad de Toluca y San Miguel Tecomatlán: implicaciones en la interacción suelo-estructura», Memorias de la XXI Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A. C., 16 a 19 de marzo de 2021, pp. 35-44.

El estudio concluye que dichas grietas no obedecen a defectos constructivos aislados, sino que siguen planos de debilidad preexistentes, resultan consistentes con un régimen extensional y se asocian a fallas de subsidencia originadas por la extracción de agua subterránea, la cual provoca asentamientos diferenciales del terreno. Asimismo, contrasta este supuesto con el de San Miguel Tecomatlán, en el municipio de Tenancingo, donde el agrietamiento derivó de la reactivación sísmica de fallas geológicas en 2017.

La distinción es relevante para efectos de política pública: causas diversas exigen diagnósticos y medidas de mitigación diferenciadas, lo que sólo es posible a partir de criterios técnicos oficiales. Conviene precisar que el registro documental del fenómeno no es reciente.

El informe de la Comisión Nacional del Agua de 2002 refiere que desde 1977 se realizaron levantamientos de grietas en el valle; que entre 1978 y 1979 se detectaron grietas por sobreexplotación del agua subterránea en depósitos lacustres compresibles, con cien grietas registradas en un área de 1,500 km², y que entre 1970 y 1980 se presentaron abatimientos de hasta 70 metros en la zona industrial de Toluca.[7] Estudios posteriores de interferometría satelital acreditaron que, entre 2003 y 2008, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca registró hundimientos de hasta 40 centímetros.[8]

Existe, por tanto, evidencia técnica acumulada durante casi cinco décadas que hasta hoy no encuentra correlato en obligación legal alguna dentro del ordenamiento estatal.

La subsidencia consiste en el hundimiento paulatino de la superficie del terreno derivado de la extracción de agua del subsuelo: al abatirse el nivel freático, los sedimentos se compactan, el suelo se deforma de manera diferencial y la superficie se fractura.

[7] COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Valle de Toluca (1501), Estado de México, México, CONAGUA, Subdirección General Técnica-Gerencia de Aguas Subterráneas, 2024, apartado 2 «Estudios técnicos realizados con anterioridad», pp. 8 y 9, que recoge la actualización del levantamiento de grietas de 1977 (Ingenieros Civiles y Geólogos Asociados), los estudios CONSULTEC de 1978 y 1979 –este último con aproximadamente 100 grietas registradas en un área de 1,500 km²– y el estudio de Lesser y Asociados de 1987, que reporta abatimientos de 70 metros en la zona industrial aledaña a la ciudad de Toluca para el periodo 1970-1987.
[8] CALDERHEAD, A. I. et al., ob. cit., reporta un hundimiento máximo acumulado cercano a 40 centímetros entre noviembre de 2003 y mayo de 2008 en el Valle de Toluca.

No se trata de una categoría ajena al orden jurídico nacional, pues la Ley General de Protección Civil reconoce expresamente la subsidencia, los hundimientos y los agrietamientos como fenómenos perturbadores de origen geológico.[9]

En cuanto al contexto hidrológico, diversos acuíferos que abastecen a la entidad se encuentran oficialmente sobreexplotados y sin disponibilidad de agua subterránea, entre ellos Valle de Toluca (clave 1501), Chalco-Amecameca (1506), Texcoco y Cuautitlán-Pachuca.[10] Únicamente el acuífero del Valle de Toluca presenta un déficit del orden de 128 millones de metros cúbicos anuales y se encuentra sujeto a veda desde el 23 de septiembre de 1965, sin que ello haya detenido el proceso de hundimiento.[11]

Debe reconocerse que no todo agrietamiento tiene por causa la extracción de agua subterránea. La distinción entre subsidencia, fugas de la red hidráulica, suelos blandos, actividad sísmica y deficiencias constructivas constituye una cuestión técnica. Precisamente por ello se justifica la intervención legislativa: en el marco vigente, ninguna autoridad estatal se encuentra obligada a medir la subsidencia, cartografiarla, informarla ni considerarla previamente al otorgamiento de aprovechamientos o a la autorización de desarrollos habitacionales. La ausencia del deber de diagnóstico hace posible, en los hechos, que se sostenga el desconocimiento de las causas.

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa, el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano.[12]

---

[9] Ley General de Protección Civil, artículo 2, fracción XXIII.
[10] Acuerdos de actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea publicados por la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación y fichas técnicas correspondientes; en particular, CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Valle de Toluca (1501), 2024, y el acuerdo relativo al acuífero Chalco-Amecameca (1506) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2019.
[11] COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Valle de Toluca (1501), Estado de México, 2024, apartado 8.4, que arroja un déficit de 128,715,560 metros cúbicos anuales, y apartado 1.2, que refiere el decreto presidencial de veda de 10 de agosto de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1965.
[12] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha precisado que la vivienda adecuada exige condiciones de habitabilidad, lo que comprende garantizar la seguridad física de sus ocupantes. Una vivienda afectada por fracturas estructurales de la magnitud documentada no satisface dicho estándar. [13]

A lo anterior se suma el deber estatal de prevención frente a daños previsibles. Conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicho deber comprende regular, supervisar y fiscalizar las actividades que puedan generar un daño significativo, así como realizar los estudios correspondientes cuando exista evidencia de riesgo y adoptar medidas de mitigación.[14] Tratándose de un riesgo previamente medido, documentado y difundido, la omisión de actuar no puede ampararse en el desconocimiento.

El estado de Aguascalientes, ante un fenómeno de idéntica naturaleza, adoptó una solución institucional: desde 2004 opera el Comité Interinstitucional de Fallas Geológicas y Grietas, creado mediante decreto, así como el Sistema de Información de Fallas Geológicas y Grietas, que pone a disposición del público la cartografía oficial y validada de las fallas y grietas de aquella entidad.[15] Ello permite a cualquier persona conocer, previamente a la adquisición o edificación de un inmueble, si el predio se ubica sobre una zona de fracturamiento.

En el Estado de México no existe información equivalente con carácter vinculante, actualización periódica obligatoria ni efectos condicionantes sobre las autorizaciones administrativas.

---

[13] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11. Véase COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General núm. 4 (1991), «El derecho a una vivienda adecuada», párrafo 8, inciso d), sobre habitabilidad.

[14] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, «Medio ambiente y derechos humanos», párrafos 127 a 174, relativos a las obligaciones de prevención, regulación, supervisión y fiscalización frente a actividades que puedan causar un daño significativo.

[15] Comité Interinstitucional de Fallas Geológicas y Grietas del Estado de Aguascalientes, constituido en 2004 y formalizado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 23 de febrero de ese año. El Sistema de Información de Fallas Geológicas y Grietas (SIFAGG) es operado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes y es consultable en https://www.aguascalientes.gob.mx/sop/sifagg/web/mapa.asp

En razón de lo expuesto, la reforma incorpora a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios cinco definiciones normativas de alcance estatal: se define la subsidencia del terreno como concepto legal; se habilita la declaratoria de zonas de veda cuando la subsidencia ponga en riesgo a la población (artículos 6, fracción se obliga a la Comisión del Agua del Estado de México a emitir el atlas de subsidencia de la entidad y a participar en la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos (artículo 18); se mandata la vigilancia permanente del fenómeno y la evaluación del nivel de riesgo en los centros de población asentados sobre acuíferos sobreexplotados y se establece la coordinación obligatoria entre la Comisión, los municipios y los organismos operadores para la ejecución de medidas de mitigación.

Con ello, esta Soberanía dotaría a las autoridades estatales y municipales de un instrumento de diagnóstico, información pública y mitigación en beneficio de las familias mexiquenses asentadas sobre zonas de subsidencia, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna y segura.

Conforme a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que adiciona una fracción LXV. Bis. y reforma la fracción LXXX. del Artículo 6, reforma la fracción IV. del Artículo 15, reforma la fracción XXVII. y adiciona una fracción XXVIII. Bis al Artículo 18, adiciona una fracción XXVII. Bis. al Artículo 26 y adiciona un Artículo 95 Bis. a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, en materia de establecer, vigilar y mitigar el riesgo por Subsidencia del terreno.

A T E N T A M E N T E

Dip. Ruth Salinas Reyes **Dip. Maricela Beltrán Sánchez**

Dip. Juan Manuel Zepeda Hernández **Dip. Lilia Urbina Salazar**

Dip. Martín Zepeda Hernández

Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Estado de México.

PROYECTO DE DECRETO

La H. LXII Legislatura del Estado de México

Decreta:

ARTÍCULO UNICO; Se adiciona una fracción LXV. Bis. y se reforma la fracción LXXX. del Artículo 6, se reforma la fracción IV. del Artículo 15, se reforma la fracción XXVII. y adiciona una fracción XXVIII. Bis al Artículo 18, se adiciona una fracción XXVII. Bis. al Artículo 26 y se adiciona un Artículo 95 Bis. a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Para efectos de esta Ley se entenderá …

LXV. Bis. Subsidencia del terreno: Hundimiento progresivo o paulatino de la superficie terrestre. Originado por la extracción excesiva de agua subterránea que provoca daños estructurales graves en infraestructura de vivienda, urbana e industrial, fracturas en el suelo, fallas geológicas y severos problemas en la red de drenaje y tuberías de agua.

LXXX. Zona de veda: Áreas específicas declaradas como tales por el Gobernador del Estado, en las cuales no se autorizan concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de agua, con las excepciones establecidas en el decreto respectivo, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, resultante de sobreexplotación, o de la afectación a la sustentabilidad hidrológica. **Así como Subsidencia del terreno que ponga en riesgo a la población.**

Artículo 15 El Gobernador del Estado tendrá las siguientes …

IV. Emitir los decretos para establecer o suprimir las zonas de veda y las zonas de protección, así como para prevenir o atenuar su sobreexplotación**, el deterioro de su calidad o Subsidencia del terreno que ponga en riesgo a la población;**

Artículo 18.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión gozará de autonomía de gestión, financiera y operativa, y tendrá las siguientes …

XXVII. Formar parte del Consejo Estatal de Protección Civil, **participar en la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos y** en las acciones de apoyo a la población civil en los términos de la normatividad aplicable;

XXVIII. Bis. Emitir el atlas de Subsidencia del terreno para el Estado;

Artículo 26.- La Comisión Técnica tiene las atribuciones …

XXVII. Proponer los criterios y lineamientos de seguridad …

XXVII. Bis. Vigilar de forma permanente la Subsidencia del terreno, y evaluar el nivel de riesgo en los centros de población ubicados en acuíferos sobreexplotados.

Artículo 95 Bis. La Comisión, los municipios y/o los organismos operadores, como correspondan se coordinarán para implementar las medidas de mitigación de la Subsidencia del terreno que ponga en riesgo a la población, pudiendo solicitar el apoyo de todas las instancias de atención a desastres naturales en casos necesarios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los ____días del mes de _____del año dos mil veintiséis.

CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO

"2026. Año del humanismo mexicano en el Estado de México".

Toluca de Lerdo, Méx., a 23 de septiembre de 2026.

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. LXII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
P R E S E N T E S

En el ejercicio de las facultades que nos confieren, lo dispuesto por los artículos 57 y 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 72 de su Reglamento, los que suscriben, **Diputada Araceli Casasola Salazar y Diputado Omar Ortega Álvarez**, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIX recorriéndose las subsecuentes del artículo 3, se reforma la fracción IV del artículo 11, se crea el CAPÍTULO III Bis. De la Atención a las Enfermedades Crónicas y Potencialmente Discapacitantes dentro del TÍTULO SEXTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, se adicionan los artículos 111 Bis, 111 Ter, 111 Quater, 111 Quinquies y 111 Sexties de la Ley de Salud del Estado de México, en materia de reconocimiento de Enfermedades Crónicas y Potencialmente Discapacitantes, como lo es la fibromialgia, síndromes de dolor crónico y condiciones neurobiológicas fluctuantes,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa no surge únicamente de un ejercicio legislativo; surge de escuchar a quienes, durante años, han alzado la voz para visibilizar una enfermedad que, pese a afectar profundamente la vida de miles de personas, continúa enfrentando desconocimiento, prejuicios y barreras para su diagnóstico y atención.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario del PRD reconocemos de manera especial a Movimiento FIA México, Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia, cuyo trabajo incansable ha sido fundamental para colocar la fibromialgia en la agenda pública y para defender el derecho de las personas que viven con esta condición a ser escuchadas y atendidas dignamente.

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 64 00 y 2 79 65

PRD

En el marco del trabajo conjunto que hemos desarrollado con Movimiento FIA México, llevamos a cabo un encuentro en la Cámara de Diputadas y Diputados del Estado de México, concebido como un espacio de visibilización, escucha y diálogo con personas que viven con fibromialgia, sus familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Precisamente en ese espacio donde asumimos el compromiso de llevar al Poder Legislativo la propuesta que Movimiento FIA México nos hizo llegar, para impulsar el reconocimiento de la fibromialgia y avanzar hacia una respuesta institucional que permita visibilizar esta condición y atender las necesidades de quienes viven con ella.

Es por ello que, desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, damos cumplimiento a ese compromiso y presentamos esta iniciativa, haciendo del trabajo legislativo un instrumento para transformar en acciones las demandas que nacen desde la sociedad.

Reconocer la fibromialgia es un paso necesario para combatir la invisibilización; es también una oportunidad para fortalecer la sensibilización social, promover una atención integral y construir políticas públicas que partan de las necesidades reales de las personas.

Desde el Grupo Parlamentario del PRD refrendamos nuestra convicción de que las mejores iniciativas no siempre nacen detrás de un escritorio: muchas veces nacen de la organización, de la lucha y de la voz de la sociedad civil.

Por ello, esta iniciativa lleva consigo una parte fundamental del trabajo de Movimiento FIA México, a quienes reconocemos su perseverancia, compromiso y por no dejar de exigir que la fibromialgia sea vista, reconocida y atendida.

En ese sentido, el dolor crónico no oncológico constituye uno de los desafíos más urgentes y desatendidos para los sistemas de salud pública contemporáneos; dentro de este espectro, la fibromialgia destaca por su elevada prevalencia, su naturaleza compleja y su capacidad para desestructurar la vida productiva y personal de quienes la padecen.

Las estimaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, contrastadas con las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, calculan que este padecimiento afecta a entre el cuatro y el cinco por ciento de la población adulta del país, con una proporción de hasta ocho mujeres por cada varón diagnosticado.

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 64 00 y 2 79 65

En nuestro Estado, la entidad más poblada del país y con las dinámicas de movilidad laboral y tensión socioeconómica más complejas, esta tasa se traduce en más de setecientas cincuenta mil personas que conviven con la enfermedad; tomando en consideración que es una cifra no oficializada, justamente por la poca visibilización que se le otorga al padecimiento.

La escasez de unidades especializadas y la concentración de recursos en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y el Valle de México provocan que la mayoría de los casos no reciban atención oportuna en el primer nivel, derivando en un peregrinaje médico que en el sector público puede prolongarse entre tres y quince años antes de obtener un diagnóstico certero.

La evidencia clínica generada en América Latina confirma la magnitud de esta problemática; estudios sobre la fisiopatología de la fibromialgia han documentado cómo la hiperactividad del sistema nervioso simpático altera el tono vascular y la modulación del dolor, lo que convierte a esta condición en un trastorno sistémico y no en un simple dolor muscular difuso.

Directrices clínicas desarrolladas en Brasil coinciden en que la fibromialgia genera un impacto sobre la calidad de vida comparable, e incluso superior, al de padecimientos como la artritis reumatoide, la insuficiencia cardíaca o la diabetes mellitus no controlada, y que la pérdida de capacidad funcional no proviene de una lesión anatómica observable en un estudio de imagen, sino del dolor continuo, la rigidez matutina y el agotamiento que devora las reservas energéticas de quien la padece; ignorar esta realidad en el diseño de las políticas sanitarias mexiquenses no solo perpetúa la vulnerabilidad de las personas enfermas, sino que satura de manera ineficiente los servicios de urgencias y genera un gasto de bolsillo ruinoso para las familias.

La concepción de la fibromialgia como una somatización o una patología puramente psicológica ha sido refutada por las neurociencias; el mecanismo subyacente identificado es la sensibilización central, entendida como un estado de hiperexcitabilidad neuronal en el que estímulos no nocivos se perciben como dolorosos y los estímulos dolorosos se amplifican de forma desproporcionada. Estudios de neuroimagen funcional han documentado alteraciones en la conectividad cerebral, junto con un aumento sostenido de neurotransmisores facilitadores del dolor y una reducción crítica en la actividad de las vías descendentes inhibitorias mediadas por serotonina y noradrenalina. [1]

[1] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5083139/

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 64 00 y 2 79 65

A esto se suma la llamada niebla mental o disfunción cognitiva, que compromete la memoria de trabajo, ralentiza el procesamiento de información y limita la capacidad de sostener la atención en entornos laborales y académicos.

Al no acompañarse de signos físicos externos evidentes, quienes viven con fibromialgia enfrentan la duda constante de evaluadores médicos, empleadores y núcleos familiares, una forma de injusticia epistémica que agrava el sufrimiento y acelera la exclusión social.

El paradigma biomédico clásico, centrado en la búsqueda de una lesión tisular periférica y en la prescripción unidireccional de fármacos, ha demostrado ser insuficiente para la gestión de los síndromes de dolor crónico centralizado; insistir en tratar la fibromialgia exclusivamente con analgésicos convencionales, antiinflamatorios no esteroideos o esquemas indiscriminados de opioides no solo falla en proporcionar alivio sostenido, sino que incrementa el riesgo de efectos adversos severos, como nefropatías, hepatotoxicidad, dependencia e hiperalgesia inducida por opioides. [2]

Frente a este reduccionismo, la medicina paliativa y la algología contemporáneas han desarrollado el concepto de "dolor total", que reconoce que la experiencia dolorosa está compuesta de manera indisoluble por dimensiones físicas, emocionales, sociales, económicas y espirituales que se retroalimentan entre sí.

Cuando un sistema sanitario atiende únicamente el componente somático e ignora la ruptura de los proyectos de vida, la pérdida del empleo y el aislamiento social, condena a la persona paciente al estancamiento: para ejemplificarlo, la evidencia recopilada por organizaciones de pacientes en la entidad indica que más del cuarenta por ciento de las personas con fibromialgia pierden su empleo formal a causa de las crisis o de la rigidez institucional.

El marco normativo vigente en el Estado de México presenta un vacío perjudicial al no explicitar la figura de la discapacidad invisible ni exigir la homologación de los registros sanitarios conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

Aunque la fibromialgia cuenta con reconocimiento oficial en la Clasificación Internacional de Enfermedades desde 1993 bajo la clave CIE-10 M79.7, en la práctica clínica del sector público mexiquense predomina una subcodificación sistemática que registra los casos bajo diagnósticos imprecisos de lumbalgia, artralgia no especificada o somatización.

[2] https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462004000700005

Esta omisión impide que las instituciones de vigilancia epidemiológica generen datos reales sobre la prevalencia y el impacto económico del padecimiento, y perpetúa un modelo médico que condiciona la expedición de certificados de discapacidad o licencias laborales a la presencia de lesiones observables a simple vista, cuando la evidencia demuestra que la pérdida de fuerza motriz, las crisis de dolor generalizado y el agotamiento imposibilitan por igual el desarrollo de actividades cotidianas, profesionales y de cuidado.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone que la Ley de Salud del Estado de México reconozca expresamente a la fibromialgia como enfermedad crónica, de origen neurobiológico y potencialmente discapacitante; incorpore el concepto de discapacidad invisible y ordene la adopción de la clasificación CIE-11 para corregir la subcodificación existente; garantice la atención para acortar la odisea diagnóstica y de tratamiento.

Se propone además la implementación de un identificador visual de adopción voluntaria, como el cordón de girasoles, para garantizar un trato digno, accesible y con ajustes razonables en los espacios públicos y de atención sanitaria, sin exigir a la persona portadora explicaciones sobre la naturaleza visible de su condición.

Desde el Grupo Parlamentario del PRD reafirmamos que transformar el dolor individual en ley es un acto de justicia social y de dignidad humana; no se trata de solicitar privilegios, sino de garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud.

Las personas que viven con fibromialgia en el Estado de México no esperan despertar mañana sin dolor, pero sí tienen derecho a la certeza legal de que su padecimiento cuenta con un Estado testigo, corresponsable y garantista.

Por las razones expuestas, se somete a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Salud del Estado de México, con el firme propósito de que la fibromialgia y el dolor crónico sean reconocidos, atendidos y legislados con la dignidad, el rigor científico y la empatía que la población mexiquense merece.

A T E N T A M E N T E

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR **DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ**

5

DECRETO NÚMERO: _____

LA H. "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO; Se adiciona la fracción XIX recorriéndose las subsecuentes del artículo 3, se reforma la fracción IV del artículo 11, se crea el CAPÍTULO III Bis. De la Atención a las Enfermedades Crónicas y Potencialmente Discapacitantes dentro del TÍTULO SEXTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, se adicionan los artículos 111 Bis, 111 Ter, 111 Quater, 111 Quinquies y 111 Sexties de la Ley de Salud del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderán los siguientes términos:

I. a XVIII. …

XIX. Enfermedades Crónicas y Potencialmente Discapacitantes: Aquellas enfermedades que generan condiciones de salud de larga duración que limitan de manera progresiva las capacidades físicas o mentales de una persona como lo es la fibromialgia, síndromes de dolor crónico y condiciones neurobiológicas fluctuantes;

XIX. Enfermedades emergentes: Aquellas enfermedades que aparecen por primera vez en una población o que aumentan su incidencia o distribución geográfica y se consideran una amenaza para la salud pública;

XX. a **XLVI**. …

Artículo 11. Serán considerados como grupos de atención prioritaria aquellos que enfrentan desigualdades asociadas a su edad, condición social o económica, orientación sexual o su identidad de género, origen étnico o violencia, teniendo mayores dificultades para el acceso a sus derechos; las cuales se enlistan a continuación sin que ello signifique prelación de uno sobre otro:

I. Personas adultas mayores;

II. Mujeres y personas gestantes;

III. Niñas, niños y adolescentes;

IV. Personas con discapacidad; **también así a las personas con discapacidad invisible derivada**

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 64 00 y 2 79 65

de padecimientos crónicos, dolor crónico de difícil control y condiciones neurobiológicas fluctuantes;

V. Personas en situación de calle;

VI. Personas de la población LGBTTTIQ+;

VII. Personas migrantes;

VIII. Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; y

IX. Víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos.

TÍTULO SEXTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO III Bis.
De la Atención a las Enfermedades Crónicas y Potencialmente Discapacitantes.

Artículo 111 Bis. La Secretaría coordinará los esfuerzos interinstitucionales entre los sectores público, social y privado para asegurar la evaluación sistemática de resultados e impacto en la salud poblacional; así como favorecer el acceso gratuito, oportuno en la atención a las enfermedades crónicas y potencialmente discapacitantes como la fibromialgia y los síndromes de dolor crónico.

Artículo 111 Ter. En la atención médica de la fibromialgia y los síndromes de dolor crónico, las instituciones públicas de salud del Estado de México garantizarán un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario, que incorpore de manera coordinada los servicios de reumatología, medicina del dolor y cuidados paliativos, salud mental y psicología, nutrición, rehabilitación física y otras terapias complementarias validadas.

Asimismo, el personal médico tratante considerará la naturaleza fluctuante, neurobiológica y acumulativa del padecimiento al evaluar la capacidad funcional del paciente, a fin de emitir las valoraciones médicas correspondientes para la determinación del grado de discapacidad que impida o límite temporal o permanentemente el desarrollo de actividades cotidianas o laborales.

Artículo 111 Quater. Las instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Estatal de Salud estarán obligadas a codificar, registrar y dar seguimiento a los casos de enfermedades crónicas y potencialmente discapacitantes en los expedientes clínicos y sistemas de información epidemiológica.

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 64 00 y 2 79 65

Para tal efecto, deberán utilizar las claves vigentes de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) emitidas por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa:

I. Clave M79.7 (Fibromialgia) y M79.1 (Mialgia) conforme a la CIE-10;

II. Clave MG30.0 (Dolor Crónico Primario) y subcategorías asociadas a dolor musculoesquelético crónico conforme a la CIE-11; y

III. Las claves equivalentes o subsecuentes que la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud Federal emitan para la homologación de síndromes de dolor crónico centralizado.

Artículo 111 Quinquies. La Secretaría, en coordinación con las instituciones de educación superior y colegios de profesionales, promoverá la formación continua del personal de salud, priorizando en el primer nivel de atención la capacitación técnica y clínica para la identificación de síntomas de sospecha, diagnóstico diferencial oportuno y derivación adecuada de pacientes con fibromialgia y dolor crónico, reduciendo los tiempos de diagnóstico.

Artículo 112 Sexties. La Secretaría implementará el uso de identificadores y distintivos visuales universales de voluntaria adopción, tales como el cordón de girasoles o símbolos análogos reconocidos internacionalmente, para la identificación de las personas con discapacidad invisible o condiciones de dolor crónico.

Las instituciones que integran el Sistema Estatal de Salud, capacitarán a su personal para reconocer dichos distintivos, garantizando a sus portadores un trato digno, accesible, empático, con tiempos de atención adecuados y ajustes razonables, sin exigir explicaciones sobre la naturaleza visible de su condición.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para las dependencias y entidades del sector salud en el ejercicio fiscal correspondiente.

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca de Lerdo, Estado de México a los ___ días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 64 00 y 2 79 65

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir! | GOBIERNO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Oficina del C. Secretario

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México".

Toluca de Lerdo, México, a 21 de septiembre de 2026
Oficio No. SGG/131/2026

PODER LEGISLATIVO RECIBIDO
A.L.J.B.
21 SEP 2026
17:55 H.
SECRETARÍA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
OFICIALÍA DE PARTES

DIPUTADO LICENCIADO
VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE LA
LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

En cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 77, fracción XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito avisarle respetuosamente que la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregará a esa Soberanía el documento titulado: "Tercer Informe de Gobierno", así como los anexos correspondientes con los que se da cuenta del estado que guarda la administración pública estatal, el próximo miércoles 30 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas.

Su servidor la acompañará en tan honroso acto, por lo que quedo a sus órdenes para coordinar las acciones pertinentes.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

HORACIO DUARTE OLIVARES
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

c.c.p. Dip. Dr. José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México.
HDO/CFMS/BOS/mga